

# SILA AMAZONÍA QUEDA EN SILENCIO

APORTES PARA LA  
REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN  
DESDE LA AMAZONÍA  
BOLIVIANA

Marielle Cauthin Ayala, Huáscar Salazar Lohman,  
Andrea Baudoin Farah, José Nuñez del Prado  
(coordinadoras/es)



Este libro es una invitación a un recorrido, cual viaje por río, por el Trópico de Cochabamba y el norte yungueño de La Paz, pasando por el piedemonte encañonado donde inicia Rurrenabaque y se une con los Llanos de Moxos en Beni, hasta llegar a las rojizas tierras de Pando. Un recorrido por la Amazonía a través de su pasado, presente y futuro. Reflexionamos sobre la paradoja del bosque tropical más húmedo del planeta que ahora vive una crisis hídrica histórica; el *boom* minero aurífero y la generación de riqueza, y su relación con pasivos y degradación socioambiental; los cambios demográficos que llevan a las familias amazónicas a fluir entre el asentamiento y la movilidad; y las relaciones de todas estas dinámicas con estructuras regionales, nacionales y transnacionales. También exploramos las controversiales directrices de la comunidad internacional, que inyecta millonarios recursos económicos a la Amazonía para “salvarla” y conectarla, desvinculándola de su propia naturaleza.



ECOSYSTEM SCIENCE  
AND SUSTAINABILITY  
COLORADO STATE UNIVERSITY

**CEESP**  
CENTRO DE ESTUDIOS POPULARES

**CÁTEDRA  
AMAZONÍA**



**CIDES - UMSA**

# **SI LA AMAZONÍA QUEDA EN SILENCIO**

Aportes para la reflexión y la acción desde la Amazonía boliviana

Marielle Cauthin Ayala, Huáscar Salazar Lohman, Andrea Baudoin  
Farah y José Nuñez del Prado (coordinadoras/es)



# SI LA AMAZONÍA QUEDA EN SILENCIO

Aportes para la reflexión y la acción desde la Amazonía  
boliviana

Coordinadoras/es:

Marielle Cauthin Ayala, Huáscar Salazar Lohman, Andrea Baudoin Farah y  
José Nuñez del Prado

Comité editorial por orden alfabético:

Baudoin Farah, Andrea; Bautista, Ruth; Cauthin Ayala, Marielle; Cotta de  
Mello, Caroline; Nuñez del Prado, José; Salazar Lohman, Huáscar; Toledo,  
Daniela.



ECOSYSTEM SCIENCE  
AND SUSTAINABILITY  
COLORADO STATE UNIVERSITY

**CEESP**  
CENTRO DE ESTUDIOS POPULARES

**CÁTEDRA  
AMAZONÍA**



## SI LA AMAZONÍA QUEDA EN SILENCIO. APORTES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN DESDE LA AMAZONÍA BOLIVIANA

Citar de la siguiente forma: Cauthin, Marielle; Salazar, Huáscar; Baudoin, Andrea y Nuñez del Prado, José (2024) (Coord.). *Si la Amazonía queda en silencio. Aportes para la reflexión y la acción desde la Amazonía boliviana*. Cochabamba / La Paz: Colorado State University / Centro de Estudios Populares / Posgrado en Ciencias del Desarrollo (Cides – UMSA).

### Coordinadoras/es:

Marielle Cauthin Ayala, Huáscar Salazar Lohman, Andrea Baudoin Farah y José Nuñez del Prado

### Comité editorial por orden alfabético:

Baudoin Farah, Andrea; Bautista, Ruth; Cauthin Ayala, Marielle; Cotta de Mello, Caroline; Nuñez del Prado, José; Salazar Lohman, Huáscar; Toledo, Daniela.

### Editoriales:

Colorado State University / Centro de Estudios Populares / Posgrado en Ciencias del Desarrollo (Cides - UMSA)

### Cuidado de edición: Marielle Cauthin

Diseño e ilustración de tapa: Adriana Herbas

Diagramación interior: Gabriela J. Rus

Primera edición: Junio, 2024 – Cochabamba / La Paz

ISBN: 978-9917-9901-4-7

Depósito legal: 2-1-4095-2024

E-mail: convocatoria.amazonia@gmail.com

El contenido de cada artículo de esta publicación es responsabilidad exclusiva de sus autoras/es y no refleja necesariamente la postura de las/os coordinadoras/es, el comité editorial o de las instituciones que apoyaron su realización.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons  
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

#### **Usted es libre de:**

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material

La licencianta no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

#### **Bajo los siguientes términos:**

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licencianta.

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

# Índice

---

<b>Introducción.....</b>	<b>7</b>
<b>El norte amazónico: imaginarios y recomposiciones.....</b>	<b>13</b>
Desarraigar olvidos en el norte amazónico boliviano: Pando <i>Ara Goudsmit Lambertin y Camilo Cuba Pinto.....</i>	<i>15</i>
La recomposición social del norte amazónico de Bolivia en tiempos de expansión capitalista <i>Suzanne Kruyt y Huáscar Salazar Lohman.....</i>	<i>37</i>
<b>Las encrucijadas de los flujos financieros.....</b>	<b>55</b>
Ríos de asfalto en la Amazonía boliviana <i>Marielle Cauthin Ayala.....</i>	<i>57</i>
En búsqueda de financiamiento climático: Bolivia y su propuesta a la Coalición LEAF <i>Guillermo Villalobos Moreira.....</i>	<i>77</i>
<b>El agua a merced de amenazas extractivas y del cambio climático.....</b>	<b>91</b>
Sacrificar el agua: desconexión entre las valoraciones del agua para el bienestar y los modelos de desarrollo en los Llanos de Moxos <i>Andrea Baudoin Farah, Silvia Ten, Héctor Angarita, Adrian Vogl y Stacie Wolny.....</i>	<i>93</i>
Seguridad hídrica en amenaza: injusticia climática y urbanización periférica en Rurrenabaque <i>Andrea Katrinne Perez Tarqui.....</i>	<i>109</i>
<b>El lastre del boom minero en la Amazonía.....</b>	<b>125</b>
Enclaves de devastación y minería aurífera en el departamento de La Paz, Bolivia <i>Fernando Alcons Salluco.....</i>	<i>127</i>

Impactos socioambientales y minería en la Amazonía Oriental brasileña: de la producción de riqueza a la distribución de riesgos <i>Amanda Ferraz da Silveira y Heline Sivini Ferreira</i> .....	143
<b>Pueblos indígenas: amenazas y cambios</b> .....	<b>159</b>
Apropiación territorial, sedentarización y cambio cultural en la comunidad yurakaré Nueva Galilea en la Amazonía cochabambina <i>Denisse Rebeca Gómez Ramírez</i> .....	161
Tejiendo hamacas y redes: relatos y experiencias de mujeres guarayas de Urubichá <i>Rosely A. Stefanos Pacheco</i> .....	173
Imaginarios y prácticas espaciales de los movimientos indígenas en la Amazonía desde lo local hasta lo global <i>Ernesto García Leiva</i> .....	185
<b>Sobre quiénes escribimos este libro</b> .....	<b>201</b>

# Introducción

---

## ¿Y si la Amazonía queda en silencio?

La Amazonía es un lugar donde la vida se expresa en una sinfonía de sonidos que te envuelven mientras navegas en una canoa por sus ríos claros o turbios, cuando caminas por sus bosques o sus pampas, o mientras cae la lluvia y te cubres bajo un hermoso árbol de almendrilla: este lugar vibra constantemente al ritmo de la naturaleza. Desde el amanecer con la salida del sol y el despertar del monte con el aullido ronco y profundo del manechi, hasta la noche cuando el jaguar marca sus huellas en la playa, la Amazonía nunca duerme. El zumbido incesante de cientos de insectos se mezcla con el repique del peque-peque, llevando y trayendo familias, peces y novedades. Es un coro interminable de voces vegetales, animales y humanas.

Sin embargo, en medio de esta armonía, también se escuchan gritos de desesperación. La destrucción y degradación de los bosques, sabanas y humedales; los incendios forestales; la contaminación de agua, aire y suelos; así como la sistemática violencia amenazan de forma acelerada la vida y los sistemas socioecológicos de la Amazonía. Poco a poco, el canto de las aves, el murmullo de las cachuelas y las risas infantiles son reemplazadas por un silencio inquietante. Los bosques se convierten en cenizas, los ríos y los curichis se vacían de vida y se llenan de veneno, mientras las comunidades son abandonadas y la tierra queda desnuda, lista para ser tomada en nombre del desarrollo extractivista.

Si la Amazonía, con su multitud de sonidos, voces y cantos, enmudece, es como si la vida misma se apagara. Como dice la canción: "Si se calla el cantor", que advierte que cuando el cantor calla, la vida también lo hace. El silencio de la Amazonía sería un presagio devastador para la vitalidad de nuestro planeta, como ya lo vaticinó en 1962 Rachel Carson en su revelador libro *Primavera silenciosa*, un texto científico que nos lleva a un bosque sin pájaros, un río sin peces, un sembradío sin flores ni frutos, sin mariposas, sin

abejas, un campo sin grillos y sin hierbas: un lugar donde solo reina el silencio de la muerte provocada por la masiva liberación de “biocidas”, en el inicio de la mal llamada revolución verde.

Ante ello, les presentamos este esfuerzo que reúne estudios y reflexiones desde diferentes espacios y territorios de la Amazonía boliviana, con el objetivo de aportar con un estado de situación sobre las presiones que avanzan sobre el bioma y, a partir de ello, contribuir a las agendas de las familias, comunidades y movimientos sociales de la región, así como de sus aliadas y aliados. Los siguientes artículos ponen de manifiesto las presiones e impactos que enfrentan los territorios y ecosistemas amazónicos debido al cambio climático, la minería, el avance de la frontera agrícola y ganadera, la creciente urbanización poco planificada y desigual, así como las inversiones en infraestructura.

El libro se estructura en torno a cinco secciones temáticas que proporcionan un marco para las reflexiones, donde subyacen llamados para la acción desde la interconexión e interdependencia entre los aspectos sociales, ambientales, económicos y culturales. Al mismo tiempo, este documento es una invitación a un recorrido, cual viaje por río, por el Trópico de Cochabamba y el norte yungueño de La Paz, pasando por el piedemonte encañonado donde inicia Rurrenabaque y se une con los Llanos de Moxos en Beni, hasta llegar a las rojizas tierras de Pando.

La primera sección, que se titula: **El norte amazónico: imaginarios y recomposiciones**, nos proporciona claves para repensar y reconocer la Amazonía. Ara Goudsmit y Camilo Cuba, en el artículo *Desarraigar olvidos en el norte amazónico boliviano: Pando*, nos invitan a mirar el pasado y el presente de Pando desde los legados de la presencia estatal, militar e industrial, atravesada por la subordinación de las memorias y las identidades de sus antiguos habitantes. Por su parte, el artículo: *La recomposición social del norte amazónico de Bolivia en tiempos de expansión capitalista* de Suzanne Kruyt y Huáscar Salazar destaca las tensiones entre autonomía e imposición política, así como desafíos en las visiones de desarrollo y cohesión social, en medio de la complejidad de las identidades políticas y los intereses en torno a la extracción de recursos naturales. Se subraya la urgencia de comprender los impactos multidimensionales de las dinámicas económicas y la importancia de potenciar la capacidad de los actores locales para fortalecer sus organizaciones y sus luchas.

El segundo bloque denominado: **Las encrucijadas de los flujos financieros** da pie al artículo: *Ríos de asfalto en la Amazonía boliviana* de Marielle Cauthin, que explica cómo las proyecciones de colonización y modernidad persisten hasta hoy en la Amazonía, esta vez viabilizadas por millonarias inversiones en carreteras, que se dibujan en el mapa como nuevos ríos, esta vez de pavimento. La autora advierte que la llamada “marcha al norte” avanza favorecida por laxas normas técnicas, sin la correcta aplicación de salvaguardas y con evidentes conflictos entre comunidades indígenas y empresas. Finalmente,

se presagia el cumplimiento de la epopeya de la modernidad capitalista: someter la naturaleza de la cuenca y despojar a sus pueblos, para convertir el bioma en una “eficiente” zona de tránsito y abastecimiento de mercancías.

A contracorriente, el artículo: *En búsqueda de financiamiento climático: Bolivia y su propuesta a la Coalición LEAF* de Guillermo Villalobos propone –de forma exploratoria– un análisis descriptivo de las iniciativas de millonarios fondos para “salvar” la Amazonía, que explica son los primeros pasos que está tomando Bolivia para acceder a pagos basados en resultados por la reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación del bosque (REDD+). El artículo resalta la incertidumbre respecto a los efectos de estos mecanismos en términos sociales y ambientales, y apunta hacia la necesidad de un debate amplio e inclusivo sobre el tema.

Ambos artículos logran contraponer las intenciones de los millonarios flujos de inversiones que vienen a la región amazónica boliviana. Una tormentosa contradicción en las tendencias internacionales que –por una parte– respaldan la generación de grandes infraestructuras y –por otra– buscan la reducción de pasivos ambientales sin desacelerar la mercantilización de la zona; lo que no cambia en esencia es la falta de participación real de la población local y la paulatina precarización de las condiciones de vida de las comunidades.

En la sección: ***El agua a merced de amenazas extractivas y del cambio climático***, Andrea Baudoin y sus coautoras/es presentan el artículo: *Sacrificar el agua: desconexión entre las valoraciones del agua para el bienestar y los modelos de desarrollo en los Llanos de Moxos*, donde exponen los resultados de un estudio sobre las percepciones de las contribuciones del agua al bienestar, y los efectos del cambio climático y el cambio de uso de suelo en la provisión y calidad del agua en los Llanos de Moxos. Sugieren que, a pesar del consenso de la población respecto a la importancia del agua para el bienestar, esto no se ha traducido en políticas públicas que consideren la provisión de agua en cantidad y calidad suficiente a futuro. Además, señalan el potencial del agua como eje articulador de los esfuerzos de planificación del desarrollo.

Por su parte, el artículo: *Seguridad hídrica en amenaza: injusticia climática y urbanización periférica en Rurrenabaque* de Andrea Pérez reflexiona sobre la (in)equidad en el acceso al agua en contextos urbanos frente a las realidades del cambio climático y la precariedad de las zonas periféricas urbanas en las emergentes ciudades amazónicas, tomando como punto de partida la realidad de la ciudad de Rurrenabaque. Adoptando una perspectiva de justicia climática, su estudio muestra cómo el cambio climático exacerba los efectos de la urbanización periférica desigual sobre los derechos de acceso al agua en cantidad y calidad suficientes.

Estos dos artículos, desde sus distintas escalas de análisis espacial y temporal, evidencian cómo las políticas públicas en diferentes ámbitos pueden disminuir la seguridad hídrica de la población a corto, mediano y largo

plazo si no consideran sus potenciales efectos en la disponibilidad, calidad y equidad en el acceso al agua en un contexto de cambio climático.

La tercera sección que se llama **El lastre del boom minero en la Amazonía** está dedicada al análisis de los impactos de la minería. El artículo: *Enclaves de devastación y minería aurífera en el departamento de La Paz* de Fernando Alcons propone una mirada geográfica para identificar potenciales relaciones entre el avance de la minería aluvial de oro, la deforestación y los incendios forestales. Introduce el concepto de enclaves de devastación para referirse a la distribución espacial y el rol de la minería en nodos de actividades extractivas a lo largo de los ríos amazónicos.

Cerrando esta sección, Amanda Ferraz y Heline Sivini analizan la minería en la Amazonía oriental brasileña, en el artículo: *Impactos socioambientales y minería en la Amazonía Oriental brasileña: de la producción de riqueza a la distribución de riesgos*, donde la actividad se ha desarrollado por impulso estatal hace décadas. Las autoras muestran la acumulación de desigualdades en la distribución de los costos y beneficios de la minería, donde los ecosistemas, pueblos indígenas y comunidades tradicionales han sufrido fuertes impactos, mientras que la riqueza proveniente de la minería se ha concentrado en pocas manos.

Este conjunto de artículos evidencia los riesgos que la minería y la incendiaria expansión de la frontera agropecuaria representan para la Amazonía y su gente, especialmente dada la escasa regulación, planificación y transparencia que enmarcan estos procesos.

**Pueblos indígenas: amenazas y cambios** es el título de la cuarta sección que aborda la multiplicidad de estrategias de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas para hacer frente a la intensificación de las presiones extractivas y desarrollistas. El artículo: *Apropiación territorial, sedentarización y cambio cultural en la comunidad yurakaré Nueva Galilea en la Amazonía cochabambina* de Denisse Gómez mira a la sedentarización como un complejo proceso de resistencia cultural y adaptación a las nuevas dinámicas del mundo político y la gobernanza étnica.

A su vez, el artículo: *Tejiendo hamacas y redes: relatos y experiencias de mujeres guarayas de Urubichá* de Rosely Stefanos ilustra las estrategias de las mujeres indígenas para avanzar en la construcción de sus derechos humanos, económicos y políticos desde espacios públicos y privados, resistiendo y enfrentando violencias con estrategias socioculturales. Por su parte, el artículo: *Imaginario y prácticas espaciales de los movimientos indígenas en la Amazonía desde lo local hasta lo global* de Ernesto García plantea la defensa territorial, sus logros y crisis desde la óptica de las organizaciones indígenas a través de distintas escalas espaciales.

Más allá de los significativos desafíos que enfrentan los pueblos indígenas frente al avasallamiento de sus territorios, sus cuerpos y la exclusión de los procesos de toma de decisión ambiental, estos artículos resaltan la creatividad

y resiliencia de las familias, comunidades y organizaciones indígenas, que constantemente adaptan sus estrategias de lucha desde lo cotidiano hasta la articulación regional para acertar la (re) producción de sus vidas y culturas.

En su conjunto, las contribuciones a este libro nos recuerdan que la Amazonía aún no calla y que se niega al mutismo. Las familias locales siguen construyendo resistencias frente al avance del extractivismo, desde los susurros de la vida cotidiana y la reproducción de las relaciones con los territorios, hasta los llamados reivindicativos de las protestas y testimonios de la resistencia socioambiental. La Amazonía merece que, desde la investigación, el mejoramiento de las condiciones de vida en el campo, la protección y defensa del territorio, el activismo y la incidencia en políticas públicas, pensemos más allá de los esencialismos para darle espacio a la complejidad, a la ambigüedad y a la pluralidad. Primero debemos aprender a *escuchar*, para luego contribuir a amplificar las voces de la Amazonía.



# EL NORTE AMAZÓNICO: IMAGINARIOS Y RECOMPOSICIONES





# Desarraigar olvidos en el norte amazónico boliviano: Pando

---

*Ara Goudsmit Lambertin y Camilo Cuba Pinto*

## **Resumen**

Esta investigación exhibe la invisibilidad predispuesta hacia memorias indígenas en el norte amazónico boliviano, con especial énfasis en el departamento de Pando, dada la continuidad del legado militar e industrial como forma hegemónica de memoria y la construcción de narrativas identitarias hipermasculinas. No sólo cuestionamos la ausencia de investigación - acción en torno a memorias indígenas, sino también cómo las agendas conservacionistas basan sus intervenciones, reproduciendo modelos que no comprenden particularidades y que han configurado tejidos sociales desde la violencia y el desarraigo. Estrategias de investigación crítica y colaborativa implicarían escuchas atentas a historias y memorias frente a lógicas que trajeron procesos de colonización y despojo.

## **Palabras claves**

Memorias, reparación, imaginarios, desarraigo, Amazonía boliviana.

## En la obsesión por futuros, traer pasados

De las lagunas cerca de la comunidad Naranjal, Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) pude saber dos o tres cosas. Allí van un grupo de mujeres a pescar como sustento de vida, a jóvenes no les da miedo meterse en el territorio de una sicurí y los pescados se están muriendo. Las olas de calor y el exceso de temperatura en el agua les arrebatan la vida. Al salir del monte estaba acompañada con las memorias de quien había llegado desde el Beni a trabajar en la zafra de castaña. Una nube amazónica es un territorio completo. Antes de mojarnos, esta persona dijo: "el Estado boliviano está en deuda con nosotros, hemos sido vendidos, debe repararnos".

Este líder tuvo que esconderse en trincheras de lucha para titular sus tierras y salir del trabajo extenuante que hacía para los patrones. "Lucha" es una palabra que él utiliza, porque era así, dice, una guerra. En esa época, las personas andaban armadas, ante la persecución, debían esconderse. En su relato, la memoria es quien activa una demanda, la reparación. El pasado permite entrever cómo gobernar territorios que, hasta hace tres décadas, estaban en manos de unos cuantos para la explotación de la selva (Ara, noviembre de 2023).

¿Transición hacia qué futuro? La conferencia de Cambio Climático COP28 fue nada menos que en Dubai. Una ciudad que representa el petróleo, las emisiones de carbono y lo obscenamente ostentoso. Dubai se edifica en su obsesión por el futuro. Propagandas, publicidad, discursos y museos enuncian imágenes sobre lo que será en 2040, 2050 o 2070.

El futuro será instantáneo y sin cables. La interacción humana será menos necesaria y grandes "riquezas" serán aún descubiertas. Así cuentan. El presente se dedica al porvenir, y el pasado casi no existe. Allí, el contraste entre el lugar y la palabra fue radical. Centenares de delegadxs, activistas, ministrxs, jefxs de estado y otrxs, hablaron sobre un manejo sostenible de la Tierra. Fue curioso, casi inentendible, hablar de la gestión de los recursos y el compromiso de dejar los combustibles fósiles en un ahora que, como comunidad global, no podemos vivir de forma equitativa. Mirar hacia atrás para ir adelante ¿qué violencias han borrado qué conocimientos? (Camilo, noviembre de 2023).

Diferentes intelectuales indígenas afirman que las narrativas de la crisis climática "borran a ciertas poblaciones (...) quienes se acercan al ecocidio habiendo pasado ya por transformaciones de sus sociedades inducidas por la violencia colonial" (Whyte, 2017, p. 224). Esto hace que la catástrofe climática no sea inédita para muchas geografías, sino una forma intensificada de colonialismo (Todd, 2015; Whyte, 2017). En referencia a su investigación documental y cinematográfica sobre pueblos indígenas de Argentina, Lucrecia Martel afirma que la historia está ficcionalizada de manera atroz, con el propósito de narración más mezquino que puede existir: una ficción basada en la eliminación violenta de memorias plurales, escondiendo una sistemática violencia (Cinemateca Uruguay, 2013). Lo atroz es convertido en deseable, la historia oficial, pero es un acuerdo colectivo que es posible *desandar*.

Este texto se pregunta cómo empezar a *desandar*. Comenzamos por una incipiente y primera contribución: mostrar cómo hasta ahora el pasado de

ficciones atroces marca el presente, monopoliza la memoria y forja caminos violentos para andar. En Pando, la incursión voraz en “territorios inhóspitos” se debió a intereses de extracción de recursos naturales (Gamarra, 2018), un modo recurrente de nombrar la historia. ¿Inhóspitos para qué tipo de mirada? ¿Según quiénes? ¿Bajo qué conocimientos? De los antónimos de estas respuestas poco sabemos, de miradas que verían hogares y universos, donde otros han visto ansiosamente riqueza y naturaleza.

Con la sombra de ser territorio “perdido/cedido” o el desarrollo que “pudo haber sido”, y con el mandato de “sentar soberanía” a través del nexo industria-Estado, se creó el Territorio de Colonias del Noroeste en 1900. La concepción de una tierra de “nadie” es contada desde la óptica de la creación de un espacio administrativo territorial industrial. La historiografía reproduce lo que ocultan palabras que hacen mundos, términos como “de nadie”, en realidad, fueron mundos poblados por diversas lenguas, prácticas y relaciones.

La ausencia de memorias territoriales se materializa en un ejemplo claro: hasta la fecha, no se identifica con certeza, o común acuerdo, cuáles son los pueblos que están asentados. Organizaciones internacionales identifican que los pueblos cavineño, esse ejja, tacana y yaminawa están presentes. Sin embargo, algunas discuten la presencia de los pueblos machineri y pacahuara (OTCA, 1991). Diez (2011) identifica únicamente a pueblos yaminawa, machineri y esse ejja. Según informantes de Asuntos Indígenas de la Gobernación, ahora hay presencia chimán que ha migrado. La categoría de ser indígena pacahuara ha sido utilizada para dotar de tierras a migrantes (Sol de Pando, 2022), aunque antes había sido denominado como pueblo en peligro de extinción o “en situación de no contacto” (Defensoría del Pueblo, 2019).

Al otro lado de la frontera, en el Acre brasileño, las titulaciones de territorios estaban siendo concretadas entre mediados de los 80 y principios de los 90. En contraste, la titulación colectiva en Pando se realiza casi veinte años después. Se titularon dos territorios indígenas: Machineri - Yaminawa y el TIM II, ninguno con el total de hectáreas inicialmente solicitadas (Cejis, sf). Diez (2011) señala que el pueblo esse ejja antes de formar parte del TIM II, inició su reclamo de territorio, sin embargo, hasta ahora no cuentan con territorio propio en Bolivia.

En este contexto ¿cómo es valorado el norte amazónico boliviano en medio del colapso ecológico? ¿Cómo se piensan las memorias de este territorio de frontera? Preguntarse por los imaginarios de la Amazonía boliviana es indagar en qué tipos de discursos circulan y otorgan valor a las historias y espacios. La imaginación no es una fantasía o ilusión, es una práctica colectiva que posibilita formas de vida y produce realidades.

Enlazamos mecanismos y estrategias que invisibilizan las historias de pueblos indígenas, sus experiencias, conocimientos y relaciones territoriales. Consideramos, sin embargo, lo problemática que es la categoría de “indígena” en este contexto. Mostraremos cómo esta enunciación es tratada como

opuesto a lo "civilizado", o cómo lo "indígena" es una categoría que "sale a relucir" en momentos de folklore, negociaciones y pugnas con el Estado boliviano. Aquí, lo "indígena" es una clasificación que, más que auto-reconocimiento, es una estrategia (Postero, 2017). Cuando hablamos de territorios y pueblos indígenas, no nos enmarcamos dentro de una política de identidad, debido a los peligros de esencializar a sujetos. Hablamos de conocimientos y prácticas que han estado vinculadas con la Amazonía boliviana desde hace larga data.

Cuestionamos la capacidad de las lógicas imperantes de proyectos conservacionistas que piensan el bosque como *objeto* (Escobar, 1998; Ferdinand, 2021; Plumwood, 1993). Volver a la vida *objeto*, *naturaleza o recurso* imposibilita crear formas de encuentro y escucha para los cuidados y equilibrios colectivos. Por eso, queda la pregunta sobre cómo la investigación en el norte amazónico boliviano no sólo requiere un ejercicio crítico sobre continuos procesos de despojo, sino también cómo puede activar prácticas de conversación y memoria que no reproduzca imaginarios coloniales.

Por despojo entendemos la pérdida, ruptura e interrupción de una relación social significativa para la reproducción de la vida, por la acción arbitraria de otros (Arias & Caicedo, 2017). Lo sucedido en la Amazonía boliviana no es usualmente reconocido como un registro bélico violento. Posicionamos, entonces, el norte amazónico como lugar que requiere ser visto en contexto de guerra y despojo. Uno de los resultados de lo anterior es la 'amnesia' que se produce sobre estos eventos. La memoria trae conectividad, relaciones interpersonales e interregionales, donde las personas establecen lazos y redes (Arendt, 1958). Sin el intercambio de relatos, es difícil, sino imposible, tejer marcos de sentidos que permitan pensar reconexiones vitales.

## Camino investigativo

Este es un mosaico de fuentes, análisis y relatos que evidencia un monopolio sobre la memoria en el norte amazónico. Ciertas narrativas no sólo muestran el despojo de territorios, sus prácticas y sentidos de significación plurales, sino que invisibilizan lo que rechaza y está al margen.

A través del análisis de discursos, indagamos en el poder productivo de lenguajes e ideas que crean estándares normativos sobre lo que se desea y se espera (Bäckstrand & Lövbrand, 2016). El análisis discursivo ve vínculos, límites e interfaces de los sistemas de conocimiento y memorias como productores de visiones del mundo (McQuillan, 2000). Examinar discursos permite ver cómo los bosques se proyectan y representan para establecer puntos de vista sobre por qué un espacio importa (Castree, 2013) y están situados en una compleja red de relaciones que se investigan en diversos "sitios" (Jasanoff & Kim, 2015).

Esta dispersión de sitios requiere una constelación de fuentes, un caleidoscopio de impresiones y texturas que pueda captar las realidades

que crean determinados sistemas de valoración (Law, 2004; Schnegg, 2021). Este método se adentra en la red tentacular de memorias y significados, para recordar que todo discurso es una práctica política abierta a su propia crítica (Spivak, 2000), cuestionando los binarios que otorgan sentidos normativos al momento de ejercer oposiciones (civilizado/salvaje; desarrollo/subdesarrollo).

Nuestros “sitios de análisis” son tres: imaginarios textuales que devienen de la publicación de escritos históricos e investigaciones contemporáneas; imaginarios visuales que circulan en la región; e imaginarios expresados a través de discursos orales de actores que trabajan en gobiernos locales, cooperación internacional y el sector educativo. Es decir, analizaremos textos, imágenes, espacios y enunciaciones que nos muestren qué se dice, piensa y espera del norte amazónico boliviano.

### **Lo escrito**

*Columna Porvenir* (Tiburcio, 2018) o *Anotaciones y documentos sobre la campaña del Alto Acre* (Suárez, 2018) son textos que nos permiten entender la construcción de un territorio como “boliviano”, que antes era entendido como “salvaje”, como lo muestra el mapa mandado a hacer por el presidente José María Linares en 1859. Estas fuentes enmarcan la memoria en torno a las hazañas de “conquistadores” y “héroes históricos”. Allí, se detallan las odiseas de aquellos que “sentaron soberanía” en el Territorio de Colonias. Así, Pando ha cobrado relevancia en el imaginario colectivo por los recursos que ofrece para ser extraídos.

La memoria indígena, en contraste, ha sido referida como aborígen (OTCA, 1991; Gamarra, 1990), en términos de “tribus” (Tiburcio, 2018), o como parte del aglomerado de “mano de obra” para los industriales que conducían el desarrollo. Si el desarrollo es algo que se conduce, la selva ha sido vista como máquina, y la gente –en parte pueblos indígenas– su motor de producción. Como lo expone el padre Armentia, uno de los misioneros que escribió sobre incursiones en la región amazónica, la industria: “no era otra cosa que hacer que el aborígen pierda de a poco sus costumbres para adentrarse al mundo *civilizado*” (Tiburcio, 2018, p. 30).

Pero en esta mirada está en juego una totalización de lo que acontece: o eres *civilizado*, o eres *salvaje*, contribuyendo a binarios que crean lo deseable y lo indeseable. Textos publicados sobre memorias e historias sociales en Pando, en sus entrelíneas enuncian qué tipo de imaginarios y proyecciones se esperan de la región. Desde un principio, el material de análisis es escaso, y la agenda está detentada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pero con alianzas con la Universidad Amazónica de Pando (UAP) o entidades de gobiernos locales.

En la actualidad la conservación de bosques y el desarrollo son pilares centrales en la agenda investigativa. La selva en Pando, coincidente con esta perspectiva, existe en cuanto a datos y recursos (Morales *et al.*, 2021; Peralta

& Albornoz, 2023; Enriquez *et al.*, 2013; Lazo de la Vega *et al.*, 2013). Textos que incluyen a pueblos indígenas son alrededor de publicaciones sobre caza y fauna (Rojas *et al.*, 2013), las necesidades de rediseñar la ley electoral para mejorar la representación indígena (Dávalos, 2013); y el conocimiento medicinal de dos comunidades (Ponz, 2005).

En otro estudio sobre conservación de bosques, se denota la incursión de economías extractivistas en el norte amazónico (Pérez & Smith, 2019). Se concluye que estas actividades degradan los sistemas de conocimiento indígena que contribuyen a la protección de bosques. Las indagaciones que realiza el estudio no especifican qué se entiende por conocimiento indígena, es decir, qué prácticas y relaciones hacen el andamiaje de lo que es un "sistema de conocimiento" al cuál prestarle atención. De estos estudios, el realizado por Ponz (2005) sobre medicina tacana y machineri es el que se acerca más a dibujar una cartografía de la memoria, desde la construcción de la investigación como un espacio de escucha al territorio.

En su mayoría, el bosque aparece como recurso y el recurso como el centro de la investigación ¿Qué sucede cuando este es el enfoque que crea la relación entre investigaciones y territorios? En principio, la vida y la memoria en la Amazonía están supeditadas a funciones utilitarias y visiones instrumentales de la "naturaleza" como objeto, transformando la pluralidad que puede existir en territorios (Adams, 2002). Lo que queda en los márgenes del recurso será desechado de la atención.

Por otra parte, estudiar la economía de la goma ha sido la principal forma de entender –y atender– a lo sucedido en el norte amazónico, sobre todo desde la perspectiva de las lógicas de la Casa Suárez (Freear, 1986; Gamarra, 2018; Lehman, 2018). El estudio de Gamarra (2018) es indispensable para adentrarse en el funcionamiento de una maquinaria extractiva, su lógica industrial y redes de comercio. Esta es una memoria de los mecanismos de una economía que busca insertarse en el capitalismo global, una historia sobre cómo el estado boliviano conoce la selva a través de ponerla en manos de empresarios. Aquí, seres humanos son tratados como trabajadores o industriales, en tierras consideradas como "baldías". A pesar que se ha escrito que la industria de la goma ha sido la hecatombe de pueblos amazónicos, nociones como "esplendor", "auge" o "dinamismo económico" aún se utilizan como eufemismos que esconden la violencia que el mismo texto denuncia en la superficie (Gamarra, 2018).

La tendencia a seguir "sentando soberanía" para el desarrollo en la región, continúa pensando que la selva está "vacía", sin gente, sin historia, como expuso Carvajal, viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico:

Hay un proyecto que se está analizando, junto con la Comibol en el Río Madre de Dios, con los objetivos de sentar soberanía en la Amazonía y generar un polo de desarrollo en esa región (Chávez, 2023, p. 122).

Estudios como el de Lehman (2018) afirman que la Casa Suárez era un "para-Estado", una autoridad con una "economía emocional". Es decir, con

pasiones con las que ejercen las personas su autoridad y percepciones sobre su "mano de obra", donde los patrones no pudieron reducir completamente a los pueblos que habitaban territorios penetrados por industriales. Dentro de estas lógicas económicas, a su vez, se construían diferentes connotaciones sobre lo indígena. Por un lado, están los indígenas "civilizados" por haber sido cristianizados en misiones jesuitas, como los cayubabas, baures, movimas y canichanas. Por otro, están los distintos rangos de "salvajes": unos "domesticados", como los araonas y cavineños, y otros "indóciles", como los pacahuaras, caripunas y chácobos.

Otra vez, el binario de lo salvaje como opuesto al desarrollo, y lo civilizado a favor de él, es alimentado desde distintos matices. Cachuela Esperanza era visto como el epicentro de la civilización en la selva, y el territorio "inhóspito" era el salvaje y no colonizado. Quizás pensar en los modos que este binario construye el mundo y futuro en la Amazonía es de las cuestiones más urgentes por desentrañar.

Entre las líneas de investigaciones como las de Córdoba (2015) se dibujan geografías indígenas del norte amazónico: el río Beni y Mamoré navegado por araonas, la periferia de Cachuela Esperanza observada y recorrida por chácobos, pacahuaras y caripunas, pacahuaras apareciendo en los ríos Abuná y Orthon, antes denominado como *Datimanu* (el río de las petas) en lengua araona, caripunas atacando establecimientos gomeros cerca de Puerto Rico, chácobos visitando el poblado Exaltación, todas geografías sobre las que hasta hoy poco se ha dicho.

Un abismo similar se abre para pensar cómo se ha configurado el norte amazónico en las últimas seis décadas. En este umbral de no reconocer una práctica sistemática de olvido, la doble negativa del olvido, quienes podrían relatar la historia desde lo que no ha sido contado, los más antiguos, van despidiéndose. ¿Cómo nos llegan las múltiples capas de historias y tiempos que se escurren entre los dedos de la vida y la muerte? ¿Podremos escuchar relatos sobre relatos? ¿Cómo abordamos metodológicamente una investigación sobre memoria que tenga en cuenta esta complejidad?

Hay incipientes intentos por hacer crítica hacia las memorias mezquinas, es decir, esas que usurpan las visiones del mundo donde el recurso, la economía y hombres industriales detentan el valor de lo que significa la Amazonía. Arruda (2009) analiza los modos históricos de negociación de los pueblos yaminawa y machineri, quienes viven entre las fronteras de Perú, Bolivia y Brasil. El movimiento y el viaje como estrategia de supervivencia, la reclusión en el Alto Acre para no contraer enfermedades traídas por colonos, historias de disputa por la demarcación de territorios, son algunas de las estrategias descritas como formas para seguir existiendo en medio de la penetración a la selva por estados nacionales. Este es un estudio que recopila, sobre todo en Brasil, la historia oral de creación de territorios indígenas desde la década de los 70. En Pando, no hay una recopilación exhaustiva sobre procesos como estos.

También se ha producido investigación en torno a Cachuela Esperanza en las fronteras Bolivia/Brasil, donde se afirma que la identidad principal aún recae sobre el antiguo “esplendor” de la goma (Neto & Pinto, 2020). El análisis concluye que este lugar tiene potencial para reactivar la economía local por su “belleza natural” y su condición de ser “centro histórico” para atraer a personas que busquen “descubrir” los recuerdos de un “patrimonio”. La palabra patrimonio no podría ser más adecuada para lo que se imagina de este lugar: la posesión del padre, el imperio de Suárez. Esta conclusión, además, deja preguntas abiertas.

¿Sería netamente la historia de una empresa como la escribe Gamarra (2018)? ¿Quién decidiría qué historias contar? ¿Quiénes participarían en la construcción del relato de lo que fue la goma en el norte amazónico? ¿Habitaría la posibilidad de conocer otras prácticas que fueron eclipsadas por la industria? ¿Se podría contar las historias de las madereras y el desplazamiento que provocaron (García, 2012)? En el “recorrido” ¿podría especularse porque hay un “Cristo de la goma” a lado de una estatua de una máquina retroexcavadora?

### Cachuela Esperanza





Autora: Ara Goudsmit, 2023.

Si lo que ha hecho Cachuela Esperanza es eliminar los relatos del bosque, porque el bosque sólo existe como extracción y no como territorio con saberes y ecologías ¿no desaparecería nuevamente la selva, con sus lógicas, relaciones y conocimientos, por el monopolio de los relatos sobre patrimonio e industria? ¿Sería posible desandar la historia contada y *andar* con nuevas –y quizás más antiguas– narrativas? Bautista *et al.* (2016) muestran cómo ejerce violencia la imposición de la nación, es decir, cómo las identidades nacionales se pasan por alto a los pueblos indígenas, centrando su mirada en la acumulación de capital, la lógica de guerra que impone la conquista y la estetización de los recursos naturales como imagen de civilización.

El libro se aventura a afirmar que “si nos reunimos en una identidad, debería basarse en la lucha común por la diversidad y conservación de los recursos naturales amazónicos” (Bautista *et al.*, 2016, p. 12). Sin embargo, pensar en memorias y conocimientos pone en cuestión la confianza en la identidad como manera para lograr coincidir en el cuidado de territorios. Cada vez que la identidad se hace referente de respuestas es porque no estamos prestando suficiente atención a lo que hacemos (praxis), cómo lo hacemos (conocimientos), y con quiénes, humanos y no-humanos, lo hacemos (relaciones). La identidad opaca la condición común de ser humanos, donde es posible *variar*. La identidad opera siempre frente a alguien, afirmarse frente a otro, donde es menester decir quién eres porque probablemente alguien busca negarte. La identidad es un gesto patriarcal que busca el origen, la herencia, el apellido, la condición categórica para encontrar valor sólo a partir de *identificar*.

En un gesto distinto, *Páginas Bárbaras* (1998) de Mendoza y *Manudiduyepe* (2020) de Piñeiro son obras literarias con las cuales podemos mirar el territorio desde ángulos que no han sido percibidos por la investigación social y los formatos tradicionales de creación de conocimiento, son recipientes para hacer memoria y crear imaginarios. Las historias de *Manudiduyepe* son *atrevidas*, no sólo porque imagina a las selvas de Pando en sintonía distinta, con relaciones sociales entre duendes y árboles, monos y humanos, y el propio ego del escritor cuestionándose a sí mismo. Es *atrevida* porque los relatos hablan sobre la necesidad de curar cuerpos, lugares de conocimiento y sanación en medio del narcotráfico y violencias hacia mujeres, cuestiones fundamentales de la floresta. Atreverse a pensar curaciones y medicinas, muestra Piñeiro, no sólo es urgente, sino que es posible.

El libro de Mendoza, por otra parte, fue escrito años antes que la obra *La Vorágine* (2003) del colombiano Eustaquio Rivera. Ambas novelas exponen el horror de las caucherías. Juan Cárdenas escribe con precisión que: “la operación política más profunda de *La Vorágine* no consiste en un mero ejercicio de denuncia (...). La verdadera intervención política reside en el hecho de que todos los procedimientos del texto (...) acaban mostrando que, para que el círculo de la explotación funcione, debajo debe haber un aparato estético y un aparato lingüístico” (Cárdenas, 2023). En la obra de Mendoza, estos aparatos existen en el sentido que no hay página que no contenga la construcción del binario salvaje/civilizado, donde los personajes encuentran valor cada día de sus desoladas vidas, elucubrando miradas violentas hacia la selva. Aparato estético y lingüístico están sedimentados en el tiempo donde el bosque continúa siendo recurso y sólo puede ser civilizado por medio de la industria y la extracción, aparato estético y lingüístico opera en las imágenes que hoy viven erigidas en el espacio, en las afirmaciones que circulan, en las entrelíneas que deciden no ver los textos.

### **Lo visto**

Frases colmadas de nostalgia por el pasado que anuncian el esplendor del primer teatro boliviano, la presencia extranjera de personal en hospitales, la preciosidad de instalaciones, son algunos modos comunes para hablar sobre el ingreso de la Casa Suárez a la Amazonía. La última jugada de este aparato lingüístico y estético se hace a través del documental *Memorias de Cachuela Esperanza*, una producción que da continuidad a lo anterior. El eslabón del andamiaje de esta forma de memoria aún es miope a la violencia, al exterminio, y a la pluralidad existente en los márgenes de la alabanza y melancolía de la industria.

No es coincidencia que el mural del Palacio de la Cultura de la ciudad de Guayaramerín centralice su narrativa sobre su valor con torres de petróleo, barcos de carga industrial, ganado y hombres, sólo hombres, quienes cortan madera. En Cobija, el mural en honor a la Columna de Porvenir tiene cuerpos y rostros armados, propios de una guerra y al centro un hombre esculpido con el arquetipo de fortaleza, con abdominales resaltados de sobremanera,

quien lanza una flecha que alude a la memoria del tacana Bruno Racua. Como afirman Bautista, Bazoberry y Chumacero (2016, p. 155), esta es una memoria monolítica que “no da lugar a comprender que los indígenas defendieron el territorio amazónico no por causa nacional, sino porque debían defender los fundos en los que servían de fuerza de trabajo (...) de todas formas, ellos no ganaban”.

### Monumento en Porvenir, Pando



Autor: Camilo Cuba.

### Obelisco de Cobija y un habitante de calle, Pando

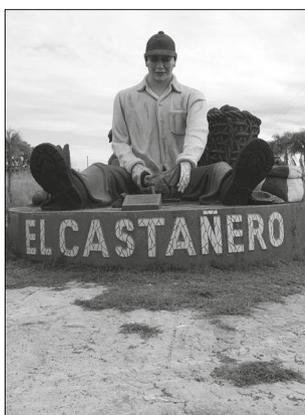
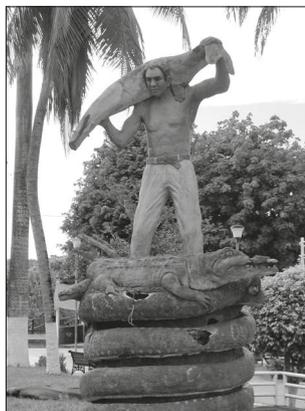


N. del E.: Imagen retocada digitalmente.

Autora: Ara Goudsmit.

La memoria de la guerra y la industria hacen del ser humano la experiencia de ser terrateniente o trabajador. Otras formas en las que nos convertimos en personas quedan desechadas. Esta memoria es un amazónico masculino (Bautista *et al.*, 2016); el hombre y su capacidad industrial, las grandilocuencias de cuerpos varoniles acaparan el espacio de pueblos y ciudades. Hombres gigantes y obeliscos en la selva se erigen en plazas como el monumento icónico a honrar. Ya no son sólo militares e industriales, desde la figura del *obrero* también se levantan estatuas de hombre blanco, enorme, que corta la castaña, raya goma, pesca o es el padre de familia. Quien sostiene un pez, además, se posiciona en la cúspide, encima de animales.

Monumentos en Porvenir, Pando



Autor: Camilo Cuba, 2023.

Mujeres aparecen como *misses*, o vistiendo trajes antiguos “importados”. Mujeres también son modelos que posan para promocionar el turismo en Pando, mostrando nada más que sus cuerpos sin que haya otro “atractivo” que sus ropas. Dentro de la Casa de la Cultura en Cobija está la foto de una niña borrosa en medio de militares. Esa es de las pocas presencias no masculinas ni masculinizantes que transitan espacios como estos.



Fuente: Gobernación de Pando, captura de pantalla en redes sociales, 2023.

### Imagen de la Casa de la Cultura, Cobija.

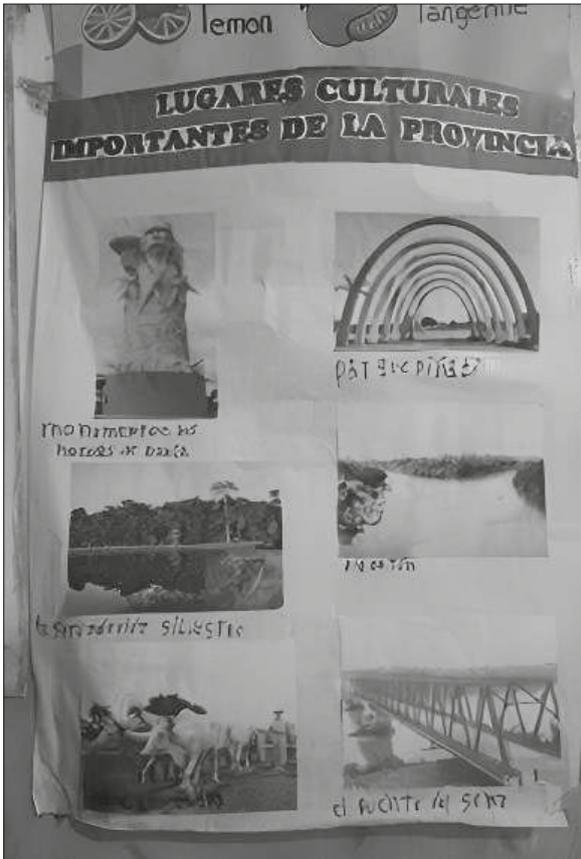


N. del E.: Imagen retocada digitalmente.

Autora: Ara Goudsmit, 2023.

En distintas escuelas del TIM II, las aulas están colmadas de cartulinas donde se filtran trabajos referentes a la “cultura” y “costumbres”. Las impresiones pegadas por estudiantes y aprobadas por maestros son imágenes de puentes y carreteras, y estatuas de hombres y memorias de la guerra. Estas es una consecuencia material del imaginario de ser una Amazonía industrial, masculina y penetrada por lógicas de guerra, que vive en el detalle de los días y la formación en espacios educativos.

**Escuela del TIM II, Pando, 2023.**



N. del E.: Imagen retocada digitalmente.  
Autora: Ara Goudsmit.

Durante un taller a estudiantes aspirantes a maestras/os en Filadelfia, fue posible hacer la indagación sobre cuántas veces habían ido a caminar al monte, al bosque. Silencio. Sólo había un estudiante, el único cuya familia era del lugar, quien entraba durante la época de zafra de la castaña. El resto eran estudiantes llegados de otros lugares, y las razones por las cuales después

de dos, tres o cuatro años de vivir allí no habían conocido el territorio, era por el miedo. El miedo a que les suceda algo, el miedo a estar en un espacio “salvaje”. Estudiantes de todo el país llegan a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) con la imagen del miedo, que configura sus relaciones con y sobre el territorio.

En conversaciones comentaron que realizaron un viaje al territorio yaminawa para adquirir las vestimentas tradicionales y poder armar ferias educativas. Este diseño de visita y encuentro denota cómo el otro considerado como indígena existe en tanto otorgue una experiencia exótica, y cómo los espacios de enseñanza son un lugar de folklorización, apto para espectáculo estatal (Postero, 2017). El folklore en este caso *vive como estrategia de olvido*.

Para revitalizar la lengua yaminawa, lo primero que se ha buscado introducir al currículo indígena es el himno nacional. Parece no existir otra forma de entender el idioma yaminawa si no es engullido por la canción que dice que los bolivianos son hijos de Bolívar ¿cómo se traducirá “el hado propicio”? Términos como el aliento a los árboles antes de cortarlo, el dueño del monte o los nombres de los ríos que fueron cambiados por la colonización, parecen no ser aprendidos en la estrategia de la educación nacional, porque existen himnos a la guerra y la industria, donde no hay cabida para otras gramáticas de vida.

Si el empadronamiento era la homogeneización del trabajo para la riqueza de pocos, el cansancio del cuerpo, y la creación de un sistema racial que obligó a borrar saberes, hoy el norte amazónico continúa viviendo estrategias que aplastan la singularidad.

### **Lo dicho**

En distintas entrevistas a investigadores y técnicos, la preocupación sobre Pando ha sido estructurada en torno a pensar que esta geografía no se siente ni se vive como amazónica. Distintos argumentos y comentarios manifiestan que allí no existe identidad, aludiendo a una suerte de disgusto con la migración de personas del occidente del país. Por ejemplo, Cobija es una ciudad de migrantes de las zonas andinas bolivianas: el censo de 2012 registró que es la urbe con más crecimiento poblacional (La Razón, 2012). Sin embargo, Pando no ha sido un lugar de migración sólo en las últimas décadas, sino es una ciudad que emerge desde la colonización militar e industrial, cuya forma de arraigo, como ya se ha dicho, se edifica sobre la conquista y extracción de recursos. Afirmar que allí no hay identidad omite que las formas de crear valor están sujetas a la ficción que crea un vencedor, el legado de hombres militares e industriales.

La guerra del Acre, bajo la cual se funda Cobija, y posteriormente Pando, es un síntoma, de los más violentos, de las formas en que se ejerce la acumulación por despojo. Las guerras, como afirma Weil (2014), producen maneras desarraigadas de entender la vida. De lo anterior, es posible afirmar que el apogeo de la “identidad amazónica”, no sólo se impone la identidad nacional

(Bautista *et al.*, 2016), sino que se construye a través de *ser* porque existen *recursos*.

El gobierno municipal de Cobija ha creado la marca ciudad: “Cobija corazón amazónico” para generar propuestas de identidad cultural y suplir esa supuesta ausencia. “Cobija corazón amazónico” no ha dejado de reclamar a la siringa como pilar de su memoria valorada. En un video afirman: “la siringa y la castaña forjaron los cimientos de lo que hoy es Cobija. Una tierra valiente, pujante, y trabajadora (...) el cobijeño tiene un corazón que contiene una historia de lucha”. En el memorial público del paseo de Junín, está escrito que, en 1906, “tres años después de la guerra con Brasil, el Gobierno de Bolivia dispuso que 85 hombres y una mujer enfermera conformaran la primera población oficial a orillas del río Acre (...) los pioneros quienes cumplieron la misión patriótica de construir Puerto Bahía, hoy la ciudad de Cobija”. En el mismo mural, como un mosaico de imágenes predecibles de la Amazonía, hay alguna que otra imagen de animales para hablar de biodiversidad como recurso.

Lo desarraigado no alude al modo en que se denominan personas, al contrario de la identidad, lo desarraigado actúa frente a cómo conocemos, valoramos y practicamos la vida relacional entre seres humanos, sus prácticas, la convivencia y supervivencia en un determinado territorio. Dialogar con actores educativos abre un micro-universo para atisbar la problemática de las políticas identitarias que habitan espacios colonos, políticas que omiten relaciones y prácticas. Entrevistando a un director de una de las tres ESFM presentes en Pando, este mencionaba que el mayor problema que veía en su institución es que “a los indígenas les dan todo gratis. Todo es fácil para ellos. En cambio, nosotros, los originarios, entramos por mérito”.

Este ímpetu civilizatorio, que aquí opera desde la visión de esfuerzo, no es nuevo en el contexto amazónico. Grisaffi (2010) narra y analiza lógicas de racialización en el contexto del Chapare, espacio amazónico, donde comunidades migrantes andinas viven en territorio yuracaré. Allí, el otro no sólo es diferente, sino que es inferior. Indígena, tanto en el contexto del Chapare, como en el norte amazónico, significa *ser atrasado, analfabeto y sucio*. Indígena significa no ser civilizado. Civilizado significa no ser indígena.

Esta afirmación circula una y otra vez en Pando cuando se habla sobre presencia indígena en el territorio: “ya no hay, están civilizados”, “y los que todavía hay, los aislados, no se acercan por miedo”, comentaba un técnico de ONG. Un profesor de Riberalta afirmaba que “ya casi todos están *amansados, no existen*”. El indígena es indígena si no vive en entornos y aparatos institucionales “civilizados”, o al indígena se lo acepta para hacer un baile folklórico cuando llega alguna autoridad.

Un miembro de la Casa de la Cultura de Cobija comentó que estaba en desacuerdo sobre la creación de un centro de educación ambiental en las instalaciones porque, “si eso entraba en la casa, se perderá la cultura”. Por

eso, se refería al conocimiento y a las prácticas en torno a memorias de la selva, relaciones ecológicas y la cultura material de pueblos indígenas. “En cambio, yo he pensado usar esta casa para promover *nuestras* historias. Por ejemplo, saber la historia de *nuestro* desarrollo”, continuó. En ese mismo escenario, semanas más tarde se realizó un desfile de modas de niñas y jóvenes exponiendo trajes similares a las vestimentas importadas que antes usaban “las damas antiguas” de la ciudad.

Esto nos lleva a la voz de uno de los fundadores de la Central de Pueblos Indígenas de Pando (Cipoap). Con un libro de cuentos, escrito en portugués y en yaminawa, hasta ahora no traducido al español, alza el tono de su palabra y dice: “qué cultura tiene Pando, a ver dime, a ver dime, no tiene *nada*”. La imposición del recurso, que es la transformación de la vida en mercancía y la industria como memoria, produce el conocimiento y valoración de la selva. Esto es lo más parecido a la “nada” que menciona el líder yaminawa.

¿Qué implicaciones tiene esto para los proyectos que buscan proteger y cuidar los bosques? En principio, reconocer que la memoria que vive en estos espacios es militar, industrial y patriarcal. Segundo, que la identidad no es el eje más relevante para cuidar territorios, sino las redes que habitan y habilitan prácticas y conocimientos, sobre todo pensando que el norte amazónico tiene altos índices de migración. Los saberes y memorias que han habitado el bosque no crean identidad, crean modos de relación. Este ejercicio investigativo plantea abrir el pensamiento a cómo los ejercicios de cuidado investigativo requieren nutrirse de prácticas colaborativas alrededor de memorias y conocimientos, desandando los aparatos lingüísticos y estéticos con los que hasta ahora se piensa el norte amazónico boliviano, especialmente Pando.

Atender al abismo de las ausencias de memoria permitiría acercarse a conocimientos, experiencias y relatos de personas, más allá de la narrativa industrial y de exportación. A través de la investigación colaborativa y posibles formas de recuperación de memorias amazónicas se desafiarían imaginarios violentos que han sido expuestos a lo largo de este texto; el imaginario de lo salvaje, del territorio vacío, del espacio de miedo, y de la memoria militar e industrial. Es decir, se movilizarían otros andamiajes de la memoria.

## **Especlar nombres y reparar espacios**

Acabamos donde empezamos, como un círculo, uno tallado en las piedras de ríos que se secan. Un líder dice que está en *desacuerdo* con el nombre donde vive, Naranjal. Allí no hay naranjas y fue sugerencia de alguien que quería estafar a su comunidad. Comenta que, quizás, deberían tener un nombre tacana, no sólo porque les ayudaría a preguntarse quiénes son, sino que, además, eso les daría más proyectos e ingresos por ser un nombre indígena. Este texto ha tratado de vislumbrar que la pregunta por la memoria adquiere más relevancia al preguntarse por saberes, conocimientos y relaciones,

aunque muchas veces la identidad es una estrategia en medio de asimetrías de poder, *para tener más proyectos*.

Pando fue José Manuel, José Manuel Pando, un militar y presidente boliviano, paceño. Pando tiene provincias cuyos nombres pertenecen a hombres de la goma: Suárez, Vaca Díez o militares como Román. Sus ríos ahora llevan nombres de extranjeros que hacían expediciones: Heath y Orthon. Ahora existe el pueblo Puerto Evo Morales. Pando es constantemente masculinizado, sus nombres, su memoria, sus anhelos, un espacio proyectado como recurso e industria. El patriotismo militar e industrial se aferra como monopolio de la memoria, pero también de la estetización de la “naturaleza” como recurso mercantil y separado. Además de hacer investigación sobre violencias y despojos, hacer memorias de conocimiento y prácticas es, en últimas, hacer historias de vitalidad, de alimentos, palabras, ecologías, curaciones, alianzas, migraciones, movimientos, unas que no alimenten el desarraigo militar e industrial.

## Referencias

- Adams, W. M. (2002). Nature and the Colonial Mind. En *Decolonizing Nature*. Routledge.
- Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.
- Arias, Julio & Caicedo, Alhena. (2017). Antropologías del Despojo en Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*, 1.
- Arruda, R. (2009). Fronteiras e identidades: os povos indígenas na tríplice fronteira Brasil-Bolívia-Peru. *Projeto História Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História*, 39, 159-178.
- Bäckstrand, K., & Lövbrand, E. (2016). The Road to Paris: Contending Climate Governance Discourses in the Post-Copenhagen Era. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 5(21), 1-19. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2016.1150777>
- Bautista, R., Bazoberry, O., & Chumacero, J. P. (2016). *Amazonía transfronteriza: Dinámicas poblacionales, identidades y disputa por los recursos naturales*. IPDRS: Foro Amazónico de Desarrollo Rural.
- Cárdenas, J. (2023). La letra enferma. *El Colombiano*. <https://www.elcolombiano.com/generacion/edicion-del-mes/la-letra-enferma-HD23571240>
- Castree, Noel. (2013). *Making sense of nature*. Abingdon: Routledge.
- Cejis. (s.f.). Territorios y Autonomías Indígenas. Disponible en: <https://cejis.org/cpta/territorios-y-autonomias-indigenas/>
- Chávez, C. (2021). *Impacto ambiental del sector minero aurífero en la tierra comunitaria de origen (TCO II), localizada entre los departamentos de Beni y Pando, y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (2006-2019)*. Tesis Licenciatura en Ciencia Política y Gestión Pública, Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia
- Cinemateca Uruguay. (2013). *Charla Lucrecia Martel y Leila Guerrero [Entrevista]*. <https://www.youtube.com/watch?v=cOrtGYInbDo>

- Córdoba, L. I. (2015). Barbarie en plural: Percepciones del indígena en el auge cauchero boliviano. *Journal de la Société des américanistes*, 101(1-2), Article 1-2. <https://doi.org/10.4000/jsa.14384>
- Dávalos, C. (2013). *Pueblos indígenas yaminahua y machineri: Proceso de reconfiguración política en Pando*. Pando: PIEB y UAP.
- Defensoría del Pueblo - Estado Plurinacional de Bolivia. (2019). *Defensoría del pueblo elabora y socializa proyecto de ley para proteger a pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad*. <https://www.defensoria.gob.bo/noticias/defensoria-del-pueblo-elabora-y-socializa-proyecto-de-ley-para-proteger-a-pueblos-indigenas-en-situacion-de-alta-vulnerabilidad>
- Diez, A. (2011) *Compendio de etnias indígenas y ecorregiones: Amazonía, Oriente y Chaco*. Primera Edición. La Paz: Centro de Servicios Agropecuarios y Socio-Comunitarios.
- Enriquez, R., Pacovich, R., Zabala, Y., & Nogales, G. (2013). *Desarrollo agroindustrial y nutrición en la Amazonía: Moringa, asai, majo y copoazú*. UAP y PIEB. [http://archive.org/details/pieb\\_desarrollo\\_agroindustrial\\_y\\_nutricion\\_en\\_la\\_amazonia\\_moringa\\_asai\\_majo\\_y\\_copoazu](http://archive.org/details/pieb_desarrollo_agroindustrial_y_nutricion_en_la_amazonia_moringa_asai_majo_y_copoazu)
- Escobar, A. (1998). Whose Knowledge, Whose nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movements. *Journal of political ecology*, 5(1), 53-82. <https://doi.org/10.2458/v5i1.21397>
- Ferdinand, M. (2021). *Decolonial Ecology: Thinking from the Caribbean World*. Polity Press.
- Freear, J. (1986). An accountant in the bolivian jungle. *Accounting Historians Journal*, 13(2), 145-150. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.13.2.145>
- Gamarra, P. (2018). *Amazonía norte de Bolivia. Economía gomera (1870-1940)*. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia.
- Gamarra, P. (1990) Orígenes históricos de la goma elástica en Bolivia: la colonización de la Amazonía y el primer auge gomero 1870 – 1910. En *Historia Revista de la Carrera de historia* No. 20. 41 – 79.
- García, W. (2012). El Estado Plurinacional consumió el exterminio banzerista de la nación Pacahuara. *Sol de Pando*. <https://www.soldepando.com/exterminio-pacahuara/>
- Grisaffi, T. (2010). 'We Are Originarios... We Just Aren't from Here': Coca leaf and Identity Politics in the Chapare, Bolivia. *Bulletin of Latin American Research*, 29(4), 425-439. <https://doi.org/10.1111/j.1470-9856.2010.00385.x>
- Jasanoff, S & Kim, S. (2015). *Dreamscapes of modernity: Sociotechnical imaginaries and the fabrication of power*. The University of Chicago Press.
- La Razón. (2012). *Cobija es la capital de más crecimiento en habitantes*. <https://www.la-razon.com/sociedad/2012/11/30/cobija-es-la-capital-de-mas-crecimiento-en-habitantes/>
- Law, J. (2004). *After method: Mess in social science research*. Routledge.
- Lazo de la Vega, M. C., Navia, F., Veneros, C., & Yugar, D. (2013). *Maderas de la Amazonia boliviana: Capacidades resistentes y propiedades elásticas de cinco especies*

*maderables (coord.); Navia Miranda, Franz; Veneros Ordoñez, Christian Alex y Yugar Ortiz, Delsy Adriana.* PIEB y UAP.

- Lehman, K. (2018). Etnografía en un fondo histórico. La mano de obra y las inquietudes de la Casa Suárez ante la crisis gomera, 1920-1940. *Revista Complutense de Historia de América*, 44, 47-66. <https://doi.org/10.5209/RCHA.61079>
- López, C. (2001). La exploración y ocupación del Acre (1850 – 1900). *Revista de Indias*, Vol. LXI, No. 223. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 573 – 590.
- Luna, C. (1978) Ensayo Monográfico del Departamento de Pando. Primera Edición Los Amigos del Libro, La Paz, Bolivia.
- McQuillan, M. (2000). *Deconstruction: A Reader*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Ministerio de desarrollo rural y tierras, Viceministerio de tierra (s.f.). Ficha Técnica: Territorio Comunitario de Origen - Yaminahua – Machineri, disponible en: <http://www.vicetierras.gob.bo/atlas/Atlas/Fichas/Tierras%20Bajas/PANDO/200.pdf>
- Ministerio de desarrollo rural y tierras, Viceministerio de tierra (s.f.). Ficha Técnica: Territorio Comunitario de Origen - TIM II, disponible en: <http://www.vicetierras.gob.bo/atlas/Atlas/Fichas/Tierras%20Bajas/PANDO/205.pdf>
- Mendoza, J. (1998). *Páginas bárbaras*. Sucre: Gráfica 2000.
- Morales, A., Larrea, D. M., Lafuente, I., Ariñez, A., Pareja, A., Roque-Marca, N., & Aguirre, G. (2021). *Pando amazónico y resiliente: bosque, fuego y clima*. Programa Euroclima+, Componente Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas (BBE). Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino - Amazónicos (Aceaa), Universidad Amazónica de Pando (UAP), Programa Euroclima+, Expertise France (EF), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
- Neto, J. de R. M. R., & Pinto, A. dos S. (2020). Memória, discurso e identidades culturais no distrito Cachuela Esperanza, na fronteira Brasil - Bolívia. *ContraCorrente: Revista do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas*, 14, 91-108.
- Organización del Tratado de Cooperación Amazónica - OTCA (1991). Pueblos Indígenas de la Amazonía boliviana, disponible en: <https://otca.org/wp-content/uploads/2021/02/Pueblos-Indigenas-de-la-Amazonia-Boliviana.pdf>
- Pando, J. (1890). Viaje a la región de la goma elástica (N.O. de Bolivia).
- Peralta, C., & Albornoz, M. (2023). Gestión integral de bosques y tierra para la conservación de bienes comunes, generación de servicios ecosistémicos y economía familiar en la Amazonía norte de Bolivia. *Mundos Rurales*, 1(16(1):), 49-63.
- Pérez, C. J., & Smith, C. A. (2019). Indigenous Knowledge Systems and Conservation of Settled Territories in the Bolivian Amazon. *Sustainability*, 11(21), Article 21. <https://doi.org/10.3390/su11216099>
- Piñeiro, J. P. (2020). *Manubiduyepe*. Editorial 3600.
- Plumwood, V. (1993). *Feminism and the Mastery of Nature*. Routledge.
- Ponz, E. (2005). *La medicina tradicional de los tacana y machineri: Conocimientos prácticos de las plantas medicinales*. Fundación PIEB.

- Postero, N. (2017). *The Indigenous State*. University of California Press. <https://www.ucpress.edu/book/9780520294035/the-indigenous-state>
- Rivera, E. (2003). *La vorágine*. Grupo Editorial Tomo. [https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-voragine-989351/html/1e5af2ca-b590-4b72-9093-cf5c1cfb6ac8\\_2.html](https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-voragine-989351/html/1e5af2ca-b590-4b72-9093-cf5c1cfb6ac8_2.html)
- Schnegg, M. (2021). Ontologies of climate change. *American ethnologist*, 3(48), 260-273.
- Sol de Pando. (2022). ¿Existen indígenas pacahuaras en Pando? <https://www.soldepando.com/no-hay-pacahuaras-en-pando/>
- Spivak, G. (2000). Practical politics of the open. En *Deconstruction: A reader*. Edinburgh University Press.
- Todd, Z. (2015). *Indigenizing the Anthropocene*.
- Tiburcio, C. (2014). Columna Porvenir, Edición Especial Universidad Amazónica de Pando, Bolivia.
- Weil, S. (2014). *Echar raíces*. Editorial Trotta.
- Whyte, K. (2017). Indigenous Climate Change Studies: Indigenizing Futures, Decolonizing the Anthropocene. *English Language Notes*, 55(1-2), 153-162. <https://doi.org/10.1215/00138282-55.1-2.153>

# La recomposición social del norte amazónico de Bolivia en tiempos de expansión capitalista

---

*Suzanne Kruyt y Huáscar Salazar Lohman*

## **Resumen**

Este artículo explora la recomposición socioeconómica en el norte amazónico boliviano en un contexto de agresiva expansión capitalista. A través de una investigación exploratoria que combina revisión documental, trabajo de campo y entrevistas, se analizan los impactos de diversas actividades extractivas. Desde ahí, se examinan las reconfiguraciones en las relaciones sociales, organizativas y políticas, destacando el papel de las élites regionales, el Estado y las organizaciones indígenas y campesinas. Se evidencian tensiones entre la autonomía y la imposición política, así como desafíos en las visiones de desarrollo y la cohesión social. El artículo resalta la necesidad de superar miradas esencialistas y reconocer la complejidad de las identidades y las interacciones entre intereses diversos en torno a la extracción de recursos naturales. De la misma manera, se plantea la importancia de agendas de investigación que generen nuevas perspectivas sobre las construcciones identitarias y las potencialidades de resistencia en la región. Se concluye subrayando la urgencia de comprender los impactos multidimensionales de las dinámicas económicas y de fortalecer la capacidad de los actores locales para defender el bien común frente a los desafíos de la Amazonía boliviana.

## **Palabras clave**

Amazonía boliviana, extractivismo, identidades, organizaciones indígenas y campesinas, élites regionales.

## Introducción

El 14 de julio de 2023, un operativo policial en el río Madre de Dios, en el municipio de Riberalta, Beni, resultó en la quema de 27 dragas, la aprehensión de 57 personas y el secuestro de armas y materiales tóxicos. Sectores locales denunciaron el uso excesivo de fuerza contra mineros bolivianos con permisos legales, mientras actores extranjeros ilegales operan con impunidad. La Asociación de Balseros mineros (AsoBal), con apoyo de transportistas y cívicos, se movilizó exigiendo el retorno de los detenidos. Finalmente, 19 trabajadores fueron puestos en detención preventiva en Pando, incluyendo un joven tacana que, sin recursos ni apoyo, no pudo defender sus derechos. Este caso ilustra el complejo escenario de intereses y actores en torno a actividades destructivas pero lucrativas como la minería aurífera en los ríos amazónicos. Plantea interrogantes sobre identidades, organización, migración y relaciones de poder, que trascienden los enfoques de investigación limitados a lo ambiental, derechos humanos, economía o coyuntura política.

El avance del extractivismo en la Amazonía boliviana se vincula al mercado global de bienes y servicios legales e ilegales. Simultáneamente, las relaciones sociales y políticas se reconfiguran en función de estos procesos económicos, pero también como parte de resistencias y luchas frente a la expansión capitalista.

Este artículo explora la recomposición socioeconómica en el norte amazónico, indagando: ¿Qué implica la expansión capitalista para la región en términos de reconfiguración social? ¿Cuáles son sus principales efectos en la vida cotidiana de sectores populares urbanos, campesinos e indígenas? ¿Qué vínculos, dependencias y luchas surgen entre la sociedad y el avance capitalista?

Para abordar estas cuestiones, primero analizaremos la expansión capitalista reciente en la Amazonía y sus impactos en múltiples ámbitos. Luego, examinaremos la transformación de los procesos organizativos regionales y el rol de nuevos actores clave. Finalmente, interpretaremos los cambios en las relaciones, identidades, alianzas y conflictos generados por el despliegue capitalista en el norte amazónico.

Esta investigación exploratoria combina revisión documental, trabajo de campo en Riberalta, Pando y Beni durante 2020 - 2022<sup>1</sup>, entrevistas a organizaciones locales, una mesa temática en el congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos (AEB) y un encuentro internacional sobre Amazonía propiciado por el Centro de Estudios Populares (CEESP) en 2023. El objetivo

---

<sup>1</sup> Este artículo recoge avances de la investigación realizada por Huáscar Salazar: *Geopolítica de lo común en el Norte Amazónico boliviano. Luchas indígenas y campesinas por la vida y contra el capital*, realizada con el financiamiento de Clacso/Cedla el año 2020 y que todavía no fue publicada. También reúne un conjunto de notas, registros y diálogos que fueron recabados el año 2022 en una visita exploratoria al norte amazónico realizada por Huáscar Salazar y Suzanne Kruyt con apoyo del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA).

no es presentar nuevos datos empíricos, sino proponer una perspectiva interpretativa y preguntas relevantes para futuras agendas de investigación sobre la realidad amazónica en Bolivia.

## Claves interpretativas<sup>2</sup>

En este artículo partimos de algunas preocupaciones conceptuales y políticas que orientan nuestro enfoque. La forma de comprender lo que sucede en la Amazonía en el presente es el resultado de una serie de procesos coloniales y de expansión capitalista, que se han constituido sobre la base de "mitos fundacionales" que condicionan el pensamiento sobre este territorio.

Estos mitos se manifiestan en una serie de continuidades, exageraciones e invisibilizaciones de la historia amazónica que tienen un gran impacto en la investigación actual sobre la región. Algunos de estos mitos muy presentes son la hipernaturalización de la Amazonía, que la representa como un depósito de recursos o naturaleza virgen, y la idea de un espacio "vacío" o con falta de trabajo, lo que justifica la privatización y el desmonte. Estos mitos contribuyen a la noción de un espacio en constante necesidad de civilización, que hoy se traduce en los sueños de modernización y progreso que ocultan los intereses reales sobre la región.

Históricamente, el norte amazónico ha sido considerado una de las regiones más alejadas de Bolivia, no solo por la dificultad de acceso, sino también por su *lejanía política*. Esta región ha sido relegada a un segundo plano por la gestión administrativa del Estado boliviano, que, como señaló Zavaleta (1986), es un Estado aparente que organiza su presencia y ausencia en el territorio a partir de las actividades económicas extractivas primarias, como la minería y los hidrocarburos. Salvo durante el auge de la goma a inicios del siglo XX, el norte amazónico no fue de interés central para la política estatal, y su administración fue delegada a élites regionales que operaron bajo distintos esquemas patronales, semif feudales o gamonales. Esto ha recreado una noción de lejanía política y jurídica de la región, asociada a un estadio de "atraso" y de lo "incivilizado".

Estos estereotipos de lejanía siguen muy presentes en los imaginarios que dan sentido a esta región boliviana en pleno siglo XXI, como si fuera un espacio aislado, con sujetos inalterados por el paso del tiempo, con actividades económicas tradicionales y con relaciones de dominación "atrasadas". Sin embargo, considerar lo que sucede en el norte amazónico de esta manera no es más que un mito que termina reforzando e invisibilizando un conjunto de dinámicas de poder acordes a las formas actuales de expansión del capital.

Desde la colonia, y especialmente durante el siglo XX, la región amazónica se consolidó como un territorio de extracción de recursos considerados ilimitados. Si bien esta dinámica expansiva del capital suele ser la más

---

<sup>2</sup> Agradecemos a José Octavio Orsag por las discusiones colectivas al interior del CEESP, muchas de las ideas acá presentadas provienen de sus propias reflexiones y de su trabajo de investigación.

estudiada, es importante plantear preguntas de fondo que ayuden a comprender el extractivismo en su vinculación con el capitalismo global y, a su vez, en las dinámicas más cotidianas. En estas disputas por el control sobre los recursos, el elemento identitario ha jugado roles significativos, primero desde la invisibilización y deshumanización de los sujetos indígenas para encubrir y justificar su exterminio, y luego desde la romantización e idealización del imaginario del "buen salvaje", para justificar estrategias de reconocimiento de los pueblos indígenas como los legítimos dueños y "guardianes" de los bosques amazónicos.

La creciente conflictividad en torno a los recursos naturales amazónicos requiere una mirada investigativa que parta del reconocimiento de las raíces subyacentes en los ámbitos económicos, políticos y culturales. Se precisa analizar las relaciones de poder que realmente determinan el acceso y el uso de la tierra y los recursos naturales, y a la vez generar comprensiones más profundas sobre la autodeterminación indígena y campesina. Estas reivindicaciones también están marcadas por asimetrías de poder, construcciones identitarias complejas y las visiones de desarrollo contradictorias. En este artículo buscamos tocar algunas de estas realidades complejas con el afán de impulsar enfoques renovados en su análisis.

**Mapa 1. Norte amazónico de Bolivia**



Fuente: PNUD, 2003.

## Expansión continua del capitalismo en la Amazonía

Desde el periodo colonial hasta principios del siglo XX, la relevancia política de las regiones amazónicas estuvo marcada por procesos extractivistas controlados por capitales privados, como la Casa Suárez, que sostenían el poder económico y político de las élites regionales. Estos capitales limitaron la administración territorial centralista, controlando la producción, el transporte y el régimen laboral en sus "barracas", mientras el Estado apenas realizaba su rol aduanero y fiscal (Gamarra, 2018; Herrera, 2015: 42). Esta élite regional se vinculó a la economía mundial a través de los ríos amazónicos sin interesarse por constituirse en un poder nacional (Herrera 2015: 43).

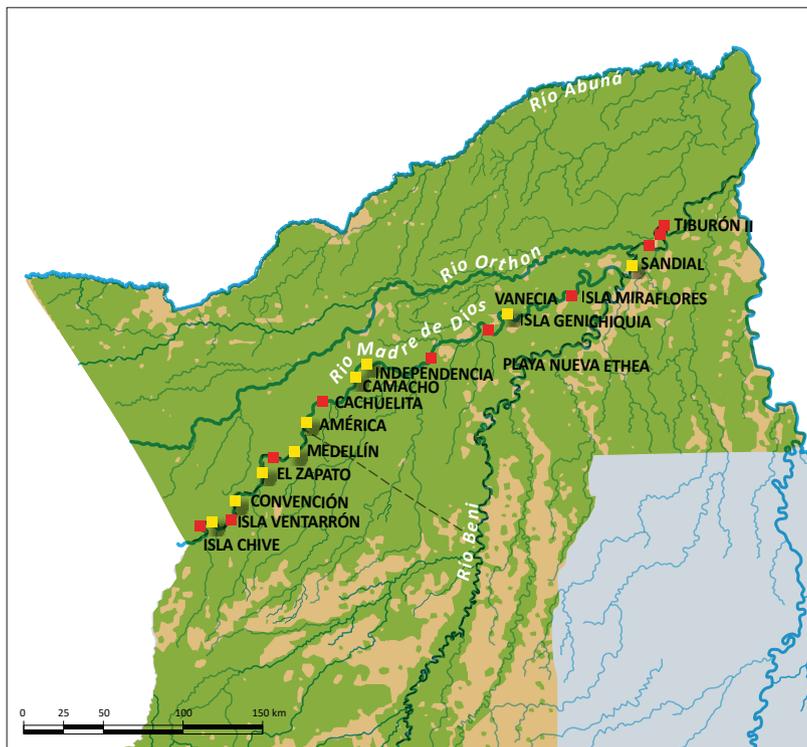
En las últimas décadas del siglo XX, se dio un nuevo proceso de expansión capitalista en torno a la **actividad maderera y la expansión de la ganadería**, que, en el contexto del norte amazónico, conllevan deforestación y degradación de los bosques. Aunque entre 1986 y 2005 la tasa de deforestación en la región fue muy baja, cercana al 0,1% (Marsik, Stevens y Soutworth, 2011), esta situación cambió después de 2006. En este periodo, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) estableció una alianza con el sector maderero, que tomó forma al "firmar un pacto para los próximos cinco años" entre el gobierno y el sector privado "para acabar con la deforestación". Esta propuesta implicaría una inversión conjunta público - privada de USD 200 millones hasta 2018 para cubrir cerca de 10 millones de hectáreas bajo manejo, superando la superficie de bosques bajo manejo que el "poder empresarial - hacendal" logró controlar entre 1996 y 2005, y que abarcó un promedio de 5,5 millones de hectáreas (Ormachea y Ramírez, 2013).

Actualmente, el norte amazónico sigue siendo –en términos relativos– una de las regiones menos afectadas por la deforestación. Sin embargo, Bolivia se ha convertido en el país con la mayor tasa de deforestación per cápita del mundo –y tercero en términos absolutos, luego de Brasil y el Congo–. Solo en 2022 se deforestaron más 385 mil hectáreas de bosque húmedo primario y 595 mil hectáreas de cobertura arbórea (Paredes, 2023).

La **expansión minera** es otra actividad extractiva que ha adquirido gran relevancia en la región, profundizándose la última década y media. Esta minería es aurífera y fluvial y muchas de sus operaciones se consideran ilícitas, a pesar de las concesiones otorgadas por el gobierno en los últimos años.

[Los mineros] si bien ya tenían concesiones [...] en algunos casos desde 2004-2006, recién desde el 2008 y en alianza con el sector cooperativo "regularizarán" su situación, ya que este sector cooperativo mantiene con el régimen del MAS de Evo Morales un estrecho vínculo y una clara influencia en las políticas públicas nacionales [...]. La afiliación de los grupos mineros amazónicos al gremio cooperativista les permitirá favorecerse de múltiples ventajas (Campanini y Gandarillas, 2015).

Mapa 2. Concesiones mineras legales en el río Madre de Dios



Fuente: Campanini y Gandarillas, 2015. Con base en Sergeotecmin.

Nota: En rojo las concesiones que están en funcionamiento y en amarillo las que no.

Esta intensa actividad aurífera genera significativos efectos socioambientales, destacando la contaminación por mercurio en los ríos Madre de Dios, Orthon y Beni. Según la investigadora Laurence Maurice-Bourgoin, los pobladores ribereños del río Beni presentan niveles de mercurio en la sangre muy por encima de los permisibles (de 1,1 ppm a 13,5 ppm, siendo el límite recomendado por la OMS de 1 ppm) (Cedib, 2020). El deterioro ambiental y social es considerable: deforestación, contaminación de ríos por mercurio, hidrocarburos y desechos, degradación de suelos ribereños, alteraciones en el curso de los ríos, destrucción paisajística, pérdida de vida silvestre, envenenamiento de peces y explotación laboral (Cedib, 2020).

La región también está amenazada por la necesidad del Estado boliviano de incrementar la **renta hidrocarburífera**, de la cual el sector público ha dependido en las últimas décadas. El gobierno del MAS impulsó la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas del norte amazónico, modificando la normativa que las resguardaba y entrando en conflicto con territorios indígenas, comunidades campesinas y barracas

castañeras. La Reserva Nacional Manuripi está parcialmente afectada por un bloque hidrocarburífero y rodeada por diferentes bloques de exploración, y el territorio Araona, aunque relativamente pequeño, se sobrepone a tres bloques diferentes (Salgado, 2013).

Otro proceso que ha tomado una importancia cada vez más significativa en la región es la **ampliación de la frontera agrícola**. Se ha incrementado la extensión de cultivos relacionados con el agronegocio mecanizado, actividad considerada neoextractivista (McKay, 2017), lo que implica la deforestación de cientos de miles de hectáreas (Salgado, 2013). Diversos estudios han señalado que la tierra de la región no es apta para la agricultura intensiva, por lo que conllevará un deterioro irreversible del territorio.

Aunque el cultivo de soya en la región es aún incipiente, otros cultivos están siendo probados con mayor interés, como el arroz. Sin embargo, investigaciones han demostrado que los impactos socioambientales de esta actividad son considerables, además que el arroz producido en la región es poco competitivo en comparación con otras regiones del país (Peralta, Cartagena y Flores, 2017). La expansión de estas actividades podría poner en riesgo las actividades de recolección tradicionales que dependen del bosque, como la castaña, sobre las cuales el campesinado de la región ha construido su principal base de subsistencia y su agenda de lucha.

En los últimos años, la aprobación del nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS) en el Beni ha generado preocupación entre sectores indígenas y campesinos. Este plan habilita la posibilidad de desmonte de más de 9 millones de hectáreas para fines agropecuarios, principalmente relacionados con el agronegocio. Algunos analistas señalan que el PLUS extiende el modelo depredador de la agroindustria cruceña hacia el Beni, en tierras poco fértiles para la producción agrícola por su elevada acidez. La falta de información técnica y científica completa en el documento público del PLUS sugiere que las medidas responden a intereses económicos y no a un proyecto estudiado, sostenible y dialogado. Se ha reconocido que los incendios de 2022 y 2023 han tenido como una de sus principales causas este PLUS.

De la misma manera, es preocupante como en los últimos años se está intentando impulsar este mismo modelo en el departamento de Pando, a través de la modificación del PLUS departamental. Este territorio administrativo, que pertenece en su totalidad a la *hylea* amazónica, podría verse mucho más afectado por una transformación en el uso de suelo de este tipo.

Con todo, la ampliación de estas actividades extractivas está significando profundas consecuencias socioambientales para el norte amazónico boliviano, lo que está transformando sustancialmente la manera en que sectores campesinos e indígenas se relacionan con su territorio, como lo expresa un campesino de la región:

Con relación al petróleo, también fue una tremenda decepción del pueblo indígena y campesino, cuando vimos que, por cada pozo de exploración petrolera, dinamitar 17 o 18 kilos de dinamita bajo el suelo y hacer tambalear

los árboles de almendro, en una explosión de tamaña envergadura. Eso también generó un foco de alerta y gran decepción por parte de indígenas y campesinos en la región sobre el gobierno del presidente de Evo Morales.

Con relación al oro, esa es otra, con el gobierno del MAS se hablaba mucho de la descolonización, del capitalismo y todas esas cosas, cuando desde Cachuela Esperanza hasta más abajo de Riberalta, el gobierno del MAS concesionó a las empresas chinas todo el río, y desde Riberalta para arriba, hasta cierto lugar del Madre de Dios, el gobierno del MAS concesionó a los empresarios coreanos, mientras que para un lugareño era muy difícil conseguir tierra a lado del río. Entonces, el gobierno del MAS se volvió más neoliberal que los neoliberales, eso también fue una tremenda decepción para la sociedad en la Amazonía.

El tema de la madera también es un dolor de cabeza, las concesiones forestales son un dolor de cabeza desde siempre. Se ha intentado cambiar la norma durante el gobierno del MAS y nunca se logró nada. Es bastante importante hablar de este tema porque las empresas están trabajando como siempre y la madera sale de a poco, de a poco, pero salen grandes cantidades.

Además, el gobierno promovió un proyecto en todos los municipios, en el departamento de Pando especialmente, un proyecto de cultivo con maquinaria, eso también está causando demasiado desequilibrio acá, porque sabemos que la región tiene una vocación forestal y no es para hacer agricultura intensiva. Mientras la propuesta del MAS era meter maquinaria y convertir al norte amazónico en otra Santa Cruz, todo esto está provocando un desequilibrio forestal en la región (Carlos Chipunavi, 2020, en comunicación telefónica en Las Piedras, Pando).

## La preocupación por las megaobras

Para muchas personas estos procesos de expansión capitalista, si bien son preocupantes, no pueden entenderse por sí solos. Están altamente relacionados con el complejo de megaobras que los distintos gobiernos —ya sean de izquierda o derecha— han proyectado implementar en la Amazonía boliviana, como parte de la denominada iniciativa IIRSA - Cosisplan<sup>3</sup>. Así lo señala una de las asesoras del sector indígena en la región del norte amazónico:

Pero los peligros más grandes no están en el extractivismo por así decirlo, sino en estas políticas de lo que se denominaba el IIRSA, con el que se pretendía articular la Amazonía con otros países. Hablo de las carreteras, por ejemplo.

---

<sup>3</sup> El IIRSA es la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana, un ambicioso plan promovido por grandes organismos internacionales como el BID y la CAF que establece la necesidad de impulsar una geografía y una economía integrada de la región, planificando la organización del espacio sudamericano en franjas multinacionales concentradoras de los flujos de comercio actuales y potenciales que convergen hacia un estándar mínimo común de calidad de servicios de infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones. Para profundizar al respecto de esta iniciativa y sus efectos en la Amazonía boliviana se puede consultar el texto: *El Norte Amazónico de Bolivia y el Complejo del río Madera* de Fobomade (2007). El cambio de nombre de IIRSA por Cosisplan fue una estrategia de los gobiernos progresistas de la región para relanzar la iniciativa luego de que esta perdiese legitimidad. Para conocer los detalles de la construcción de la represa Cachuela Esperanza se puede revisar la investigación de Lanza y Arias (2011): *Represa Cachuela Esperanza*.

No se ha contado con la consulta a los pueblos indígenas. Aquí, por ejemplo, en el Territorio Multiétnico II, que es un territorio que está en Pando y por donde pasa la construcción de una carretera, se han movido muchas comunidades por lo de los 50 metros que debe haber a cada lado de la carretera, lo que ha implicado derribar monte, derribar, incluso, árboles de almendra, que eran parte de la vida y sustento de las familias. Y la consulta fue bastante cómica. La consulta fue convocar a una asamblea, hacer firmar a los compañeros y darles recursos para construir una sede. No consultaron si eso era lo que querían o lo que necesitaban. No dijeron que sus firmas eran para el proceso de consulta. Bien irregulares los procesos de consulta (Mónica Lijerón, 2020, en comunicación telefónica en Riberalta, Beni).

Uno de los proyectos más criticados al respecto es el de la construcción de la represa hidroeléctrica Cachuela Esperanza, que hace parte del proyecto más ambicioso del IIRSA - Cosiplan, el Complejo Hidroeléctrico e Hidroviario del Madera. Según investigaciones de fuentes alternativas –porque nunca se conocieron los informes y estudios oficiales sobre este proyecto–, la represa afectaría un área de más de 221 mil hectáreas y por lo menos a 53 comunidades indígenas y campesinas en las que habitan más de 100 mil personas, además de propiciar la propagación de enfermedades y otros problemas ambientales de consideración (Lanza y Arias, 2011).

Con todo, y pese a las amenazas<sup>4</sup>, este proyecto se encuentra detenido, aunque no ha dejado de estar de los estudios y planes sobre el inventario hidroeléctrico binacional (Bolivia-Brasil). Sin embargo, la construcción de carreteras que hacen parte del IIRSA - Cosiplan ha tenido un importante avance en los últimos años.

En este sentido, es importante destacar como, cada vez con mayor frecuencia, existe un entramado de operaciones y flujos financieros, fiscales, logísticos y empresariales que sostienen y reproducen las economías extractivas en la Amazonía. Tal como señalan Terán-Mantovani y Scarpacci (2024), en el siglo XXI presenciamos el desarrollo de una logística cada vez menos transparente, que oculta transacciones y formas en que se realizan los procesos de extracción y acumulación. Esto genera puntos ciegos y crea condiciones propicias para que el extractivismo amazónico se convierta en una "caja oscura", que combina de manera permanente procesos legales e ilegales entrelazados de acumulación de capital, dificultando trazar una frontera clara entre lo legal y lo ilícito.

A su vez, este entrelazamiento entre economías legales e ilegales en la Amazonía no sería posible sin la participación, en diversas formas y niveles, de actores e instituciones de los Estados. En el contexto de las

---

<sup>4</sup> En varias de las entrevistas realizadas en la última década se pudo evidenciar que en distintos momentos el gobierno del MAS insistió en impulsar la construcción de la represa Cachuela Esperanza. Un comunitario lo narra de la siguiente manera: "El gobierno no quiere ceder, ya dijo el vicepresidente Linera y el presidente Morales, al inaugurar una obra en Trinidad el año pasado, dijo: 'sí o sí se va a hacer Cachuela Esperanza y quien se oponga lo vamos a meter a la cárcel porque se opone al desarrollo', así dijo. Y nosotros siempre nos vamos a oponer, no importa que nos mande a la cárcel" (Carlos Chipunavi, 2013, Las Piedras, Pando).

reconfiguraciones neoliberales de las últimas décadas, se han impulsado procesos de refeudalización de territorios amazónicos, expansión de la corrupción y una penetración más profunda del crimen organizado en las estructuras estatales de los países de la región. Esto ha dado lugar a la emergencia de nuevas estatalidades y gobernanzas híbridas en la Amazonía, que conforman un mismo entramado de poder y acumulación, fusionando operaciones extractivistas ilícitas/criminales con legales/formales.

En síntesis, en el siglo XXI el despliegue de las economías capitalistas en la región amazónica boliviana ha adquirido nuevas dimensiones y complejidades, con una notable expansión de las economías ilícitas/criminales que juegan un papel crucial en la composición del extractivismo contemporáneo. Esto se expresa no solo en las extracciones ilegales directas de recursos naturales, sino también en los cada vez más imbricados flujos ilícitos de *commodities*. Todos estos procesos están generando profundas reconfiguraciones territoriales, de poder y de acumulación de capital, planteando nuevos y complejos desafíos tanto para la investigación crítica como para las resistencias y alternativas al modelo extractivista - capitalista en la Amazonía.

## Recomposición social y organizativa

“Antes aquí no había política, solo había intereses económicos”.

Mónica Lijerón, 2022.

En esta sección analizamos con más detalle la relación entre la expansión capitalista en la región y las relaciones sociales, organizativas y políticas.

El periodo de colonización se caracterizó por un sometimiento cruel y violento de la población indígena que se oponía a la invasión de sus territorios. Mientras algunas comunidades resistían con ataques a las delegaciones exploratorias y asaltos a los puestos gomeros, enfrentando brutales masacres por parte de los colonizadores, miles de indígenas de la región y de otras zonas fueron incorporados, involuntaria o forzosamente, como sirringueros en las barracas, donde se les controlaba mediante sistemas de endeudamiento (Gamarra, 2018; Herrera, 2015).

Sin embargo, como señala la historiadora Lorena Córdoba (2012), las comunidades indígenas, a pesar de estar subordinadas, también generaron estrategias frente al régimen gomero, que oscilaban entre el combate violento y relaciones amistosas aunque desconfiadas. Estas estrategias permitieron sostener, aunque de manera parcial, relaciones comunitarias, ámbitos de autonomía política y una recreación identitaria, elementos importantes para comprender el resurgimiento posterior de las luchas indígenas y campesinas en la región.

Con la caída del primer ciclo gomero, surgieron asentamientos colectivos más autónomos, donde se labraron tramas comunitarias que, sin dejar

de estar articuladas al régimen dominante, generaron gobiernos locales propios, capacidad organizativa en torno a actividades de reproducción de la vida y horizontes de lucha por la tierra y contra el orden social imperante, dando lugar a organizaciones supracomunitarias. Estas experiencias de organización comunitaria, reconocidas como campesinas, se articularon con las indígenas, que buscaban recuperar su autonomía política y económica.

La reforma agraria del 1953, fue solo una cuestión de gabinete, cambió un poco la visión de los campesinos, pero hasta por ahí nomás. Era de regalarle un machete, de ponerle un decreto supremo, pero no era más (Carlos Chipunavi, 2013, Las Piedras, Pando).

A pesar que la Reforma Agraria de 1953 no tuvo mayor impacto en la región, para esa época la mayoría de los trabajadores de las barracas de goma ya habían comenzado a asentarse de forma agrupada en áreas que les permitían insertarse en otros rubros, como la castaña.

Esta tendencia sedentaria fue motivada además por un nuevo actor misional en la región: El Instituto Lingüístico de Verano (ILV). El ILV buscó evangelizar y aculturar a las poblaciones indígenas, ofreciéndoles ciertos niveles de protección y acceso a beneficios como educación, salud y seguridad territorial, ocupando un rol que el Estado boliviano estaba lejos de ejecutar en esas décadas.

En este periodo se constituyen las comunidades indígenas con cierta homogeneidad lingüística y étnica esse ejja, chacobo y araona, motivando un tránsito gradual hacia la incorporación a la sociedad dominante, pero a la vez con cierto aislamiento que permitía mantener el poder de la misión. Otro sector quedaba todavía en las barracas, viviendo del ya reducido mercado de la goma (Herrera, 2015: 36-38).

La crisis económica de los años 80 en Bolivia fue el último golpe para el sector gomero. Los siringueros empezaron a abandonar las barracas, constituyéndose en "comunidades libres" en la región. Estas comunidades no se caracterizaron por una homogeneidad étnica "ancestral", ya que sus integrantes habían permanecido varias generaciones en las barracas, mezclándose entre ellos y pasando por un proceso de "campesinización", dedicándose cada vez más a la agricultura de subsistencia y a otras actividades extractivas, principalmente la castaña y la madera (Herrera, 54:55).

## **Años 1980 - 2000: Potente organización social y luchas por la tierra**

Entre 1953 y 1980 creció el modelo de organización sindical agraria en la región, estructurándose como instancia de gobierno integral y orgánico de la comunidad, aunque inicialmente subordinado a las élites regionales. Federaciones campesinas regionales fueron adquiriendo mayor presencia y capacidad de impugnación al orden dominante. A finales de los 80 y principios

de los 90, se conformaron organizaciones indígenas y se consolidaron federaciones de trabajadores castañeros.

Estas estructuras se articularon a los procesos en el resto de Bolivia, con la redistribución de la tierra como eje principal. Los pueblos indígenas visibilizaron su lucha a través de marchas, colocando sus demandas en la agenda nacional. La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA, 1996) incorporó la figura legal de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Las comunidades sindicales demandaron la titulación de sus comunidades con propiedad comunitaria y 500 ha por persona.

Entre 1990 y 2000, estas luchas promovieron un importante proceso de redistribución de tierras, en un clima tenso entre barraqueros-empresarios y campesinos-indígenas.

Así, en el norte amazónico se generó un proceso de reivindicación de identidades colectivas, reconfigurando las relaciones de poder local. La emergencia de organizaciones indígenas está vinculada a la reivindicación de derechos territoriales y las interacciones con el Estado y ONG (Herrera, 2005). De esta época quedó un legado de dirigentes indígenas y campesinos que construyeron su identidad y prácticas políticas a partir de las luchas por la tierra, marcadas por un deseo de autonomía del poder centralista.

## **El poder político en el norte amazónico: entre la autonomía y la imposición**

A partir de lo anterior, es importante señalar algunas tendencias relevantes en torno a las formas de organización social y política en el escenario noramazónico, su transformación y las principales tensiones y articulaciones que se perfilan.

En la Amazonía boliviana, el partido de gobierno MAS ha tenido en los últimos años un poder importante y ha logrado penetrar la dinámica local de las organizaciones sociales, cooptando dirigencias e imponiendo agendas, aunque con matices diferenciados entre departamentos, provincias y municipios. Uno de estos matices se constituye de la interacción entre identidades políticas basadas en el regionalismo amazónico, lo partidario y lo étnico-cultural. La identidad "amazónica" ha sido un componente importante para articular alianzas políticas opositoras al centralismo de La Paz y al poder departamental, situado en el sector ganadero de Trinidad. En esta narrativa se vincula lo "amazónico" de Pando y Riberalta con las actividades económicas forestales, en oposición a la actividad ganadera y, más recientemente agroindustrial, promovida desde Trinidad.

El *modus operandi* del MAS en las últimas gestiones de Evo Morales generó mucho descontento en las bases del norte amazónico. Después de los violentos acontecimientos en Porvenir, Pando (Nehe, 2015), el partido empezó a hacer pactos con las élites regionales, otorgándoles derechos territoriales e incorporándoles en posiciones de poder.

La conformación del partido Poder Amazónico Social (PASO) representó un intento por consolidar un poder político propio de los pueblos campesinos e indígenas en la región, independiente del MAS. El PASO buscaba lograr una representación propia de las organizaciones en los gobiernos locales de la región amazónica, sin expectativas de proyección nacional, ya que a ese nivel se tenía una alianza con el MAS. Este intento de consolidar una identidad política identificada con el MAS a nivel nacional, pero resistente a su imposición regional, fue particular para esta articulación. Sin embargo, no se pudo sostener esta independencia en el transcurso de los años:

El Poder Amazónico Social era un partido nacido de las organizaciones, fue tomado por el Movimiento Al Socialismo y posteriormente fue absorbido por el poder total del MAS y desplazado. Entonces, el PASO se vio sumergido por el poder grande. Ahí comienza una total decepción de las organizaciones. Es por eso que, cuando se toma de conciencia por parte de estas organizaciones, yo creo que el gobierno llegó a utilizar a los propios barraqueros para tratar de dar el golpe final. [...] Es por eso que el gobierno empezó a tomar en sus filas al poder empresarial del norte boliviano. Es por eso que teníamos diputados y senadores de estas élites y no así diputados y senadores de los mismos pueblos campesinos e indígenas, sino más bien, en esa Asamblea Plurinacional, había mucha gente de la casta social de acá de la región (Carlos Chipunavi, 2020, comunicación telefónica, Las Piedras, Pando).

En los últimos procesos electorales, el MAS logró imponerse sobre el PASO, modificando la dinámica política de la región y reestableciendo ciertos poderes de las élites tradicionales, y de nuevas élites como mineros y dirigencias de organizaciones sociales afines al partido, en el marco de la expansión capitalista en la región.

## **Reconfiguraciones en las organizaciones indígenas y campesinas**

En la actualidad, las organizaciones campesinas e indígenas en la región amazónica enfrentan diversos desafíos y transformaciones. Por un lado, existe una pugna sobre el nivel de autonomía que las organizaciones campesinas deben tener respecto al partido de gobierno, el MAS. La cooptación política ha dañado la relación entre los liderazgos intermedios y las comunidades, generando un distanciamiento de los problemas concretos que estas enfrentan.

A través de diversos mecanismos de prebenda y clientelismo que inhibieron la capacidad comunitaria de control sobre las organizaciones supracomunitarias. Llegaban los dirigentes de la comunidad para reclamar a los dirigentes de las organizaciones [supracomunitarias], pero llegaban a la reunión y se encandilaban con tanta parafernalia, llegaban a la asamblea, había desde música, comida, transporte, es decir, no escaseaban los recursos, típico de los políticos. Eso ha hecho que la gente termine sin fuerza, porque al final eran dos locos los que reclamaban (Mónica Lijerón, 2020, comunicación telefónica en Riberalta, Beni; en Salazar, 2020).

Además, décadas de interacción entre elementos culturales indígenas y campesinos ha generado cambios en las visiones de desarrollo, territorio y organización. Este escenario está marcado por asimetrías de poder y la imposición de modelos capitalistas y extractivistas, pero también responde a transformaciones en las miradas de las propias comunidades. La resistencia de las nuevas generaciones para integrarse a las filas sindicales e indígenas puede llevar a un escenario, donde la cohesión social pase por formas de organización en torno a actividades económicas dominantes en la región, como la minería, la agricultura a gran escala y la ganadería.

Es importante señalar que, a pesar de las diferencias en la proyección territorial entre Tierras Comunitarias de Origen (TCO) indígenas y comunidades campesinas, no siempre existe una relación directa entre identidad étnica-cultural y actividad económica familiar. Esta diversificación de estrategias económicas también está vinculada al hecho que, tras décadas de lucha por la propiedad de la tierra, las comunidades no han logrado garantizar el control de las cadenas de producción y explotación de recursos (Lehm, 2016b; Wentzel, 2009). Asimismo, la creciente presencia de actividades extractivistas genera cambios en las visiones de "desarrollo" de las nuevas generaciones, que en ocasiones chocan con los intereses de las organizaciones, dando lugar a situaciones paradójicas.

Para los jóvenes la estructura orgánica campesina es como un aparato que aprieta. Ellos son profesionales y buscan otras formas de organizarse y representar sus intereses (Carlos Chipunavi, 2022, Las Piedras, Pando).

Los conflictos que surgen de estos choques suelen ser menos visibles, ubicándose en el ámbito interno de las comunidades y organizaciones. También nacen de las dificultades que enfrentan las organizaciones para implementar herramientas de gestión y control territorial, debido a la escasez de recursos y a la complejidad de construir modelos de economía indígena y campesina, en un contexto moldeado por otros intereses y miradas. Muchos dirigentes no reconocen ni visibilizan estas tensiones en sus filas, y continúan utilizando argumentos y agendas de reivindicación situadas en otro momento histórico, además reduciendo a los indígenas a cuidadores de la madre tierra y a los interculturales a pobres minifundistas portadores de progreso para la región. Estas agendas, más simbólicas que concretas, no generan respuestas reales a la complejidad actual de las comunidades y territorios, ni a las múltiples amenazas que genera la expansión capitalista.

En cuanto a las organizaciones indígenas, su situación es aún más difícil debido a la pérdida de influencia política. El gobierno se distanció de este sector tras el conflicto por la carretera a través del Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré), descalificándoles como "opositores al desarrollo" y "manipulados por las ONG". Aplicó varias formas de violencia política contra las estructuras organizativas, disminuyendo su capacidad de movilización e incidencia.

Por último, es fundamental destacar que el tejido organizativo en la región amazónica no se limita a lo campesino e indígena. Existen organizaciones en torno a aspectos productivos, ambientales, cívicos, de género, generacionales e incluso de diversidad sexual. Aunque el mapeo detallado de estas organizaciones supera el alcance de esta investigación, se considera una agenda urgente para comprender de manera más integral las dinámicas sociales y políticas en la Amazonía.

## **Reflexiones finales**

El análisis realizado a lo largo de este artículo pone de manifiesto la complejidad y diversidad de la región amazónica boliviana, tanto en términos sociales, económicos como culturales. A pesar de ser una macroregión extensa, con frecuencia se la trata como una entidad homogénea, lo que responde a una mirada esencialista y colonial que persiste no solo desde otros países, sino también desde la propia perspectiva andina boliviana. Superar este esencialismo y reconocer las diferencias fundamentales que existen incluso entre comunidades cercanas, es una tarea urgente y necesaria para la investigación en estos territorios.

Los procesos de interacción y reconfiguración organizativa e identitaria descritos en el artículo nos llevan a formular algunas pistas estratégicas para la investigación en la región amazónica. Por un lado, las identidades colectivas que organizan la vida política en Riberalta y sus entornos ayudan a deconstruir narrativas simplificadoras y a comprender cómo las personas construyen sus identidades en torno a diversos factores e intereses, que pueden resultar contestatarios a los imaginarios esencialistas.

Por otro lado, es necesario repensar los enfoques con los que se han abordado los escenarios de despojo en la Amazonía boliviana. En lugar de reducir la comprensión de la conflictividad a pugnas binarias entre identidades estáticas ligadas al acceso a la tierra y el territorio, se requiere desentrañar las complejas interacciones entre intereses externos e internos por la extracción de recursos naturales. Estas interacciones están generando un panorama en el que varios elementos identitarios se diluyen y la convivencia se resuelve a través de frágiles pactos negociados sobre intereses pragmáticos. Proponemos agendas de investigación que generen nuevas miradas sobre las construcciones identitarias existentes en el norte amazónico, y las potencialidades que tienen para articular y gestionar las necesidades y resistencias en la región.

Es importante resaltar que la representación simplificada de las identidades no solo representa el fuerte sello colonial en las narrativas sobre la Amazonía, sino que también se mantiene porque resulta útil a los intereses políticos y económicos actuales. La identidad "amazónica" puede seguir constituyéndose en un potencial para articular políticamente a diversos actores en torno a agendas autónomas, con la posibilidad de superar antagonismos entre

sectores campesinos, indígenas y urbanos. Sin embargo, el uso de esta identidad particular también puede servir como un escudo para que las élites locales sigan sosteniendo relaciones de opresión interna y mantengan un *statu quo* de profunda desigualdad.

En estos análisis, es fundamental dar una presencia más estratégica a las mujeres y los jóvenes, superando ciertas limitaciones en las perspectivas y herramientas de incidencia y gestión de la tradicional dirigencia masculina. Además, se requiere una reflexión más profunda sobre las dinámicas que se generan entre lo legal y lo ilegal, y sobre los usos de la violencia estructural en la región.

Consideramos importante que desde la sociedad civil boliviana, y en particular desde las organizaciones que realizan investigación, se genere una mayor precisión en la comprensión de cómo los cambios en las dinámicas económicas de la región no solo generan despojo territorial y afectación ambiental, sino que también producen mayor vulnerabilidad y asimetría social, debilitando la capacidad efectiva de las organizaciones tradicionales para generar resistencia, lucha o propuestas en defensa del bien común.

En un contexto donde se vislumbra un crecimiento de la conflictividad socioambiental, polarización política e intensificación de emergencias climáticas, la capacidad efectiva de generar resistencia, defensa de derechos básicos y propuestas debe provenir de las regiones amazónicas mismas. Es con este horizonte que las investigaciones requieren basarse en miradas precisas y estratégicas, sin temor a mostrar las complejidades y contradicciones que son parte de este escenario. Solo así podremos contribuir a la generación de agendas renovadas y transformadoras para la Amazonía boliviana.

## Referencias

- Campanini, O. y Gandarillas, M. (2015). "Bolivia. El caso de Riberalta" en Lenin Valencia (Ed.), *Las rutas del oro ilegal. Estudios de caso en cinco países* (Lima: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental).
- Cedib (2020). *Minería aurífera en los ríos del norte de La Paz y Beni* (Cochabamba: Cedib).
- Cipca (2015). "La lucha campesina-indígena en la Amazonía boliviana" en Salazar, Huáscar 2020, "Revisiting Bolivian 'Progressivism': The Anticommunalism of the Plurinational State", *Latin American Perspectives*, Vol. 47, N° 234.
- Córdoba, L. (2012). "El boom cauchero en la Amazonía boliviana: encuentros y desencuentros con una sociedad indígena (1869-1912)" en Diego Villar e Isabelle Combes (Eds.), *Las tierras bajas de Bolivia: miradas históricas y antropológicas* (Santa Cruz: El País), pp. 125-156.
- Córdoba, L. (2018). *Amazonía Norte de Bolivia. Economía Gomera (1870-1940)* (La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional).

- Federici, S. (2010). *Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria* (Madrid: Traficantes de sueños).
- Federici, S. (2020). *Reencantar el mundo. El feminismo y la política de los comunes* (Madrid: Traficantes de sueños).
- Fobomade (2007). *El Norte Amazónico de Bolivia y el Complejo del río Madera* (La Paz: Bolivia).
- Gamarra, M. del Pilar (2018). *Amazonía Norte de Bolivia. Economía gomera (1870-1940). Bases económicas de un poder regional*. La Casa Suárez (La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional).
- Guzmán Narváez, N. (2018). *Capitalismo Chino en la Selva, Los cuerpos desechables detrás de tres obras de infraestructura en Bolivia* (La Paz: Fobomade).
- Herrera Sarmiento, E. (2005). "La nueva legislación agraria boliviana y la construcción de lo tacana en el norte amazónico" en López, L.(Ed.), *Movimientos Indígenas y Estado en Bolivia* (La Paz: Proeib / Cenda / Plural Editores), pp. 17-52.
- Herrera Sarmiento, E. (2015). *El multiculturalismo Boliviano: y la invención de los indígenas Tacana del Norte Amazónico* (La Paz: IFEA).
- Jiménez, G. (2013). "Territorios indígenas y áreas protegidas en la mira. La ampliación de la frontera de industrias extractivistas", *Petropress*, N° 31, pp. 5-18.
- Kruyt, S. (2022). *Territorios en Transición. Análisis de las condiciones de la conflictividad territorial y socioambiental en el Norte de La Paz* (La Paz: Fundación Tierra).
- Lanza, G. y Arias, B. (2011). *Represa Cachuela Esperanza. Posibles consecuencias socioeconómicas y ambientales de su construcción* (La Paz: Cipca).
- Lehm, Z. (2012). "Los takanas: representaciones de los sistemas de organización sociopolítica (1986-2010)" en Diego Villar (Ed.), *Las tierras bajas de Bolivia: miradas históricas y antropológicas* (Santa Cruz de la Sierra: El País), pp. 177-200.
- Lehm, Z. (2016). *Demarcación, control y vigilancia de la TCO Tacana I* (La Paz: Wildlife Conservation Society (WCS) y Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta).
- Lehm, Z. (2016b). *Historia del Gobierno en la Región Tacana* (La Paz: Wildlife Conservation Society (WCS) y Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta).
- Marsik, M.; Stevens, F. y Soutworth, J. (2011). "Amazon deforestation: Rates and patterns of land cover change and fragmentation in Pando, northern Bolivia, 1986 to 2005", *Progress in Physical Geography*, Vol. 35, N° 3.
- McKay, B. (2017). "Agrarian Extractivism in Bolivia", *World Development*, Vol. 97, pp. 199-211.
- McKay, B. (2018). *Extractivismo agrario. Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia* (La Paz: Tierra).
- Mendieta Parada, P. (2010). *Entre la alianza y la confrontación. Pablo Zárate Willka y la rebelión indígena de 1899 en Bolivia* (La Paz: IFEA / Plural / ASDI / IEB).
- Mendieta Parada, P. (2014). "De la quina a la goma: la compleja incorporación de la provincia Caupolicán al mercado mundial (siglo XIX)" en Perrie Bruslé, L. & Gozávez, B.(Eds.), *El Norte de La Paz en la encrucijada de la integración*

- Juegos de actores y de escala en un margen boliviano (La Paz: IDH / Dipgis / UMSA / IRD), pp. 57-79.
- Mercado, J. (2019). "Tacanas se convierten en mineros para detener avance chino en el río Madre de Dios", ANF, consultado el 10 de junio de 2023 en: <https://agenciadenoticiasfides.shorthandstories.com/Tacanas-se-convierten-en-mineros-para-detener-avancechino-en-el-Madre-de-Dios/index.html>
- Moldiz, C. (2016). "Pando antes y después de 2008: élite política y régimen provincial híbrido".
- Nehe, B. (2015). Tierra de nadie, tierra de todos. Estado, espacio y luchas campesinas en el Norte Amazónico de Bolivia, Tesis doctoral (Ciudad de México: UNAM).
- Ormachea, E. y Ramírez, N. (2013). Políticas Agrarias del gobierno del MAS o la agenda del poder empresarial-hacendal (La Paz: Cedla).
- Paredes, I. (2023). "Más del 52% de la deforestación en Bolivia fue ilegal durante el 2022", Revista Nómadas, consultado el 12 de junio de 2023 en: <https://www.revistanomadas.com/mas-del-52-de-la-deforestacion-en-bolivia-fue-ilegal-durante-el-2022/>
- Peralta, C.; Cartagena, P. y Flores, R. (2017). "Efectos socio-económicos y ambientales por la producción de arroz (*Oryza sativa*) bajo agricultura mecanizada en el municipio Puerto Gonzalo Moreno, Norte Amazónico de Bolivia", *CienciAgro*, Vol. 2017, N° 1.
- Perrier Bruslé, L. y Gozávez, B. (2014). El Norte de La Paz en la encrucijada de la integración. Juegos de actores y de escala en un margen boliviano (La Paz: IDH / Dipgis / UMSA / IRD).
- PNUD (2003). Informe de Desarrollo Humano en el Norte Amazónico Boliviano (La Paz: PNUD/Plural).
- Salazar, H. (2013). La formación histórica del movimiento indígena campesino boliviano. Los vericuetos de una clase construida desde la etnicidad (Buenos Aires: Clacso).
- Salazar, H. (2015). Se han adueñado del proceso de lucha. Horizontes comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS (Cochabamba: Socee / Autodeterminación).
- Salazar, H. (2020). "Revisiting Bolivian 'Progressivism': The Anticommunalism of the Plurinational State", *Latin American Perspectives*, Vol. 47, N° 234.
- Salgado, J. (2013). Extractivismos en pugna: visiones y derechos en el Norte Amazónico de Bolivia (La Paz: Fundación TIERRA).
- Teran-Mantovani, E. y Scarpacci, M. (2024). "Economías criminales, extractivismo y acumulación entrelazada: un análisis multiescalar de los nuevos escenarios latinoamericanos", *Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, N° 38.
- Zavaleta, R. (1986). Lo nacional - popular en Bolivia (México: Siglo XXI).

# LAS ENCRUCIJADAS DE LOS FLUJOS FINANCIEROS





# Ríos de asfalto en la Amazonía boliviana

---

*Marielle Cauthin Ayala*

## **Resumen**

Bajo el discurso de “marcha hacia el norte”, millonarias inversiones en carreteras –que representan el 27,5 % del total de la deuda externa actual del país– avanzan como ríos hacia la frontera amazónica noreste y noroeste. Casi una decena de tramos viales realizados por siete empresas chinas (y una boliviana), con el financiamiento de la banca internacional, recrean los nuevos ríos de asfalto sobre la cuenca amazónica. El objetivo de este artículo es brindar insumos para comprender cómo avanza la expansión de la infraestructura vial en la Amazonía boliviana y cómo se avizoran mayores impactos socioambientales frente a las impasibles políticas de las instituciones financieras, que anhelan convertir a la región en una “eficiente” zona de tránsito y abastecimiento de mercancías. Finalmente, este documento se suma a la literatura crítica sobre infraestructuras extractivas, impactos en el bioma amazónico y ausencia de efectivas políticas de resguardo.

## **Palabras clave**

Proyectos viales, deuda externa, inversiones, salvaguardas, conflictos socioambientales.

## La marcha hacia el norte

En el norte amazónico boliviano pervive el antiguo anhelo estatal de colonización, consolidación de fronteras y polo de extracción ya propulsado desde los siglos XVIII y XIX, sobre todo con los auges de la quina (1860 - 1930) y de la goma (1870 - 1925). Para hacer posible este sueño de modernidad fueron esenciales las vías de comunicación y transporte por los ríos de la cuenca<sup>5</sup>. Sin duda en esta etapa se inscribía una fase inaugural de la acumulación originaria del capital en la franja amazónica (Serge y von der Walde, 2024).

Bajo el espejismo de la bonanza y del supuesto “abandono” de esas “tierras baldías” (Paz, 1991) se justificaron y apoyaron diferentes olas de migración extranjera e interna conocidas como “marchas”: una hacia oriente y otra hacia el norte. En el siglo XX, las marchas necesitaron caminos y puentes para atravesar la frontera boscosa y sus ríos, que se fueron consolidando desde la década de los 50, en el marco del Plan Bohan, y de la mano de proyectos de infraestructura vial como la carretera Cochabamba – Santa Cruz hacia el este con sus respectivos ramales (Santa Cruz – Camiri – Villamontes / Sucre; Santa Cruz – Montero - Cuatro Ojos; Villazón - Tarija), y la vía La Paz – Coroico – Caranavi – Rurrenabaque / Apolo hacia el norte paceño (von Stosch, 2014; Perrier, 2014; Villegas, 2013)<sup>6</sup>.

Años más tarde, cerrando el siglo XX y a lo largo del siglo XXI, los gobiernos neoliberales, así como el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), volvieron a izar la bandera de la “marcha hacia el norte”. En 2023, el ministro

<sup>5</sup> En 1880, con el hallazgo de la unión de los ríos Beni y Mamoré por Edwin Heath se intensificó el uso de los innovadores barcos de vapor: “lo que permitirá la mejor y más rápida comunicación con el Madeira, el Amazonas y el Atlántico, facilitando por tanto la explotación de los extensos gomales existentes en los ríos Orthon, Tahuamanu, Manuripi, Acre, etc.” (García, 2020). Este fenómeno de explotación visto en gran parte de la región amazónica conformaría los llamados “ríos de caucho” (Serge y von der Walde, 2024). Hacia fines del siglo XIX, la dependencia de capitales, mercados y tecnología extranjera llevaría al gobierno boliviano a inaugurar diferentes iniciativas en asociaciones público – privadas para la vinculación fluvial. En 1868 se creó la Compañía Nacional de Navegación Boliviana con socios y capitales externos, que sin embargo fracasó (García, 2020); en 1897 se fundó en Puerto Bahía (hoy Cobija) el Astillero Nacional dependiente del Ministerio de Defensa (Maldonado, 2015); en 1901 surgiría la sociedad accidental The Bolivian Syndicate, por la que el gobierno cedería a una sociedad privada angloamericana la administración aduanera del Acre, con el objetivo que esta invirtiera en edificaciones, vías férreas, tránsito fluvial y colonización extranjera (Añez, 2023).

<sup>6</sup> En esta segunda mitad de siglo se solaparon diferentes visiones de desarrollo estatista que se disputaban la reconfiguración del norte amazónico boliviano. Las olas de migración siguieron en los 80 y 90 de forma espontánea y como parte de programas estatales, agudizadas por las consecuencias de las reformas de la agenda neoliberal (Gozálvez, 2014). Esta etapa se solapó con iniciativas ambientales de tipo conservacionista que tuvieron como corolario la creación del sistema de áreas protegidas, y que se unieron a procesos de gobernanza étnica local y de reconocimiento territorial: en 1989 se había fundado la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), en 1993 se crea el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), un año después se fundó la Organización del Pueblo Indígena Mosestén (OIM), en 1997 se crea la organización de los Lecos de Apolo (Cipla) y la Central de Pueblos Indígenas de la Paz (Cpilap), en 1998 se organizan los Lecos de Larecaja bajo la sigla Pilcol (Cpilap, 2006) y la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap). Los últimos años han cobrado relevancia la conformación de las organizaciones de mujeres indígenas, a la par de las mixtas.

de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, enfatizaba que la “marcha al norte” es una política para “lograr la industrialización de nuestros recursos naturales” y sustituir importaciones (un giro de retorno a los postulados del Plan Bohan). Bajo el mismo lema, la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) organizó una “caravana empresarial 4x4” que recorrió la ruta: Caranavi - San Buenaventura - Ixiamas - Rurrenabaque - San Ignacio - Trinidad, para ver posibles inversiones en “complejos alimenticios, turismo, biodiésel, azúcar, comercio internacional, [y] exportación de energía”. El eje de toda esta propuesta se basa en la “integración por carreteras” de centro a norte y con las fronteras de Brasil, Perú y Chile, y por lo tanto del Pacífico con el Atlántico, concretando los corredores bioceánicos impulsados hace más de dos décadas por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)<sup>7</sup>.

### Los millonarios ríos de pavimento en el norte amazónico

Actualmente toda la región amazónica –compartida con Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam– vive un momento de inyección de millonarias inversiones en infraestructura vial: se estima que se invertirán al menos USD 27.000 millones para carreteras. Proyecciones de Vilela, Malky, Bruner *et al.* (2020) sostienen que muchas de estas vías no justifican sus gastos: la construcción y mantenimiento del 45 % de estos proyectos costarán más que el beneficio económico que generarán y, en el caso boliviano, el 85 % de las vías planificadas en la Amazonía no son económicamente rentables ni viables<sup>8</sup>. Esto sin considerar los costos socioambientales de estas obras.

En el país, casi todas las inversiones en infraestructura vial provienen de préstamos de la banca internacional, ya que el sistema vial nacional es insolvente. El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 - 2020 de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) afirmaba que las inversiones con recursos propios para vías son bajas, debido a que los usuarios se resisten a aplicar “un nuevo tarifario de peajes”, lo que viene “restringiendo la posibilidad de ampliar el volumen de recursos a destinarse a conservación vial”. Por otra parte, hay un problema de iliquidez de las empresas

---

<sup>7</sup> La IIRSA es una iniciativa impulsada desde 2000 por los gobiernos sudamericanos y agencias multilaterales. Su objetivo es integrar inversiones en vías de transporte, energía y telecomunicaciones, que unan los océanos Pacífico y Atlántico para facilitar el acceso a materias primas, su circulación y exportación. El plan se compone de diez Ejes de Integración y Desarrollo (EID) conformados por zonas de especialización productiva/extractiva en la región (recursos naturales, asentamientos humanos poblados, zonas productivas y servicios logísticos). Bolivia forma parte de cuatro ejes pero está en el área de influencia de seis, por su ubicación geográfica al centro de la región (Villegas, 2013).

<sup>8</sup> Vilela, Malky, Bruner *et al.* (2020) realizaron una investigación sobre 75 proyectos carreteros en la zona amazónica de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El estudio sostiene que la región invertirá aproximadamente USD 27.000 millones para desarrollar 12 mil kilómetros de vías, que en promedio llegarán a costar entre USD 1,8 a 2,1 millones por kilómetro. Estos costos pueden estar subestimados pues nueve de cada diez megaproyectos de infraestructura (aquellos que cuestan más de USD 1.000 millones) exceden su presupuesto; en el caso de las carreteras, el 20 % de los proyectos llegan a tener sobrecostos.

constructoras “que provocan desfases en la ejecución de obras”, y finalmente, los recursos propios de la ABC “solo alcanzan a cubrir algunas partidas de Gasto Corriente” (ABC, 2016).

Debido a esto, el Estado sigue incrementando la deuda nacional para financiar carreteras insolventes para su propio mantenimiento. En 2023, las inversiones en carreteras absorbían el 27,5 % de la deuda externa nacional (USD 3.669 millones), siendo la infraestructura vial el primer sector que recibe más recursos en calidad de préstamos; en consecuencia, la ABC es la segunda entidad estatal ejecutora que más desembolsos externos recibe (USD 96 millones que representa el 26,2 %) (BCB, 2023)<sup>9</sup>.

Con esto queda claro que la “marcha hacia el norte” se operativiza a través de infraestructura vial, plasmada concretamente en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021- 2025, que tiene como meta llegar a 10.500 kilómetros (km) de caminos construidos y pavimentados en la Red Vial Fundamental (RVF), 47 km de puentes y accesos y 13 mil km de conservación vial. Previo al PDES, la ABC proyectó hasta 2020 realizar 5.995 km de obras viales priorizando la frontera amazónica: Beni con 27 % de obras; Santa Cruz con 23 %; La Paz con 18 %, con gran parte de obras ubicadas en la conexión de las provincias Abel Iturralde y Franz Tamayo en el norte; y Pando con 8 % de obras, lo que en conjunto representa el 76 % de la planificación vial (ABC, 2016).

En el cuadro a continuación se puede apreciar el actual avance de las obras, inversión y gestiones realizadas por la ABC en el norte amazónico para cumplir estas metas de expansión hasta 2025 (tabla 1).

---

<sup>9</sup> Al 30 de junio de 2023, la deuda externa llegó a USD 13.340 millones, representando el 29,2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Los mayores prestamistas de Bolivia son: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con USD 4.011 millones (30,1 %), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) con USD 2.895,9 millones (21,7 %), el Banco Mundial (BM) con USD 1.515,2 millones (11,4%) y, en cuarto lugar, el Expor Import Banco de la República Popular de China (Exim Bank) con USD 1.439,1 millones (10,8 %) (BCB, 2023).

Tabla 1: Proyectos de la Red Vial Fundamental (RVF) en el noreste y noroeste amazónico boliviano (en ejecución y proyección a mayo 2024)

Diseño	Distancia (km)	Costo (Millones de Bs)	Financiera*	Pando		Estado
				Empresa ejecutora		
<b>Ruta F-13 RVF</b> Tramo IA: Porvenir – San Miguel	64,30	549,00	CAF	En marzo 2022 se rescindió el contrato con la empresa china Harzone Industry Corporation.	En ejecución	
				En febrero 2024 se adjudicó a la empresa Asociación Accidental PSM, conformada por: China International Water & Electric Corporation y China Highway Engineering Consulting Corporation.		
<b>Ruta F-13 RVF</b> Tramo IB: San Miguel – Puerto Rico	68,95	636,00	CAF	En marzo 2022 se rescindió el contrato con la empresa china Harzone Industry Corporation.	Paralizada**	
<b>Ruta F-13 RVF</b> Tramo IIB: Puerto Rico – Puerto Madre de Dios (El Sena)	10,8	59,24	TGN	En agosto 2021 se rescindió el contrato con la empresa Santa Fe Ltda. de Costa Rica.	En ejecución	
				En noviembre 2022 se adjudicó a la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC).		

Beni						
Ruta: Ruta F-8 RVF Rurrenabaque – Riberalta con 508,7 km						
Tramo I: Rurrenabaque - Santa Rosa	95,68					
Tramo II: Santa Rosa - Australia	169,36	59,58	Exim Bank 85 % y GADB 15 %			Ejecución
Tramo III: Australia - El Chorro o el Triángulo	168,16					
Tramo IV: El Chorro - Riberalta	74,87	673	TGN 85 % y GADB 15 %			Ejecución
<b>Ruta F-3 RVF</b>						
Tramo: Yucumo – San Borja	55,57	624,95	CAF 70 % - GADB y TGN 30 %			Ejecución
<b>Ruta F-3 RVF</b>						
Tramo: San Borja – San Ignacio de Moxos	139,6	1.440	CAF 70 % - GADB 30 %			Ejecutada
Ruta F-3 RVF						
Puente sobre río Mamoré y accesos	7,00	971,06	--			En Estudio Preinversión

Norte de La Paz						
<b>Ruta F-16 RVF</b> - Puentes sobre la vía San Buenaventura – Tumupasa – Ixiamas						
Lote 1A 5 puentes: San Buenaventura - Tumupasa	0,51	65,7	BM	Empresa Asociación Accidental Amazonía		Ejecutado
Lote 2A 6 puentes: Tumupasa - Ixiamas	0,49	60,8	BM	Empresa Calzada Construcciones		Ejecutado
Lote 1B 7 puentes: San Buenaventura - Tumupasa	0,49	59,6	BM	Empresa Levon SA		Ejecutado
Lote 2B 4 puentes: Tumupasa - Ixiamas	0,44	46	BM	Empresa El Ceibo		Ejecutado
Ruta: Ixiamas – Puerto Chivé	228	19,23	TGN	--		En Estudio Preinversión
<b>Ruta F-16 RVF</b> Tramo: Apolo - Tumupasa	125	--	--	--		En Estudio Preinversión

\*Tesoro General de la Nación (TGN); Gobierno Autónomo Departamental de Beni (GADB), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Mundial (BM) y el Export – Import Bank de China (Exim Bank).

\*\* En el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) no consta una nueva licitación hasta mayo 2024.

Fuente: Elaboración propia con base en ABC, 2019; 2020; 2022; 2023; Sicoes, consultado 15 mayo de 2024.

## Empresas y capitales chinos

Según este análisis, siete empresas chinas se han adjudicado los actuales proyectos viales dentro la Amazonía noreste y noroeste; aunque a nivel nacional tienen presencia en otras grandes obras viales, como la de El Sillar en el Trópico de Cochabamba o la doble vía Sucre - Yamparáez (y en otros millonarios proyectos eólicos, sísmicos, hidroeléctrico, ferroviarios, etc.)<sup>10</sup>. En lo que respecta a las adjudicaciones de construcciones de vías en el norte amazónico de Bolivia, la diferencia en términos cuantitativos es notoria entre estas empresas chinas y las empresas no asiáticas (una ecuatoriana y otra costarricense) que se adjudicaron obras pero no las culminaron, junto a la única empresa nacional constructora de carácter estatal.

Esto lleva a otro punto: los bancos internacionales (multilaterales) no exigen o no sugieren contratar empresas nacionales debido a las características de las licitaciones y sus requerimientos, por lo que se presentan todas las oportunidades de ventaja para los consorcios chinos: capacidad de inversión en equipos y tecnología o altos perfiles profesionales, además de costos más bajos. Mientras el banco de China (bilateral) sí condiciona sus préstamos a que las ejecutoras sean sus propias empresas estatales.

De forma paralela están los innumerables casos de faltas graves a la legislación nacional por parte de las empresas chinas que construyen estas vías, entre las denuncias más publicitadas están los casos de tráfico de colmillos de jaguares y otras especies o casos de explotación laboral, estafas a empresas locales proveedoras y escandalosos hechos corrupción entre empresas y la ABC (Mongabay, 2018; Oblitas, 2016; ANF, 2016; Opinión, 2023). De la misma manera existe abundante información de prensa que reporta los serios problemas entre la entidad responsable de caminos, las empresas supervisoras y las empresas chinas adjudicatarias para que estas últimas cumplan con los avances de obras en tiempo y calidad: abandono de campamentos, falta de equipos o maquinaria y falta de mantenimiento son recurrentes como causales de peticiones de informes en la Cámaras de Senadores y Diputados (Cámara de Diputados de Bolivia, 2023). De hecho, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) contabilizó 250 denuncias contra 17 empresas chinas reportadas en medios de comunicación bolivianos tan solo entre 2015 a 2018 (Herrera, 2018).

---

<sup>10</sup> El súbito interés de China en el país es explicado debido a su reciente y creciente influencia política y económica en América Latina en términos de acceso a materias primas (*commodities*), apertura de mercados para sus mercancías y obtención de contratos de operación y explotación en megaproyectos, mediante préstamos y adjudicaciones (Molina, 2016; Lopes, Quinet y Salgueiro, 2021; Agramont, 2023). Dicho sea de paso, los créditos chinos poseen intereses más altos respecto a los otros bancos prestamistas (BCB, 2023), empero su tipología de proyectos acepta financiar todo tipo de actividad industrial o extractiva con alto riesgo socioambiental. Por ejemplo, los proyectos con Categoría A del Exim Bank (los más complejos y, por lo tanto, de mayor inversión) abarcan: central nuclear, gran central hidroeléctrica o hidráulica, proyectos de extracción de materiales minerales y no minerales, grandes instalaciones en zonas ambiental y ecológicamente vulnerables, gran proyecto industrial cerca a zonas pobladas o zona de explotación de agua. Estos tipos de proyectos no son elegibles para el resto de los bancos internacionales.

Muchas de estas observaciones podrían ser recurridas para la aplicación de las salvaguardas de los bancos prestatarios<sup>11</sup>, como una muestra de las buenas prácticas y debida diligencia en los servicios de préstamos. Tomando como ejemplo al banco de China y las empresas de este mismo país, el Exim Bank “por el momento” aplica sus políticas de salvaguardas únicamente al Servicio de Préstamo de Crédito Verde, mediante el cual el banco debería asumir la “responsabilidad de la supervisión y evaluación del desempeño, desde el punto de vista ambiental, de sus clientes en todas las etapas del préstamo” (Amigos de la Tierra, 2016). Empero, no queda claro el lugar de categorización de las obras viales para el Exim Bank, pues no están claramente mencionadas en su tipología de proyectos en el marco de políticas de salvaguardas. Lo más cercanos son los “proyectos de transporte de larga distancia” en la categoría B.

Más allá, algunos estudios exploratorios ya han demostrado la falta de efectividad y limitaciones del alcance y aplicación de salvaguardas de todos los bancos involucrados en el caso de carreteras en Bolivia (Rivasplata, Zanafria, Torres, *et al.*, 2014; Andersen, del Granado, Medinaceli, *et al.*, 2018); mientras otros estudios han determinado un alto margen de ilegalidad y vulneraciones para viabilizar estas obras: casi el 20 % de 75 proyectos carreteros en la cuenca amazónica infringen normas relativas a estatutos ambientales, consulta previa y/o pública y derechos indígenas. A esto se suman conflictos sociales de rechazo a los diseños de vías (Vilela, Malky, Bruner *et al.*, 2020).

## Los trazos de asfalto: qué dicen y qué no dicen

Lo que indica el cuadro anterior es que se tienen cinco carreteras parte de la RVF en construcción entre Pando y Beni, que se unen al grupo de vías culminadas hace menos de tres años: San Borja – San Ignacio – Trinidad y Quiquibey – Yucumo – Rurrenabaque (Beni). Todas estas carreteras de asfalto se unirán en un futuro con el pavimentado de seis importantes caminos de la RVF que actualmente son de tierra: San Javier – La Moroña – Puerto Ustarez;

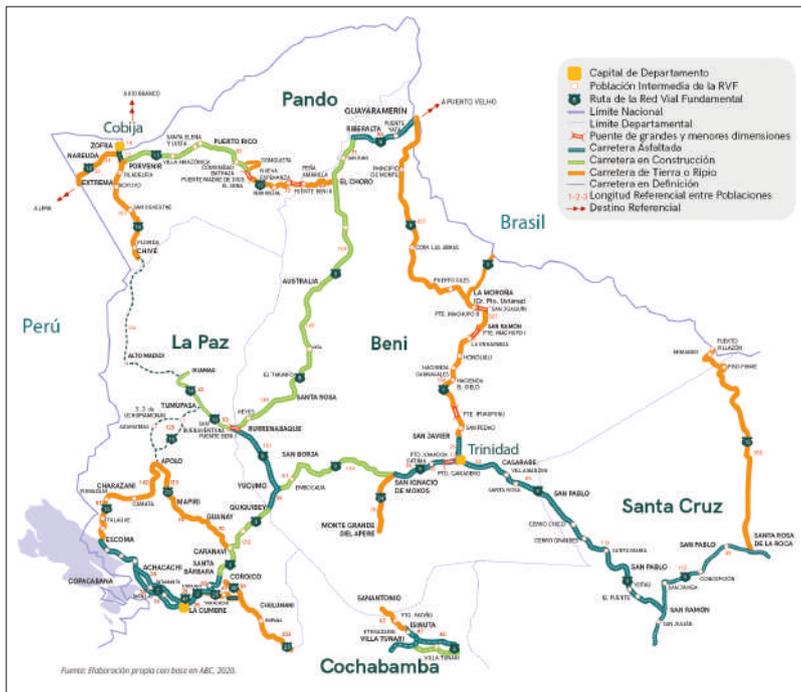
<sup>11</sup> Las salvaguardas son políticas institucionales de cada banco internacional que deben buscar reducir o eliminar los impactos de los proyectos financiados. El objetivo de su aplicación se debe a la corresponsabilidad de las financieras con los objetivos para los que se usan sus fondos, de acuerdo con la normativa nacional y los compromisos internacionales. Los ejes en los que las financieras estructuran las salvaguardas son similares y van desde la gestión de riesgos ambientales y sociales; situación laboral; contaminación para la prevención y contingencia; condiciones de las comunidades en términos de salud; tierras con un enfoque en adquisición, restricciones y reasentamientos; biodiversidad para la conservación y gestión; consulta pública (que no es lo mismo que consulta previa); pueblos indígenas; patrimonio cultural; y género. Empero hay grandes vacíos en las políticas marco. Por ejemplo, el BID recién incluyó en 2020 una cláusula sobre el consentimiento libre, previo e informado, así como medidas de gestión diferenciadas para población vulnerable (afrodescendientes, personas con discapacidad y diferentes orientaciones sexuales y géneros). Los otros bancos no cuentan con estas medidas de protección, por lo que otro vacío es la falta de armonización en el alcance y aplicación de las salvaguardas por toda la banca internacional. Para más detalle ver: Cauthin, M. (2023): *Deuda, salvaguardas y proyectos viales ¿los bancos internacionales cuidan nuestra agua?* En: <https://fundacionsolon.org/2023/10/24/deuda-salvaguardas-y-proyectos-viales-los-bancos-internacionales-cuidan-nuestra-agua/>

San Javier – La Moroña – Guayaramerín (Beni); Chivé – Porvenir y Zofra – Extrema (Pando); Caranavi – Apolo y San Buenaventura – Ixiamas (La Paz), como indica el mapa de abajo (mapa 1).

Existen vías en territorios indígenas y parques nacionales que cuentan con inversión municipal y/o nacional en mantenimiento, lo que influye en su impacto ambiental en la zona, pese a los bajos niveles de uso, como es el caso de la carretera San Ignacio de Moxos – Monte Grande del Apere, polémica porque afecta la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Territorio Indígena Multiétnico (TIM I) y porque llega a las puertas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré (Tipnis); o el mantenimiento de la carretera de tierra Tumupasa – San José de Uchupiamonas, que ingresa hasta el centro del Parque Nacional Madidi (PNM) y la TCO Uchupiamonas. Ambas aperturas de tramos y su mantenimiento actualmente no cuentan con cláusulas de mitigación ambiental, según versiones de las dirigencias (*com. pers.* Subcentral TIM I y Pisju, 2023).

También alerta la vigencia de trazos no definidos de otras polémicas vías, debido a sus impactos ambientales y por afectar territorios indígenas: el trazo Apolo – Tumupasa, hasta ahora en planificación, atraviesa el Parque Madidi y la TCO San José de Uchupiamonas; el trazo Ixiamas – Alto Madidi/ El Tigre – Chivé afectaría a la Reserva Nacional de Vida Silvestre Manuripi y, de hecho, actualmente es la frontera de feroz explotación forestal, facilitada por los 22 puentes y la carretera entre San Buenaventura e Ixiamas. Este fenómeno de deforestación ilegal se suma al tráfico de fauna y minería, que está desbordando el control territorial de la TCO Tacana I (*com. pers.* Cipta, 2023).

Mapa 1: Red Vial Fundamental (RVF) noroeste - noreste amazónica de Bolivia



Fuente: Fundación Solón, 2023, con base en ABC, 2020.

En este sentido, ahora se analizarán algunas características de estos trazos, su relación con impactos y conflictos socioambientales y los marcos de salvaguardas que deberían comenzar a aplicarse para reducir los evidentes problemas que enfrenta y enfrentará el bioma amazónico y sus habitantes.

a) Integralidad versus trameado

Un aspecto que llama la atención es la planificación de vías bajo la denominación de “tramos”, pedazos de ruta recortados de un diseño integral. Las gestiones y las licitaciones así como los diagnósticos ambientales requieren un diseño integral que debe contener un solo origen y un solo destino. La única forma en la que puede ser útil separar una vía en pedazos podría ser para consolidar el avance en términos financieros y de licitación, pero definitivamente va contra la integralidad de los estudios socioambientales como la Evaluación de Impacto Ambiental, las Licencias Ambientales, su categorización y su monitoreo, permitiendo irregularidades.

Por ejemplo, las salvaguardas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) precautelan la integralidad del proyecto, para identificar y entender los impactos

potenciales y proponer medidas o soluciones. Sin embargo, no existen observaciones de estas instituciones sobre las licitaciones de vías trameadas en varios proyectos que aprobaron y/o financiaron: vía Porvenir – Puerto Rico en Pando, Yucumo – San Ignacio de Moxos en Beni, o la ruta Kilómetro 13 – Las Cruces – Buena Vista en Santa Cruz. Por otra parte, la integralidad también significa aplicar la mirada sobre los impactos en todas las etapas del proyecto: diseño, construcción, operación, ampliaciones y/o modificaciones, y clausura o cierre. Mirar el crecimiento de una carretera por pedazos de calzada y solo hacerle seguimiento hasta el día de su inauguración es una compleja limitante que invisibiliza sus impactos a través del espacio y el tiempo.

Otro aspecto relevante que invisibiliza el trameado en casos de infraestructura en bosques tropicales es el avance de deforestación, con la paulatina modificación del paisaje y su antropización; un tema que hasta ahora no se aborda con seriedad en los planes de gran inversión en la cuenca amazónica<sup>12</sup>. Estudios citados por Fleck y Painter (2006) demostraron que carreteras como las de San Buenaventura – Ixiamas y Yucumo – Rurrenabaque “han desempeñado un rol importante en inducir una mayor deforestación”. Indicaron que una carretera por el Madidi establecería un área de concentración de impactos ambientales indirectos de 125.000 hectáreas (ha) e implicaría una deforestación de 18.000 ha, en un lapso de 25 años de proyección. Actualmente el tramo Yucumo - Rurrenabaque presenta un acelerado avance de deforestación a partir de la calzada de la carretera –donde se titularon comunidades interculturales–, que avanza hacia adentro del bosque, donde viven comunidades indígenas tsimanes no tituladas, lo que aumenta la vulnerabilidad sociocultural y alimentaria de esta población (Cauthin, 2023).

Estos datos corroboran los impactos de carreteras ya vistos en parques nacionales: el Tipnis perdió 46 mil ha de bosque entre 2000 y 2014 (3,6 % del total del parque). El 58 % de esta pérdida de bosques se produjo en un radio de cinco kilómetros alrededor de la carretera Villa Tunari – Isinuta en el llamado polígono 7 (Fernández-Llamazares A.; Helle J.; *et al.*, 2018). A este ritmo, Vargas *et al.* (2012) predijo la deforestación del 64 % (610.848 ha) del Tipnis en 18 años si se construye la carretera; y una pérdida forestal del 43 % si no se controla la expansión colonizadora del polígono 7, aunque no se construya la carretera, es decir, si se permite la descontrolada antropización del paisaje.

---

<sup>12</sup> En la Amazonía brasileña, se estima que en menos de 30 km al rededor de las carreteras principales se ha producido el 80 % de la deforestación (Barreto *et al.* 2005 en Fleck y Painter, 2006). El estudio de Vilela, Malky, Bruner *et al.* (2020) sobre 75 proyectos carreteros en toda la zona amazónica proyecta una deforestación de al menos 2,4 millones de hectáreas de bosques en 20 años si se ejecutan todas las obras viales.

b) Categorizaciones flexibles: el caso de los puentes

Los proyectos viales separan la construcción de puentes de los terraplenes, sin embargo, los puentes se están convirtiendo en la avanzada de trazos polémicos en la Amazonía. El conflicto de la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré (Tipnis) sentó el precedente, ya que para viabilizar la apertura de la brecha caminera dentro la TCO, el Ministerio de Obras Públicas emitió el Decreto 1146 del 24 de febrero de 2012, que junto a una resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) de 4 de febrero de 2014, establecieron que la “norma técnica habilita la construcción y rehabilitación de puentes” bajo la categorización 3, es decir: se consideran obras con impactos menores y que no requieren licencia ambiental. Con esta estrategia el gobierno logró construir tres enormes puentes dentro de la TCO: puente Isiboro de 250 metros (USD 4,9 millones), puente Ibuelo de 120 metros (USD 2,3 millones) y puente Sazama o Zajsajsama de 150 metros (USD 2,7 millones) (Cauthin, 2018). El Consejo Indígena del Sur (Conisur) logró frenar la construcción de un cuarto puente en 2023, debido a los evidentes problemas de deforestación y colonización que se van presentando en la zona.

Otro caso. En julio de 2023 se inauguraron 22 puentes en el trazo de la carretera San Buenaventura – Tumupasa – Ixiamas. Estos puentes, financiados por el Banco Mundial (BM), fueron adjudicados en paquetes para acelerar su ejecución con cuatro empresas construyéndolas simultáneamente. En este proyecto en concreto se activó la salvaguarda OP/BM 4.10 del BM para “reducir la pobreza y lograr un desarrollo sostenible asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los pueblos indígenas”<sup>13</sup>. El protocolo aplicado solo realizó consultas públicas y no con los estándares del Convenio 169 para la consulta previa, pese a afectar la TCO Tacana I y la frontera del Parque Nacional Madidi.

Se logró el acuerdo para viabilizar la construcción de “la carretera que une los municipios de San Buenaventura e Ixiamas”, empero se dejó constancia en actas sobre “las inquietudes y percepciones (...) ligadas al temor de una pérdida total de identidad a causa del ingreso de personas ajenas al pueblo indígena, contaminación del medio ambiente, afectación a las aguas y los ríos, avasallamiento de tierras, explotación indiscriminada de los recursos naturales, especialmente los maderables” (ABC y PCA

---

<sup>13</sup> El fondo creado por el BM contemplaba un presupuesto inicial de USD 759,502.11, fue administrado por la ABC, y tuvo como beneficiarios al Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), la comunidad indígena Ese Eja de Eyiyoquibo y las comunidades campesinas de la zona organizadas en la Federación Sindical de Productores Agropecuarios Provincia Abel Iturralde (Fespai). El fondo debía ser destinado a infraestructura mayor y menor, bienes y servicios: las dos primeras áreas (obras de infraestructura mayores y menores y bienes) serían operativizadas por las empresas contratistas que ejecutaron los puentes de la carretera y los servicios serían ejecutados por las organizaciones indígenas, con el apoyo del equipo técnico del Plan de Pueblos Indígenas (PPI), bajo responsabilidad administrativa de los recursos por parte de la ABC departamental (ABC y PCA Ingenieros consultores, 2011; ABC, 2021).

Ingenieros consultores, 2011). Pese a ello, en la entrega de los 22 puentes se hizo evidente que no se aplicaron medidas técnicas adecuadas para la conservación ecológica de los ríos. Incluso, para la inauguración, se usó maquinaria pesada en todos los ríos para “peinarlos”, según verificamos con la monitora ambiental del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta) en 2023.

Los puentes en los bosques tropicales permiten la paulatina penetración de sendas, de maquinaria y –por lo tanto– del “efecto arrastre” (Fearnside, 2001; Fleck y Painter, 2006): el progresivo cambio de uso del suelo con deforestación no autorizada, caminos secundarios legales e ilegales, asentamientos humanos, especulación sobre el precio de la tierra y aceleración de procesos no controlados como minería, ganadería, monocultivos, tráfico de fauna, etc. Por ende, los puentes también son una avanzada para el despojo territorial y la degradación ecológica e hídrica en la zona de impactos indirectos, como evidenciamos en los 22 puentes entre San Buenaventura e Ixiamas<sup>14</sup>.

Esta forma laxa de viabilizar puentes en la Amazonía va consolidándose como una práctica política para evadir la polémica ambiental: en el caso del Documento Base de Contratación (DBC) del estudio de preinversión de la vía Pelechuco – Pata – Apolo, se especifica que los diseños de puentes deben tener carpetas independientes, “debido a que el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, tiene el objetivo de priorizar la construcción de puentes”, por lo que posiblemente los puentes sean la avanzada para consolidar la apertura del camino que amenaza por el sur al Parque Nacional Madidi.

c) Privación de acceso a agua

El estricto cuidado de los cuerpos de agua, fundamental para la integridad ecológica e hídrica del bioma amazónico, está ausente en las proyecciones viales. Esto ha suscitado conflictos entre empresas y comunidades a las que se les ha restringido el acceso a agua o se les ha generado problemas de drenaje con problemas de inundaciones. Las críticas y resistencias en defensa del agua van incrementando en un contexto en el que la cuenca enfrenta la sequía más extrema de los últimos cien años (IPCC, 2023).

En 2017 las empresas chinas Harbour Engineering Company y Second Highway Engineering Company a cargo de la vía San Borja – San Ignacio de Moxos destruyeron los ductos del sistema de un agua potable –que estaba a 10 metros del eje de la carretera– y dejó sin servicio a 47 familias de la comunidad Puerto San Borja. El subalcalde del municipio, Bernardo Muiba, explicó que por cinco años las familias tuvieron que cosechar agua o trasladarla desde el río. En 2022 la población pidió la salida de la empresa y tomó simbólicamente sus maquinarias (Elpaís.bo, 2022).

---

<sup>14</sup> Ver: Cauthin, M. (2023). Fin del camino. Catálogo de impactos de carreteras en la Amazonía boliviana. En Rev. Tunupa 126: <https://fundacionsolon.org/2023/08/18/tunupa-126-fin-del-camino-catalogo-de-impactos-de-carreteras-en-la-amazonia-boliviana/>

La CAF es la financiadora de las obras que ejecutan estas empresas chinas y en ningún momento hizo públicas las aplicaciones de políticas de reparación ni mitigación, pese a contar con tres salvaguardas para el cuidado del agua y su consumo.

Entre 2018 y 2019 se presentaron quejas en el tramo I de la vía Rurrenabaque – Riberalta ejecutada por China Railway Construction Corporation Limited, sobre fallas técnicas en las alcantarillas por ser pequeñas para el flujo en época de lluvias, lo que dio como resultado la inundación y afectación de al menos seis comunidades: Cosar, Villa Copacabana, San José, Puerto Salinas, Wawa 1 y Río Viejo. Para ser escuchadas, estas comunidades tuvieron que bloquear la vía (Jemio, 2019). Respecto al tramo III, en agosto 2023, la Organización Indígena de Cavineños de la Amazonía (OICA) se pronunció contra el colocado de 12 alcantarillas sobre la vía Australia - Baqueti por ser intransitable en tiempo de lluvias. Una de sus demandas era el resarcimiento por daños ambientales (Odpib, 2023). El banco de China, financiador de esta vía, es el inversor menos específico en el tema agua, pues apenas lo menciona “indirectamente” en la salvaguarda 6, respecto a humedales o bosques o en el Artículo 2 sobre categorías de grandes proyectos, así que pese a los antecedentes no se activó ninguna política de protección.

## **Fin del camino ¿a dónde nos lleva la marcha al norte?**

Con la pronta inauguración de las vías Rurrenabaque - Riberalta en Beni y Porvenir - El Choro en Pando se concreta el sueño de la conectividad de los corredores bioceánicos, que vinculen por el norte a Bolivia con Brasil y el Atlántico, y con Perú y el anhelado Pacífico. Estos son los sueños decimonónicos de las élites del caucho y el destino sellado de la Amazonía como mera mercancía y zona de tránsito y ocupación. En el siglo XX se estableció la Red de Vías Fundamentales (RVF) como parte de la agenda de la banca internacional y la planificación de los gobiernos neoliberales para convertir a Bolivia, por determinismo de ubicación geográfica en la región, como “país de tránsito del subcontinente” además de proveedor de materias primas (Villegas, 2013).

Como ya se mencionó, posteriormente la RVF engranó con el diseño de vinculación interoceánica de la Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica (IIRSA), una integración en bloques multinacionales con base en dos principios: conectar las inversiones en infraestructura vial entre países y consolidar el tránsito de mercancías para la exportación de *commodities*. Esta reprimarización de la región está presente en todo el proyecto; de hecho, Villegas (2013) apunta a que en la propuesta inicial solo se mencionaba al sector industrial de manera general y excepcional. Recientemente, en el primer semestre de 2024, actores de la banca internacional (BID, CAF, Fonplata – Banco de Desarrollo de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay– y el Banco Centroamericano de Integración Económica de Guatemala, Honduras,

El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) firmaron la Declaración de Sucre; un compromiso que busca confluir con inversiones en tres áreas, siendo la más relevante la llamada “infraestructura clave” para impulsar la construcción de carreteras, puentes y redes de energía, y así facilitar el comercio y la movilidad en la región (CAF, 2024; ABI, 2024). A esto se debe añadir el interés de China en la región para el mismo fin: extraer bienes y tener vías expeditas, como ya se mencionó.

La agenda permanente de los gobiernos de la región y la banca internacional sitúa a los análisis críticos sobre las carreteras e infraestructuras en la Amazonía frente a una aparente paradoja con el desarrollo local. Paradoja que parte de premisas generales como beneficios de las vías en reducción de tiempo y costos de desplazamiento para la población local, impulso a las actividades económicas y mejor accesibilidad a servicios de salud o educación, o alternativas laborales con el desarrollo del proyecto extractivo. Empero, la contradicción se resuelve con lo no dicho por parte de los lobistas de estas obras. El “efecto arrastre” que implica lo que viene con el pavimento: degradación y alteración de hábitat natural y bosques, modificación cultural e identitaria de comunidades; que unido al imaginario desarrollista profundiza la mercantilización de la Amazonía; explotación forestal, frontera agropecuaria, minería, especulación de la tierra con la consecuente colonización, unido a elevados niveles de ilegalidad y precarización de la vida de las comunidades.

La variable ambiental otorga un giro dramático al marco multi-institucional y de millonarias inversiones en la Amazonía, como el espacio donde se acentúan las presiones entre acumulación por desposesión y reproducción ampliada del sistema capitalista. David Harvey (2005) estableció que este avance del sistema solo es posible cuando se obliga a un nuevo territorio a explotar sus reservas o mercancías y/o se le obliga a recibir créditos o asistencia para adquirir el excedente de mercancías generadas en el territorio “prestamista”, como textualmente estipulan los intereses de los capitales chinos, por ejemplo. Estas condiciones de desarrollo geográfico desigual traen serias consecuencias, entre las que se perfila una cadena infinita de generación de zonas de sacrificio ambiental para satisfacer al modelo de desarrollo. Como sostiene Harvey (2005), este es el caso particular de infraestructuras físicas fijas “requeridas como base para la futura acumulación de capital”.

Para peor, según este análisis, el cumplimiento de las políticas de resguardo o salvaguardas no es efectivo, por lo que hay un evidente deslinde y omisión de responsabilidad por parte de las financieras. En términos ambientales, no es claro que las salvaguardas precautelen la integridad ecológica y mucho menos la seguridad de la población local, como se ha visto en el caso concreto de las afectaciones para el acceso y la protección de los cuerpos de agua: las millonarias inversiones se realizan sin seguimiento y con enormes pasivos mientras los supuestos beneficios no terminan de llegar.

A esto se suma la flexibilidad normativa y técnica que viabiliza las polémicas obras. Como se ha visto, carreteras trameadas o puentes sin aparentes

impactos, son la manifestación de estudios ambientales que apenas representan formularios. En muchos casos, estos estudios se pueden negociar con los bancos prestamistas. Esta falta de cumplimiento de estándares, poco a poco, está generando quiebres entre la institucionalidad pública, comunitaria y de las empresas. No por nada, desde 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) menciona la responsabilidad del Estado frente a violaciones o abusos de derechos humanos en casos de constructoras de carreteras (Redesca, 2020). A la par, el nivel de protestas que se han desarrollado en los casos citados deja en evidencia que, al no funcionar los canales de comunicación, no está garantizada la accesibilidad directa a los financiadores ni los tomadores de decisiones a nivel Estado si no es bajo presión, lo que definitivamente no es un buen indicador de fomento a la gobernanza ambiental e indígena en la Amazonía boliviana frente al inminente avance de los ríos de pavimento.

## Referencias

- ABC (2021). Ajuste presupuestario 2021 -2022. Plan de Pueblo Indígena (PPI) pueblo indígena tacana. Proyecto de carreteras nacionales e infraestructura aeroportuaria crédito 4923-BO. Organismo financiador: Banco Mundial - Asociación Internacional de Fomento (AIF). La Paz: ABC.
- ABC (2016). Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2020. La Paz: Administradora Boliviana de Carreteras.
- ABC y PCA Ingenieros consultores (2011). Estudio de evaluación social y elaboración de un plan para los pueblos indígenas de la zona del proyecto Ixiamas – San Buenaventura - Plan para Pueblos Indígenas. La Paz: ABC.
- Agencia Estatal de Información (2024). BID, Fonplata, CAF y el Banco Centroamericano firman la Declaración de Sucre para fortalecer la cooperación regional. En: ABI.bo
- Agramont, D. (2023). La creciente presencia de china en América Latina ¿relaciones win-win o una nueva dependencia? Un estado del arte. Friedrich Ebert Stiftung. En: library.fes.de
- Andersen L., del Granado S., Medinaceli A. *et al.* (2018) Análisis de la efectividad de las salvaguardas en tres proyectos carreteros en Bolivia. Global Development Policy Center, Boston University. Gegi Background Paper 003.
- ANF. (2022). Empresa china dejó sin agua desde 2017 a Puerto San Borja. En elpaís.bo.
- ANF. (2016). Sinohydro niega explotación laboral, pero no revela el salario de sus trabajadores. Fecha: 26/09/16.
- Añez, M. (2023). La Batalla de Bahía, un duelo a muerte y Gramsci contando la historia. En Público.bo. Fecha: 12/04/2023
- Banco Central de Bolivia (2023). Informe de la deuda pública externa al 30 de junio de 2023 . Fecha: noviembre, 2023.
- Banco de Desarrollo de América Latina CAF (2016). Salvaguardas Ambientales y Sociales. Septiembre 2016.

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial (2017). Banco Mundial Marco Ambiental y Social.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2020). Marco de política ambiental y social. Septiembre 2020.
- Banco de Desarrollo de América Latina CAF (2024). CAF adhiere a la Declaración de Sucre para fortalecer complementariedad entre bancos de desarrollo en la región. En: CAF.com
- Cauthin M. (2023). Tunupa 126: Fin del camino. Catálogo de impactos de carreteras en la Amazonía boliviana. En: Fundacionsolon.org
- Cauthin, M. (2023). La integración del norte amazónico de La Paz ¿a qué costo? En: Fundaciónsolon.org.
- Cauthin, M. (2018). ¿Qué sabemos de los Estudios de Impacto Ambiental de la carretera por el TIPNIS? En: Archivo Documental Isiboro Sécuré.
- Divico S. (2023). Correspondencia a diputado Jerges Mercado. Ref. Remito proyecto de ley integral de prioridad nacional y departamental contratación por excepción, continuidad y conclusión de obras de los tramos 1A, tramo 1B y tramo 2 en el departamento del Pando. Cite: SDM. INT. 12/2022-2023. En: Diputados.gob.bo. Fecha: 10/02/23.
- Export Import Bank of China (2022). Environmental and Social Framework The Export-Import Bank of China Version 1.0 September 2022.
- Fearnside, P. (2001). Soybean cultivation as a threat to the environment in Brazil. Environment Conservation. Vol. 28. Nro. 1. Marzo, 2001. Cambridge University Press: Reino Unido.
- Fleck L., Painter L. *et al.* (2006). Una carretera a través del Madidi: Un análisis económico-ambiental. Conservation Strategy Fund. Serie técnica #6.
- García, P. (2020). Villar Diego, BOLIVIA A VAPOR. ANTROPOLOGÍA HISTÓRICA DEL BARCO CAUCHERO (1880-1920). Journal de la société des américanistes 106-2.
- Gozálvez B. (2014). Dinámicas de ocupación del territorio amazónico del Norte de La Paz. En: El Norte de La Paz en la encrucijada de la integración. Juegos de actores y de escala en un margen boliviano. Coord. Perrier L. y Gozálvez B. Plural Editores. La Paz.
- Harvey, D. (2005). El "nuevo" imperialismo : acumulación por desposesión. Clacso: Buenos Aires.
- Herrera, V. (2018). Hablemos de empresas chinas y no de chinos en Bolivia. Serie: comprendiendo la compleja relación China - Bolivia. Cedla - Plataforma Energética. En: Cedla.org
- Jemio T. (2019). La Amazonía boliviana se queja por vía "más conflictiva del país". En: dialogochino.net
- Lopes, D., Quinet, S. y Salgueiro, F. (2021). América Latina y China: ¿beneficio mutuo o dependencia? Revista de la CEPAL N°135. Diciembre.

- Maldonado, J. (2015). Participación Patriótica del Capitán Arthur Posnansky en la Guerra del Acre. Revista de la biblioteca y archivo histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cong. v.9, n.36. La Paz.
- Molina, S. (2016). La presencia china en Bolivia ¿por qué el interés en una de las economías más pequeñas en la región? Cuadernos de coyuntura. Plataforma Energética N 15. Fecha: Junio, 2016.
- Mongabay Latam (2018). El sangriento y lucrativo tráfico de colmillos de jaguar en Bolivia. En: Mongabay.com. Fecha: 15/02/18.
- Oblitas, M. (2016). Las empresas chinas y los peligros de megaobras en la Amazonía boliviana. En Mongabay.com. Fecha: 30/09/16.
- Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (2023). Los indígenas cavineños bloquean la vía Riberalta-Rurrenabaque exigiendo resarcimiento de daños ambientales. En odpib.org.
- Opinión (2023). Diputado Héctor Arce culpa a Lima por muerte de "testigo protegido" en caso ABC. Fecha: 18 de marzo de 2023. En: Opinion.com.bo
- Paz, S. (1991). Hombre de río, hombres de camino: relaciones interétnicas en las nacientes del río Mamoré. Tesis. Cochabamba: Universidad Mayor de San Simón.
- Perrier, L. y González, B. (2014). Dinámicas territoriales en un margen boliviano. El Norte de La Paz en la encrucijada de la integración. En: El Norte de La Paz en la encrucijada de la integración. Juegos de actores y de escala en un margen boliviano. Plural Editores. La Paz.
- Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (2019). Informe empresas y derechos humanos: estándares interamericanos. En oas.org.
- Rivasplata F., Zanafría J., Torres M. et al. (2014). Altas y bajas en las salvaguardas ¿Cómo actúan BNDES, China ExIm Bank, CAF y BID? Resumen Ejecutivo. Lima: DAR.
- Romero-Muñoz, A., Fernández-Llamazares, Á., Moraes R., M. et al. (2019). A pivotal year for Bolivian conservation policy. Nat Ecol Evol 3, 866–869.
- Serge, M. y von der Walde, E. (2024). Introducción. Una edición cosmográfica. En: La vorágine. Una edición cosmográfica. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Slipak, A. (2014). América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o «Consenso de Beijing»? *Tema central*. NUSO N° 250 / Marzo - Abril 2014. Nueva Sociedad: Argentina.
- Tarqui, M. (2020). Plan Bohan, punto de inflexión en el desarrollo rural y agroindustria de Bolivia. Revista Apathapi 6-2. Mayo – Agosto.
- Vargas, M. (2012). Coord. Compensación por servicios ambientales de carbono. Una alternativa para reducir la deforestación en el TIPNIS / María Teresa Vargas Ríos; Noelia Garzón Rivero; Edil Osinaga Rico; Robert Müller. La Paz: Embajada Real de Dinamarca; Fundación Natura; Fundación PIEB.

Villegas, P. (2013). Geopolítica de las carreteras y el saqueo de los recursos naturales. CEDIB: Cochabamba.

Viscarra, M. (2021). Iris, una capitana en el Acre. En: Revista Rascacielos. Fecha: 11/10/21.

Von Stosch, K. (2014). Indígenas y campesinos en Alto Beni. Diferentes visiones en torno a tierra, territorio y recursos naturales. Fundación Tierra. La Paz.

# En búsqueda de financiamiento climático: Bolivia y su propuesta a la Coalición LEAF

---

*Guillermo Villalobos Moreira*

## **Resumen**

En 2021 fue lanzada la Coalición LEAF, una alianza pública - privada que dispuso USD 1,5 mil millones para financiar programas REDD+ jurisdiccionales en países con bosques tropicales, generando gran entusiasmo en varios gobiernos amazónicos. Para 2023, LEAF tenía registradas 12 propuestas provenientes de Ecuador, Brasil, Guyana, Colombia y Bolivia. Con el objetivo de brindar elementos de reflexión y discusión sobre la reciente propuesta boliviana, este artículo analiza los fundamentos y términos que la componen. Se constató que dos jurisdicciones, el departamento de Pando y el Territorio Indígena de Charagua, fueron postuladas para que reciban pagos basados en resultados por reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de sus bosques. De aceptarse esta propuesta, se generaría un ingreso importante para estas jurisdicciones por concepto de créditos REDD+. Finalmente, observamos cómo la postulación boliviana a estos fondos representa un nuevo capítulo en la estrategia nacional para acceder a financiamientos climáticos, y constituye un acercamiento formal a los mecanismos financieros basados en un enfoque de mercado.

## **Palabras clave**

Bosques, coalición LEAF, mercados de carbono, REDD+, financiamiento climático.

## Introducción

Desde la entrada en vigor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1994, gradualmente la cuestión ambiental y los bosques ganaron relevancia en la agenda internacional. Al reconocer la problemática asociada al cambio climático, la CMNUCC estableció un marco para estabilizar las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, instando a los países a adoptar políticas y medidas de mitigación.

Uno de los principales mecanismos complementarios que se crearon para lograr este propósito fueron los mercados de carbono. Introducidos por el Protocolo de Kyoto en 2005, los mercados de carbono son sistemas comerciales donde se intercambian permisos de emisiones o reducciones de emisiones de GEI (CDM Watch, 2012)<sup>15</sup>. La idea detrás de este concepto es que los GEI afectan la atmósfera de manera uniforme, independientemente de su origen; por tanto, la reducción de emisiones en cualquier lugar beneficia al planeta de manera equitativa. Bajo este enfoque, lo más conveniente es dejar que el mercado guíe el proceso, realizando las reducciones donde sea "económicamente más rentable" (Gilbertson y Reyes, 2009: 9).

Existen diferentes tipos de mercados de carbono. Inicialmente, con el Protocolo de Kyoto, se distinguían dos tipos bajo el denominado Mecanismo de Flexibilidad: el Comercio de Derechos de Emisiones (*cap and trade*) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (*offsetting*)<sup>16</sup>. Con la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2015, los mercados de carbono se categorizaron en dos grupos: los regulados, bajo la autoridad de la CMNUCC y regidos por el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París; y los voluntarios, que operan mediante compromisos voluntarios de reducción o compensación de emisiones, siguiendo estándares de certificación independientes (Fernández, 2022). Ambos grupos son reconocidos por el Acuerdo de París como instrumentos para facilitar alcanzar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) de las partes<sup>17</sup>.

Los bosques desempeñan un papel importante en el desarrollo de los distintos mercados de carbono. Inicialmente vinculados exclusivamente a "proyectos de sumideros"<sup>18</sup>, con el tiempo, los proyectos de compensación de emisiones

---

<sup>15</sup> Los permisos de emisión son intercambiados como Unidades de Emisión (UE) y las reducciones de emisión como Unidades de Reducción de Emisiones (URE), donde cada unidad es igual a una tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO<sub>2</sub>e).

<sup>16</sup> El esquema *cap and trade* permite a empresas de países industrializados intercambiar permisos de emisiones mediante la compra y venta de UE. Mientras el esquema *offsetting* permite a gobiernos, empresas o individuos compensar sus emisiones mediante inversiones en proyectos de compensación en países en desarrollo que generen URE.

<sup>17</sup> Las CND son medidas climáticas quinquenales diseñadas por las partes firmantes del Acuerdo de París en función de las circunstancias y capacidades nacionales con el fin de reducir las emisiones, adaptarse al cambio climático y alcanzar el objetivo general del Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura media mundial a menos de 2°C con respecto a los niveles preindustriales.

<sup>18</sup> Los proyectos de sumideros se diferencian de los de reducción de emisiones, ya que no buscan

(*offsetting*) relacionados a los bosques fueron adquiriendo gran relevancia. Actualmente la Reducción de Emisiones debido a la Deforestación y la Degradación de los bosques, Conservación y Aumento de las Reservas Forestales de Carbono y Gestión Sostenible de los Bosques (REDD+ por sus siglas en inglés) se constituye en el marco principal de la CMNUCC para la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal<sup>19</sup>.

Partiendo del entendiendo que la deforestación relacionada al uso y cambio de uso de suelos desempeña un papel importante en las emisiones globales de GEI, el marco REDD+ opera bajo el supuesto que los bosques solo pueden ser protegidos garantizando un flujo financiero constante. Así, por medio de este flujo financiero, se puede ofrecer una "compensación financiera" para estimular el cambio de hábitos destructivos de aquellos que deforestan el bosque (reducción de deforestación), así como valorizar y mantener el "servicio ambiental" de los bosques como sumideros de carbono (conservación del bosque) (WRM, 2023). A cambio de esta compensación financiera, los financiadores pueden obtener Unidades de Reducción de Emisiones (URE) y compensar sus emisiones domésticas (GFC, 2020).

Es bajo este contexto donde surgen nuevas iniciativas de financiación con el fin de ampliar estos programas de compensación de emisiones forestales. Una de las iniciativas más recientes y destacadas fue lanzada por el gobierno estadounidense en 2021 con el nombre de Coalición para la Reducción de las Emisiones mediante la Aceleración del Financiamiento Forestal (LEAF por sus siglas en inglés). Esta coalición pretende movilizar grandes fondos para financiar proyectos REDD+ jurisdiccionales por concepto de reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de bosques tropicales.

Desde que la Coalición LEAF entró en escena, muchos gobiernos amazónicos mostraron gran entusiasmo de participar de esta iniciativa, y Bolivia no fue la excepción. A mediados de 2022, el gobierno boliviano presentó su propuesta a la segunda convocatoria lanzada por la Coalición LEAF. Para principios de 2023, LEAF anunciaba que había aprobado la propuesta inicial de Bolivia y que el país entraba a una segunda fase de negociación, para una eventual firma de acuerdos vinculantes de compra de reducción de emisiones.

De concretarse este acuerdo, Bolivia podría acceder a un importante ingreso por la acreditación de URE ante LEAF, marcando así una nueva faceta en la estrategia nacional para obtener financiamiento climático. De ahí la importancia de aportar con una primera reseña de los fundamentos y términos

---

limitar la cantidad de GEI emitidos, sino "remover" temporalmente los GEI de la atmósfera mediante el "secuestro" o "almacenamiento" de carbono. Este proceso se logra a través de la "conservación" de un sumidero de carbono, como un bosque nativo, o mediante la "creación" de un sumidero, como plantaciones forestales (CDM Watch, 2012).

<sup>19</sup> Desde su introducción en 2005, REDD experimentó varios cambios conceptuales, evolucionando a través de distintas versiones. Las versiones más actuales, y enmarcadas en el Acuerdo de París, son REDD+ paisaje y REDD+ jurisdiccional, que buscan abarcar áreas más extensas bajo diferentes regímenes de tendencia y administración (Kill, 2022).

que componen la propuesta boliviana. Al basarse en una propuesta inicial, esta publicación no pretende realizar un análisis de cuestiones fundamentales como, por ejemplo, niveles de deforestación, transparencia o participación social. Más bien, busca generar un análisis crítico de los componentes clave de la propuesta boliviana, la Coalición LEAF y los mecanismos que la operan; y con esto, incentivar a que se genere un diálogo en torno a este financiamiento y los posibles efectos para los bosques bolivianos.

## **Nuevas iniciativas de mercados voluntarios de carbono: la Coalición LEAF**

La Coalición LEAF fue lanzada a principios de 2021 durante la Cumbre de líderes sobre el clima, como una alianza voluntaria entre gobiernos y empresas privadas, con el objetivo de brindar pagos basados en resultados a países con bosques tropicales y subtropicales.

En esencia, la Coalición LEAF crea un mercado voluntario de carbono para programas a gran escala basado en el enfoque REDD+ jurisdiccional. Estos programas son gestionados por gobiernos a nivel nacional o subnacional, con un mínimo de área boscosa de 2,5 millones de hectáreas por jurisdicción. En total, la Coalición pretende movilizar USD 1,5 mil millones en financiamiento para el pago basado en resultados a las jurisdicciones.

LEAF está compuesta por los gobiernos de Estados Unidos, Noruega, Reino Unido y la República de Corea. Además, participan 22 empresas multinacionales, incluyendo a Amazon, Bayer, Nestlé, BlackRock, Airbnb, Delta Air Lines y Walmart, entre otras<sup>20</sup>. También involucra a grupos de la sociedad civil y grandes ONG conservacionistas, como The Nature Conservancy y World Wildlife Fund<sup>21</sup>. La ONG estadounidense Emergent actúa como intermediaria entre las jurisdicciones forestales, los gobiernos donantes y el sector privado para movilizar los fondos destinados a estos proyectos; desempeñándose como el coordinador administrativo de LEAF.

### **Proceso para acceder a los fondos LEAF**

El proceso inicia con la convocatoria y la aplicación de las jurisdicciones interesadas, siguiendo un formato específico. Según la última convocatoria en 2023, LEAF busca financiar proyectos REDD+ jurisdiccionales estableciendo acuerdos de compra a futuro y compromisos de precios mínimos de USD 10 por tonelada para al menos 100 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO<sub>2</sub>e).

En línea con el artículo 6 del Acuerdo de París, el financiamiento provisto por LEAF permite el uso de los resultados de mitigación de emisiones para cumplir con los objetivos de las CND de las jurisdicciones participantes. El

---

<sup>20</sup> Los otros participantes son: Boston Consulting Group, E.ON, GSK, McKinsey & Company, PwC, Salesforce, Unilever, Burberry, EY, Inditex, Intertek, SAP, Landsec, Volkswagen Group y H&M Group. Véase: <https://www.leafcoalition.org/home>

<sup>21</sup> Las otras ONG son: Forest Trends, UN - REDD Programme, Environmental Defense Fund, WE Mean Business y Rainforest Foundation Norway.

proceso comienza evaluando el promedio de las emisiones históricas de la jurisdicción participante en los últimos cinco años para establecer un nivel de referencia. Las reducciones de emisiones se miden con base en este nivel, y los pagos se realizan tras la verificación y acreditación de las URE por certificadoras independientes aprobadas por LEAF.

Existen dos criterios fundamentales para ser seleccionado. Primero, las URE deben emitirse bajo el Estándar de Excelencia Ambiental REDD+ (conocido como TREES por sus siglas en inglés) para la reducción y eliminación de emisiones forestales operado por la Arquitectura para las Transacciones REDD+ (ART por sus siglas en inglés)<sup>22</sup>. Es decir, LEAF se compromete a comprar créditos de carbono forestal registrados y emitidos únicamente por la ART, conocidos como créditos TREES. El periodo de acreditación de estos créditos TREES es de cinco años, renovables en función a los compromisos alcanzados (Van Dam, 2022).

Como el enfoque de LEAF es a nivel nacional o subnacional, ART solo emitirá créditos TREES a nivel jurisdiccional. Estas jurisdicciones deben demostrar que tienen los derechos sobre el carbono o el derecho a beneficiarse del carbono. ART considera responsabilidad de las jurisdicciones el establecer colaboraciones con el sector privado, los pueblos indígenas y las comunidades locales bajo su administración; al igual que encontrar formas adecuadas de “anidar” otros proyectos que se estén desarrollando en su región (Van Dam, 2022)<sup>23</sup>.

El segundo requisito enfatiza la participación plena y efectiva de las partes interesadas, especialmente los pueblos indígenas y las comunidades locales. LEAF aplica los estándares ART/TREES por sus salvaguardas ambientales y sociales, exigiendo la adhesión a las salvaguardas de Cancún adoptadas por la CMNUCC<sup>24</sup>. LEAF ofrece tres opciones para que los territorios indígenas y comunidades locales puedan acceder a los fondos: 1) desarrollar su propio proyecto anidado en la propuesta jurisdiccional; 2) ser incluidos como beneficiarios en la propuesta de distribución presentada por la jurisdicción; o 3) que la jurisdicción sea reconocida como de Alta Cubierta Forestal y Mínima o Nula Deforestación (HFLD por sus siglas en inglés) y que los territorios reciban los créditos correspondientes (Van Dam, 2022)<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> El Estándar ART/TREES es un sistema que mide, notifica y verifica reducciones y absorciones de emisiones del sector forestal. Es operado por ART, un programa independiente y voluntario que establece y administra procedimientos estandarizados para acreditar URE bajo los parámetros de proyectos REDD+ jurisdiccionales.

<sup>23</sup> El concepto de anidación en ART/TREES se aplica a proyectos REDD+ que tienen lugar en territorios indígenas, tierras privadas o concesiones forestales en la jurisdicción propuesta y que desean integrarse en el abordaje jurisdiccional de REDD+ (Van Dam, 2022).

<sup>24</sup> Las salvaguardas de Cancún con respecto a REDD+ se relacionan con estructuras de gobernanza forestal transparentes, el respeto a los derechos y conocimientos, y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales.

<sup>25</sup> Para ser elegida como una jurisdicción HFLD se debe cumplir dos requisitos: al menos el 50 % de la jurisdicción debe tener una cubierta forestal y que la tasa de deforestación anual de los últimos 5 años sea menor a 0.5 % (Van Dam, 2022).

En caso de aceptación, la jurisdicción debe presentar un marco de inversión y una estrategia para el desarrollo sostenible con énfasis en la protección y restauración de los bosques, incluyendo las estrategias de acción REDD+. Es atribución de la jurisdicción decidir cómo usar los pagos recibidos durante el periodo de financiamiento, así como la distribución de los beneficios entre los actores involucrados (Van Dam, 2022). Finalmente, en función a cuatro vías establecidas por LEAF, las jurisdicciones proveedoras deben indicar cómo desean realizar las transacciones con los financiadores (Tabla 1).

**Tabla 1. Las vías de transacción de la Coalición LEAF**

Vía uno	Los contribuyentes soberanos realizan pagos basados en resultados sin tomar la titularidad de las URE ni usarlas para sus CND. El país proveedor que recibe los pagos debe retirar las URE del registro de ART y puede incluirlos en la contabilidad de su CND.
Vía dos	Los compradores del sector privado realizan pagos basados en resultados sin obtener la titularidad de las URE. El país proveedor que recibe los pagos debe retirar las URE del registro ART y puede incluirlos en la contabilidad de su CND.
Vía tres	Los compradores del sector privado realizan pagos basados en resultados y adquieren la titularidad de las URE. El proveedor transfiere los títulos a Emergent, que luego los entregará al comprador. El país proveedor incluye la mitigación en la contabilización de su CND.
Vía cuatro	Los compradores del sector privado realizan pagos basados en resultados y obtienen la titularidad de las URE, utilizándolas para cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones. El proveedor transfiere las URE a Emergent, que luego los transferirá al comprador. El país proveedor ajusta la contabilización de su CND para que la mitigación no se contabilice.

Fuente: Términos de propuestas Coalición LEAF, 2023.

## La propuesta boliviana ante la Coalición LEAF

La propuesta boliviana parte de la decisión 16/CP.21 del Acuerdo de París, que alienta a proporcionar recursos financieros para enfoques de políticas alternativas no relacionadas con el mercado. Bolivia ha sido precursora en la adopción de este enfoque alternativo a través de su Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para la Gestión Integral y Sostenible de los Bosques y la Madre Tierra (Rojas, 2013), que se establece como el mecanismo nacional para la gestión forestal (González, 2017). En este contexto, apelando

a la decisión 16/CP.21, la propuesta boliviana sostiene que este Mecanismo Conjunto estaría legalmente facultado para recibir pagos basados en resultados provenientes de fondos voluntarios tales como LEAF.

Con base en esto, Bolivia propone dos jurisdicciones, el departamento de Pando y el Territorio Indígena de Charagua, como áreas contables para generar los créditos TREES. Estas dos jurisdicciones albergan 12,5 millones de hectáreas de bosque, de las cuales, 6,1 millones de hectáreas corresponden a bosques amazónicos e inundables (Pando) y 6,4 millones de hectáreas corresponden a bosques chaqueños (Charagua). Según la propuesta enviada, hasta 2020 la deforestación en estas jurisdicciones era equivalente al 5 y 6 % del área boscosa respectivamente, la mayoría ocurrida en los últimos cinco años.

### **Los derechos sobre la reducción y remoción de emisiones**

La propuesta presentada a LEAF señala al Estado boliviano como el único titular de los derechos sobre el carbono, así como de los beneficios derivados de las Reducciones y Remociones de Emisiones (RRE) –es decir, las URE– obtenidas mediante los pagos basados en resultados y acreditadas como créditos TREES.

La argumentación boliviana se basa en la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que los recursos naturales –incluyendo los bosques– son considerados estratégicos y de interés público (art 348); por tanto, su administración y explotación corresponde exclusivamente al Estado (art 349). Además, al reconocer la propiedad social de los recursos naturales, solo el Estado tiene la facultad de registrar los recursos naturales en mercados de valor o utilizarlos en transacciones financieras (art 357). En este sentido, la propuesta boliviana interpreta a las RRE como un recurso natural derivado de los bosques, de carácter estratégico y de interés público y, por ende, sujeto al aprovechamiento por parte del Estado.

Aunque la propuesta boliviana ante LEAF no hace mención específica a las RRE, los redactores de la propuesta argumentan que “por interpretación legal”, la anotación o registro de RRE debe llevarse a cabo a través de instituciones de ámbito estatal (Emergent, 2022: 8).

En consecuencia, los beneficios derivados de las RRE corresponden exclusivamente al Estado boliviano. El mismo que está encomendado a garantizar un acceso equitativo de estos beneficios, con una participación prioritaria para los territorios que alberguen dichos recursos, así como para las comunidades indígenas y campesinas (art 353). En el caso de Charagua, la propuesta enfatiza un “importante porcentaje” de los beneficios de las RRE para el Territorio Indígena de Charagua, según determina la CPE y en función a los procedimientos del Mecanismo Conjunto (Emergent, 2022: 9); pero no proporciona cifras específicas de esta distribución.

### ***Perspectivas de reducción de deforestación, emisiones y vías de transacción***

La Coalición LEAF busca compensar financieramente por cada URE certificada según el estándar ART/TREES. Para calcular estas reducciones, el gobierno boliviano propone instaurar un sistema nacional de seguimiento forestal, encargado del Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las emisiones generadas por la deforestación y degradación de los bosques.

Este sistema calculará la deforestación anual en las jurisdicciones propuestas, recopilando datos sobre actividad y factores de emisión a nivel jurisdiccional; mientras que las reducciones de emisiones se medirán con base en el Inventario de GEI del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. A fin de registrar las reducciones como unidades de CO<sub>2</sub>e, se plantea crear una "infraestructura de registro transparente" supervisada por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), previniendo así la duplicación, el doble uso y la doble reclamación de las URE (Emergent, 2022: 10).

Es en este contexto que se desarrolló a principios de 2023 el primer Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por Deforestación (NREF) de Bolivia. Este nivel sirve como base para la creación de un sistema nacional de MRV con el objetivo de mejorar y orientar la CND del país. Pero también actúa como referencia para los niveles de deforestación y emisiones anteriores a la aplicación e implementación del financiamiento de LEAF.

En este marco, la propuesta de reducción de emisiones de Bolivia se basa en el promedio del quinquenio de referencia del NREF (2016 - 2021). Según esta estimación, durante el primer año de financiamiento –y mientras se negocian e implementan las medidas de reducción– se espera una reducción del 10 % en las emisiones por deforestación y degradación del bosque; seguida de una reducción del 20 % en el segundo año y del 30 % a partir del tercer año. Estos objetivos están alineados con las metas de la CND nacional, que busca reducir la deforestación en un 80 % para el año 2030, en comparación con la línea base de 2020.

Así, durante el período del financiamiento (2023 - 2027), se prevé obtener alrededor de 8,7 millones de URE (los créditos TREES) disponibles para acreditar transacciones ante la Coalición LEAF. Para ello, el gobierno nacional ha seleccionado las vías uno y dos como mecanismos para estas transacciones; donde los financiadores soberanos y los compradores del sector privado realizan pagos basados en resultados, sin adquirir la titularidad de las URE. En ambos casos, Bolivia, como país que alberga las jurisdicciones proveedoras, puede incorporar la mitigación de emisiones en la contabilidad de su CND.

De alcanzarse este objetivo, teniendo en cuenta el precio mínimo establecido en la última convocatoria de USD 10 por tonelada de CO<sub>2</sub>e reducido, se estima que Bolivia podría obtener alrededor de USD 87 millones durante el período especificado (Tabla 2).

Tabla 2. Bolivia: Contabilidad de carbono de TREES

Vintage (año)	ÁRBOLES Nivel de crédito (tCO2e)	Emisiones previstas (tCO2e)	Reducción de emisiones (tCO2e)	Deducción del búfer (tCO2e)	Deducción de fugas (tCO2e)	Deducción por incertidumbre (tCO2e)	Deducciones por CC y Derechos (tCO2e)	Créditos totales de TREES (tCO2e)	Posibles ingresos (10Usd/tCO2e)*
2023	10,482,488	9,434,239	1,048,249	104,825	209,65	7,285	-	726,489	7.264.890
2024	10,482,488	8,385,990	2,096,498	209,65	419,3	14,57	-	1,452,978	14.529.780
2025	10,482,488	7,337,741	3,144,746	314,475	628,949	21,855	-	2,179,467	21.794.670
2026	10,482,488	7,337,741	3,144,746	314,475	628,949	21,855	-	2,179,467	21.794.670
2027	10,482,488	7,337,741	3,144,746	314,475	628,949	21,855	-	2,179,467	21.794.670
<b>Total</b>	<b>52,412,438</b>	<b>39,833,453</b>	<b>12,578,985</b>	<b>1,257,899</b>	<b>2,515,797</b>	<b>87,42</b>	<b>-</b>	<b>8,717,869</b>	<b>87.178.680</b>

Fuente: Emergent, 2022

\*Cálculo realizado en base al precio mínimo establecido por la Coalición LEAF de USD 10 por tonelada de CO2e reducida

### Medidas para reducir la deforestación y distribución financiera

La propuesta referente a la deforestación se fundamenta en la Estrategia de Reducción de la Deforestación concebida en 2023. Esta estrategia guía medidas de mitigación y adaptación en los sectores forestales y agrícolas de la CND, centrándose en la reducción de la deforestación, principalmente la ilegal y en áreas protegidas. En este sentido, los porcentajes de reducción de deforestación previstos se alcanzarán mediante el fortalecimiento de los mecanismos de control y la gobernanza forestal, además de implementar compensaciones financieras.

En cuanto a los recursos procedentes de la Coalición, se propone destinarlos para cumplir con los compromisos de la CND, preparar al país para el registro TREES y financiar actividades para reducir la deforestación, como el desarrollo del MRV y el respaldo a proyectos sostenibles en comunidades locales. Mientras que, para la distribución de los beneficios, se plantea construir un sistema de distribución de beneficios supervisado por la APMT. Este sistema se abordará de forma progresiva, de acuerdo con las metas nacionales para la distribución de beneficios a ambas jurisdicciones; tomando en cuenta la supervisión nacional y el desarrollo de capacidades en los niveles de gobernanza.

Sin embargo, no se aclara cómo se realizará la distribución financiera entre los distintos actores. Simplemente se menciona que el Estado garantizará una distribución equitativa según los títulos de propiedad acreditados, ya sean privados, comunitarios o fiscales; identificando al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como posible intermediario financiero para el desembolso de los fondos.

## Una iniciativa inmersa en críticas

La aparición de LEAF generó entusiasmo en muchos gobiernos del sur global, pero también levantó críticas importantes, principalmente con relación a las limitaciones y la efectividad de los estándares empleados por LEAF, al igual que un gran reparo sobre los miembros y la percepción de la problemática de la deforestación que tiene la Coalición.

Por un lado, están las dudas sobre las salvaguardas ambientales del estándar ART/TREES utilizado por la Coalición. Un estudio de Climate Focus sobre varios estándares que certifican créditos de carbono para REDD+ resalta deficiencias en el estándar ART/TREES en la cuantificación de las emisiones de GEI, especialmente con relación a las "fugas" de emisiones y la "adicionalidad" del secuestro de carbono (Chagas *et al.*, 2020; Amazon Watch, 2022).

Esta situación se repite en varios estándares utilizados por los mercados voluntarios de carbono. A principios de 2023, por ejemplo, una investigación realizada por The Guardian sobre la empresa Verra –la principal entidad certificadora de créditos de carbono forestal a nivel mundial– señalaba que más del 90 % de sus créditos de compensación en bosques tropicales (los más vendidos por Verra) eran probablemente "créditos fantasmas", careciendo de genuinas reducciones de carbono (Greenfield, 2023).

Por otro lado, están las dudas sobre las salvaguardas concernientes a los pueblos indígenas. Aunque LEAF subraya su compromiso de asegurar la participación de estos actores y el cumplimiento de las salvaguardas de Cancún, se critica que bajo el estándar ART/TREES estas salvaguardas no son de aplicación inmediata (Van Dam, 2022). Además, el estándar ART/TREES no exige cumplir con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ni un compromiso respecto a mecanismos de consulta con los pueblos indígenas y comunidades locales (Amazon Watch, 2022; Frechette, 2021).

En este sentido, ART/TREES es fuertemente criticado por su enfoque estadocéntrico y su falta de reconocimiento de los territorios indígenas como jurisdicciones. Puesto que, a menos que estos territorios sean legalmente reconocidos como jurisdicciones autónomas y sean postulados por sus gobiernos nacionales como jurisdicciones REDD+ (como en el caso de Bolivia), los territorios indígenas generalmente no pueden solicitar fondos LEAF de manera independiente y directa (Van Dam, 2022). Esta situación crea una problemática adicional, lo que Van Dam (2022: 8) denomina como "apropiación del carbono", que favorece un potencial acaparamiento de los derechos sobre el carbono por parte de los gobiernos nacionales.

Por otra parte, se hallan las críticas al marco REDD+. Uno de los elementos más criticados es su enfoque de "compensación financiera" como mecanismo para frenar la deforestación. Esto debido a que necesariamente implica compensar a los actores involucrados en la deforestación con el fin que

cambien sus hábitos destructivos. Como resultado, muchos de los fondos de proyectos REDD+ se traducen en beneficios económicos adicionales a sectores asociados a la deforestación, como el forestal y el agroindustrial (WRM, 2020). En contraste, aquellos actores que conservan el bosque son excluidos, ya que no tienen posibilidad de reducir la deforestación (la adicionalidad que busca REDD+) (Van Dam, 2022).

Por ello, muy pocos proyectos REDD+ logran canalizar fondos para comunidades locales y pueblos indígenas cuyos medios de vida dependen de un bosque intacto (WRM, 2023). Es más, desde que REDD+ entró en escena, diversas publicaciones resaltan la relación existente entre el desarrollo de proyectos REDD+ con la ocupación y acaparamiento de tierras boscosas, y el atropello de derechos territoriales de comunidades y pueblos indígenas (WRM, 2023). Algunos ejemplos recientes se dieron con empresas madereras en los estados amazónicos de Pará y Amapá en Brasil que emplearon fondos REDD+, para reemplazar bosques nativos por plantaciones forestales en territorios indígenas (WRM, 2023a). En Colombia, proyectos REDD+ generaron créditos adquiridos por empresas mineras locales, acusadas de agresiones y daños a territorios de comunidades en el Caribe colombiano (Gilbertson, 2022). Casos similares se observaron en territorios indígenas en la Amazonía ecuatoriana, donde programas estatales REDD+ generaron compensaciones mientras el gobierno otorgaba concesiones mineras en esos mismos territorios sin el consentimiento de las comunidades (Amazon Watch, 2022).

En el caso de Bolivia, existieron algunas experiencias en la primera década del siglo, como el Proyecto de Acción Climática en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (Asquith *et al.*, 2002), así como algunos programas piloto de REDD indígena, que sirvieron como operaciones preparatorias para un programa de REDD - Amazonía. Sin embargo, ninguno de estos proyectos logró desarrollarse por completo y se tiene poco registro de sus repercusiones.

Asimismo, diversos estudios evidencian que, a pesar del notable flujo financiero destinado a proyectos REDD+ en distintas partes del mundo, la mayoría de ellos no ha logrado reducir significativamente la deforestación y la degradación forestal (Lohmann, 2016; WRM, 2023). Incluso existen ejemplos de cómo algunos proyectos REDD+ contribuyeron a mantener o inclusive aumentar los niveles de deforestación (Simonet *et al.*, 2015; Kill, 2022).

Finalmente, distintos autores señalan cómo REDD+, al ser un mecanismo que permite la continuación del uso de combustibles fósiles, facilita que países y empresas industrializados mantengan sus modelos productivos con altas emisiones de GEI; contribuyendo así a intensificar la crisis climática global (Anderson, 2012; Lohmann, 2016; Kill, 2022). En este sentido, se resalta cómo los mecanismos de compensación de emisiones que fomenta la Coalición LEAF permiten a empresas contaminadoras “compensar sus emisiones” y “lavar su imagen” por una más “verde” y “sostenible” (WRM, 2023a: 5), proceso más conocido como *greenwashing*.

## Conclusiones

La propuesta boliviana refleja el interés del gobierno boliviano en acceder a fondos mediante pagos basados en resultados por la reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación del bosque, y marca un compromiso para establecer un futuro Acuerdo de Compra de Reducción de Emisiones con la Coalición LEAF. De concretarse este acuerdo y de lograrse los objetivos planteados en la propuesta preliminar, Bolivia podría recibir aproximadamente USD 87 millones en forma de créditos de reducción de emisiones. Un ingreso que, bajo el escenario de disminución de la renta percibida por la venta de hidrocarburos (Gómez, 2020), genera un creciente interés en las esferas gubernamentales.

Este evento marca un nuevo capítulo en la estrategia nacional para obtener financiamiento climático. A diferencia de las financiaciones recibidas en el pasado a través de la cooperación basada en resultados, con LEAF el gobierno nacional busca un financiamiento que lo conmina a generar y acreditar URE, según los estándares ART/TREES, para luego incluirlas en el cálculo de su CND. Esto implica una aceptación *ipso facto* de las dinámicas con las que operan estos mecanismos financieros.

Esta situación contraviene los principios en que se fundamentó el Mecanismo Conjunto y contradice el discurso predominante del gobierno boliviano en las distintas esferas de la CMNUCC. Además, al buscar financiamiento a través de la segunda vía propuesta por la Coalición, se contribuye a que empresas conocidas por su impacto ambiental y social negativo realicen un cuestionable lavado de su imagen institucional o *greenwashing*.

Otro aspecto para considerar es el nivel de generalidad de las propuestas y de la información presentada por Bolivia. Si bien se trata de una propuesta inicial, la información sobre las perspectivas y medidas para reducir la deforestación en las jurisdicciones propuestas, la distribución de recursos entre las comunidades locales y territorios indígenas o el proceso participativo es muy limitado. Esto genera grandes incertidumbres respecto a este proceso que debería concretarse con la firma de un Acuerdo de Compra de Reducciones de Emisiones entre el gobierno boliviano y la Coalición LEAF.

Si bien a nivel regional existe amplia evidencia de cómo los mecanismos de compensación de carbono no lograron reducir los índices de deforestación y propiciaron el atropello y la ocupación de territorios indígenas y comunales, existen múltiples voces que consideran estos mecanismos como una alternativa viable y rentable para los bosques y para las comunidades indígenas del país.

Esta situación resalta la complejidad y la controversia inherente a estos mecanismos financieros. Al tiempo que nos obliga a iniciar un debate crítico sobre la coherencia de la propuesta boliviana, los posibles impactos y riesgos asociados a estos mecanismos, y el papel que tienen las comunidades locales y pueblos indígenas. Es en medio de estas complejidades, y más allá del financiamiento externo, que surge la necesidad de promover un proceso

de diálogo informado, transparente e inclusivo orientado a la construcción de una política participativa de gestión y protección integral del bosque.

## Referencias

- Amazon Watch (2022). *Una hoja de un libro antiguo. ¿Cómo la coalición leaf permite el colonialismo del mercado de carbono?* (Oakland, CA).
- Anderson, K. (2012). "The inconvenient truth of carbon offsets", *Natur*, Vol. 484, No. 7, 4 abril 2012.
- Asquith, N.; Vargas, M.; Smith, J. (2002). "Can Forest-Protection Carbon Projects Improve Rural Livelihoods? Analysis of the Noel Kempff Mercado Climate Action Project, Bolivia", *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, No. 7, 01 diciembre 2002, pp. 323-337.
- Aukland, L.; Moura, P.; Brown, S. (2003). "A conceptual framework and its application for addressing leakage: the case of avoided deforestation", *Climate Policy*, Vol. III, No. 2, 01 junio 2003, pp. 123-136.
- CDM Watch (2012). *Manual del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Un recurso para ciudadanos, activistas y ONGs*, Tool Kit CDM Watch Scrutinizing Carbon Offsets (Alemania).
- Chagas, T.; Galt, H.; Lee, D.; Neeff, T.; Streck, C. (2020). *A close look at the quality of REDD+ carbon credits*, (Climate Focus).
- De Freitas Netto, S.; Falcão, M.; Berreza, A.; Da Luz, G. (2020). "Concepts and forms of greenwashing: a systematic review", *Environ Sci Eur*, Vol. 32, No. 19, 11 febrero 2020.
- Emergent (2022). *Propuesta Estado Plurinacional de Bolivia*. (The LEAF Coalition).
- Fernández, J. (2022). "Mecanismos de mercado y no mercado: artículo 6 del Acuerdo de París", *The Climate Reality Project América Latina*, No. 5, 26 octubre 2022.
- Frechette, A. (2021). *Commentary: Reflections on ART-TREES, Jurisdictional REDD+ and Nature-Based Solutions*, (Rights and Resources Initiative).
- GFC (2020). *15 years of REDD+ Has it been worth the money?* Global Forest Coalition, 01 septiembre 2020.
- Gilbertson, T. (2022). "Carbón y carbono manchados con sangre en Colombia" en *15 años de REDD: Un mecanismo intrínsecamente corrupto* (Montevideo: Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales), pp. 53-59.
- Gilbertson, T. y Reyes, O. (2009). "Carbon Trading: How it works and why it fails", *Critical Currents*, No. 7, noviembre 2009 (Dag Hammarskjöld Foundation).
- Gómez, W. (Coord.) (2020). *Situación de la Renta Petrolera en Bolivia*. (La Paz: Fundación Jubileo).
- González, Joel H. (2017). "Resistencia propositiva: El rol de Bolivia frente al Programa REDDplus", *Anuario en Relaciones Internacionales*, Instituto de Relaciones Internacionales, 01 septiembre 2017.
- Greenfield, P. (2023). "Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis shows", *The Guardian*, 18 enero 2023.

- Kill, J. (2022). "¿Qué se esconde detrás de las letras R - E - D - D?" en *15 años de REDD: Un mecanismo intrínsecamente corrupto* (Montevideo: Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales), pp. 14-26.
- Lohmann, L. (2016). "Neoliberalism's Climate" en Springer, Simon; Birch, Kean; Macleavy, Julie (Eds.), *Handbook of Neoliberalism*, (Routledge), 01 enero 2016.
- Rojas, R. (coord.) (2013). *Concreción de acciones del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de Bosques, en los territorios priorizados - Chiquitanía Norte, Norte de La Paz, Pando y Riberalta*. (La Paz: CIPCA).
- Simonet, G.; Karsenty, A.; Newton, P.; de Perthuis, C.; Schaap, B.; Seyller, C. (2015). "REDD+ projects in 2014: an overview based on a new database and typology", *Les Cahiers de la Chaire Economie du Climat Information and debates series*, No. 32, julio 2015.
- Song, L., (2019). Una verdad incluso más inconveniente. Por qué los créditos de carbono para preservación forestal podrían ser peores que no tener nada. *ProPublica*.
- Van Dam, C. (2022). *Hacia una arquitectura de financiación climática más inclusiva*. (ICGT-FT).
- WRM (2020). "Green Capitalism Expanding on Communities and Territories", *Boletín*, No. 251, julio/agosto 2020 (Montevideo: World Rainforest Movement).
- WRM (2023). "Extractivist onslaught and carbon markets in the forests: impacts and resistances", *Boletín*, No. 265, marzo 2023 (Montevideo: World Rainforest Movement).
- WRM (2023a). "REDD y la Economía Verde agravan las opresiones y la deforestación en Pará, Brasil", *Boletín*, No. 266, julio 2023 (Montevideo: World Rainforest Movement).

# AGUA A MERCED DE AMENAZAS EXTRACTIVAS Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO





# Sacrificar el agua: desconexión entre las valoraciones del agua para el bienestar y los modelos de desarrollo en los Llanos de Moxos

---

*Andrea Baudoin Farah, Silvia Ten, Héctor Angarita,  
Adrian Vogl y Stacie Wolny*

## Resumen

La expansión de actividades extractivas a gran escala en la Amazonía amenaza el bienestar de las personas, en especial el bienestar de quienes dependen directamente de las contribuciones que proveen los ecosistemas (alimentos, reproducción de identidad cultural, control del clima, etc.). Visibilizar los valores de estas contribuciones para distintos actores es fundamental para promover políticas públicas sostenibles, equitativas e incluyentes. Aquí presentamos algunos de los resultados de un estudio realizado entre 2020 y 2022 en los Llanos de Moxos (Beni, Bolivia), con el fin de entender: qué contribuciones de la naturaleza a las personas (CNP) son más valoradas por distintos actores; cómo perciben su disponibilidad y los factores que las amenazan; y cómo el cambio climático y el cambio de uso de suelo pueden afectarlas en el futuro. Todos los actores sociales valoran altamente la provisión de agua en cantidad y calidad suficientes para garantizar la vida, las actividades productivas y el soporte de otros beneficios. Reconocen también que la provisión de agua está mermando debido al cambio climático, al cambio de uso de suelo y a la expansión de actividades extractivas. Se prevé que esta tendencia de pérdida y degradación del agua continúe por causa del cambio climático y se vea exacerbada en escenarios futuros de expansión de

la frontera agrícola. Sin embargo, estas observaciones no se traducen en el reconocimiento de la necesidad de orientar los modelos de desarrollo hacia alternativas que permitan garantizar la provisión de estas contribuciones en el largo plazo.

### **Palabras clave**

Llanos de Moxos, agua, Plan de Uso de Suelo (PLUS), cambio climático, escenarios futuros.

## Los Llanos de Moxos: un paisaje definido por el agua

Los Llanos de Moxos son un sistema complejo, único y relativamente poco estudiado de humedales, sabanas inundadas y bosques que abarca alrededor de 120.000 km<sup>2</sup> del límite sudoriental de la cuenca del Amazonas, localizados casi en su totalidad en el departamento del Beni, en Bolivia (Figura 1). La región tiene un clima tropical (temperaturas medias de 24-29 °C y precipitaciones medias de 1.900 mm) y un régimen hidrológico único, que determina en gran medida la forma en que las personas interactúan con el paisaje (GTLM, 2022). Las inundaciones estacionales, concentradas entre noviembre y marzo, están determinadas por la forma en que el agua, los nutrientes y los sedimentos que se originan en los Andes interactúan en las tierras bajas amazónicas. Estas inundaciones estacionales anegan partes masivas del paisaje durante periodos variables, dando lugar a ecosistemas, estrategias de subsistencia y sistemas de uso del paisaje diversos y dinámicos (GTLM, 2022). Los Llanos de Moxos conforman un paisaje singular en el contexto biogeográfico de la Amazonía por la predominancia de sabanas y humedales; su mosaico de ecosistemas constituye el complejo de sabanas inundables más grande de toda la cuenca amazónica. Por ello, las prioridades para su conservación y para garantizar el bienestar de sus habitantes no pueden enmarcarse en las narrativas dominantes sobre la Amazonía, centradas en los bosques y la deforestación. Los Llanos de Moxos nos invitan a tener una mirada más amplia sobre los ecosistemas que sostienen la macroregión amazónica, y a darle particular importancia al agua y los humedales como proveedores de múltiples contribuciones al bienestar (como la regulación hídrica, la provisión de peces y biodiversidad de agua dulce, el control de erosión, la reproducción de la fertilidad de los suelos, entre otros) (GTLM, 2022).

El paisaje de los Llanos de Moxos es un paisaje biocultural (Pugnetti *et al.*, 2013) debido a su elevada, antigua y claramente diferenciada diversidad biológica y cultural (GTLM, 2022). En la amplia gama de hábitats de los Llanos de Moxos se puede encontrar una diversidad media a alta de varios taxones terrestres y de agua dulce (por ejemplo: peces, aves, pastos, murciélagos, palmeras, anfibios, reptiles, mariposas y mamíferos). Dieciocho grupos indígenas oficialmente reconocidos viven en Beni, la mitad del total de Bolivia. Otro testimonio de la larga conexión entre la gente, la naturaleza y el espacio en Llanos de Moxos es el patrimonio arqueológico que demuestra una ocupación de por lo menos 10.000 años (Lombardo *et al.*, 2020), incluyendo recientes descubrimientos que se constituyen en los sitios de mayor monumentalidad de toda la cuenca amazónica (Prümers *et al.*, 2022). Actualmente, una diversidad de actores vive en los Llanos de Moxos realizando una serie de actividades económicas que dependen intrínsecamente del paisaje: desde la ganadería extensiva en las llanuras hasta las actividades de aprovechamiento diversificado en las comunidades y territorios indígenas (como cacería y pesca de subsistencia, agricultura y ganadería de pequeña escala, recolección de productos maderables y no maderables, etc.) (GTLM, 2022; Ten, 2022).

Más allá de su belleza y relevancia biocultural, la región ha desempeñado un papel fundamental en el avance de los derechos indígenas en Bolivia y América Latina, en particular el reconocimiento legal de los territorios indígenas y la participación de los pueblos indígenas en la conservación (GTLM, 2022). Las organizaciones indígenas del Beni han estado a la vanguardia de movimientos y logros históricos de autonomía territorial (Lehm, 1999), así como de novedosos acuerdos de gestión y gobernanza de áreas protegidas (por ejemplo, Estación Biológica del Beni, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore - Tipnis). El otorgamiento de mayores derechos de tenencia con la titulación colectiva de territorios indígenas no ha estado exento de controversias, como tampoco lo han estado los esfuerzos posteriores por ejercer la autonomía mediante la implementación de vías de desarrollo propias a través, entre otros, del autogobierno y la autogestión de los recursos naturales (por ejemplo, Baudoin Farah, 2019; 2024). Beni sigue estando en el centro de complejos debates sobre los significados y las vías del desarrollo y del bienestar, los derechos territoriales, la justicia, la equidad y las relaciones con la naturaleza.

El paisaje biocultural de los Llanos de Moxos enfrenta una serie de presiones como el cambio climático, el cambio de uso del suelo, infraestructura y desarrollo urbano mal planificados, la expansión de la extracción minera y exploración hidrocarbúrfica, el uso no sostenible de los recursos naturales y la pérdida de diversidad cultural y del patrimonio arqueológico único de la región (GTLM, 2022). En particular, el recientemente aprobado Plan de Uso del Suelo para el Beni (PLUS) (GOBE, 2019), propone cambios importantes en la zonificación del uso del suelo, abriendo la puerta a la transformación de áreas masivas de sabanas nativas –actualmente utilizadas para la ganadería extensiva de baja densidad–, a la agricultura mecanizada. La construcción de escenarios futuros y la evaluación de los efectos del cambio climático y de los cambios en el uso del suelo, sobre las contribuciones de la naturaleza al bienestar de las personas (CNP), pueden ser útiles para promover políticas públicas sostenibles, equitativas e incluyentes y apoyar a distintos actores de la región en sus procesos de toma de decisiones.

En este contexto y para promover la conservación y el desarrollo sostenible de los Llanos de Moxos, se conforma en 2020 el Grupo de Trabajo para los Llanos de Moxos (GTLM), un consorcio de universidades, organizaciones de la sociedad civil y donantes. El GTLM ha desarrollado un programa para la conservación y el desarrollo sostenible de los Llanos de Moxos (GTLM, 2022), en el cual se delimitan áreas estratégicas de intervención en investigación, apoyo a medios de vida sostenibles, gestión territorial, comunicación y políticas públicas. Este artículo presenta parte de los resultados del proyecto de investigación: “Construcción de una visión colectiva de desarrollo sostenible para los Llanos de Moxos”, desarrollado en el marco del GTLM por el Centro de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente (Cibioma) y el proyecto Capital Natural de la Universidad de Stanford (NatCap) entre 2020

y 2022. El objetivo general del proyecto es evaluar los impactos de distintos escenarios futuros de desarrollo sobre CNP priorizadas por los actores locales, y así facilitar la toma de decisiones para avanzar hacia un futuro más sostenible. Para ello, se desarrolló una metodología mixta que incluyó modelaciones espaciales, climáticas e hidrológicas, así como ejercicios de mapeo participativo y de priorización con actores clave identificados a través de un mapa de actores (Ten, 2022).

En este artículo presentamos específicamente los resultados sobre las CNP relacionadas al agua. La siguiente sección está articulada en torno a tres resultados clave: 1) la importancia de las CNP con relación al agua para los habitantes del Beni; 2) el reconocimiento local sobre qué tanto la cantidad como la calidad del agua están disminuyendo; y 3) la magnitud de los impactos del cambio climático y de las transformaciones del paisaje sobre las CNP relacionadas al agua. En la sección de conclusión, reflexionamos sobre el desfase entre las valoraciones locales y las narrativas dominantes de desarrollo para el Beni. Concluimos con reflexiones respecto al potencial del agua como eje articulador de visiones más sostenibles y justas de desarrollo.

## **Resultados clave de la exploración de prioridades y aspiraciones de desarrollo entre diversos actores de los Llanos de Moxos**

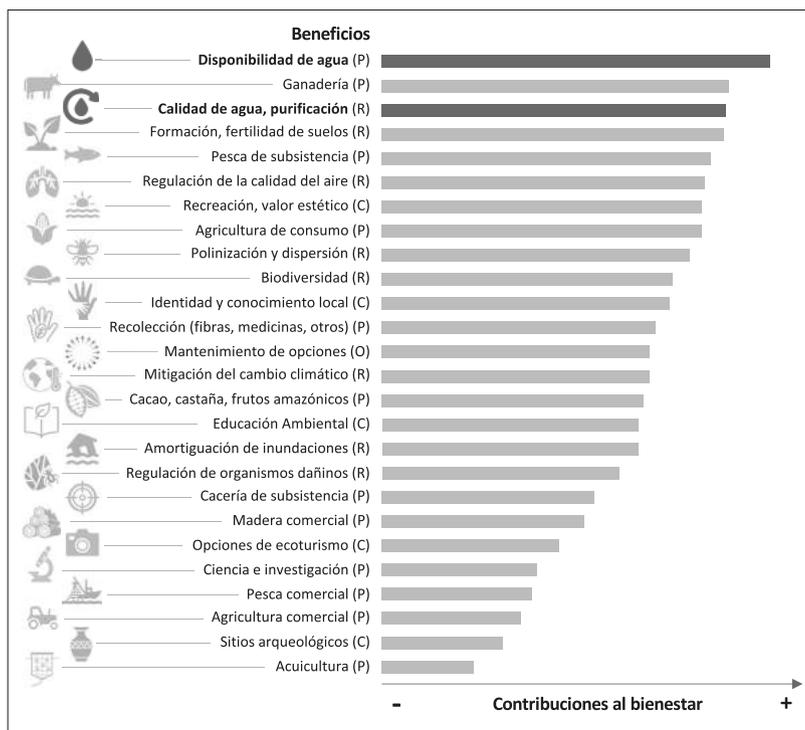
### **1. Las personas valoran el agua para su bienestar**

Las estrategias de medios de vida de las familias y comunidades en los Llanos de Moxos están íntimamente vinculadas al aprovechamiento y gestión de los ecosistemas que componen el paisaje de la región. A través de distintas etapas históricas, los habitantes de los Llanos de Moxos han desarrollado sistemas de aprovechamiento adaptados a las singulares características ecológicas e hidrológicas de la región. Este paisaje tiene la capacidad de generar un flujo de diferentes CNP de las que los humanos obtienen beneficios, tanto por su uso directo (p. ej. agricultura, ganadería, pesca, madera), como indirecto (p. ej. regulación de la calidad del aire y el agua, formación del suelo, turismo, identidad cultural).

Recoger y analizar las percepciones y visiones de diversos actores respecto a los beneficios que reciben de la naturaleza, permite visibilizar y discutir las relaciones entre el bienestar humano y los ecosistemas que conforman el paisaje (Palomo Ruiz *et al.*, 2012). En este sentido, realizamos una serie de talleres y conversaciones (71 en total) con cinco grupos de actores priorizados por su relevancia en la gestión de recursos naturales en Beni (Ten, 2022): autoridades municipales, pueblos indígenas, ganaderos, campesinos y pescadores (estos últimos con menor representatividad). A cada grupo de actores, en cada municipio, se le consultó respecto a cuáles CNP consideran que más contribuyen a su bienestar, a partir de una lista de 26 CNP pre-identificadas. La lista incluye servicios de provisión, de regulación y culturales, reflejando una amplia gama de beneficios tangibles e intangibles del paisaje.

Los resultados sugieren que, de forma general, todos los actores sociales de los Llanos de Moxos reconocen la importancia del paisaje para las diferentes dimensiones de su bienestar. Destaca la importancia atribuida al agua (tanto disponibilidad como calidad) (Figura 1). Sobre la totalidad de priorizaciones completas que obtuvimos (n=50), la disponibilidad de agua es el servicio más valorado. La regulación de la calidad del agua (que depende principalmente de la conservación de vegetación, humedales y suelos) es el tercer servicio más valorado (después de la ganadería, que se encuentra en segundo lugar).

**Figura 1: Aporte actual al bienestar de 26 contribuciones del paisaje Llanos de Moxos a las personas desde la percepción de sus principales actores (promedio de todos los talleres realizados) (P: provisión; R: regulación; C: cultural; O: valor de opción).**

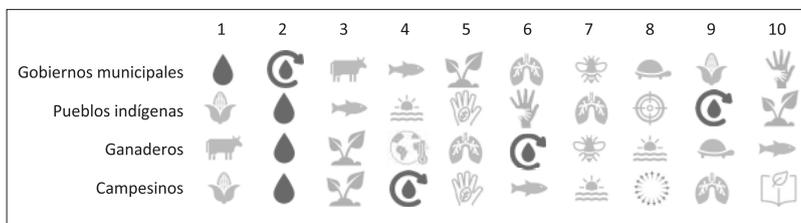


Fuente: Adaptado de Vogl *et al.*, 2022.

La muestra total invisibiliza diferencias importantes existentes entre y dentro de los diferentes grupos de actores sociales, así como entre y dentro de cada municipio o región del departamento. Estas diferencias son notables, por ejemplo, cuando se observa la priorización de CNP como la ganadería o la agricultura de subsistencia, que tienen grados de relevancia muy variable para distintos actores (por ejemplo, ganaderos o pueblos indígenas). Esta variabilidad de percepciones entre actores es reflejo de la gran diversidad

sociocultural y ambiental de los Llanos de Moxos, especialmente en lo que se refiere a los medios de vida, intereses, conocimientos y relaciones de los distintos actores sociales de la región (Vogl *et al.*, 2022). Sin embargo, en medio de esta diversidad, la posición de las CNP relacionadas al agua es consistentemente alta. La disponibilidad de agua se encuentra siempre entre las dos CNP más importantes en su aporte al bienestar, tanto para gobiernos municipales, como ganaderos, pueblos indígenas y campesinos (Figura 2). Todos coinciden que el agua es fundamental para su bienestar. De su disponibilidad dependen no sólo todas las actividades (y el mismo bienestar humano), si no el mantenimiento de los diferentes componentes del paisaje (Vogl *et al.*, 2022).

**Figura 2: Diez CNP más valoradas por sus contribuciones al bienestar según grupo de actores consultados (se excluyeron a los pescadores por ser una muestra muy pequeña) (el significado de los símbolos está detallado en la figura 1).**



Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, la regulación de la calidad del agua se encuentra entre las diez CNP priorizadas en todos los casos (así como la regulación de la calidad del aire y la fertilidad del suelo). Esta preferencia revela la estrecha relación de los actores sociales de Moxos con su entorno, ya que demuestra un reconocimiento de la dependencia que tienen sus medios de vida y bienestar respecto a las funciones del paisaje (Vogl *et al.*, 2022). Este resultado contrasta con la tendencia habitual en la que las preferencias humanas hacia las CNP se centran primero en los servicios de aprovisionamiento (seguidos de los de regulación y, por último, en los culturales), por su carácter tangible que los hace más fáciles de identificar y porque satisfacen necesidades de manera más inmediata (Martín-López *et al.*, 2012). La valoración de uno de los representantes de las organizaciones indígenas que participaron de los talleres sintetiza los resultados, respecto a las contribuciones del agua al bienestar de la población de los Llanos de Moxos: “Es lo primordial”.

### **La cantidad y calidad del agua están bajo presión**

La alta priorización de las CNP respecto al agua se relaciona también con la percepción de pérdida o degradación de las mismas, visibilizando entre los actores la importancia de este servicio del paisaje hasta hace poco abundante y “gratis” (Vogl *et al.*, 2022). En los talleres realizados en cada municipio del departamento, consultamos a los distintos actores respecto a

sus percepciones sobre la tendencia en la disponibilidad y calidad del agua en las últimas dos décadas (¿ha venido disminuyendo, se ha mantenido o ha aumentado?) y sobre el balance de estas CNP en la actualidad (¿abastece la demanda de la población, sobra o falta?). Sobre las tendencias, la gran mayoría de las personas con quienes conversamos consideran que han habido disminuciones significativas, tanto en la cantidad como en la calidad del agua en años recientes (75 %). Nadie percibe mejoras en la calidad del agua, sólo mermas, o en el mejor de los casos, mantenimiento. Sobre el balance entre la oferta y la demanda de agua, la mitad de las personas que participaron de los talleres manifestaron que perciben que la disponibilidad de agua ya no es suficiente para abastecer las necesidades locales (déficit). Otro 17 % considera que en la actualidad la disponibilidad de agua abastece la demanda, pero no sobra (es decir, que si la demanda aumenta o la disponibilidad disminuye, se estaría en déficit). En lo que se refiere a la calidad del agua, los resultados que obtuvimos son similares: 40 % de las personas consideran que la calidad del agua ya no es adecuada para garantizar la salud de la población (y los animales) y otro 20 % considera que está al límite (Tabla 1). Por ello, el agua (tanto en cantidad como en calidad) se encuentra en la categoría de CNP, que a la vez tienen alta prioridad por sus contribuciones al bienestar, pero también altos niveles de degradación.

**Tabla 1: Percepciones sobre el balance y las tendencias de la disponibilidad de agua y la calidad de agua recogidas en los talleres a nivel municipal con diversos actores del Beni.**

<b>Dimensión</b>	<b>Percepciones recogidas en los talleres</b>	<b>Disponibilidad de agua</b>	<b>Calidad de agua</b>
<b>Balance</b>	Perciben déficit	50 %	41 %
	Perciben balance	17 %	21 %
	Perciben exceso	33 %	38 %
<b>Tendencia en los últimos 20 años</b>	Perciben disminución	75 %	75 %
	Perciben estabilidad	14 %	25 %
	Perciben incremento	11 %	0 %

Fuente: Elaboración propia.

Las entrevistas que realizamos en todos los municipios del Beni y con una diversidad de actores, revelan desafíos comunes, aunque diferenciados, en función de las actividades productivas que cada actor realiza, así como las fuentes de agua de las que disponen en su localidad. Las siguientes citas reflejan la percepción de disminución reciente del agua disponible para las personas, el ganado y la agricultura:

Los montes y el agua son la prioridad. A pesar de que [por ahora] hay cantidad, cuando no haya vamos a sufrir (representantes de pueblos indígenas, San Ignacio de Moxos).

Los pozos se están agotando. La cantidad [de agua] es poca y la calidad mala. [...] Los pozos semisurgentes ya no dan, ya están agotados en la zona... se perforan y se secan... (pescadores en San Borja).

No alcanza, la gente sufre de agua, [especialmente] los que viven en los arroyos. Hay veces [en que] los pozos también se secan" (representantes de pueblos indígenas, San Borja).

Hay escasez en la época seca. La cantidad [de agua] está bajando año a año (representante del Gobierno Autónomo Municipal de Baures).

Los humedales se están acabando (representante de los ganaderos de Huacaraje).

[La falta de] agua es el principal problema. El riego es inviable, [pero] se espera [tener] por lo menos para los ganados. El año pasado hubo escasez. Se cavaron las norias cuatro o cinco veces, más profundas cada vez. No daba ni para el consumo humano (representante del Gobierno Autónomo Municipal de Magdalena).

Ese mi arroyo no se secaba antes, ahora hay que hacer pozas con tractor, incluso pozos semisurgentes en las zonas más altas. [...] Esta [época seca] es la época apretada, se nos ha secado todo, norias, todo. El ganado se va buscando el agua y se pierde (representante de los ganaderos de San Ramón).

Ese curichi que cruzábamos en bote no secaba, se mantenía con agua, ahora cruzo en moto (representante de pueblos indígenas de San Ramón).

[Ahora la época] seca es más seca que antes, los campos se secan mucho, las pozas e, incluso, algunos lagos se están secando. El ganado muere atascado en los curichis buscando agua (representante de pueblos indígenas en Reyes).

Entre las razones que las personas con quienes conversamos identifican como raíz de la disminución de la cantidad de agua disponible –especialmente en la época seca– está el cambio climático, seguido por las quemas e incendios y la degradación de hábitat (por ejemplo, la deforestación o la transformación de sabanas y humedales a la agricultura). En términos de calidad de agua, las razones más comúnmente identificadas son la contaminación por agroquímicos, las quemas (la ceniza que se deposita o es arrastrada hasta los cuerpos de agua los contamina) y la mala gestión de las aguas servidas.

Se saca [el agua] del río Iténez pero es sucia por los agroquímicos que llegan del Brasil (representante del gobierno autónomo municipal de Baures).

Aquí hay más arroyos que en Riberalta. Aunque cerca del pueblo se están secando por la deforestación (representante de los campesinos de Guayaramerín).

El arroyo El Escondido –que es de donde viene nuestra agua potable– se encuentra muy amenazado por la tala, el chaqueo y los incendios. Varios arroyos se están secando. Se debe en gran parte a la deforestación y el cambio climático. Para el consumo y el agro la situación está fea, la secuencia de lluvias [ya] no es lo que era (representante de los ganaderos de Guayaramerín).

Cerca de Santa Rosa había un lago que llegó a niveles críticos porque se usó mucha agua para sembrar arroz. Poco a poco las fuentes de agua se están secando. No abastecen a la población actual y la población está creciendo. Muchas corrientes se están secando por el cambio climático (representante del gobierno autónomo municipal de Santa Ana).

Hay lagunas que se están secando. Yo desde que tengo uso de razón nunca lo había visto así. Pueden ser los atajados de los estancieros que desvían las vertientes, o el cambio de curso del Mamoré que está volviendo a su curso antiguo. O los humanos con sus chacos y actividades, la deforestación en las orillas de las lagunas o el cambio climático...no sabemos. Habría que hacer un estudio para saber por qué se están secando (representante del gobierno autónomo municipal de Exaltación).

### ***El cambio climático y los cambios de uso de suelo van a afectar el agua***

Para complementar las percepciones recogidas sobre la disminución en la disponibilidad y la calidad del agua, realizamos modelaciones de los efectos del cambio climático y de potenciales cambios de uso del suelo sobre distintos indicadores, incluyendo varios relacionados al agua (para más detalles sobre la metodología consultar Vogl *et al.* 2022). Hay dos resultados clave de estos análisis. Primero, independientemente de las decisiones de los actores locales y de las políticas públicas del Beni, el cambio climático será uno de los principales factores de transformación durante las próximas décadas y afectará el agua. Segundo, las orientaciones de desarrollo que se escojan en los Llanos de Moxos tendrán un impacto directo sobre su capital natural y el bienestar, y la calidad de vida futura de la población en términos de recursos hídricos (y otros como almacenamiento de carbono, medios de vida y capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático). En otras palabras, el cambio climático va a afectar la disponibilidad de agua de cualquier manera; pero los cambios de uso de suelo exacerbarían estos efectos (Figura 3).

Los resultados muestran que los cambios previstos en la temperatura y la precipitación afectarán el ciclo hidrológico y los ecosistemas de los Llanos de Moxos. En un escenario moderado de cambio climático<sup>26</sup>, se prevé un incremento de las temperaturas de aproximadamente +1,9 °C a mitad de siglo y una reducción de las precipitaciones anuales de entre -2 y -4 % (Vogl *et al.*, 2022). Como es de esperarse, en un escenario más pesimista<sup>27</sup>, los resultados muestran mayores incrementos en la temperatura (+3,3 °C a mitad de siglo) y una acentuada reducción de las precipitaciones anuales (entre -3 y -10 %) (Vogl *et al.*, 2022). En cualquier caso, estos efectos del cambio climático en la región van a tener consecuencias en el bienestar y los medios de vida de la población, afectando la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola y pecuario, así como reduciendo los hábitats de agua dulce que proveen los recursos pesqueros tan importantes para la alimentación y la economía local (Vogl *et al.*, 2022).

---

<sup>26</sup> SSP 1-2, 6.

<sup>27</sup> SSP 5-8, 5.

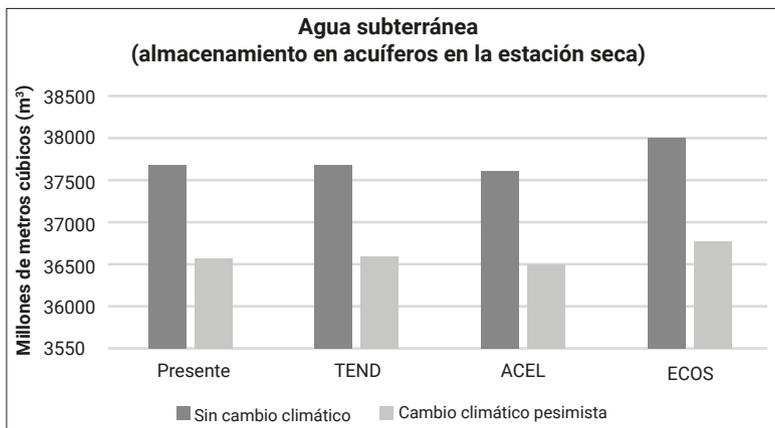
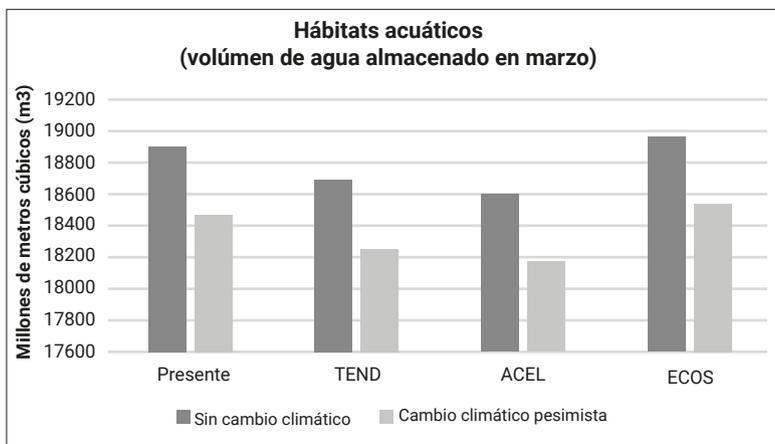
Para estudiar los potenciales impactos de los cambios de uso de suelo sobre el agua a mediano y largo plazo, realizamos modelaciones para tres escenarios distintos hasta el año 2045. El primer escenario refleja la continuación en las tendencias actuales de transformación del paisaje (Tend.). Estas transformaciones corresponden principalmente a la conversión de sabanas a agricultura intensiva mecanizada y la conversión de bosques en agricultura y ganadería de pequeña escala (deforestación). Se consideró igualmente un escenario de transformación acelerada (Acel.), que corresponde a estas mismas transformaciones, pero a un ritmo más rápido. El escenario Acel. corresponde de alguna manera a lo que podría suceder si se implementa el nuevo plan de uso de suelo, que prevé la conversión de casi 40 % del área del Beni a uso agropecuario (Anzaldo García & Rojas Calisaya, 2020; GOBE, 2019). El tercer escenario ilustra una vía de desarrollo distinta y prioriza las alternativas basadas en el potencial de los ecosistemas (Ecos.), como la ganadería sostenible, los sistemas agroforestales diversificados, el aprovechamiento de productos forestales no maderables (como el cacao silvestre, el asaí y la castaña), el turismo y la pesca sostenible. Este escenario se basa en el Plan de conservación y desarrollo sostenible para los Llanos de Moxos propuesto por el GTLM, desarrollado en conversación con diversos actores del departamento.

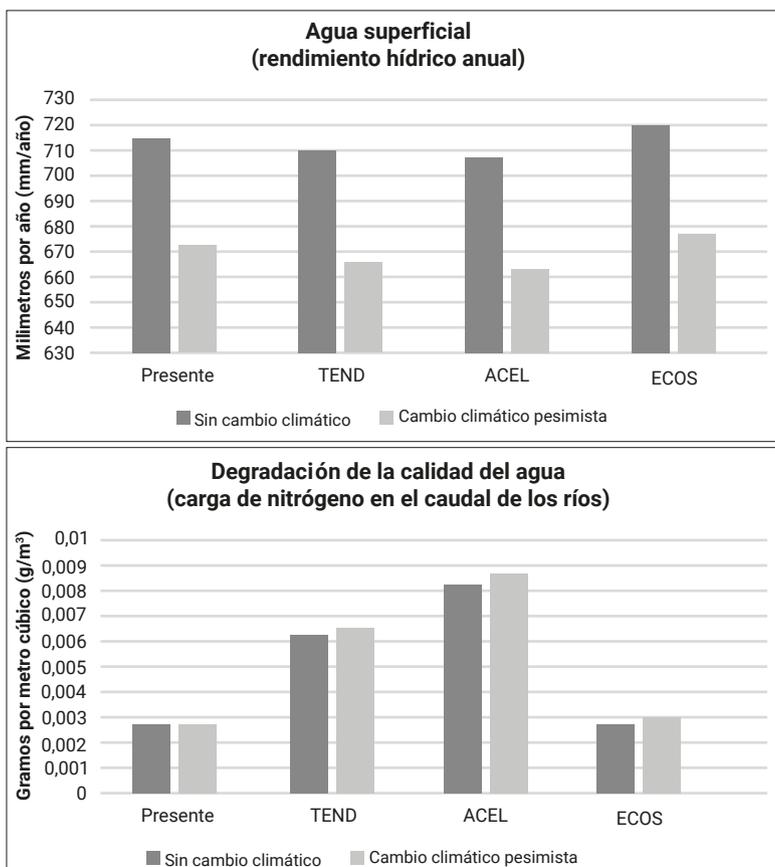
Una de las diferencias más significativas entre los resultados de las modelaciones para cada uno de estos tres escenarios futuros es la extensión de la pérdida de hábitats terrestres y acuáticos de los Llanos de Moxos (Vogl *et al.*, 2022). En los escenarios Tend. y Acel., las conversiones de bosques, sabanas y humedales hacia la agricultura conllevan una importante pérdida de hábitats terrestres y acuáticos mientras que estos se mantienen casi en su totalidad en el escenario Ecos. (Vogl *et al.*, 2022). Esto se debe a que las alternativas priorizadas en el escenario Ecos. no requieren la alteración significativa del paisaje para generar ingresos económicos. Las consecuencias de una potencial pérdida masiva de ecosistemas se traducen en un riesgo para la población, pues el paisaje perdería su capacidad de proveer beneficios indispensables para el bienestar de la población; incluyendo la disponibilidad y la calidad del agua. Efectivamente, la conversión masiva de bosques, sabanas y humedales a la agricultura en los escenarios Tend. y Acel. conllevaría una reducción importante en los caudales de los ríos y el agua disponible, especialmente en los ríos pequeños y medianos (Vogl *et al.*, 2022). Aunque el escenario Ecos también es susceptible a los efectos del cambio climático, la conservación del paisaje permite que la funcionalidad hidrológica actual se mantenga en el futuro (Vogl *et al.*, 2022).

Otra gran diferencia entre los escenarios es el nivel de fertilizantes y agroquímicos utilizados, ya que este es proporcional a la extensión de agricultura intensiva mecanizada. En los escenarios de alta conversión a la agricultura (Tend. y Acel.), la aplicación masiva y repetida de fertilizantes y su arrastre por las lluvias y aguas de inundación hacia los ríos, lagunas y aguas subterráneas impactaría significativamente la calidad del agua, con

la triplicación de los niveles de nitrógeno que se observan actualmente (Vogl *et al.*, 2022). El nitrógeno en el agua crea condiciones para la proliferación de algas, que a su vez limitan los niveles de oxígeno y la penetración de luz en los cuerpos de agua, afectando negativamente a los ecosistemas acuáticos. La contaminación de ríos y lagunas con nitrógeno no solo pone en riesgo la salud humana y limita la seguridad del consumo directo de agua, sino que también limita el aprovechamiento de los cuerpos de agua con actividades como la pesca o la recreación (Vogl *et al.*, 2022). En contraste, dado que el escenario Ecos. se fundamenta en prácticas de producción que no requieren la aplicación de fertilizantes, se evitarían estas consecuencias negativas en la calidad el agua (Figura 3) (Vogl *et al.*, 2022).

**Figura 3: Impactos de los escenarios de cambio climático y uso de suelo en indicadores hidrológicos de los Llanos de Moxos comparando la condición presente y la pesimista (clima proyectado al horizonte 2015-2045).**





Fuente: adaptado de Vogl *et al.*, 2022.

## Desconexión entre importancia del agua y visiones de desarrollo

Los resultados presentados señalan que a la población del Beni le importa el agua pues la considera primordial para su bienestar. A la vez, le preocupan las pérdidas ya observables de disponibilidad y calidad del agua. Los resultados muestran también una relación directa entre el nivel de transformación del paisaje y los efectos nocivos sobre el agua: a mayor transformación de paisaje, mayores mermas se pueden esperar en cantidad y calidad de agua. Estos procesos vendrían a exacerbar los efectos ya observables del cambio climático. Efectivamente, el cambio climático ya está afectando la disponibilidad de agua en Beni. A futuro, estos efectos van a intensificarse –independientemente de las decisiones que se tomen en la región– y es por tanto necesario pensar en estrategias de adaptación y resiliencia. Sin

embargo, las transformaciones del paisaje y –en especial– la conversión de vegetación natural a la agricultura intensiva en insumos no solo tiene efectos directos sobre la disponibilidad y calidad del agua, sino que también exacerba los efectos del cambio climático y reduce las capacidades locales de enfrentarlo.

Sería lógico esperar entonces que los escenarios de desarrollo futuro que prioricen la transformación del paisaje y –por tanto– amenacen la provisión de agua, pierdan su atractivo a la luz de esta relación problemática. Sin embargo, observamos optimismo y entusiasmo por parte de algunos actores públicos y privados respecto a la implementación del PLUS y el avance de la frontera agrícola en el Beni bajo narrativas como “el Beni no tiene nada que envidiar a Santa Cruz y puede ser el nuevo silo de Bolivia” o “ya no podemos seguir atrasados y olvidados”, incluso después de presentar los resultados de las simulaciones de los efectos del cambio climático y de los cambios de uso de suelo sobre el agua. Las respuestas por parte de estos actores se enmarcan en modelos de desarrollo que no consideran los costos socioambientales de la expansión de la frontera agrícola a mediano o largo plazo y en una percibida falta de otras alternativas. En ese sentido, el agua –a pesar de su importancia– se convierte en un recurso “sacrificable” para generar ingresos en el corto plazo, ilustrando una desconexión entre los actuales modelos de desarrollo y el bienestar de la población a mediano y largo plazo.

Este estudio suma a las ya amplias reflexiones respecto no solo a la insostenibilidad de los modelos de desarrollo extractivos que se están posicionando en la Amazonía (por ejemplo, Porto-Gonçalves, 2017), sino también respecto a la necesidad de cambiar los arraigados imaginarios de desarrollo para avanzar en la consolidación de alternativas, que respondan a los crecientes desafíos del cambio climático y del incremento de las desigualdades, al mismo tiempo que se centran en el bienestar humano y no humano como horizonte. Es necesario visualizar, reconocer y posicionar alternativas de desarrollo que se fundamenten en la conservación de los ecosistemas y, por tanto, de los beneficios que proveen como base del bienestar humano. En el Beni, estas alternativas pueden, por ejemplo, centrarse en las economías de la pesca sostenible, los productos no maderables (incluyendo el cacao silvestre), la ganadería sostenible o de armonización, la agroforestería y agroecología y el turismo sostenible (GTLM, 2022). En ese sentido, se requiere propiciar un debate amplio para identificar y generar las condiciones necesarias para implementar dichos modelos alternativos.

Uno de los resultados más interesantes de este estudio es la convergencia entre distintos tipos de actores en diversas regiones del Beni en lo que se refiere a la importancia del agua. La metodología aplicada puede ser replicada en otros espacios para ver si este resultado puede ser generalizado más allá de los Llanos de Moxos, pero es razonable pensar que se encontrarían resultados similares en otras partes de la Amazonía, dada la centralidad del agua para la preservación y la reproducción de la vida. Este resultado ofrece luces respecto al potencial que tiene el agua como eje articulador de políticas

públicas y esfuerzos de planificación: la importancia de preservar el agua es algo con lo que la mayoría de las personas está de acuerdo en un contexto de alta polarización y conflictividad. El desafío se encuentra en cómo traducir el consenso respecto al valor del agua en una visión colectiva de desarrollo, que sea compatible con la conservación de las contribuciones de la naturaleza al bienestar de las personas.

Más allá del enfoque de gestión de cuencas –que vincula espacialmente a los actores y territorios que comparten recursos hídricos– se necesita posicionar indicadores de gestión del agua de manera más central en la planificación y las políticas públicas. En los Llanos de Moxos y en otras regiones de la Amazonía, esto también apunta hacia la necesidad de estudiar, proteger y gestionar los humedales de forma diferenciada y prioritaria (GTLM, 2022). La gestión de humedales debe ser un elemento clave de los instrumentos de política pública y de consideración en la gestión territorial de distintos espacios (como propiedades ganaderas, territorios indígenas o áreas protegidas). De forma más general, la centralidad de los ecosistemas sanos para el bienestar de las personas nos obliga a pensar en narrativas distintas de desarrollo, que aprovechen el potencial biocultural de cada región y prioricen aquellas actividades económicas que son compatibles con la conservación de las funciones ambientales. En el Beni, existe una oportunidad para avanzar en esta dirección con la reglamentación del PLUS, que aún está pendiente. Para ello se debe propiciar el debate amplio que no se realizó con la definición y aprobación del PLUS en 2019.

## Referencias

- Anzaldo García, A., & Rojas Calisaya, J. C. (2020). El nuevo PLUS del Beni, excluye a los actores y sus diversas visiones de desarrollo y atenta contra la Amazonía boliviana. *Mundos Rurales*, 15(1), 87–104.
- Baudoin Farah, A. (2019). "Volver a hablar con la Gente del Agua": Meanders of indigenous autonomy in the Isiboro Secure Indigenous Territory and National Park (TIPNIS), Bolivia [University of Florida]. <https://ufdc.ufl.edu/UF0056067/00001/pdf>
- Baudoin Farah, A. (2024). Meanings of indigenous autonomy: Between identity, authority, and integration. *Geoforum*, 148, 103916. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103916>
- GOBE. (2019). *Plan de uso de suelos. Departamento del Beni*. Gobierno Autónomo del Departamento del Beni.
- GTLM. (2022). *Programa de Conservación y Desarrollo Sostenible de los Llanos de Moxos* (p. 134). Grupo de Trabajo para los Llanos de Moxos.
- Lehm, Z. (1999). *Milenarismo y movimientos sociales en la Amazonía boliviana. La búsqueda de la Loma Santa y la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad*. Apcob – Cideebeni – Oxfam América.
- Lombardo, U., Iriarte, J., Hilbert, L., Ruiz-Pérez, J., Capriles, J. M., & Veit, H. (2020). Early Holocene crop cultivation and landscape modification in Amazonia. *Nature*, 581(7807), 190–193. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2162-7>

- Martín-López, B., Iniesta-Arandia, I., García-Llorente, M., Palomo, I., Casado-Arzuaga, I., Amo, D. G. D., Gómez-Baggethun, E., Oteros-Rozas, E., Palacios-Agundez, I., Willaarts, B., González, J. A., Santos-Martín, F., Onaindia, M., López-Santiago, C., & Montes, C. (2012). Uncovering Ecosystem Service Bundles through Social Preferences. *PLoS ONE*, 7(6), e38970. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0038970>
- Palomo Ruiz, I., Martín López, B., López Santiago, C., & Montes del Olmo, C. (2012). *El sistema socio-ecológico en Doñana ante el cambio global. Planificación de escenarios de eco-futuro*. Universidad Autónoma de Madrid.
- Porto-Gonçalves, C. W. (2017). *Amazônia: Encruzilhada civilizatória, tensões territoriais em curso*. Consequência.
- Prümers, H., Betancourt, C. J., Iriarte, J., Robinson, M., & Schaich, M. (2022). Lidar reveals pre-Hispanic low-density urbanism in the Bolivian Amazon. *Nature*, 606(7913), 325–328. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04780-4>
- Pugnetti, A., Aciri, F., Bernardi Aubry, F., Camatti, E., Cecere, E., Facca, C., Franzoi, P., Keppel, E., Lugliè, A., Mistri, M., Munari, C., Padedda, B. M., Petrocelli, A., Pranovi, F., Pulina, S., Satta, C. T., Sechi, N., Sfriso, A., Sigovini, M., ... Torricelli, P. (2013). The Italian Long-Term Ecosystem Research (LTER-Italy) network: Results, opportunities, and challenges for coastal transitional ecosystems. *Transitional Waters Bulletin*, 7, 43–63. <https://doi.org/10.1285/11825229XV7N1P43>
- Ten, S. (2022). *Mapeo de actores para el análisis de escenarios, paisaje biocultural Llanos de Moxos*. Grupo de Trabajo para los Llanos de Moxos: Centro de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente, Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián."
- Vogl, A., Angarita, H., Baudoin Farah, A., Ten, S., & Wolny, S. (2022). *Construcción conjunta de una visión de desarrollo sostenible para los Llanos de Moxos. Grupo de Trabajo para los Llanos de Moxos: Natural Capital Project / Ciboma - UABJB. Trinidad (Beni, Bolivia)*. Grupo de Trabajo para los Llanos de Moxos: Natural Capital Project / Ciboma - UABJB.

# Seguridad hídrica en amenaza: injusticia climática y urbanización periférica en Rurrenabaque

---

*Andrea Katrinne Perez Tarqui*

"La persona que viene de cualquier parte y toma agua de Rurre, se encariña y se queda a vivir".

Luis Guari Quenevo, 75 años.

## Resumen

Las y los porteños se sienten orgullosos de la calidad de sus aguas, que se captan directamente para consumo humano del ojo de agua de la vertiente del Chorro. La construcción del sistema de agua para abastecer a los habitantes de Rurrenabaque significó un acto de agencia y emancipación con largas jornadas de trabajo colectivo de toda la población, lo cual pervive en las representaciones simbólicas individuales y comunitarias. Sin embargo, con el paso de los años, el agua, fuente de vida del área urbana, se encuentra amenazada en su acceso y calidad equitativa debido a la urbanización periférica y los fenómenos climáticos extremos acontecidos en los últimos años. La injusticia climática y la proliferación de asentamientos periféricos han significado la exploración de nuevas tomas de agua que ya no tienen la misma calidad de la vertiente central. Los barrios autoconstruidos emergentes son los principales afectados por las desigualdades de acceso y calidad de agua. Existe una marcada injusticia espacial entre los barrios del centro urbano y las franjas periurbanas, que se agudiza aún más cuando ocurren eventos climáticos de magnitud.

## Palabras clave

Periferias urbanas, seguridad hídrica, justicia climática, Amazonía, Rurrenabaque.

## Justicia climática, seguridad hídrica y periferias urbanas en la Amazonía

En el mundo existen regiones de gran relevancia climática a nivel continental y global. La meseta tibetana, los bosques y tundra siberianos, el mediterráneo y su conexión con el océano Atlántico o la Antártida son vitales para el equilibrio climático y la salud ambiental global (Estenssoro, 2010; Poveda, 2011). La Amazonía tiene la cuenca más grande del planeta y contiene más de la mitad de los bosques tropicales del mundo. Es uno de los principales reguladores del ciclo hidrológico y reservorio de agua (Rocha, Correia y Fonseca, 2015). Por ejemplo, América del sur concentra el 47 % de agua dulce del mundo y 70% proviene de la cuenca amazónica (Castro, 2003 en Villa, 2010). La biodiversidad, funciones y servicios ambientales que provee la región son cruciales frente a amenazas como el cambio climático.

En distintas cumbres amazónicas<sup>28</sup>, la crisis ambiental es el centro del debate de los distintos líderes y representantes panamazónicos. Un tema bastante discutido es el punto de inflexión de la Amazonía como escenario futuro e incluso presente en algunas zonas como Brasil y Bolivia a raíz de la deforestación y degradación de los bosques (Mongabay, 2022). Si bien en el ámbito académico existen imprecisiones y discordancias en la evidencia científica sobre los impactos del cambio climático en la cuenca amazónica, los eventos climáticos extremos cada vez son más frecuentes e intensos en la Amazonía (da Silva *et al.*, 2023). Entre las investigaciones más significativas resaltan el incremento y severidad de las sequías por el aumento de las temperaturas (Panisset *et al.*, 2017), mientras que otros estudios revelan la intensificación de los ciclos hidrológicos o tendencias constantes de precipitación (Gloor *et al.*, 2013).

Un aspecto a considerar en la incidencia del cambio climático en la Amazonía es la percepción de los pueblos amazónicos respecto a la variabilidad climática en sus territorios. Existen estudios en las regiones amazónicas de Bolivia, Ecuador y Colombia acerca de los cambios en el clima percibidos por los pueblos indígenas y su alteración en el relacionamiento con la selva y los ríos (Portugal y Michel, 2021; Fernández-Llamazares, 2014; Echeverri, 2009). Toda esta conjunción de actores gubernamentales, expertos académicos y población local sumergidos en la crisis climática y el rol preponderante que juega la Amazonía, nos llama a reflexionar sobre la visibilización de las transformaciones territoriales (sociales, económicas, ambientales y culturales) en un plano transdisciplinar y multiescalar, entrelazando las dinámicas locales, regionales y mundiales.

Los efectos del cambio climático que impactan en los territorios amazónicos son una sobreposición de intervenciones antropogénicas externas, pero también de acciones internas vinculadas con la deforestación, contaminación por las actividades extractivistas, la tala indiscriminada, caza furtiva, tráfico de animales silvestres y la sobreexplotación de los bienes naturales. Los pueblos indígenas y comunidades ribereñas son vulnerables a fenómenos

---

<sup>28</sup> Revisado en: <https://www.celag.org/sobre-la-cumbre-amazonica/>

climáticos extremos, al igual que las poblaciones que viven en las ciudades (Bauer *et al.*, 2018; da Silva *et al.*, 2023). En la actualidad, el 62,8 % de los habitantes de la Amazonía viven en entornos urbanos (Nagatani *et al.*, 2009). La región no escapa de los procesos de urbanización extendida y planetaria (Monte-Mór, 2014; Brenner, 2014); especialmente la expansión del capital es difusa, impidiendo diferenciar claramente áreas urbanas y rurales.

La urbanización capitalista penetra cada vez más la selva amazónica (Alexiades y Peluso, 2016; Calisto, 2019; Bayón, 2019). En este último tiempo, el modelo urbano que sobresale es la periferización, es decir, la urbanización acelerada que se anticipa a una planificación que responda a cubrir necesidades básicas de vivienda, equipamientos, infraestructura y servicios públicos. La dinámica urbana en la Amazonía está envuelta por procesos de colonización, capitalismo y extractivismo (Kanai, 2014), pero también a través de las disputas territoriales de diferentes actores que intervienen en la producción del espacio urbano periférico (Bayón y Durán, 2023). A los problemas de fragmentación, desigualdad socioespacial, injusticia ambiental y exclusión de las periferias se añaden los impactos locales del cambio climático, siendo el espacio urbano el más vulnerable a sufrir riesgos climáticos (Peroni y Pappalardo, 2023).

Pensar en el cambio climático implica considerar que sus causas e impactos son desiguales en múltiples escalas (Codato, Peroni y De Marchi, 2024). A su vez, afecta el metabolismo de bienes naturales vitales como el agua dulce, limitando su acceso y calidad. Aunque parezca anecdótico, existe escasez de agua en la región con el mayor sistema de agua dulce del planeta<sup>29</sup>. Independientemente de si nos encontramos en una región de abundancia, suficiencia estricta, escasez o ausencia (Villa, 2010), se requiere reflexionar en la relación ser humano-mundo, debido a factores como la distribución desigual, contaminación, crecimiento demográfico y baja disponibilidad que también son determinantes en la seguridad hídrica. En un contexto amazónico, el agua tiene múltiples significaciones culturales, adquiere connotaciones de divinidad, fuente de vida y origen de las civilizaciones (Rondón, 2015). Bajo estas consideraciones, es necesario analizar la relación entre las sociedades y el agua como un todo. Autores como Swyngedouw (2004; 2009) hacen referencia al ciclo hidrosocial que representa a todo nivel la relación sociedad y agua en un mismo territorio.

A partir de estas aproximaciones enmarcadas en la ecología política urbana, el capítulo se centra en estudiar los problemas en el acceso y calidad de agua en las periferias urbanas de Rurrenabaque, una ciudad de la Amazonía norte de Bolivia, ubicada en la provincia General José Ballivián al oeste del departamento de Beni, que en los últimos diez años ha atravesado críticos eventos climáticos, como inundaciones y sequías, que han desestabilizado el ciclo hidrológico y la consecuente seguridad hídrica de sus habitantes. La urbanización extendida en una lógica de periferias impulsadas por la

---

<sup>29</sup> <https://otca.org/la-cuenca-amazonica-de-cara-al-oceano-atlantico/>

movilización mercantil de la tierra conduce a ocupaciones informales, donde aún no existe la infraestructura para la prestación de servicios básicos. Las poblaciones de estos asentamientos lidian en la cotidianidad con la captación de agua a través de contestaciones individuales o comunitarias enfrascadas en la precariedad urbana y la injusticia climática.

El recorte temporal está sujeto a los fenómenos climáticos sucedidos entre 2014, año de intensas inundaciones, hasta 2023, periodo de sequía. El estudio de caso es el área urbana de Rurrenabaque, centrando el análisis en las periferias emergentes y en el relacionamiento de sus habitantes con el agua. Para la investigación se emplearon técnicas de investigación cualitativas y socioespaciales a través de la observación, entrevistas semiestructuradas a vecinos y técnicos de la alcaldía, y la realización de mapas que muestran las desigualdades en la cobertura de agua.

## **Extractivismo y cambio climático en la Amazonía de Bolivia**

La Amazonía es un territorio permeado por violencias y contestaciones que se arrastran desde tiempos coloniales. Acosta (2015) indica que su descubrimiento marcó la dicotomía entre la vida y la muerte, con violencias que se traducen en la esclavitud de los cuerpos y la explotación de los bienes naturales. Mientras que las contestaciones emergen como respuesta a esas violencias a través de la revalorización o generación de saberes locales. No obstante, Porto-Gonçalves (2015) menciona la existencia de dos visiones eurocéntricas y contrapuestas que prevalecen en la región. La primera es la visión desarrollista, centrada en la explotación de recursos naturales destinados para el desarrollo. La segunda visión es de carácter conservacionista de las extensas áreas de biodiversidad, que cumplen su función de equilibrio ecosistémico planetario y deben mantenerse como reserva.

En la región amazónica de Bolivia ambas miradas se contraponen. A partir de la extracción de la quina, la Amazonía norte del país se insertó en el mercado mundial en el siglo XIX (Stoian, 2005). Desde entonces, el modelo económico primario exportador siguió vigente con el saqueo del caucho, oro, madera y castaña. Toda esta materia prima destinada a la exportación bajo la figura de *commodities* dependientes de las demandas internacionales. Por otro lado, la creación de áreas protegidas con fines de conservación de los bienes naturales y culturales (Argote, 2015) adquirió mayor alcance hacia el territorio amazónico con la creación del primer Parque Nacional Isiboro Sécore en 1965, que después sería declarado Territorio Indígena en 1990. La demarcación de entornos protegidos como el Madidi, Pilón Lajas y el propio Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore (Tipnis), se encuentran amenazados por el avance de la frontera petrolera y gasífera (Campanini, 2016).

Al igual que la expansión de la frontera hidrocarbúrica, existe un aumento de la agroindustria. Es decir, la transformación de productos relacionados

con las actividades ganaderas, forestales, pesca, entre otros, a través del mejoramiento de insumos, tecnología, comercialización, logística, inversión de capital y provisión de otros servicios (FAO, 2007). Según Quevedo (2013), el factor tecnológico es importante en la incorporación de maquinaria y el desplazamiento de la producción tradicional campesina hacia una mecanización de la producción y aumento de la rentabilidad de los cultivos a través de la instrumentalización del conocimiento científico. A escala global, la agroindustria y el agronegocio se configuran en centros de acumulación de capital y enclaves de producción con implicaciones para el sector agrícola, los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el desarrollo nacional (Mckay, 2018).

La agroindustria se introduce en las tierras bajas de Bolivia en 1950, principalmente en el departamento de Santa Cruz, con el cultivo de soya, girasol, caña, trigo, sésamo, sorgo y algodón (Peralta-Rivero, 2020). La expansión de este modelo de producción agrícola es la principal causa de la pérdida de hábitat amazónico con la deforestación, degradación de los bosques y pérdida de biodiversidad asociada. Tal como mencionan Vos *et al.* (2020), no solo se eliminan los árboles, sino ecosistemas enteros con miles de especies interconectadas. Según un informe del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas (Ipam), los incendios están relacionados con la deforestación causada por el acaparamiento de tierras, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la minería ilegal y la explotación económica descontrolada de la tierra<sup>30</sup>. Los incendios de 2019 afectaron gran parte de la Chiquitanía, el Chaco y el Pantanal boliviano, además de superficies menores en las pampas benianas y los bosques amazónicos (Vos *et al.* 2020).

Tanto los recurrentes incendios como los procesos de deforestación y degradación han generado pérdidas severas de la biodiversidad, efectos en el ciclo hidrológico, aumento en la contaminación del aire, daños en la salud y pérdidas de medios de vida (Acnudh, 2019). Esta serie de eventos nacionales y panamazónicos, en una coyuntura de cambio climático, se visibilizan en fenómenos meteorológicos extremos como el incremento de las temperaturas mínimas y máximas diarias, períodos secos no estacionales y precipitaciones excesivas.

Un evento climático extremo en el norte de Bolivia fueron las fuertes precipitaciones e inundaciones registradas en el año 2014 (Bauer, 2018). El municipio de Rurrenabaque fue uno de los territorios más afectados. En el espacio urbano significó la pérdida de vidas humanas, viviendas, infraestructura y el desabastecimiento del servicio público de agua. Este evento climático de gran magnitud golpeó fuertemente a la urbe porteña de 13.446 habitantes (INE, 2012)<sup>31</sup>. La población localizada en zona de riesgo

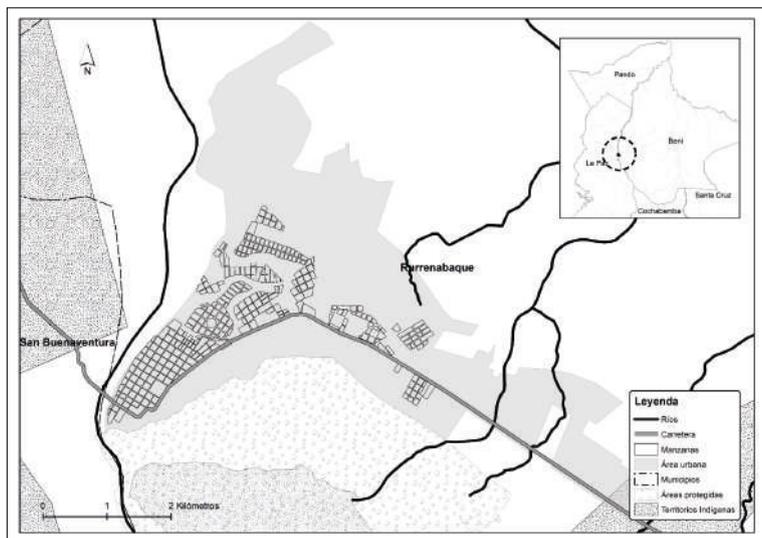
---

<sup>30</sup> Revisado en: <https://www.semana.com/impacto/articulo/estas-son-las-principales-amenazas-para-el-amazonas-en-cada-uno-de-los-9-paises-que-comparten-esta-selva/48677/>

<sup>31</sup> N. del E.: La población de Rurrenabaque ha crecido significativamente desde el censo de 2012 pero estas son las últimas cifras oficiales disponibles. En 2022, según el informe de Indicadores de Desempeño de EPSA, la población estimada del área de servicio autorizado en Rurrenabaque estaba por encima de los 20.000 habitantes (MMAyA, 2022).

fue la más afectada con la crecida del río Beni. La expansión urbana a orillas del río, en zonas inundables y en serranías proclives a derrumbe recibieron el impacto directo con pérdidas humanas y materiales (mapa 1). El resto de la población padeció la escasez de agua debido a la rotura de tuberías del sistema de agua<sup>32</sup>. Este hecho marcó la inseguridad hídrica de los habitantes en posteriores eventos climáticos, sean inundaciones o sequías, que condicionaron el consumo de agua en un espacio urbano desigual en la cobertura, acceso y calidad de agua.

**Mapa 1: Ubicación de Rurrenabaque, Beni**



Fuente: Elaboración propia, con base del Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque, 2023.

## La urbanización periférica de Rurrenabaque

Las transformaciones territoriales de Rurrenabaque han estado influenciadas por distintas bonanzas económicas de la región norte amazónica. En un principio, vinculadas con economías extractivas de materias primas como la quina, cuero, goma, oro y madera (Gamez, 2002), y posteriormente la apuesta al turismo en las últimas décadas. Su ubicación estratégica para el flujo de mercancías y personas a través del río Beni desempeñó un papel importante en su consolidación como puerto menor y la extensión del centro poblado en las riberas del río. En sus inicios, la extensión del área urbana fue lenta, bajo patrones compactos que respondían a un trazado ortogonal propio de la imposición del modelo urbano colonial. Posteriormente, se cambió el modelo espacial de crecimiento por uno más disperso y extendido, impulsado por

<sup>32</sup> Entrevista habitante de Rurrenabaque, 2023.

infraestructuras carreteras y el *boom* del turismo en la movilización del mercado de suelo.

El centro poblado mejoró la conectividad regional, que antes únicamente era fluvial, por medio de la balsa. Posteriormente, se construye el aeropuerto vinculándose con el resto del país, hasta consolidarse la articulación territorial por vía terrestre con los municipios vecinos de Reyes, San Borja y San Buenaventura. Toda esta integración territorial ha movilizado poblaciones locales, regionales, nacionales y extranjeras que a día de hoy coexisten en el espacio urbano (PTDI, 2021-2025). La estrecha relación entre agua y poblamiento ocurrió cuando los asentamientos se acondicionaron a los ríos y, en otros casos, se realizaron intervenciones en su curso ante las crecidas frecuentes del río Beni. Estas modificaciones en el medio físico habilitaron tierras baldías, que se están ocupando para asentamientos humanos y son propensas a inundaciones (Perez-Tarqui, 2023).

En la actualidad, la forma urbana que se visualiza en los márgenes urbanos responde a tramas lineales, discontinuas e incompletas en cuanto al tejido vial, predial y de amanzanamiento. La apuesta del mejoramiento urbano destinado a la prestación de servicios complementarios al turismo y la construcción del puente San Buenaventura - Rurrenabaque ha incrementado la dinámica de oferta y demanda de suelo. La población local y migrante, en la búsqueda de insertarse dentro las economías urbanas, encuentra opciones de acceso al suelo y vivienda a través de la especulación de terceras personas que ofrecen lotes aprobados o no aprobados. En otros casos, se realizan invasiones de tierras en áreas de riesgo, proclives a la inundación o deslizamiento.

De un modelo de crecimiento espacial compacto y ortogonal se ha pasado a un modelo extendido, disperso y lineal. La proliferación de asentamientos emergentes tiene tres tendencias de expansión: la primera, en torno a la carretera La Paz – Yucumo – Rurrenabaque, denominada como ruta F8 (Molina, 2014); la segunda, alrededor de la avenida que conecta con el municipio de Reyes; y la tercera, en los márgenes del río Beni hacia las zonas altas del norte y sur. Según Perez-Tarqui (2023), el proceso de urbanización presenta dos características: la primera se caracteriza por la habilitación, fraccionamiento y venta de los lotes de terreno; la segunda, por la invasión de terrenos, en este caso la construcción de la vivienda es acelerada y con materiales precarios. De esta manera, la configuración de periferias se da vía el mercado inmobiliario formal e informal, caracterizada por una precarización, fragmentación e injusticia socioespacial que dificulta la gestión pública de servicios como el agua, alcantarillado y recojo de residuos sólidos.

## **Agencia y autogestión del agua**

Rurrenabaque, al igual que muchas de las ciudades de la Amazonía en sus inicios, se abastecía de agua principalmente de los cursos de agua. El río Beni y los arroyos servían a la población porteña para el consumo humano, eran

la fuente y el líquido vital para mantener la vida de sus habitantes (Herrera, 1996). Después de la construcción del hospital, la instalación del sistema de agua era la segunda prioridad en el pueblo en los años 1950 (Gareca, 2004). Esto se debía a que durante la temporada de altas precipitaciones las aguas de los ríos se enturbiaban y no eran adecuadas para consumo humano. Los arroyos que atraviesan el centro poblado no contaban con la calidad del agua requerida. Existían percepciones sobre que el agua se encontraba contaminada por las deposiciones que se hacían en sus orillas, y también existía el imaginario en la población que el agua provocaba enfermedades (Gareca, 2004).

A partir de este problema de salubridad, se consideró la vertiente del Chorro, localizada en el remanso del Susi, como opción para la captación de agua. Las personas que tuvieron la oportunidad de navegar de manera arriesgada en las fuertes corrientes y llegar a la vertiente conocían el agua cristalina, pura y de gran sabor para beber (Gareca, 2004). De esta manera, se impulsó la iniciativa de la instalación de agua desde el Chorro hasta el centro poblado. La necesidad de un sistema de agua y la opción de captar aguas de la serranía movilizaron al principio a personas con gran capacidad de liderazgo y agencia, en vista que el apoyo del gobierno era mínimo (Gamez, 2002). La motivación fue tan grande que alentó a la población en su conjunto para iniciar con las gestiones que iniciaron la obra.

De las gestiones realizadas, se logró contar con los materiales necesarios para la ejecución del sistema de agua, mientras que la mano de obra fue cubierta por los habitantes porteños, quienes pusieron su fuerza de trabajo, herramientas y largas jornadas de arduo trabajo durante un año para conectar el tendido de la cañería del pueblo con la cañería matriz (Gamez, 2002). Pese a las grandes dificultades económicas y el trabajo pesado a mano de cavar zanjas y túneles de piedra rocosa, la organización constituida en un comité de agua consiguió recursos y no desmayó en el aliento a los pobladores (Herrera, 1996). El apoyo fue masivo e integró a mujeres y hombres de todas las edades, quienes mantuvieron la firme voluntad y perseverancia hasta la culminación del proyecto en 1957.

## **Prestación del servicio de agua**

La Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) responsable de garantizar el servicio de agua y alcantarillado en Rurrenabaque es el Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Samapar), una unidad municipal autónoma creada en 1996<sup>33</sup>. Samapar cuenta con licencia de autorización para la prestación del servicio básico y la autorización para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos desde el 19 de julio de 2011 (Samapar, 2018). A su vez, dispone de personería jurídica y está regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). La empresa pública municipal

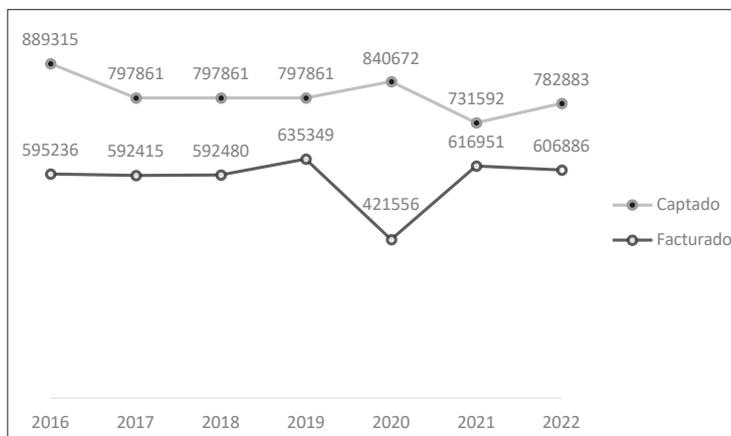
---

<sup>33</sup> Gerente general de Samapar, 2023.

adquiere la categoría C, correspondiente a aquellas ciudades intermedias cuya cantidad de población oscila entre 10.000 y 50.000 habitantes.

El sistema funciona a gravedad, con una capacidad de captación autorizada de 0,029 m<sup>3</sup>/s de fuentes de agua superficiales. El progresivo crecimiento demográfico ha jugado un papel importante en la mayor demanda de agua, ampliación de infraestructura de agua y su consecuente búsqueda de nuevas vertientes de abastecimiento de agua para evitar la alta dependencia de las fuentes iniciales. En la actualidad existen siete ojos de agua: El Camuy, El Retiro, El Sanjon, El Sanjon I, Poza Blanca, El Shushe y El Chorro, siendo estos dos últimos los más antiguos<sup>34</sup>. No obstante, los desastres y sequías de años anteriores han afectado la disminución de la captación de los volúmenes de agua, ocasionando un efecto contrario de reducción de los niveles de agua obtenidos de las fuentes superficiales (figura 1).

**Figura 1: Relación del nivel de agua captado y facturado en m<sup>3</sup>**



Fuente: Elaboración propia con base en EPSA, 2016 – 2022.

La discontinuidad en la prestación del servicio es otro problema recurrente, principalmente en temporada de sequías como la vivida en 2023. La pérdida de presión en horas y temporadas de alta demanda es un problema frecuente en el centro urbano, mientras que en los barrios emergentes se suma a esta dificultad la turbiedad, salinidad del agua y cortes en el suministro. Durante el desastre ocurrido en 2014 a raíz de las intensas lluvias, se ocasionaron inundaciones y deslizamientos que afectaron el sistema de agua. Alrededor de un mes, los habitantes de Rurrenabaque se quedaron sin el abastecimiento de agua por la rotura de tuberías. Entre las necesidades urgentes que identifican los técnicos de Samapar se encuentran la conservación de las fuentes de agua y la construcción de tanques de almacenamiento y equipos de regulación de la presión para satisfacer y mantener la continuidad de consumo.

<sup>34</sup> Personal técnico de Samapar, 2023.

## **Cobertura del servicio de agua**

Estos inconvenientes en la gestión del servicio básico de agua afectan el espacio urbano de manera desigual en cuanto a su distribución y cobertura. Existen desigualdades en la accesibilidad, asequibilidad, calidad y cobertura de la dotación de agua entre la zona central y las áreas periféricas. Son pocas las familias de los sectores periféricos que optan por la instalación de bombas de agua. Otras alternativas a las que recurre la población son la instalación de piletas públicas comunitarias, la compra de botellones de agua y el acopio en el centro urbano de familiares o vecinos. Revisando los Indicadores de Desempeño EPSA (2022), el aumento de la población abastecida ha sido ascendente en los siete últimos años. En 2022 se registró a 19.370 usuarios, mientras que en 2016 se contabilizaban 14.635 usuarios. Paralelamente, se adicionaron 947 nuevos medidores de agua al total de 2.927 conexiones existentes en el año 2016 (MMAyA, 2022; 2016).

Según los indicadores de desempeño, 98,10 % de la población cuenta con la prestación del servicio de agua y la dotación de agua es de 106,45 l/hab/día (litros/habitante/día) (MMAyA, 2022). Estos datos son cuestionados porque, en el primer caso, no se consideran las estrategias de autogestión de asentamientos populares que buscan la manera de cubrir la carencia de agua sin contar con la prestación pública. En el segundo caso, el dato no puede ser homogéneo debido a las interrupciones del suministro y las diferencias en la presión del agua entre los sectores del área urbana. Por ejemplo, solo en la gestión 2022 se identificaron 30 fallas en la tubería de la red y 21 en las conexiones. Si bien se amplió la cobertura de 56 kilómetros (km) de longitud en 2016 a 401 km en 2021, la baja calidad del agua para cubrir el consumo de las nuevas urbanizaciones, respecto a la toma de agua que abastece al centro, es una de las principales diferencias.

La rápida urbanización extendida ha requerido una mayor inversión en la infraestructura de agua, con nuevas tomas que tampoco han llegado a cubrir en su totalidad los asentamientos emergentes. La calidad del agua también ha disminuido y presenta grandes diferencias respecto a la vertiente principal que cubre al casco urbano de Rurrenabaque. En el mapa inferior se puede observar la injusticia espacial en la cobertura y calidad del agua entre los barrios más consolidados del centro urbano, abastecidos por las tomas El Sushe y El Chorro, los barrios en proceso de consolidación y, por último, los barrios precarios emergentes con déficit de abastecimiento (mapa 2). Esto denota que el funcionamiento del sistema de agua se vuelve complejo e insostenible de mantener con el mismo funcionamiento a medida que se expande la ciudad.

Mapa 2: Suministro de agua en Rurrenabaque



Fuente: Elaboración propia con base en Samapar, 2023.

## Representaciones simbólicas

Durante las entrevistas realizadas a los habitantes de Rurrenabaque, se pudo diferenciar que los residentes del centro urbano tenían mejores percepciones sobre el acceso y calidad del agua frente a las poblaciones de las zonas periféricas. Un aspecto que destacó fue la asociatividad de la calidad del agua con el sabor y color. Las descripciones que hacían referencias a la buena calidad de las aguas estaban relacionadas con “agua cristalina”, “agua fresca” y “agua dulce”. Mientras que para referirse a la mala calidad mencionaban “aguas turbias”, “agua salada” o “agua con bichos”. Estas múltiples asociaciones referente al color, olor y sabor revelan una riqueza en los significados de quienes usan y consumen el agua vinculados con los saberes de los ríos y arroyos de su localidad (Lima y Abreu 2019). Por ejemplo, varios vecinos del centro, especialmente los adultos mayores, destacan la calidad de las primeras tomas de agua que se captaron, las cuales no requieren ningún tratamiento para su consumo, al tratarse de agua pura al caer directamente del ojo de la vertiente.

El consumo de agua en el centro urbano es directamente del grifo, en las percepciones la mayoría coincide que no es necesario hervir el agua por la procedencia directa de la vertiente. Mientras que las opiniones son contrarias de los habitantes que viven en barrios de reciente creación y en etapa de consolidación como Los Sauces, San Juan Bautista y Siyaya. Las madres

de familia perciben la salinidad, cambios de color e incluso presencia de insectos cuando abren la pileta, siendo indispensable hervir el agua antes de su consumo para evitar enfermedades estomacales, que muchas veces asocian estas infecciones por beber agua cruda. Algunas familias recurren a la compra de agua o en otros casos acopian del centro urbano de familiares o amigos. En el caso de los nuevos asentamientos, como San Juan Bautista, cuentan con piletas colectivas instaladas por el municipio. En tiempo de sequía comentan que el agua escasea, no hay presión e incluso hay días en los que no tienen agua.

Los habitantes del casco viejo cuentan que hay inconvenientes en la potencia de agua, con el paso de los años ha disminuido y creen que se debe al crecimiento de la ciudad y las largas estaciones secas. En las entrevistas también sobresalen las diferencias del servicio; los habitantes de los asentamientos emergentes mencionan el suministro desigual por las tomas de agua y que el pago es el mismo pero la prestación varía entre el centro y la periferia de la ciudad. Las diversas percepciones de la población varían conforme su ubicación de residencia. De la misma forma, el valor simbólico otorgado al agua tiene múltiples representaciones relacionadas con la memoria histórica de lucha por su suministro, el conocimiento de la fuente de abastecimiento, la ampliación de sistemas de agua, la dinámica urbana y los eventos climáticos.

## Conclusiones

En la Amazonía, el cambio climático atraviesa el continuo urbano-rural. Las ciudades amazónicas también son vulnerables a fenómenos meteorológicos cada vez más severos. El estudio de la urbanización amazónica desde un enfoque de justicia climática permite identificar los desiguales impactos climáticos a una escala local, que se asocian a las injusticias espaciales en lo que respecta a la disposición urbana de asentamientos emergentes en situación de pobreza, precariedad y carencias de infraestructura y servicios públicos indispensables para la reproducción de la vida. El actual modelo urbano periférico acrecienta la brecha de las múltiples injusticias espaciales, sociales y climáticas. Los eventos climáticos en las ciudades desprovistas de una planificación urbana enfocada en la prevención, adaptación y resiliencia comprometen la seguridad hídrica de sus habitantes.

La urbanización periférica desigual en un contexto de variabilidad climática vulnera el derecho al acceso y calidad de agua potable. La entidad responsable, pese a los esfuerzos realizados en la ampliación del sistema, no garantiza un suministro igualitario. Esto se refleja en las representaciones simbólicas contrapuestas de los habitantes en su interacción y conocimiento del agua que consumen y utilizan en su cotidiano vivir. Todavía existe una carga simbólica afectiva por el agua, aunque en los últimos años esa percepción se va transformando, a medida que la seguridad hídrica es afectada por

el crecimiento acelerado de la ciudad, envuelto en carencias y expuesto a eventos climáticos adversos.

## Referencias

- Acnudh. (2019). "Naciones Unidas Bolivia se refiere a incendios en el Amazonas", agosto 2019. Recuperado de: <https://acnudh.org/naciones-unidas-bolivia-sobre-incendios-en-amazonas/>.
- Acosta, A. (2015). "Amazonia. Violencias, resistencias, propuestas". *Revista Crítica de Ciências Sociais*, pp. 39-62.
- Alexiades, M. y Peluso, D. (2016). "La urbanización indígena en la Amazonia. Un nuevo contexto de articulación social y territorial", *Gazeta de Antropología*, Vol.32, N°1.
- Argote A., Hans A. (2015) "¿Qué tanto conocemos de nuestras Áreas Protegidas nacionales en Bolivia?". *RevActaNova*. (Cochabamba), Vol. 7, N°1, marzo 2015, pp. 93-105.
- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (2022) "Indicadores de desempeño de las EPSA reguladas en Bolivia 2022".
- Bauer, T., Ingram, V., De Jong, W., y Arts, B. (2018) "The socio-economic impact of extreme precipitation and flooding on forest livelihoods: evidence from the Bolivian Amazon" *International Forestry Review*, Vol. 20, N°3, pp. 314-331. doi:10.1505/146554818824063050.
- Bayón J., Manuel y Durán G. (2023) "Decolonizar los estudios urbanos desde la Amazonía: prácticas indígenas para disputar la urbanización planetaria" *Revista INVI*, Vol.38, N°107, pp.13-48. <https://doi.org/10.5354/0718-8358.2023.68859>.
- Bayón, Jiménez M. (2019). "Una mirada de la Amazonía a través de su urbanización" en *Geografía Crítica para detener el despojo de los territorios: teorías, experiencias y casos de trabajo en Ecuador*, pp. 193-207.
- Brenner, N. (2013) "Tesis sobre la urbanización planetaria". *Nueva Sociedad*, N°243, pp.38-66. [www.nuso.org](http://www.nuso.org).
- Durán A. (2019), "Amazonia Urbana" *Revista Arquine*. <https://arquine.com/amazonia-urbana/>
- Campanini, J. (2016). *Hacia la consolidación de la economía petrolera*. La Paz: Centro de Documentación e Información Bolivia.
- Codato, D., Peroni, F. y De Marchi, M. (2024) "The multiple injustice of fossil fuel territories in the Ecuadorian Amazon: Oil development, urban growth, and climate justice perspectives", *Landscape and Urban Planning*, Vol. 241, pp. 2-20.
- Souza da Silva, S.; Brown, F.; de Oliveira Sampaio, A.; Costa Silva, A.; Rodrigues Souza dos Santos, N.; Carvalho, A.; de Souza Aquino, A.; da Costa Silva, P.; do Vale Moreira J.; Oliveira, I.; Araújo Costa, A. y Fearnside, P. (2023). "Amazon climate extremes: Increasing droughts and floods in Brazil's state of Acre", *Perspectives in Ecology and Conservation*. Vol. 21, N° 4, pp. 311-317.
- Echeverri, J. (2010) "Percepciones y efectos de cambio climático en grupos indígenas de la Amazonía Colombiana". *Folia Amazónica*, Vol. 19, N° 1-2, pp. 85-93. <https://doi.org/10.24841/fa.v19i1-2.344>

- Estenssoro Saavedra, F. (2010). "Crisis ambiental y cambio climático en la política global: Un tema crecientemente complejo para América Latina". *Revista Universum*. Vol. 2, N°25, pp. 57-77.
- FAO (2007). *Desafíos relativos al fomento de los agronegocios y la agroindustria*. Comité de Agricultura, 20° periodo de sesiones.
- Fernández-Llamazares, Á.; Díaz-Reviriego, I.; Méndez-López, M.; Sánchez, I.; Pyhälä, A. y Reyes-García, V. (2014). "Cambio climático y pueblos indígenas: Estudio de caso entre los Tsimane', Amazonia boliviana". *REDESMA Online Journal*, Vol. 7, pp. 110-119.
- Gamez Mendez, A. (2002). *Fundación de los pueblos de la provincia Ballivián Antes Yacuma*. (Santa Cruz de la Sierra).
- Gareca Arzabe, E. (2004). *Leyendas, Historias y Costumbres de Rurrenabaque* (Santa Cruz de la Sierra: El Paris).
- Gloor, M.; Brienens, R. J. W.; Galbraith, D.; Feldpausch, T. R.; Schöngart, J.; Guyot, J.-L.; Espinoza, J. C.; Lloyd, J. y Phillips, O. L. (2013). "Intensification of the Amazon hydrological cycle over the last two decades", *Geophys. Res. Lett.* Vol. 40, pp. 1729–1733, doi:10.1002/grl.50377.
- Herrera, A. (1996), "Agua con el esfuerzo de todos" en *Rurrenabaque La Grandeza ilimitada de los llanos amazónicos*, pp. 22-47.
- Instituto Agrario Bolivia (2022). "Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rurrenabaque (PTDI) 2021-2025".
- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2012). "Ficha Resumen Censo Población y Vivienda Municipio de Rurrenabaque 2012".
- Kanai, J. (2014). "On the peripheries of planetary urbanization: globalizing Manaus and its expanding impact". *Environment and Planning D: Society and Space*, Vol.32, N°6, pp.1071-1087, doi:10.1068/d13128p
- McKay, B. (2018). *Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia* (La Paz: Tierra).
- MMaYA. (2016). Indicadores de Desempeño de las Empresas Reguladas en Bolivia. La Paz: Ministerio de Medio Ambiente y Agua y AAPS. Disponible en: [https://aaps.gob.bo/images/archivos\\_aaps/indicadores/Indicadores-AAPS-2016.pdf](https://aaps.gob.bo/images/archivos_aaps/indicadores/Indicadores-AAPS-2016.pdf)
- MMaYA. (2022). Indicadores de Desempeño de las Empresas Reguladas en Bolivia. Tomo I. La Paz: Ministerio de Medio Ambiente y Agua y AAPS. Disponible en: [https://aaps.gob.bo/images/archivos\\_aaps/indicadores/TOMO\\_I\\_VARIABLES\\_E\\_INDICADORES\\_2022\\_VU\\_05\\_12.pdf](https://aaps.gob.bo/images/archivos_aaps/indicadores/TOMO_I_VARIABLES_E_INDICADORES_2022_VU_05_12.pdf)
- Molina, S. (2014). *El Puente Rurrenabaque - San Buenaventura. La Responsabilidad del BID y del Estado en una obra sin consenso territorial*. La Paz: Fobomade..
- Mongabay (2022). "¿Amazonía en el punto de no retorno?: Brasil y Bolivia son los países con mayor deforestación y degradación de sus bosques". Recuperado de: <https://es.mongabay.com/2022/09/alerta-por-deforestacion-y-degradacion-de-la-amazonia-punto-de-no-retorno/>
- Monte-Mór, R. (1994). "Urbanização extensiva e lógicas de povoamento: um olhar ambiental" en *Território, globalização e fragmentação*. São Paulo: Hucitec/Anpur, pp. 169-181.

- Nagatani, K. et al. (2009). "La Amazonía de hoy" en *GEO Amazonía: perspectivas del medio ambiente en la Amazonía*. Ciudad de Panamá: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pp. 109-193.
- Panisset, J.; Libonati, R.; Gouveia, C.; Machado-Silva, F.; França, D.; França, J. y Peres, L. (2017). "Contrasting patterns of the extreme drought episodes of 2005, 2010 and 2015 in the Amazon Basin", *International Journal of Climatology*, doi:10.1002/joc.5224
- Lima Peixoto, L., y Abreu da Silveira, F. (2019). "Da água, a palavra: uma reflexão sobre as relações entre cidade e cursos d'água em Salvaterra a partir da memória de seus habitantes". *Ponto Urbe. Revista do núcleo de antropologia urbana da USP*, N°24.
- Peralta-Rivero, C. (2020). "Impactos y tendencias del modelo agroindustrial en las tierras bajas de Bolivia". *Mundos Rurales*, Vol.15, N°1, septiembre 2020, pp. 5-24.
- Perez Tarqui, A. (2023). "Periferias urbanas y violencias ambientales en ciudades de la Amazonía Andina. Rurrenabaque, Bolivia y Tena, Ecuador". Tesis de maestría FLACSO, Ecuador.
- Peroni, F. y Pappalardo, S. (2024). "Climate justice in future cities: Geographical perspectives for inclusive urban resilience and adaptation, Landscape and Urban Planning". *Landscape and Urban Planning*, Vol. 244, pp. 1-4.
- Porto-Gonçalves, C. (2015). "Amazônia enquanto acumulação desigual de tempos: Uma contribuição para a ecologia política da região". *Revista Crítica de Ciências Sociais*, pp. 63-90.
- Portugal, M. y Michel, F. (2021). "Cambio climático y resiliencia tradicional/ancestral: pueblos y nacionalidades indígenas del centro oriental de la Amazonía Ecuatoriana". *Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*. Vol. 8, N° 15, enero-junio 2020, pp. 13-61.
- Poveda, J. (2011). "El papel de la amazonía en el clima global y continental: impactos del cambio climático y la deforestación". *Escuela de Geociencias y Medio Ambiente*, pp. 145-155. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/9760>
- Quevedo Ramírez, T. (2013). *Agroindustria y concentración de la propiedad de la tierra*. Quito: Observatorio del cambio Rural.
- Machado Rocha, V.; Silva Correia, F. y Morelli Fonseca, P. (2015). "Reciclagem de precipitação na Amazônia: Um estudo de revisão", *Revista Brasileira De Meteorologia*, Vol. 30, N°1, marzo 2015, pp. 59-70. <https://doi.org/10.1590/0102-778620140049>
- Rondón Ramírez, G. (2015). "Los territorios del agua en dos localidades de la Amazonía norte del Perú: Los casos de Lamas (San Martín) y Santa María de Nieva (Amazonas)". *Espacio y Desarrollo*, N°27, pp. 137-158.
- Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Rurrenabaque (Samapar) (2018). "Plan Operativo Anual POA Gestión 2018".
- Stoian, D. (2005). "La expansión de la frontera extractivista: El uso de los bosques húmedos en el norte boliviano, 1820-1995" en *La Economía extractivista de la Amazonía Norte Boliviana* (Yakarta: CIFOR), pp. 53-101.

- Swyngedouw, E. (2009). "The Political Economy and Political Ecology of the Hydro-Social Cycle. Journal of Contemporary Water Research & Education" Vol.142, N°1, pp.56-60, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1936-704X.2009.00054.x>
- Swyngedouw, E. (2004). *Social Power and the Urbanization of Water: Flows of Power* (Oxford: Oxford University Press).
- Villa, G. (2010). "Crítica a la racionalidad económica: A propósito del debate sobre el uso del agua de la Amazonía. Paper 269", *Papers do NAEA*, Vol. 19, N°1. <http://dx.doi.org/10.18542/papersnaea.v19i1.11365>
- Vos, V.; Gallegos, S.; Czaplicki, S. y Peralta-Rivero, C. (2020). "Biodiversidad en Bolivia: Impactos e implicaciones de la apuesta por el agronegocio". *Mundos Rurales*, Vol.15, N°1, septiembre 2020, pp. 25-48.

# EL LASTRE DEL *BOOM* MINERO EN LA AMAZONÍA





# Enclaves de devastación y minería aurífera en el departamento de La Paz, Bolivia

---

*Fernando Alcons Salluco*

## Resumen

En los últimos años, la preocupación por la deforestación se ha centrado en gran medida en la cuantificación de las cicatrices de quema y los focos de calor, lo que ha llevado a una mimetización de los actores conductores de la deforestación que operan más allá de las razones mediáticas, como el chaqueo. En 2023, el departamento de La Paz experimentó una histórica calcinación de su bosque amazónico, impulsada no solo por el chaqueo, sino también por la voracidad del mercado internacional del oro, que ha subyugado a la población a sus intereses. El objetivo de este escrito es explicar la dinámica minera aurífera en los principales ríos de la región de la franja subandina del departamento de La Paz y su relación con la deforestación. Para ello, se empleó el concepto de enclave económico como marco teórico, analizando imágenes satelitales (2015 - 2023) y testimonios locales. Este enfoque permitió identificar indicios de consolidación de nodos de extracción aurífera que, a largo plazo, se vincularán con sus similares, creando redes extractivas que replican prácticas de la economía de enclave con matices diferentes que refuerzan su consolidación. Además, se destaca el temor sobre la magnitud de las nuevas incursiones auríferas en la región, donde los incendios son cada vez más expansivos en zonas remotas escalando potencialmente hacia un punto sin retorno.

## Palabras clave

Deforestación, minería aurífera, enclave económico, incendio, panamazonía.

## Introducción

La deforestación en la región amazónica representa una expresión palpable de la voracidad del capitalismo, que busca explotar los diversos recursos naturales presentes en este vasto territorio. Ya sea mediante la tala indiscriminada de árboles para la obtención de madera, la extracción de minerales o la transformación de extensas áreas en monocultivos destinados a la producción de materias primas agrícolas: la Amazonía se ve afectada por la pérdida progresiva de su estructura ecológica debido a intereses económicos. La magnitud de la superficie cubierta por vegetación que se ha perdido se ha convertido en el principal indicador al que, tanto la comunidad académica como la sociedad civil, recurren para evidenciar el desequilibrio ambiental al que estas actividades están conduciendo.

En Bolivia, en el año 2019 se produjo una devastación considerable cuando los incendios arrasaron entre cinco y seis millones de hectáreas de los bosques secos chiquitanos y las llanuras aluviales (Cedib, 2020; FAN, 2019; Tierra, 2019), afectando a más del 50 % de las especies nativas (Licona *et al.*, 2021) y causando la muerte de millones de individuos (Pacheco *et al.*, 2021). Este suceso, catalogado como un ecocidio, señaló al Estado boliviano como responsable de los incendios debido a la aprobación de lo que se denominó como el "paquete de leyes incendiarias". En respuesta, se centró la atención en la restauración de las áreas afectadas y en el monitoreo constante de los focos de calor para alertar a los organismos encargados de atender la emergencia. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, el interés por comprender las dinámicas detrás de los incendios se diluyó y se normalizó la idea de las superficies quemadas centrándose especialmente en Santa Cruz, que fue el epicentro de los incendios.

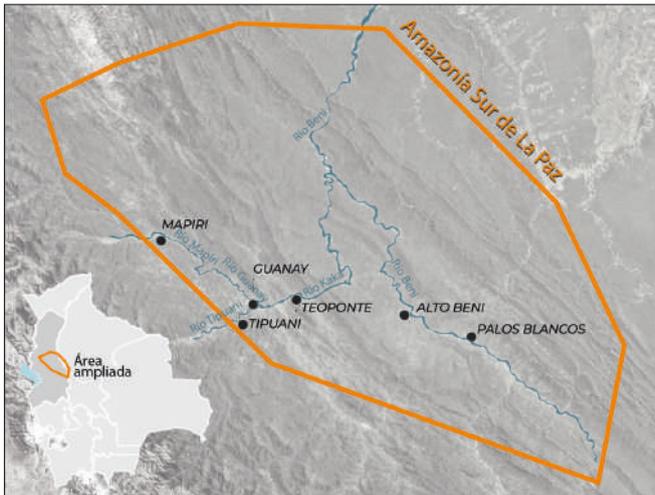
Sin embargo, transcurrieron cuatro años antes de que la deforestación volviera a ser motivo de preocupación. En el año 2023, la población de La Paz, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, observó con alarma cómo las columnas de humo delataban la pérdida de biodiversidad en diferentes municipios de la región de los Yungas y el norte de La Paz. Este evento atípico en el departamento llevó a buscar a los responsables, señalando a coccaleros, campesinos y mineros como los actores de tal emergencia. Los dos primeros están asociados con la práctica del chaqueo, una tradición agrícola de tala y quema de larga data, mientras que los últimos son señalados por su responsabilidad a la degradación ambiental.

La minería aurífera en el departamento de La Paz se desarrolla en diversas regiones, especialmente en las riberas de los ríos que contienen oro aluvial. Aunque se ha señalado a estos actores por su impacto ambiental debido al uso de mercurio, su contribución a la deforestación ha sido poco abordada, en gran medida debido a que muchas de estas operaciones son a pequeña escala (Alvarez-Berrios y Mitchell Aide, 2015). No obstante, con los incendios de 2023, se les señala como responsables debido a su dinámica de trabajo al instalarse y extraer oro en zonas cada vez más remotas, buscando áreas

con potencial aurífero. Este interés quedó reflejado en su pliego petitorio a finales de 2023, donde expresaron su intención de ingresar a nuevas áreas, incluyendo áreas protegidas.

Este artículo tiene como objetivo analizar la deforestación en el departamento de La Paz en su relación con las dinámicas de la actividad aurífera aluvial, utilizando el concepto de "enclave" como elemento teórico para explicar la dinámica minera aurífera en los principales ríos de la región de la franja subandina del departamento de La Paz, también conocida como la región de la Amazonía sur de La Paz, según Diez Astete (2011), que incluye partes de las provincias de Nor Yungas, Larecaja, Caranavi y Franz Tamayo (mapa 1). Para este fin, se emplearon técnicas de análisis espacial-temporal de imágenes y ortofotos satelitales<sup>35</sup>, prestando atención a la pérdida de cobertura vegetal y su relación con las actividades de los actores mineros en las áreas identificadas. Esto fue posible gracias a la variedad de recursos digitales de acceso libre, que, aunque heterogéneos en sus métodos de captura remota, proporcionaron elementos para el análisis espacial fusionando bandas espectrales de imágenes Sentinel-2 (combinación de bandas 12-11-4). Adicionalmente, las interpretaciones geográficas sobre la transformación de los paisajes ribereños desde 2015 hasta 2023 se contrastarán con los testimonios de los actores involucrados en estos procesos, en los principales núcleos poblados del área estudiada. Los testimonios se recogerán mediante una guía de preguntas semiestructurada, que permitirá compartir las experiencias específicas relacionadas con la deforestación.

**Mapa 1. Ubicación del área de estudio**



Fuente: Elaboración propia, 2023.

<sup>35</sup> Las ortofotos analizadas corresponden al banco de imágenes satelitales procesadas y luego cargadas en la plataforma Google Earth de las fechas 2005-2021 en función de la disponibilidad de imágenes de cada cuadrícula.

## Apuntes teóricos

La deforestación ha sido abordada desde diversos enfoques, que han permitido la construcción de un corpus metodológico para su medición a través de sensores remotos. Estos, mediante indicadores de la superficie, ofrecen una estimación de la magnitud de la pérdida boscosa. Aunque el enfoque cuantitativo ha experimentado mejoras en la exactitud de las mediciones, desafortunadamente los datos y la información disponible han permanecido limitados por la visión horizontal de la deforestación.

Desde el ámbito de las ciencias sociales se ha incorporado una lectura estructuralista de la deforestación, considerándola como la expresión espacial de procesos macrosociales ligados al extractivismo. Estudios como los que analizan al agronegocio en Latinoamérica han intentado demostrar cómo los procesos globales resultan en la deforestación y en efectos socioculturales directos en la población local (Schmidt y Toledo López, 2018). A estas dinámicas se suman el rol de los Estados como facilitadores del extractivismo en sus diferentes modalidades (Vos *et al.*, 2020) y el papel catalizador de actores económicos regionales y locales (Müller *et al.*, 2012; Salizzi, 2020). Casos similares y otros en diferentes países subrayan la importancia de prestar atención a las acciones subyacentes de la deforestación y, por ende, a los actores involucrados.

Sin embargo, es poco lo que se conoce de las dinámicas que estos actores practican y más aún si son dispersos y heterogéneos como las cooperativas auríferas. Aun así, existen elementos que permiten esbozar su funcionamiento resaltando el componente espacial de su dinámica. Es así que es importante retomar las ideas centrales de la economía de enclave abordado por Bonilla (1974), Zapata (1978) y Sariego Rodríguez (1988) que prestan mayor atención a la unidad productiva (sea una mina, fábrica, plantación o campamento petrolero entre otros) con las siguientes características: 1. aislada en términos geográficos, 2. ser o haber sido propiedad de empresas extranjeras, 3. tener escasas vinculaciones a la economía nacional, 4. poseer una organización social y 5. tener una ciudad o poblado articulado y dependiente de la unidad productiva. El conjunto de características de los enclaves propuesto por los autores proporciona elementos fundamentales para el análisis de actividades económicas como la minería aurífera en Bolivia.

Las reflexiones a las que llegaron los autores, en el siglo pasado, estaban permeadas por la realidad capitalista de aquellos años donde las empresas extranjeras tenían mayores libertades explotando los recursos naturales de los países del sur. Si bien el contexto ha cambiado en muchas dimensiones, varios aspectos que en aquel entonces caracterizaban a los enclaves siguen vigentes. Así lo plantean recientes investigaciones que profundizan sobre los enclaves mineros en la Amazonía brasileña, que aún mantienen características de aislamiento para la extracción de minerales (Carvalho *et al.*, 2017). O en México donde la megaminería recurre a estrategias políticas

para presentarse como socialmente responsable y sustentable para despojar a comunidades indígenas de sus tierras (Guzmán López *et al.*, 2019).

## **Retrato de la deforestación y el oro aluvial en el departamento de La Paz**

La deforestación en la región amazónica del departamento de La Paz ha sido objeto de monitoreo por parte de diversos actores, quienes identifican los incendios como la principal causa de esta problemática. Según datos oficiales proporcionados por el Estado boliviano a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2018), la deforestación acumulada entre 2000 y 2017 alcanzó 131.298 hectáreas, lo que representaba el 2 % del total nacional deforestado. Los municipios de La Paz más afectados por este fenómeno fueron San Buenaventura (938 ha.), Ixiamas (686 ha.) y Palos Blancos (16 ha.). La fuente más reciente de deforestación causada por incendios data del año 2021. Las estimaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra - ABT (2022) señalan una pérdida de 222.598 hectáreas, presentando una diferencia de casi 100 mil hectáreas de bosque perdido y reiterando a Ixiamas como el municipio más afectado de La Paz. Estas cifras son alarmantes ya que los municipios paceños afectados, según Andersen (2014), albergan la mayor cantidad de riqueza absoluta de especies (RAE) que se encuentran amenazadas y se estima que podrían perder casi la mitad de sus especies para el año 2100 debido a la deforestación.

Estas cifras de deforestación por incendios están estrechamente relacionadas con el *chaqueo*, una práctica utilizada para habilitar tierras destinadas a actividades agrícolas y ganaderas en la región, siendo la producción de coca y otros cultivos los principales motivos. El uso del fuego es recurrente entre los meses de septiembre y octubre como primera etapa para la habilitación de superficie agrícola, caracterizada por ser económicamente accesible comparado con otras prácticas más sostenibles (Apaza Segales, 2006; García Apaza, 2014). La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, 2023) estima que, en 2022, la superficie de cultivos de coca en el departamento de La Paz fue de 18.554 hectáreas; casi 5 mil hectáreas más que en 2002. Estas cifras reflejan la permisividad del *chaqueo*, pero no reflejaría la totalidad de superficie deforestada atribuida a la coca u otros productos como el café (Torrico-Albino *et al.*, 2019), cacao, banano y cítricos (Orozco y Somarriba, 2005). Según estimaciones de la ABT, la superficie deforestada en el departamento de La Paz alcanzaba casi las 100.000 hectáreas para 2021, lo que sugiere que la deforestación está relacionada con otras actividades económicas presentes en la región como la minería aurífera.

La extracción de oro tiene presencia en la región desde el siglo pasado, pero comenzó a consolidarse a partir de 2007, principalmente debido a los precios internacionales del mineral (Alvarez-Berrios y Mitchell Aide, 2015). La actividad aurífera en los ríos Mapiri y Guanay comenzó con empresas extranjeras en la década de los 50, encabezadas por la Tide Water Oil Co., Bolinca Mining Corp y South American Placers Incorporated - Sapi (Ruiz

Bonilla, 1989). Posteriormente, se produjeron ocupaciones por parte de los jornaleros denominados "balseros", quienes tomaron posesión de 32 minas en la provincia de Larecaja, dando lugar a la fundación de la Federación Regional de Cooperativas Mineras de Tipuani en 1960, que llegó a albergar alrededor de 8.000 cooperativistas (Smith, 1989).

Estos fueron los primeros pasos que los mineros cooperativistas dieron para concretar un crecimiento abrumador en la región décadas después, no solo en términos de número, llegando a superar las 2.077 cooperativas en 2020, de las cuales el 70 % estaban registradas como auríferas en el departamento de La Paz (Villegas Flores *et al.*, 2021); sino también en el acceso a tierras o las denominadas concesiones para la explotación aurífera que fueron facilitadas por leyes y decretos que desencadenaron el emergente poderío minero aurífero que se viene cristalizando en el departamento.

La minería aurífera desde sus primeros años, organizada como cooperativas, ha mostrado la reproducción de los elementos fundamentales de los enclaves económicos con diferentes matices. Según Vladimir Smith (1989), expresidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreo) en aquel entonces, después de 1980, las cooperativas mineras constituyeron como centros poblados a Guanay y Tipuani, convirtiéndolos en sus puntos intermedios para abastecerse de los insumos necesarios para la minería, creando lo que se conoce como *company town*: poblaciones ligadas y dependientes de la actividad económica de enclave. Otra característica de los enclaves es su aislamiento geográfico, que en el caso de los campamentos auríferos ha mutado hacia un aislamiento estratégico multidimensional. Esto implica mantener autonomía en la gestión y control de sus asentamientos sin aceptar regulaciones por parte del aparato estatal, pero al mismo tiempo buscar puntos de encuentro para negociar legislaciones que los benefician. Sin embargo, el aislamiento geográfico que los caracterizaba décadas atrás se ha ido desvaneciendo, debido a la necesidad de articularse a sistemas de abastecimiento de insumos y comercialización de oro y – más aun– considerando la diversidad de orígenes de los trabajadores, que los vinculan de una u otra forma con otros territorios. Otro rasgo que mantienen las cooperativas mineras, y que fue heredado de sus antecesores, es la capacidad de influir en organizaciones e instituciones ajenas a sus actividades económicas de tal manera que las beneficie; así ocurre cuando los representantes mineros logran acceder a cargos de decisión a nivel municipal o regional, pudiendo influenciar significativamente en la gestión territorial.

Además de las características descritas de forma de enclave, la forma de asentamiento y explotación aurífera proporciona elementos esenciales para comprender su impacto en la deforestación. Por un lado, los campamentos auríferos necesitan abastecerse de diversos insumos como diésel, mercurio, gasolina, aceite, gas y agua, lo que implica que las capitales municipales y las comunidades cercanas a los campamentos actúen como nodos articuladores, impulsados por los caminos que fueron abiertos por las mismas cooperativas mineras. Muchos campamentos dependen de la

madera para construir balsas o puntales, esenciales para la estabilización del terreno, y la obtienen mediante la tala de los alrededores (Aquino Tarqui, 2000; Campanini Gonzáles *et al.*, 2015).

Sin embargo, la práctica más devastadora es el acondicionamiento del terreno, que implica la remoción de grandes volúmenes de suelo y todo lo que contiene, para separar con mayor facilidad el sustrato y extraer el oro aluvial. Pero eso no es todo, las nuevas incursiones mineras, aunque a menudo carecen de un sustento técnico geológico sólido, siguen guiándose, generalmente, por la intuición visual (Gaona Boixader, 2021). Esto lleva a asentamientos en lugares incorrectos, obligando a los mineros a desplazarse dejando atrás una devastación ecológica visible en el paisaje ribereño, que se ve afectado con la eliminación de toda cubierta vegetal en los márgenes de los ríos, como lo describe Rodríguez (2002) en su diagnóstico de la comunidad Challa en el municipio de Guanay.

La actividad minera se puede clasificar según el tipo de explotación: en el río, en lagunas artificiales, hidráulica y en seco, estando las tres primeras ligadas a prácticas aluviales (Wotruba *et al.*, 1998). La minería en el río se caracteriza principalmente por alteraciones en la morfología y curso de los ríos. La explotación en lagunas artificiales implica la construcción de estas para llevar a cabo procesos de lixiviación y de esa manera obtener el oro granulado. Por último, la minería hidráulica se basa en principios gravimétricos donde el agua se utiliza para diferenciar las partículas de oro de otros minerales. La práctica individual o conjunta de estos tipos de explotación son las principales causas de derrumbes de grandes volúmenes de tierra y riadas que inundan los campamentos auríferos, como se describe en estudios como el de Aquino Tarqui (2000). Además, la quema de extensiones de terreno para facilitar la instalación de los campamentos también es común, como lo señala Calla Ortega (2015). Por otro lado, el uso intensivo de maquinaria para el movimiento del sedimento afecta significativamente el entorno, siendo más evidente en la minería de oro a cielo abierto que en la subterránea, según lo mencionado por Nogales (2015).

A lo largo de este primer apartado se ha establecido una conexión entre la deforestación y la actividad minera, centrándose especialmente en la minería aluvial de oro, la cual posee características distintivas que la diferencian de otras actividades extractivas. Según Campanini (2021), citando datos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la minería aurífera en 2018 estaba presente en los ríos Mapiri, Guanay, Tipuani, Kaka y Beni, a través de concesiones y adjudicaciones mineras. El avance constante y progresivo de la minería aurífera parece no encontrar barreras, extendiéndose por los ríos de diversas cuencas que alimentan a la región amazónica. En el siguiente apartado se profundizará la presencia de la minería aurífera en estos ríos y se analizará detalladamente la magnitud de la deforestación asociada a esta actividad, teniendo en cuenta las características específicas de la extracción aluvial de oro.

## Una aproximación a la deforestación minera y sus dinámicas espaciales

Las dinámicas de los asentamientos mineros auríferos brindan elementos esenciales para diferenciarlos de otras actividades a la hora de atribuirles la deforestación. Como recurso de análisis se tienen las imágenes satelitales capturadas entre los años 2005 y 2020, que permiten analizar en diferentes momentos las dinámicas que provocan la deforestación y su caracterización diferencial en relación con otras actividades. A continuación, se analizará un caso recurrente a orillas de los ríos apropiados por las cooperativas.

La comunidad de Baropampa, que administrativamente pertenece al municipio de Guanay y se encuentra a orillas del río Guanay, aproximadamente a una hora de la capital municipal en automóvil. En 2001, la comunidad registraba a 90 habitantes que estaban dedicados casi enteramente a la agricultura, con casas edificadas alrededor de una plaza y una cancha de fútbol. El color verde es predominante en el paisaje. Ya para el 2012, la comunidad alcanza una población de 162, iniciando una transformación radical en su estructura económica. La adjudicación de una cuadrícula minera aurífera llevó a la transformación devastadora del paisaje, según lo que se puede apreciar de la imagen satelital capturada en 2020 (mapa 2).

Dos acciones concretas transformaron la comunidad y sus alrededores: la tala de árboles para acceder al subsuelo, removiendo grandes cantidades de tierra suelta, y la desviación del río ampliando su lecho; ambas con el objetivo de facilitar la obtención de los granos de oro del sedimento. Por otro lado, existen cambios secundarios que tienen su importancia para la extracción del mineral: primero, el ensanchamiento y apertura de caminos alrededor del campamento, para acceder a zonas con mayores pendientes y, segundo, la instalación del campamento y lagunas artificiales. Se estima que entre 2005 y 2021 la pérdida de cobertura vegetal, que contempla los árboles y arbustos solo que daban estabilidad al curso de agua y a las pendientes, fue de 72 hectáreas solo en este punto.

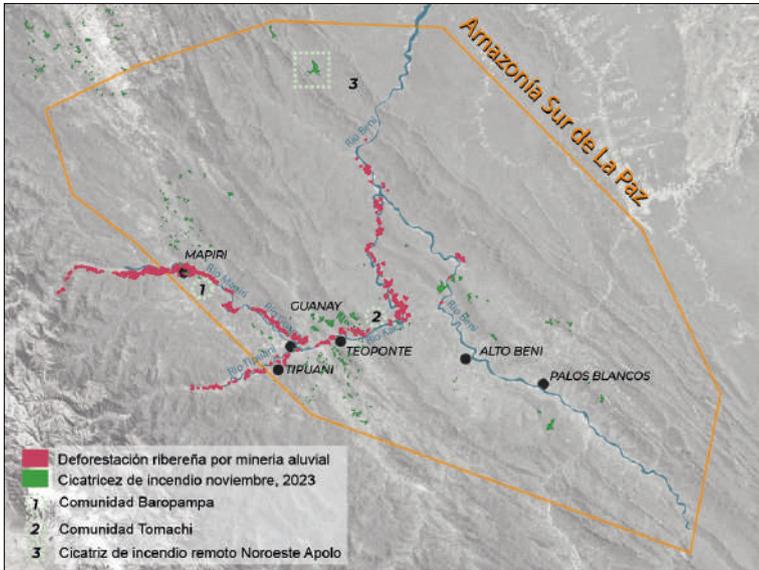
**Mapa 2. Deforestación y cambio de curso de agua en proximidades de la comunidad Baropampa**



Fuente: Elaboración propia a partir de ortofotos satelitales del banco de datos de Google Earth, 2023: coordenadas 15°26'58" sur y 67°56'30" oeste.

El ejemplo de la comunidad Baropampa y sus inmediaciones reflejan la manera de ocupar y transformar el paisaje con fines mineros que se repite a lo largo de los ríos Mapiri, Guanay, Tipuani y Kaka, y también en segmentos del río Beni, corroborando la presencia minera expuesta en el mapa minero del Cedib. Replicando el procedimiento analítico espacial del caso de Baropampa se estima que, entre los años 2005 - 2020, la minería aurífera aluvial habría provocado la pérdida de casi 5.200 hectáreas a orillas de los ríos mencionados (mapa 3). Si bien repiten el patrón de ocupación, una diferencia adicional es la magnitud y técnicas de extracción implementadas, siendo en unos casos más evidentes las lagunas artificiales para la extracción por lixiviación y, en otros, las recientes talas de árboles para acceder al sustrato. También se aprecia la relación entre campamentos y comunidades/centros poblados pues las distancias entre estos espacios son mínimas, sobre todo en los ríos Mapiri y Guanay.

**Mapa 3. Deforestación ribereña por minería aluvial (2021) y cicatriz de quema (octubre, 2023) en la región Amazonía sur de La Paz**



Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth (ortofotos 2005-2021 para deforestación) e imágenes satelitales Sentinel-2 (octubre a noviembre, 2023, para cicatrices de quema).

Si bien la mayoría de los campamentos se establecieron entre 2015 y 2017, las nuevas incursiones en los años siguientes no cesaron. Francisco, quien ha vivido en Guanay más de 40 años y ha trabajado en varias cooperativas desde temprana edad, ofrece un testimonio elocuente al respecto. A sus 55 años lamenta no haber comprado acciones mineras en el pasado, ya que ha tenido que afrontar gastos médicos significativos para sus hijos, quienes siempre han tenido problemas de salud delicados. A pesar de ello, Francisco

ha logrado ahorrar dinero gracias a su trabajo como jornalero para cubrir los gastos de su hogar.

Francisco recuerda cómo cada año llegaban decenas de personas de diferentes lugares, principalmente del Altiplano, en grupos de entre 10 y 15 personas. Estos, recién llegados, se internaban varios días río adentro, donde luego se asentaban armando cabañas artesanales con yutes, *nylon* y troncos talados por la zona. Permanecían así durante varias semanas hasta que regresaban a Tipuani o Guanay para llevar en botes mangueras, turriles, diésel, pequeños motores y otros suministros. Sin embargo, lo que más escaseaba era agua y comida, lo que desanimaba a varios de ellos y los llevaba a no regresar a los campamentos, según recuerda Francisco. La suerte fue un factor de éxito para algunas cooperativas, que les permitió mejorar su extracción de mineral y también lo que les permitía invertir en la apertura de caminos con tractores. No obstante, para otras cooperativas, los recursos no eran suficientes y continuaron utilizando botes. Con el tiempo, estos botes también fueron mejorando al adaptarles motores a diésel, lo que facilitó el transporte de insumos a los campamentos más alejados de los principales caminos y centros poblados. A medida que mejoraban en su extracción aurífera, también podían remover una mayor cantidad de tierra y ganarle terreno a las riberas del río.

Las particularidades de los asentamientos auríferos en los ríos de la Amazonía sur del departamento de La Paz, y la magnitud de la deforestación asociada a ellos, presentan evidencias de una pérdida devastadora y potencialmente irreversible de la cobertura vegetal. Según la entrevista realizada a Francisco, estos procesos comienzan de manera incipiente, pero con el paso de los años despliegan diferentes estrategias que resultan en un impacto ambiental abrumador. Aunque la minería aurífera se clasifique como de pequeña escala, la suma de estas evidencias apunta a un avance continuo hacia una realidad socioambiental de no retorno.

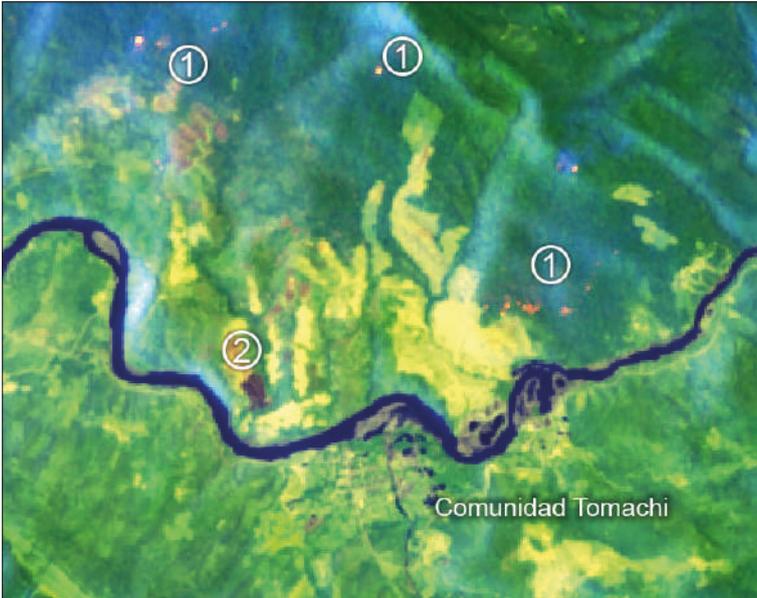
## **Incendios y enclaves de devastación**

Como se mencionó en la parte introductoria, los incendios de 2023 despertaron la preocupación por el rumbo ecológico al que se está dirigiendo la región. A diferencia del análisis temporal y espacial de la deforestación aluvial, la deforestación por incendios representa un reto a la hora de identificar y explicar sus causas, al ser en algunos casos esporádicos e imperceptibles a los sensores de acceso libre. A pesar de ello, las imágenes cuasi semanales que proporciona el sensor Sentinel-2 brindan algunos indicios espaciales de la magnitud de tal desastre ambiental.

El mapa siguiente, capturado el 20 de octubre de 2023 durante la emergencia por los incendios en el departamento de La Paz, muestra la situación en las inmediaciones de la comunidad Tomachi, en el municipio de Teoponte (mapa 4). Los incendios activos (marcados con el número 1), representados en la

imagen satelital, están ubicados en los márgenes de sectores previamente deforestados, indicando un continuo desmonte en la zona. Por otro lado, en el punto 2 se observa una cicatriz de incendio reciente frente a la comunidad Tomachi de forma semi-regular, lo que podría sugerir actividades agrícolas; por otra parte, su proximidad al río y a incursiones auríferas sugiere que también podría corresponder a las etapas iniciales de la prospección aurífera en el sector. Esta apreciación no se puede corroborar por no existir información oficial de la extensión de las cuadrículas dadas en concesión a la Cooperativa Aurífera Leco Tomachi R. L.

**Mapa 4. Incendios en proximidades de la comunidad Tomachi (octubre, 2023)**



Fuente: Elaboración propia a partir imágenes satelitales Sentinel-2, combinación de banda 12-11-4, 2023: coordenadas 15°28'26" sur y 67°44'13" oeste.

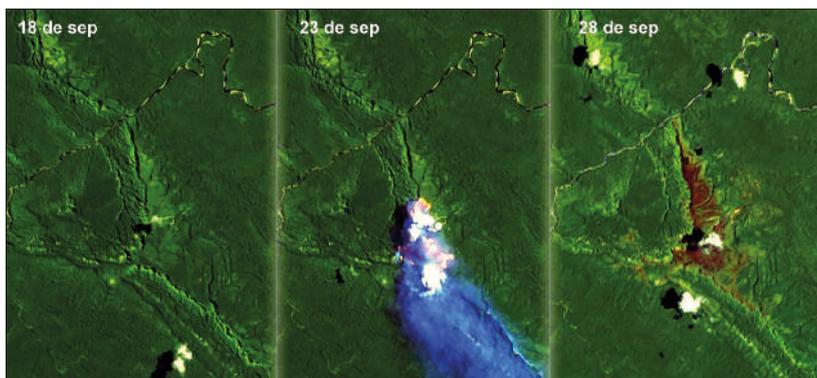
El ejemplo de Tomachi refleja el caso de muchos incendios que ocurrieron en 2023 a orillas de los ríos abarcados en esta investigación. Por otro lado, los incendios también afectaron las laderas de las diferentes serranías adyacentes, donde se concentraron las mayores pérdidas de cobertura vegetal. Se le atribuye al chaqueo descontrolado las pérdidas de estas superficies en varias propiedades de comunidades campesinas distantes de los centros y comunidades mineras.

A pesar de las explicaciones proporcionadas para los incendios de 2023, se han registrado casos inusuales que no siguen los patrones actuales de deforestación descritos anteriormente. En el extremo noroeste del municipio de Apolo, a más de 20 kilómetros lineales de la comunidad Yurawi, se produjo un incendio en septiembre de 2023 que arrasó con aproximadamente 600

hectáreas (mapa 5). Sin la presencia de un centro poblado o asentamientos humanos cercanos, pareciera no existir un responsable directo del fuego. Lo preocupante, más allá de la superficie devastada, fue la reactivación del incendio que se prolongó hasta fines de diciembre y que finalmente fue sofocado por las lluvias en enero.

La existencia de un río al norte de la cicatriz podría significar la única vía de acceso a este punto. Este río forma parte de los afluentes del río Beni, que es surcado principalmente por botes acondicionados con motores a diésel y gasolina. Teniendo en cuenta que los botes fueron los principales medios de transporte para las primeras incursiones mineras, no es descabellado pensar en ciertas correlaciones. Aunque es tentador atribuir el fuego a eventos fortuitos de la naturaleza, las características de la minería aurífera aluvial en sus primeras etapas sugieren la posibilidad de nuevas incursiones, similares a las realizadas décadas atrás, que buscaban explotar áreas remotas para ser los primeros en reclamar su posesión. Además, la falta de información actualizada sobre los permisos y concesiones mineras otorgadas por la AJAM dificulta descartar estas preocupaciones.

**Mapa 5. Incendios en punto remoto al noroeste del municipio de Apolo (septiembre, 2023)**



Fuente: Elaboración propia a partir imágenes satelitales Sentinel-2, combinación de banda 12-11-4, 2023: coordenadas 14°39'48" sur y 67°51'30" oeste. Punto tres en el mapa 3.

De lo que sí hay certeza es la presión ambiental que está sufriendo la región debido a la actividad minera y las externalidades de sus operaciones. Aunque algunas de estas externalidades puedan ser imperceptibles para la tecnología, su impacto en la biodiversidad y en la población que convive con ella se encamina hacia un punto de no retorno si continúa la expansión de la minería aurífera. Los incendios forestales son la señal visible de una pérdida gradual de los bosques; y la incursión minera –a través de enclaves– está devastando todo lo que encuentra a su paso. La mayor preocupación radica en las nuevas zonas de explotación, que lamentablemente son accesibles a través de los ríos. Estos ríos, que en su momento eran considerados las venas

de la Amazonía, conectando no solo a las personas sino también a todo el bioma, se han convertido en vías de acceso para los intereses extractivos.

## Conclusiones

Abordar el análisis de la deforestación no solo con cifras, sino vincularlo a los actores y sus dinámicas, evidencia el impacto sistemático que tienen las actividades extractivas, en este caso, la minería aurífera aluvial. Las particularidades de esta actividad brindan elementos para diferenciarla de otras, especialmente en el impacto que provoca en los lugares donde se instala, transformando paulatinamente, pero de manera radical, su entorno. La cobertura vegetal es la primera en desaparecer, dando lugar a cambios en el curso de los ríos y, dependiendo del éxito de la extracción de oro, a iniciativas para ampliar el área de explotación, escalando las pendientes próximas a las riberas de los ríos.

Se trata de una actividad de continua expansión a lo largo de los ríos de la Amazonía boliviana, presentando las mismas características de los enclaves económicos del siglo pasado, donde los principales actores eran empresas extranjeras. Estas han sido reemplazadas por actores locales, pero manteniendo su estructura básica de enclave, con matices acorde al momento histórico que vive el mundo y el país. Esta realidad conlleva temores sobre la magnitud de las nuevas incursiones auríferas en la región. Incendios cada vez más expansivos en zonas remotas encienden las alarmas sobre que el extractivismo minero en la Amazonía seguirá alcanzando nuevas zonas de explotación. Estos temores persisten ante el silencio de las autoridades pertinentes.

El análisis realizado en este documento proporciona elementos y aproximaciones para comprender las dinámicas de la minería aurífera cooperativista en Bolivia en forma de enclaves económicos. Este trabajo confirma la reproducción de muchas características de enclave practicadas por las cooperativas mineras, que se manifiestan espacialmente y pueden ser observadas con diversos recursos remotos como imágenes satelitales. Sin embargo, el esfuerzo por seguir desmenuzando todas las dimensiones de los efectos de la minería aurífera debe llevarnos, en primer lugar, a una concientización y, sobre todo, a la acción para frenar el hambre voraz del capitalismo sobre el patrimonio que la humanidad tiene en la Amazonía. Entender cada eslabón que permite el funcionamiento y la reproducción de esta actividad es crucial para evitar sus consecuencias y no llegar al punto de no retorno.

## Referencias

- Alvarez-Berriós, N. L., y Mitchell Aide, T. (2015). Global demand for gold is another threat for tropical forests. *Environmental Research Letters*, 10(2), 1–11. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/2/029501>
- Andersen, L. E. (2014). *La economía del cambio climático en Bolivia Impactos sobre la biodiversidad*. Banco Interamericano de Desarrollo, Monografía No. 192.
- Apaza Segales, R. M. (2006). *Desarrollo económico integral en el Municipio de Coripata*. Universidad Mayor de San Andrés.
- Aquino Tarqui, C. V. (2000). *Contaminación o desempleo, caso: Cooperativas mineras auríferas del departamento de La Paz*. Universidad Mayor de San Andrés.
- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT) (2022). *Plan de acción institucional para la gestión integral del fuego*.
- Bonilla, H. (1974). *El minero de los Andes: una aproximación a su estudio*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Calla Ortega, R. (2015). Medio ambiente y minería aurífera en la Amazonía boliviana: Parálisis local de una investigación científica urgente. In *El oro en Bolivia Mercado, producción y medio ambiente* (pp. 243–287). Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario Celda.
- Campanini Gonzáles, O., Gandarillas Gonzáles, M. A., y Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) (2015). Bolivia, el caso de Riberalta. In *Las rutas del oro ilegal Estudios de caso en cinco países amazónicos* (pp. 18–75). Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
- Campanini, J. (2021). *El avance hacia el Madidi*. <https://www.cedib.org/wp-content/uploads/2021/05/MineriaEnAreasProtegidas.pdf>
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Siglo XXI.
- Carvalho, A. C., Carvalho, D. F., Farias, A. L. A. de, & Aires, A. P. D. A. (2017). Economía extractiva mineral da amazônia paraense: indústria-motriz ou economia de enclave (ainda)? *RDE - Revista de Desenvolvimento Econômico*, 1(37), 159–185. <https://doi.org/10.21452/rde.v2i37.4901>
- Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) (2015). *Atlas minero de Bolivia*. LaLibre; Proyecto Editorial.
- Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) (2020). *Los incendios en la Chiquitanía el 2019 Políticas devastadoras, acciones irresponsables y negligencia gubernamental*. LaLibre; Proyecto Editorial.
- Díez Astete, A. (2011). *Compendio de étnicas indígenas y ecoregiones Amazonía, Oriente y Chaco*. Plural editores; Centro de Servicios Agropecuarios y Socio-Comunitarios - Cesa.
- Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). (2019). *Informe de área de quema e incendios forestales 2019*.
- Fundación Tierra (2019). *Fuego en Santa Cruz Balance de los incendios forestales 2019 y su relación con la tenencia de la tierra*. Santa Cruz: Fundación Tierra.

- Gaona Boixader, R. (2021). *Caracterización del oro orogénico de Bolivia*. Universitat Politècnica de Catalunya.
- García Apaza, E. (2014). Emisiones de gases de efecto invernadero en un periodo de habilitación de tierras. *Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales*, 1(1), 99–113.
- Guzmán López, F., Torres Carral, G. y Gómez González, G. (2019). Mega-mining and human rights in contemporary México. 1982-2018. *Revista de Geografía Agrícola*, 64, 105–141. <https://doi.org/10.5154/r.rga.2019.64.05>
- Licon, J. C., Peña Vilca, M. y Soriano C., M. (2021). *Afectación de los incendios de 2019 en dos tipos de bosques en la Chiquitanía*. Instituto Boliviano de Investigación Forestal (Ibif).
- Loayza Careaga, F. (2003). *Evaluación socioeconómica rápida de Chima municipio de Tipuani, Departamento de La Paz*. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). 2018. *Deforestación en el Estado Plurinacional de Bolivia periodo 2016-2017*.
- Müller, R., Müller, D., Schierhorn, F., Gerold, G. y Pacheco, P. (2012). Proximate causes of deforestation in the Bolivian lowlands: an analysis of spatial dynamics. *Regional Environmental Change*, 12(3), 445–459. <https://doi.org/10.1007/s10113-011-0259-0>
- Nogales, N. (2015). Informe de caso: extracción de oro en la Amazonía, cuenca de Tipuani-Mapiri. In *El oro en Bolivia Mercado, producción y medio ambiente* (pp. 101–242). Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario - Cedla.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) (2023). *Monitoreo de Cultivos de Coca 2022*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Unodc.
- Orozco, L. y Somarriba, E. (2005). Árboles maderables en fincas de cacao orgánico del Alto Beni, Bolivia. *Agroforestería en las Américas*, 43–44, 46–53.
- Pacheco, L. F., Quispe - Calle, L. C., A., S. G. F., Ocampo, M. y Claire - Herrera, A. L. (2021). Muerte de mamíferos por los incendios de 2019 en la Chiquitanía. *Ecología En Bolivia*, 56(1), 4–16.
- Rodríguez, I. (200). *Proyecto de comercialización de productos forestales no maderables: factores de éxito y fracaso*.
- Ruiz Bonilla, E. (1989). Delimitación de los yacimientos aluviales en Bolivia. En *Primer seminario nacional sobre explotación de oro aluvial en el noroeste boliviano* (pp. 77–91). Cámara de Diputados República de Bolivia.
- Salizzi, E. (2020). Agronegocio, deforestación y disputas en torno al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba (Argentina). *Territorios*, 43, 1–28. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.7982>
- Sariego Rodríguez, J. L. (1988). *Enclaves y minerales en el norte de México: historia social de los mineros de Cananea y Nueva Rosita, 1900 - 1970*.

- Schmidt, M. A. y Toledo López, V. (2018). Agronegocio, impactos ambientales y conflictos por el uso de agroquímicos en el norte argentino. *Revista Kavilando*, 10(1), 162–179. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-63771-2>
- Smith, V. (1989). El cooperativismo minero aurífero y su significado en la minería aluvional aurífera en el noreste boliviano. En *Primer seminario nacional sobre explotación de oro aluvial en el noroeste boliviano* (pp. 105–125). Cámara de Diputados República de Bolivia.
- Torrico - Albino, J. C., Jürgen Pohlen, H. A. y Quispe, J. L. (2019). "Estado del arte y demanda formativa para la revitalización de cafetales en los yungas de Bolivia". *CienciAgro*, 9(1), 28-41.
- Villegas Flores, K., Sandoval Camponovo, S., Zenteno, R. y Salmon, J. J. (2021). *Mercurio en la pequeña minería aurífera de Bolivia*. Plural.
- Vos, V. A., Gallegos, S. C., Czapicki - Cabezas, S. y Peralta - Rivero, C. (2020). *Biodiversidad en Bolivia: Impactos e implicaciones de la apuesta por el agronegocio*. *Mundos Rurales*, 15(1), 25–48. [https://cipca.org.bo/docs/publications/es/236\\_biodiversidad-en-bolivia-impactos-e-implicaciones-de-la-apuesta-por-el-agronegocio.pdf](https://cipca.org.bo/docs/publications/es/236_biodiversidad-en-bolivia-impactos-e-implicaciones-de-la-apuesta-por-el-agronegocio.pdf)
- Wotruba, H., Hentschel, T., Hruschka, F. y Priester, M. (1998). *Manejo ambiental en la pequeña minería*. Cosude, Medmin.
- Zapata S., F. (1978). "Enclaves y polos de desarrollo en América Latino: El Caso de Las Truchas (México)". In *Foyers industriels nouveaux en Amérique latine, Afrique noire et Asie* (pp. 29–40). Éditions de l'IHEAL. <https://doi.org/10.4000/books.iheal.6916>

# Impactos socioambientales y minería en la Amazonía Oriental brasileña: de la producción de riqueza a la distribución de riesgos

---

*Amanda Ferraz da Silveira y Heline Sivini Ferreira*

## Resumen

Desde los años 60, la Amazonía Oriental ha sido foco de atención del Estado brasileño y de grandes grupos económicos, siendo objeto de planificación y ejecución de grandes proyectos de desarrollo que ignoraron las realidades socioambientales locales. En más de 50 años de exploración minera, pese a ser presentada como "motor de la economía nacional", poco se ha discutido sobre sus impactos negativos en las personas y la naturaleza. Mientras alberga grandes proyectos extractivos, la región amazónica también posee una importante sociobiodiversidad que termina asumiendo los riesgos e impactos de la extracción de recursos. Como resultado de la minería, comunidades enteras, como Barcarena, vieron sus territorios contaminados por metales pesados. Considerando lo anterior, este trabajo tiene como objetivo analizar los impactos socioambientales de la minería en la Amazonía Oriental brasileña, destacando la brecha entre la producción de riqueza y la distribución de riesgos en la región.

## Palabras clave

Amazonía Oriental, minería, producción de riqueza, impactos socioambientales, distribución de riesgos.

## Introducción

Es innegable que existe un choque en la relación que las sociedades occidentales establecen con la naturaleza, vista como un mero bien a ser apropiado con fines económicos desde una concepción esencialmente antropocéntrica. Esta contradicción es evidente en la Amazonía, considerada por la lógica económica dominante como una "fuente de recursos" habitada por pueblos, que necesitan ser "rescatados del primitivismo" en nombre del progreso y el desarrollo. El avance del sistema capitalista sobre la naturaleza y los pueblos amazónicos es cada vez más veloz, resultando en crecientes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

Tras localizar reservas minerales valiosas bajo el bosque<sup>36</sup>, se planificó e implementó el Programa Grande Carajás (PGC) en un área que abarca los estados de Maranhão, Pará y Tocantins, a partir de la exploración minera en la Serra dos Carajás. Este programa es considerado una de las iniciativas mineras más grandes del mundo en términos de tamaño, alcance e inversiones.

El objetivo de este trabajo es analizar los impactos socioambientales de la minería en la Amazonía Oriental, destacando la brecha entre la producción de riqueza y la distribución de riesgos. Para ello, se utilizó una combinación de métodos inductivos y dialécticos, así como procedimientos monográficos y comparativos, además de investigación bibliográfica y documental. El área espacial considerada es la porción Oriental de la Amazonía Legal<sup>37</sup>.

Inicialmente, se hacen consideraciones sobre las riquezas de la Amazonía Oriental, especialmente de Pará y Maranhão, que consisten en su gran sociobiodiversidad. A continuación, se analiza la exploración minera en la región, los grandes proyectos implementados, especialmente el Programa Grande Carajás, y la producción de riqueza. Finalmente, se analiza el potencial de generar impactos en la sociedad y la biodiversidad, con análisis de situaciones concretas para demostrar la desproporción entre la producción de riqueza y la distribución de riesgos de la minería, destacando la cuestión de las vulnerabilidades de ciertos grupos sociales.

## La sociobiodiversidad de la Amazonía

La Amazonía es una invención, un mundo de superlativos y un conjunto de ecosistemas (Gondim, 1994). Conocida por albergar la cuenca fluvial más

---

<sup>36</sup> En definitiva y en términos prácticos, el Programa Grande Carajás fue la cara oficial e institucionalizada del ámbito estatal del Proyecto Ferro Carajás, que englobaba otros proyectos que tenían su base o estaban relacionados con él. Este proyecto, a su vez, fue una iniciativa de la Companhia Vale do Rio Doce, a través de su filial, que, aunque era estatal en ese momento, cubría los intereses del capital internacional.

<sup>37</sup> La Amazonía Legal, concepto jurídico que no corresponde al bioma amazónico, se divide en Amazonía Occidental (porción occidental) y Amazonía Oriental (porción oriental).

grande del mundo, el bioma amazónico también está formado por una extensa selva tropical que se extiende sobre un área de aproximadamente 8 millones de km<sup>2</sup> (Porto-Gonçalves, 2017). Reúne territorios pertenecientes a nueve países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela (Brasil, 2018). Toda la región está habitada desde hace al menos 16 mil años (Magalhães, 2016b), siendo el registro más antiguo de Brasil de hace 11.200 años en el municipio de Monte Alegre, Pará (Porto-Gonçalves, 2017).

El denso bosque, antes considerado uniforme e inhóspito, es también resultado de la actividad humana. Cada vez hay más evidencias de la existencia de sociedades con alrededor de un millón de personas que vivían en diferentes comunidades en el sur de la Amazonía (Souza *et al.*, 2018). Los pueblos amazónicos eran y son diversos. Según los primeros registros occidentales (Ribeiro, 2013), variaban desde grupos de hasta 100 personas en áreas de "tierra firme", hasta grupos mayores de cientos en regiones de "llanuras aluviales", dependiendo del tamaño del territorio. Además del número de miembros, las expresiones culturales también son diversas (Ribeiro, 2013). La población de la Amazonía antes de 1492 habría sido potencialmente de 5,1 millones de personas (Denevan, 1976), cuya concentración variaba entre zonas de llanuras aluviales y tierras secas. Anteriormente se creía que las sociedades vivían principalmente cerca de grandes ríos, pero existen registros en la Amazonía de poblaciones de miles de personas que vivían en lugares muy alejados de cursos de agua mayores (University of Exeter, 2018).

Desde principios del Holoceno<sup>38</sup>, el ser humano ha estado presente en la Amazonía ejerciendo gran influencia sobre ella. Las especies de animales y plantas consideradas domesticadas, aquellas utilizadas por grupos humanos, son más predominantes con relación a las que no lo son. Es decir, hay evidencia que la manipulación de especies y el trabajo sobre la tierra influyeron directamente en la composición del bosque. El perfil actual del bosque se debe a la manipulación realizada por los pueblos originarios (Balée, 2013), a través de agricultura de bajo impacto y pequeños claros que permitieron incluso mayor incidencia solar y, en consecuencia, aumentos de la biodiversidad como resultado de la exposición a la radiación (Sader *et al.*, 2006). La diversidad de formas de vida es tan grande que las especies no se repiten después de unas pocas hectáreas (Porto-Gonçalves, 2008; 2010). La vegetación y el manejo del suelo contribuyeron significativamente a la formación del bosque, determinando en parte sus características actuales (Watling *et al.*, 2017). Con base en esto, se estima que al menos el 60 % del bosque tiene un origen antropogénico (Magalhães, 2016a) resultante de esta gestión ambiental.

---

<sup>38</sup> Es una época geológica del período Cuaternario de la era Cenozoica que comenzó hace alrededor de 11,5 mil años y continúa hasta el presente. Existen controversias sobre el inicio de una nueva época geológica con la expansión del modo de producción capitalista y cambios en los procesos bioquímicos de la Tierra, el llamado "Antropoceno" o "Capitaloceno". Esta nueva era considera las profundas transformaciones geológicas que el ser humano, a través del modo de producción capitalista, ha provocado en el planeta.

Solo en la Amazonía Oriental<sup>39</sup> se ubican 183 tierras indígenas, considerando las 720 existentes en Brasil en diferentes fases del procedimiento de demarcación (Instituto Socioambiental, 2018). En cuanto a las comunidades quilombolas, la región cuenta con 1.121 de las más de 3.000 ya certificadas por la Fundação Cultural Palmares (Fundação Cultural Palmares, 2018). Es necesario resaltar que los estados de Maranhão y Pará tienen, respectivamente, 708 y 255 comunidades quilombolas certificadas, una concentración extremadamente significativa.

Con la invasión ibérica, las metrópolis europeas impusieron una forma de producir ajena a las dinámicas de vida existentes. Los colonizadores siguieron las demandas del mercado y la producción en la América Latina colonial estuvo marcada por ciclos: palo de Brasil, caña de azúcar, oro, plata, drogas del interior del país, algodón, café, caucho, etc. La producción colonial basada en el monocultivo y el extractivismo intensivo, con la esclavización de mano de obra negra e indígena, y luego la continuación de este modelo por parte de los estados nacionales, fueron responsables de comprometer las condiciones de vida de las personas y la naturaleza.

El bioma amazónico no corresponde a la Amazonía Legal, que es la "versión" institucionalizada de la Amazonía por el Estado brasileño para permitir que la colonización estatal se dirija al bioma, a través de la creación del Plan de Valorización de la Amazonía Legal. La Amazonía se institucionalizó a partir de definiciones construidas por el colonizador y, hoy, por el Estado. Toda la sociobiodiversidad existente fue ignorada y colocada bajo un denominador común con características elegidas en base a criterios económicos y excluyentes.

Actualmente, a más de 500 años del inicio de los genocidios durante la colonización en América Latina, en la Amazonía viven alrededor de 240 pueblos indígenas, además de comunidades negras quilombolas y campesinas, ribereñas, castañeras, cocoteras, caucheras, entre otras (Porto-Gonçalves, 2017). La diversidad étnico-cultural es impresionante y dentro de ella merecen destacarse los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad. Estos conocimientos abarcan desde técnicas de manejo de recursos naturales hasta métodos de caza y pesca, conocimientos sobre ecosistemas y propiedades de especies de flora y fauna utilizadas por las poblaciones tradicionales (Santilli, 2005). Este conocimiento antiguo era considerado inferior al conocimiento técnico-científico porque no seguía un "método científico".

En tanta diversidad, cada pueblo tiene sus propias formas de relacionarse con otros elementos de la naturaleza. Pero tienen algo en común: las personas y la naturaleza se construyen mutuamente. Así, los pueblos, también llamados poblaciones tradicionales, nombran, clasifican y manipulan las especies vivas,

---

<sup>39</sup> Para más información ver: Silveira, Amanda Ferraz da. Estado y destrucción en la Amazonía: proyectos de desarrollo e impactos socioambientales en Açailândia, Maranhão. 1ª edición. Naviraí: Aranduká, 2022.

según sus propias categorías y nombres. La naturaleza, para estos pueblos, no es salvaje y aislada, sino que tiene un valor de uso y un valor simbólico que compone el ser mismo de los pueblos de las más variadas maneras, en una cosmología compleja. Lo que ocurre en la Amazonía es etnobioidiversidad, donde la naturaleza es un elemento de producción y reproducción social de las personas (Diegues *et al.*, 1999; 2000).

En este sentido y contexto, naturaleza y cultura no pueden entenderse como elementos separados y distintos. Cultura y naturaleza, divididas por la modernidad, no están separadas en el contexto latinoamericano, aunque la ciencia moderna insista en hacerlo. Las personas, por tanto, están fuera de la dicotomía naturaleza - cultura que la modernidad intentó separar (Diegues, 2001). Es decir, en la Amazonía existen innumerables formas de vivir, de ser y de saber. Sin embargo, la Amazonía se ha considerado como homogénea y al alcance del Estado desarrollista.

## **Grandes proyectos en la Amazonía y la producción de riqueza**

La creación de la Amazonía Legal y la elaboración del Plan de Valorización de la Amazonía demostraron la persistencia de una imagen fabricada de la Amazonía basada en el mismo misticismo colonial, que parte de una concepción sacralizada de la naturaleza y al mismo tiempo como reserva de recursos, habitada por seres primitivos (Arbex Junior, 2015). A partir de Getúlio Vargas hubo una centralización política y, como resultado, los proyectos de desarrollo de la industria nacional siguieron políticas nacionalistas y estatistas características del gobierno de Vargas. En este contexto, se debe asumir que los recursos naturales no fueron excluidos del proceso. Obedeciendo las disposiciones de la Constitución de 1934 (Fundação Getúlio Vargas, 2018), que determinó que los recursos del subsuelo pertenecían al Estado y ya no a los particulares, fueron creadas las empresas públicas Petróleo Brasileiro (Petrobras), mediante la Ley n. 2.004/1953 (Brasil, 1953), y Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)<sup>40</sup>, por Decreto-Ley n. 4.352/1942 (Brasil, 1942), para explorar las reservas minerales existentes en territorio brasileño.

Para el país, en los años siguientes se crearon planes de integración y desarrollo con programas especialmente enfocados a la Amazonía con los más diversos nombres, pero con las mismas características. En 1966, el gobierno continuó con el plan de integración del territorio de Vargas y se inició la "Operación Amazonia", lanzada en Macapá, capital del entonces Territorio Federal de Amapá<sup>41</sup> (Superintendencia de Desarrollo Amazónico, 1968). En su discurso, Castelo Branco afirmó que la Amazonía, si no fuera por sus aguas, podría ser una réplica de la región Nordeste, refiriéndose a la pobreza existente en la región. Para avanzar con seguridad fueron necesarias medidas como transformar la economía amazónica, fortalecer las zonas fronterizas e integrar la Amazonía al territorio nacional. La Ley núm. 5.173/1966 extinguió

---

<sup>40</sup> Actualmente Vale SA.

<sup>41</sup> Actualmente el Estado de Amapá.

la Superintendencia del Plan de Valorización Económica de la Amazonía (SPVEA) y creó en su lugar la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía (Sudam). El Plan de Valorización de la Amazonía cambió su objetivo a "promover el desarrollo autosostenido de la economía y el bienestar social de la región amazónica, de manera armoniosa e integrada en la economía nacional" (Brasil, 1966).

El plan pretendía alcanzar el desarrollo cumpliendo con una directriz básica que incluía, en general, un estudio de áreas y actividades a explorar y desarrollar, incentivos fiscales para intentar atraer capital nacional e internacional, y medidas para fomentar la liquidación y la provisión de una administración centralizada realizada con aportes del sector privado y fuentes externas<sup>42</sup>. La Sudam actuaría principalmente otorgando préstamos e incentivos fiscales (Coelho, 1998). Es decir, el Estado sería responsable de identificar y ubicar espacialmente las actividades que podrían realizarse y crear todas las condiciones necesarias para llevarlas a cabo, siendo el sector privado el responsable de aprovechar las condiciones brindadas.

En este contexto, el Estado siempre ha ignorado a las personas que viven en la Amazonía e incluido sus territorios en proyectos de desarrollo. Hasta 1988, la política ambiental brasileña se caracterizó por la demarcación de áreas protegidas debido a la necesidad de reservar recursos para el futuro, no por el valor intrínseco de la naturaleza o para que la gente pudiera permanecer allí, sino para aprovecharla en tiempos venideros (Franco & Drummond, 2009; Diegues, 2001).

El análisis de la historia de la colonización y de las acciones del Estado brasileño permite verificar la disposición de la Amazonía como tierra baldía. El Estado inventó una Amazonía utilizando su estructura normativa para permitir la implementación de estos proyectos de desarrollo, que se revelan como una continuación de la colonización de la metrópoli, ignorando la sociobiodiversidad. Acompañando las necesidades de un sistema de producción globalizado, estuvo la valorización industrial de los recursos minerales (Monteiro, 2005). Esta apreciación, ocurrida durante el gobierno de Vargas, motivó el inicio de la exploración de manganeso en la Serra do Navio, en el entonces Territorio Federal de Amapá. Durante décadas, esta fue la única fuente de exploración minera en la región amazónica, actividad que duró hasta la década de 1990.

Sin embargo, la búsqueda de campos de exploración minera cobró fuerza a partir de la década de 1960, especialmente durante la dictadura militar que, con el objetivo de "ocupar e integrar" la región, impulsó la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo destinados principalmente a la exploración de recursos naturales, especialmente minerales. La Amazonía Oriental fue considerada una zona de riqueza natural tras el descubrimiento en 1967 de yacimientos de hierro en Carajás (Freitas, 1986). Recursos minerales como cobre, oro, manganeso y aluminio, un gran potencial hidroeléctrico

---

<sup>42</sup> Los lineamientos básicos se establecen en el artículo 4 de la Ley núm. 5.173/1966.

y una importante disponibilidad de recursos vegetales para la generación y transformación de energía (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, 1983), transformaron la Amazonía Oriental en una zona apta para el desarrollo de todo el país, considerando su capacidad de exploración.

Entre esos proyectos, se destaca el Programa Grande Carajás, que reunió y ubicó actividades planificadas por el Estado brasileño para la porción oriental de la Amazonía, con el objetivo de proporcionar un fondo de colonización interna. Estas actividades incluyen la minería, la metalurgia, la siderurgia, la producción de energía a través de plantas hidroeléctricas, los regímenes agrícolas de monocultivo extensivo, la ganadería extensiva y la extracción de madera, entre otras. El programa también incluye toda la infraestructura necesaria para la operación de estas actividades y el flujo de la producción, como carreteras, ferrocarriles y líneas de transmisión. Todas las actividades se basaron en la exploración minera en Serra dos Carajás, que sería realizada por la Companhia Vale do Rio Doce (Coelho, T., 2014).

Paralelamente a la instalación de la estructura de exploración en Serra dos Carajás, también se crearon zonas industriales en el marco del Programa Grande Carajás: Barcarena (PA), Marabá (PA), Serra de Carajás (PA), São Luís (MA), Tucuruí (PA) e Imperatriz (MA) (Brasil, 1981). Estas áreas industriales fueron ampliadas en consideración a los proyectos que se instalarían. El establecimiento de estas áreas permitió ejecutar proyectos en la Amazonía Oriental diseñados y planificados para la exploración de bauxita, alúmina y aluminio (Ibase, 1983) por las empresas Alcoa y Albrás-Alunorte<sup>43</sup>. La primera, Alcoa, ubicada en São Luís (MA), y la segunda, Albrás-Alunorte, ubicada cerca de la cuenca hidrográfica Araguaia-Tocantins, casi a orillas del río Tocantins, en Barcarena (PA). Si bien durante el período de implementación del proyecto se plantearon cuestiones relacionadas con los impactos ambientales, estas sólo fueron percibidas de manera aislada y puntual sin la participación y audiencia de las poblaciones afectadas en los procesos de toma de decisiones y ejecución (Valverde, 1989; Ibase, 1983).

Si bien fue extinguido en 1991 por Fernando Collor mediante Decreto del 5 de septiembre de 1991, el Programa Grande Carajás finalizó sólo en términos normativos, ya que las actividades continúan desarrollándose con la continuidad de la focalización de los beneficios fiscales y las concesiones crediticias (Monteiro, 2005). Incluso después de su fin oficial, el Programa Grande Carajás fue responsable de consolidar una política nacional de valorización de los 'recursos naturales' y de dirigir recursos públicos a la ejecución de proyectos privados (Monteiro, 2005). Este movimiento sigue una estructura productiva internacional impuesta a través de un discurso desarrollista iniciado en Brasil con Getúlio Vargas y consolidado a partir de la segunda mitad del siglo XX (Silveira, 2019).

---

<sup>43</sup> Hoy privatizadas, conforman el grupo de empresas Hydro. Para más información, visite: hydro.com. Disponible en: <https://www.hidro.com/pt-BR/imprensa/noticias/2019/albras-e-alunorte-garantem-a-verticalizacao-do-aluminio-no-para/>. Consultado el 14 de febrero de 2024.

La mayoría de las plantas mineras y siderúrgicas instaladas permanecen dentro del área cubierta por el Programa Grande Carajás. En funcionamiento desde entonces, los proyectos minero-metalúrgicos que forman parte o fueron favorecidos por el Programa Grande Carajás se han presentado como motores del desarrollo regional y nacional (Vale, 2017). El Ferrocarril de Carajás es la estructura de otros proyectos nacionales e internacionales de desarrollo e integración diseñados para la Amazonía, como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que desconocen los contextos socioambientales (Silveira, 2020). Esta iniciativa incluyó al Ferrocarril de Carajás en una estructura multimodal para el flujo de producción agrícola e industrial de otras regiones del país para su exportación, además de permitir la integración entre los mercados de los países sudamericanos; es decir, incluye a la región en la misma dinámica en marcha en otros países en desarrollo o subdesarrollados: creación y expansión de corredores de exportación de productos básicos<sup>44</sup> (Kato, 2019).

Los proyectos de exploración minera del Programa Grande Carajás están ubicados mayoritariamente en el Estado de Pará, cuya producción en 2017 fue mayoritariamente de mineral de hierro (DNPM, 2017a). Según un informe del Departamento Nacional de Producción Mineral, el aumento de la producción de mineral de hierro se debe al inicio de las actividades de exploración en la nueva mina de hierro S11D de Vale, ubicada en el municipio de Canaã dos Carajás (DNPM, 2017b). En 2017, Vale registró una ganancia neta de 5.507 millones de dólares, muy por encima de la de 2016, con 3.982 millones de dólares (Vale, 2018). Los minerales extraídos son transportados a través del Ferrocarril de Carajás, construido exclusivamente para su transporte hasta las plantas siderúrgicas y metalúrgicas, ubicadas en la porción oriental de Pará (Coelho, M., 2000) y occidental de Maranhão.

Este sector se presenta como uno de los motores económicos del país y su estructura operativa como un modelo de eficiencia y rentabilidad. Alunorte, en 2019, era la refinera de alúmina más grande del mundo fuera de China (Hydro, 2019). Es de destacar que todo el sector fue establecido y opera utilizando constantes incentivos fiscales en un régimen tributario especial otorgado por el Estado brasileño para incentivar la exploración y las exportaciones. Al mismo tiempo que las estructuras se presentan como extremadamente rentables y ventajosas para la sociedad nacional, por el contrario, se ignoran e invisibilizan los profundos daños causados a la naturaleza amazónica y a su gente. Los impactos resultaron en violaciones a derechos colectivos al momento de su implementación, cuyas consecuencias se extienden en el tiempo y condicionan a parte de la población, especialmente a los pueblos y comunidades tradicionales, a la marginación y comprometen sus condiciones de vida.

---

<sup>44</sup> Para obtener más información, consulte: Kato, Karina Yoshie Martins. *Trazando el camino hacia el desarrollo: el caso del Corredor de Nacala en Mozambique*. Estudios Sociedad y Agricultura, v. 27, núm. 2, pág. 229-254, junio. 2019.

## **Las pérdidas sociales y ambientales causadas por la minería y la distribución desigual de riesgos**

Al planificar e implementar los proyectos cubiertos por el Programa Grande Carajás, los impactos ambientales fueron concebidos de manera específica y aislados de su dimensión social. La asignación de proyectos agrícolas y agroindustriales, también prevista por el Programa Grande Carajás en toda el área de cobertura, se realizó como si las tierras estuvieran "vacías" (Pinto, 1982). Sin embargo, poco se discute sobre los riesgos e impactos que la actividad minera impone a la sociobiodiversidad amazónica.

Es indiscutible que la minería causa diversos impactos en la naturaleza. Es una actividad que implica "supresión de la vegetación, exposición del suelo a procesos de erosión con cambios en la cantidad y calidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, además de provocar contaminación del aire, entre otros aspectos negativos" (Mechi & Sanches, 2010, p. 209). La minería, cuyas etapas incluyen la excavación de pozos con el uso de explosivos que generan ruidos y vibraciones, además del transporte y procesamiento del mineral, es responsable de la pérdida de biodiversidad y la fertilidad natural del suelo (Ribeiro, Almeida & Nunes, 2019). También se pueden observar impactos socioeconómicos, que a su vez generan impactos ambientales, como los relacionados con los niveles de empleo. La construcción de un proyecto genera un aumento exponencial en el nivel de empleos temporales y, en consecuencia, un movimiento migratorio localizado, lo que implica una mayor presión sobre los servicios básicos de la región, como agua, alcantarillado, salud, etc. Esta presión, combinada con un proceso de urbanización precario y desordenado, impacta en cambios en el paisaje y perjudica la calidad de vida de quienes viven en el lugar.

Como es de esperarse, debido a la conexión intrínseca que establecen entre sí, al causar impactos en la naturaleza, la minería también afecta negativamente a las personas que allí habitan. En ocasiones, las comunidades son expulsadas de sus territorios o ven comprometidos sus medios de vida, siendo incluidas compulsivamente en una dinámica que no tiene relación con sus estructuras socioculturales, lo que en última instancia altera la forma en que se utiliza la tierra. Además, comprometer los territorios implica un riesgo para la reproducción social como pueblo, ya que genera inseguridad alimentaria, riesgos para la salud y la integridad física, por ejemplo, a través de la contaminación.

Como se puede observar, existen innumerables pérdidas posibles, distribuidas de manera desigual entre las comunidades. La vulnerabilidad, en el contexto de las comunidades y personas afectadas por la exploración minera en la Amazonía, puede entenderse como la frágil posición de estas poblaciones frente a los impactos negativos de las actividades mineras, que incluyen la pérdida de acceso a los recursos naturales, el deterioro del medio ambiente, la ruptura del tejido social y cultural, además de la falta de fuerza económica

y política para protegerse y recuperarse frente a los grupos económicos. En términos teóricos, la vulnerabilidad refleja la exposición desigual de personas y comunidades a los riesgos derivados de la exploración minera, como resultado de estructuras de poder asimétricas y desigualdades socioeconómicas.

En este contexto, se propone el análisis de tres casos concretos: Barcarena, en Pará; Açailândia, en Maranhão; y las comunidades en las orillas del Ferrocarril Carajás (EFC). Los casos se analizan a partir de impactos en las dimensiones social y ambiental.

La minería en Barcarena, Pará, ha generado importantes impactos socioambientales en la región. La ciudad es conocida por su polo industrial que alberga varias industrias, incluidas empresas de minería y refinación de alúmina, como las mencionadas Albrás y Alunorte, que integraron el Programa Grande Carajás. Los impactos incluyen la contaminación del agua debido a los desechos tóxicos de las actividades de refinación, lo que afecta la pesca y los medios de vida de las comunidades locales. Además, preocupan la contaminación del aire y los impactos en la salud de la población debido a las emisiones industriales. La expansión de la minería contribuye a la pérdida de hábitat y a la presión sobre los ecosistemas locales, impactando en la biodiversidad de la región.

La concentración de actividades industriales en Barcarena también ha afectado la dinámica social y económica local, generando desafíos en términos de desarrollo sostenible y calidad de vida de los residentes. El 17 de febrero de 2018, fue noticia nacional la fuga de residuos de la refinería Hydro Alunorte, encargada de transformar la bauxita en alúmina, que es la materia prima del aluminio. Luego de fuertes lluvias, propias de la época, los relaves de bauxita del embalse del Depósito de Residuos Sólidos 2 (DRS2) llegaron directamente a las comunidades más cercanas al parque industrial de la minera. Informes del Instituto Evandro Chagas (Instituto Evandro Chagas, 2018) e inspecciones del Ministerio Público Federal y la Cámara de Diputados verificaron la presencia de sustancias tóxicas en comunidades y cursos de agua, esenciales para la vida comunitaria.

Incluso antes del derrame de 2018, el historial de accidentes ambientales provocados por instalaciones de proyectos mineros ya era amplio. Son al menos 17 los accidentes ambientales ocurridos desde el año 2000 por falta de inspección, que resultaron en numerosas contaminaciones de ríos y arroyos de la región, cuyas consecuencias a mediano y largo plazo para los ecosistemas se desconocen. Según el Ministerio Público Federal (MPF/PA), la recurrencia de eventos y la limitada supervisión de las actividades de la minera, ya sea a través de licencias ambientales y de inspección ambiental continua de las actividades, llevan a la implementación de medidas urgentes para mitigar los impactos causados a las comunidades. Luego del derrame de 2018, las actividades de Alunorte fueron suspendidas parcialmente por

decisión judicial debido a la falta de licencia de operación para operar el Depósito de Residuos Sólidos 2 (DRS2) (Pará, 2018).

Es importante mencionar que en Barcarena existe una enorme desigualdad social, cuyos orígenes son históricos. Para la instalación del polo industrial, en la década de 1980, comunidades enteras fueron desplazadas obligatoriamente de sus territorios por el Estado brasileño mediante expropiaciones para fines públicos (Castro, 2019). En la zona de instalación de Albras/Alunorte, por ejemplo, "existía toda una estructura social compleja formada por innumerables comunidades rurales, con población nativa, unida por fuertes lazos de parentesco y religión, que practicaba la pesca, la caza y el extractivismo" y una pequeña agricultura (Nascimento & Hazeu, 2015, p. 295). El Distrito Industrial de Barcarena abarca parte de un gran territorio tradicional, cuyos ríos y arroyos conforman la base territorial de los pueblos tradicionales (MPF, Informe Técnico 001/2016-SEAP). Las comunidades fueron expulsadas violentamente de sus territorios para implementar los parques industriales (Castro, 2019).

El municipio, que en 2018 tuvo un producto interno bruto (PIB) de R\$ 5,5 mil millones (IBGE, 2018b) y un PIB/per cápita de R\$ 47.684,37, tiene un índice de desarrollo humano (IDH) de 0,662, una tasa de mortalidad infantil de 12,36 por cada mil nacimientos vivos y un promedio mensual de salario de 2,9 salarios mínimos (IBGE, 2018a). Estos datos contrastan al considerar que el 46,4 % de la población tiene un ingreso mensual de hasta medio salario mínimo. Es decir, existe una gran concentración de ingresos en el municipio. Las elevadas ganancias generadas por las empresas tienden a concentrarse en unas pocas manos, alejadas de las comunidades locales afectadas. Esto da como resultado importantes disparidades en la distribución de la riqueza, lo que exacerba la exclusión social y económica. Además, la alta demanda de mano de obra especializada en la industria puede conducir a un aumento en la migración de trabajadores calificados, creando una competencia desigual por recursos y oportunidades, profundizando aún más la desigualdad socioeconómica en la región.

Observando los datos de Açailândia, en Maranhão, y de los municipios y comunidades a orillas del Ferrocarril Carajás (EFC) (Silveira, 2022; Silveira & Ferreira, 2020), parece que se repite el escenario de distribución desigual de los riesgos. La minería, la industria siderúrgica y la actividad del EFC también han generado desigualdades sociales similares a las observadas en Barcarena. La exploración minera, en muchos casos, contribuye a la concentración de ingresos y recursos en ciertos sectores de la economía, mientras que la otra parte menos favorecida carga con las consecuencias de la realización de los riesgos de la actividad, lo que resulta en importantes disparidades en la distribución de la riqueza. Esto profundiza la exclusión social y económica ya vista en la región amazónica y resultante del proceso histórico de colonización, impactando negativamente a las comunidades locales. Además, la presencia de grandes empresas mineras en Açailândia

crea presión sobre la infraestructura local, los recursos naturales y la calidad de vida, creando impactos socioambientales adicionales para la población en una red de retroalimentación. Las similitudes en los impactos de la minería en ambos municipios resaltan la importancia de políticas y prácticas, que apuntan a mitigar las desigualdades resultantes de este tipo de actividad económica.

Todos estos proyectos se llevaron a cabo sin considerar los riesgos e impactos socioambientales derivados de su ejecución (Beck, 2010). Los riesgos asumidos fueron, de manera organizada, ocultados y la resistencia desacreditada, mediante la manipulación de la información (Ferreira, 2016), o criminalizada, mediante la represión violenta. A más de 50 años de la planificación y ejecución del proyecto, existen diversas evidencias de fracaso. Si bien el sector produce riqueza, el nivel de empleo formal en la propia actividad no aumenta de la misma manera (Brasil, 2018). El desempleo es mayor y el índice de desarrollo humano es menor en los municipios afectados por los proyectos, presentando peores tasas que los promedios de sus respectivos estados, Pará y Maranhão (Fórum Carajás, 2010; Penha; Nogueira, 2015). La actividad en sí, no solo los accidentes, impacta directamente a la población más vulnerable, los más pobres y los campesinos, que no cuentan con las condiciones materiales para enfrentar las consecuencias de la explotación y los accidentes, y obtienen sus formas de vida a través del trabajo en la naturaleza.

La Amazonía ha sido considerada por el Estado brasileño como una zona de sacrificio (Castro, 2019), como si los daños y violaciones a su gente y a su naturaleza fueran un precio a pagar a favor de los beneficios económicos derivados de la actividad. Los riesgos fueron ignorados y los impactos naturalizados y minimizados. Después de todo, serían un pequeño precio a pagar por las riquezas. Sin embargo, los riesgos e impactos no afectan a todos por igual (Beck, 2010). Existe una distribución desigual de riesgos e impactos con relación a incidencia e intensidad, en una verdadera desigualdad ambiental (Acsegrad, Mello & Bezerra, 2009).

## **Consideraciones finales**

La minería en la Amazonía Oriental brasileña ha generado profundos impactos socioambientales, y la persistencia de la actividad en su forma actual agrava los daños en una reacción en cadena. Aunque la Amazonía es un tesoro de riquezas naturales, también se ha convertido en un lugar de degradación y contaminación debido a las actividades mineras. La minería implica deforestación, degradación del suelo, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad y cambios en los ecosistemas locales. Además, la instalación de infraestructuras asociadas, como los ferrocarriles, genera una profusión de impactos, provocando daños sociales y ambientales en toda su extensión y proximidad.

La brecha entre la producción de riqueza y la distribución de riesgos es evidente. Los beneficios económicos de la minería a menudo se concentran en empresas y sectores económicos específicos, mientras que los impactos negativos recaen desproporcionadamente en las comunidades locales y la naturaleza. Esto genera desafíos socioeconómicos para las poblaciones locales, como la pérdida de acceso a los recursos naturales, conflictos por la tierra, impactos en la salud y la seguridad alimentaria, y la erosión del tejido social de las comunidades.

Además, la distribución desigual de los riesgos puede profundizar las desigualdades e imponer mayores vulnerabilidades a grupos históricamente marginados, como los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. Estos impactos socioambientales resaltan la importancia de considerar no sólo los beneficios económicos de la minería, sino también los riesgos e impactos asociados, buscando un enfoque socioambientalmente justo de la actividad y sus impactos.

## Referencias

- Achselrad, H., Mello, C. Campello do A. y Bezerra, G. das Neves (2009). *O que é justiça ambiental?* (Rio de Janeiro: Garamond).
- Arbex Junior, J. (2015). "Terra sem povo", crime sem castigo. En Torres, M. (Org.), *Amazônia revelada: os descaminhos ao longo da BR-163* (Brasília: CNPq).
- Balée, W. (2013). *Cultural Forests of the Amazon: A Historical Ecology of People and Their Landscapes* (Tuscaloosa: University of Alabama Press).
- Beck, U. (2010). *Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade* (São Paulo: Editora 34).
- Brasil (1953). Lei n. 2.004, de 3 de outubro de 1953. Dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e define as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade Anônima e dá outras providências. Diário Oficial da União, 3 out.
- Brasil (1942). Decreto-Lei n. 4.352, de 1 de junho de 1942. Encampa as Companhias de Mineração e Suderurgia S.A. e Itabira de Mineração S.A. e dá outras providências. Diário Oficial da União, 3 jul. (Republicação).
- Brasil (1966). Lei n. 5.173, de 27 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Plano de Valorização Econômica da Amazônia; extingue a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), cria a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), e dá outras providências. Diário Oficial da União, 31 out. Retificado em 9 dez.
- Brasil (1980). Decreto lei n. 1.813, de 24 de novembro de 1980. Institui regime especial de incentivos para os empreendimentos integrantes do Programa Grande Carajás e dá outras providências. Diário Oficial da União, 25 nov.
- Brasil (1986). Resolução n. 331, de 1991. Autoriza o Poder Executivo a conceder à Companhia Vale do Rio Doce - CVRD o direito real de uso resolúvel de uma gleba de terras do domínio da União adjacente à Província Mineral de Carajás, e localizada no Município de Marabá, Estado do Pará, com a área de 411.948,87

- hectares (quatrocentos e onze mil, novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta e sete ares) na forma que indica. Diário Oficial da União, 11 dez.
- Brasil (2018). Setor mineral registra superávit de US\$ 11,4 bi no 1º semestre de 2018. Ministério de Minas e Energia, 14 set.
- Castro, E. M. Ramos (2019). "Estratégias de Expansão Territorial na Mineração na Amazônia, Desastres Socioambientais e Zonas de Sacrificio" en Castro, Edna Maria Ramos e Carmo, Eunápio Dutra do (Orgs.), *Dossiê desastres e crimes da mineração em Barcarena, Mariana e Brumadinho* (Belém: NAEA/UFPA).
- Coelho, M. C. Nunes (1998). "Política e Gestão Ambiental (des)Integrada dos Recursos Mineraiis na Amazônia Oriental" en Coelho, M. C. N.; Simonian, L.; Fenzl, N. (Orgs.), *Estado e políticas públicas na Amazônia: gestão de recursos naturais* (Belém: Cejup/UFPA/NAEA).
- Coelho, M. C. Nunes (2000). "Política e Gestão Ambiental (des)Integrada dos Recursos Mineraiis na Amazônia Oriental" en Coelho, M. C. N.; Simonian, L.; Fenzl, N. (Orgs.), *Estado e políticas públicas na Amazônia: gestão de recursos naturais* (Belém: Cejup/UFPA/NAEA).
- Coelho, T. Peters (2014). *Projeto Grande Carajás: trinta anos de desenvolvimento frustrado* (sn: iBase).
- Denevan, W. M. (1976). "La Población Aborígen de la Amazonía em 1492", *Amazonía Peruana*, Vol. 3, N° 5, pp. 3-41.
- Diegues, A. C. et al. (Orgs.) (1999; 2000). *Os Saberes Tradicionais e a Biodiversidade no Brasil* (São Paulo: NUPAUB/USP, PROBIO/MMA e CNPq), pp. 31-32.
- Diegues, A. C. (2001). *O mito moderno da natureza intocada* (São Paulo: Huicitec).
- DNPM (2017a). Informe Mineral do Estado do Pará 2017.
- DNPM (2017b). Informe mineral 2º/2017.
- Faustino, C. y Furtado, F. (2013). Mineração e violação de direitos: o Projeto Ferro Carajás S11D, da Vale S.A. *Relatório da Missão de Investigação e Incidência* (Açailândia: DHESA Brasil).
- Ferreira, H. S. (2016). "A dimensão ambiental da teoria da sociedade de risco" en Ferreira, Heline Sivini e Freitas, Carlos O. A. (Orgs.), *Direito Socioambiental e Sustentabilidade: Estados, Sociedade e Meio Ambiente* (Curitiba: Letra da Lei).
- Fórum Carajás (2010). *Mineração na Amazônia: Estado, Empresas e Movimentos Sociais* (São Luís: Fórum Carajás).
- Franco, J. L., de Andrade y Drummond, J. A. (2009). *Proteção à Natureza e Identidade Nacional no Brasil - anos 1920-1940* (Rio de Janeiro: Editora Fiocruz).
- Freitas, M. de L. Davies (1986). "Algumas considerações sobre a Região-Programa" en Almeida Junior, José Maria Gonçalves (Org.), *Carajás: desafio político, ecologia e desenvolvimento* (São Paulo: Brasiliense).
- Fundação Cultural Palmares (2018). "Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQ's)".
- Fundação Getúlio Vargas (2018). "Código de Minas", Centro de Pesquisa e Documentação.

- Gondim, Neide (1994). *A invenção da Amazônia* (São Paulo: Marco Zero).
- Hydro (2019). Disponible en <https://www.hydro.com/pt-BR/imprensa/noticias/2019/albras-e-alunorte-garantem-a-verticalizacao-do-aluminio-no-para/>
- Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) (1983). *Carajás: o Brasil Hipoteca seu futuro* (Rio de Janeiro: Achiamé).
- IBGE (2018a). "Ranking Barcarena 2018", Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disponible en <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/barcarena/pesquisa/38/47001?tipo=ranking>
- IBGE (2018b). "Panorama: Barcarena", Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disponible en <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/barcarena/panorama>
- Instituto Evandro Chagas (2018). "Avaliação Preliminar Dos Impactos Ambientais Referente Ao Transbordo E Lançamentos Irregulares De Efluentes De Lama Vermelha Na Cidade De Barcarena, Estado Do Pará". Disponível em: [http://www.iec.gov.br/portal/wp-content/uploads/2018/03/RELAT%C3%93RIO\\_T%C3%89CNICO\\_SAMAM\\_003-2018.pdf](http://www.iec.gov.br/portal/wp-content/uploads/2018/03/RELAT%C3%93RIO_T%C3%89CNICO_SAMAM_003-2018.pdf). Acesso em: 14 set. 2018.
- Instituto Socioambiental (2018). "Terras indígenas no Brasil", disponible en <https://terrasindigenas.org.br/#pesquisa>, Acesso em: 24 set. 2018.
- Kato, K. Y. M. (2019). "Traçando a saída para o desenvolvimento: o caso do Corredor de Nacala em Moçambique", *Estudos Sociedade e Agricultura*, Vol. 27, N° 2, pp. 229-254.
- Magalhães, M. Pereira (2016a). (Org.) *Amazônia antropogênica* (Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi).
- Magalhães, M. Pereira (2016b). "A cultura tropical e a gênese da Amazônia Antropogênica" en Magalhães, Marcos Pereira (Org.), *Amazônia Antropogênica* (Belém: Museu Emílio Goeldi).
- Mechi, A. y Sanches, D. L. (2010). "Impactos ambientais da mineração no Estado de São Paulo", *Estudos Avançados*, Vol. 24, N° 68, pp. 209-220.
- Monteiro, M. de Abreu (2005). "Meio século de mineração industrial na Amazônia e suas implicações para o desenvolvimento regional", *Estudos Avançados*, Vol. 19, N° 53, pp. 187-207.
- Nascimento, N. S. Fialho y Hazeu, M. Theodoor (2015). "Grandes empreendimentos e contradições sociais na amazônia: a degradação da vida no município de Barcarena/Pará", *Argumentum*, Vol. 7, pp. 288-301.
- Pará (2018). "Hydro terá que reduzir atividades em 50%", Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
- Penha, L. Rocha y Nogueira, A. P. Fernandes (2015). "Os impactos do desenvolvimento na área de influência da estrada de Ferro Carajás", *InterEspaço*, Vol. 1, N° 1, pp. 212-225.
- Pinto, L. Flávio (1982). *Carajás, o ataque ao coração da Amazônia* (Rio de Janeiro: Editora Marco Zero).
- Porto-Gonçalves, C. W. (2008). "Temporalidades amazônicas: uma contribuição à Ecologia Política", *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, N° 17, pp. 21-31.

- Porto-Gonçalves, C. W. (2010). *Amazônia, Amazônias* (São Paulo: Editora Contexto).
- Porto-Gonçalves, C. W. (2017). *Amazônia: encruzilhada civilizatória. Tensões territoriais em curso* (Rio de Janeiro: Consequência Editora).
- Ribeiro, B. G. (2013). *Amazônia Urgente* (Rio de Janeiro: Fundação Darcy Ribeiro).
- Ribeiro, B. A. Lanza; Almeida, J. Ribeiro; Nunes, M. Ferreira da Silva Queiroz de Carvalho (2019). "Impactos Ambientais da Mineração no Estado do Pará, Brasil" en Milward-de-Azevedo, Michael e Alvim e Cortines, Erika (Eds.), *Anais Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade*, (Três Rios: sn), Vol. 8.
- Sader, E. et al. (Orgs.) (2006). *Latinoamericana. Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe* (São Paulo: Boitempo Editorial).
- Santilli, J. (2005). *Socioambientalismo e novos direitos. Proteção jurídica à diversidade biológica e cultural* (São Paulo: Peirópolis).
- Silveira, A. Ferraz da (2019). "A Integração da Infraestrutura Regional Sul Americana (IIRSA) e conflitos socioambientais na Amazônia" en Winter, Luiz Alexandre Carta (Org.), *MERCOSUL e seu cotidiano social, econômico e jurídico* (Curitiba: Instituto Memória), Vol. 1, pp. 37-76.
- Silveira, A. Ferraz da (2022). *Estado e destruição na Amazônia: Projetos de desenvolvimento e impactos socioambientais em Açailândia*, Maranhão, 1era Ed. (Navirai: Aranduká).
- Silveira, A. Ferraz da y Ferreira, H. Sivini (2020). "Impactos socioambientais no Corredor Carajás: mineração, Estado e violação a direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia Maranhense" en Solange Teles da Silva; Mauricio Duarte dos Santos; Daniel Francisco Nagao Menezes. (Org.), *Direitos, cidadania e desenvolvimento sustentável*. (São Paulo: Eseni), pp. 106-139.
- Souza, J. Gregorio et al. (2018). "Pre-Columbian earth-builders settled along the entire southern rim of the Amazon", *Nature Communications*, Vol. 9, N° 1.
- Sudam (1968). *Operação Amazônia (discursos)*. (Belém: Serviço de Documentação e Divulgação).
- Sudam (2018). "Histórico - SUDAM", disponible en <http://www.sudam.gov.br/index.php/institucional?id=87>
- University of Exeter (2018). "Parts of the Amazon thought uninhabited were actually home to up to a million people", *ScienceDaily*, 27 mar.
- Vale (2017). "Qual a importância da mineração para a economia do país?", disponible en <http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/news/paginas/qual-a-importancia-da-mineracao-para-a-economia-do-pais.aspx>
- Vale (2018). Relatório Anual, de acordo com a seção 13 ou 15 (d) da Lei de Mercado de Capitais de 1934.
- Valverde, O. (1989). *Grande Carajás: planejamento da destruição* (Rio de Janeiro: Forense).
- Watling, J. et al. (2017). "Impact of pre-Columbian "geoglyph" builders on Amazon forests", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 114, N° 8, pp. 1868-1873.

# PUEBLOS INDÍGENAS: AMENAZAS Y CAMBIOS





# **Apropiación territorial, sedentarización y cambio cultural en la comunidad yurakaré Nueva Galilea en la Amazonía cochabambina**

---

*Denisse Rebeca Gómez Ramírez*

## **Resumen**

Este artículo muestra los cambios culturales, económicos, políticos y territoriales que viven los yurakaré de Nueva Galilea del río Chapare en la Amazonía cochabambina. El desplegar estrategias de apropiación territorial, cuyo fin es preservar su autonomía al interior de su territorio y defenderlo de la colonización y explotación, ha llevado a este pueblo de ser nómada a ser sedentarios organizados en comunidades frente al Estado y las amenazas externas. Como resultado de este proceso instituyente de transformación, actualmente se están verificando cambios en la cultura yurakaré: en el espacio hidroterritorial, en su identidad individual y colectiva, en su organización social, en su cosmovisión y en la infraestructura territorial, con el objetivo de consolidarse y adaptarse a su nuevo modo de vida. Su reciente ingreso en la vida sedentaria les ha exigido importantes modificaciones para enfrentarse a condiciones ajenas y desconocidas. Esto implica afrontar pérdidas y dificultades, pero también la capacidad de recrear su cultura. Desde la mirada de las etnografías colaborativas comprometidas, se dará cuenta de cómo su supervivencia, tanto en la selva como en su reciente sedentarismo, se basa –en gran medida– en sus prácticas espaciales, su profundo conocimiento del entorno y su habilidad para encarar los desafíos.

## **Palabras claves**

Apropiación territorial, identidad, prácticas espaciales, autonomía, hidroterritorio.

## Los yurakaré de Nueva Galilea en la Amazonía cochabambina

Esta investigación se enfoca en los yurakaré de Nueva Galilea del río Chapare (mapa 1), ubicados en la provincia del mismo nombre del departamento de Cochabamba. La existencia de los residentes de esta comunidad transcurre en las orillas de los ríos que serpentean a través de la espesa selva tropical. Los árboles frutales de mandarinas, plátanos, naranjas y cocos cuelgan en racimos acompañando el recorrido y dan vida a la majestuosa entrada a la Amazonía boliviana.

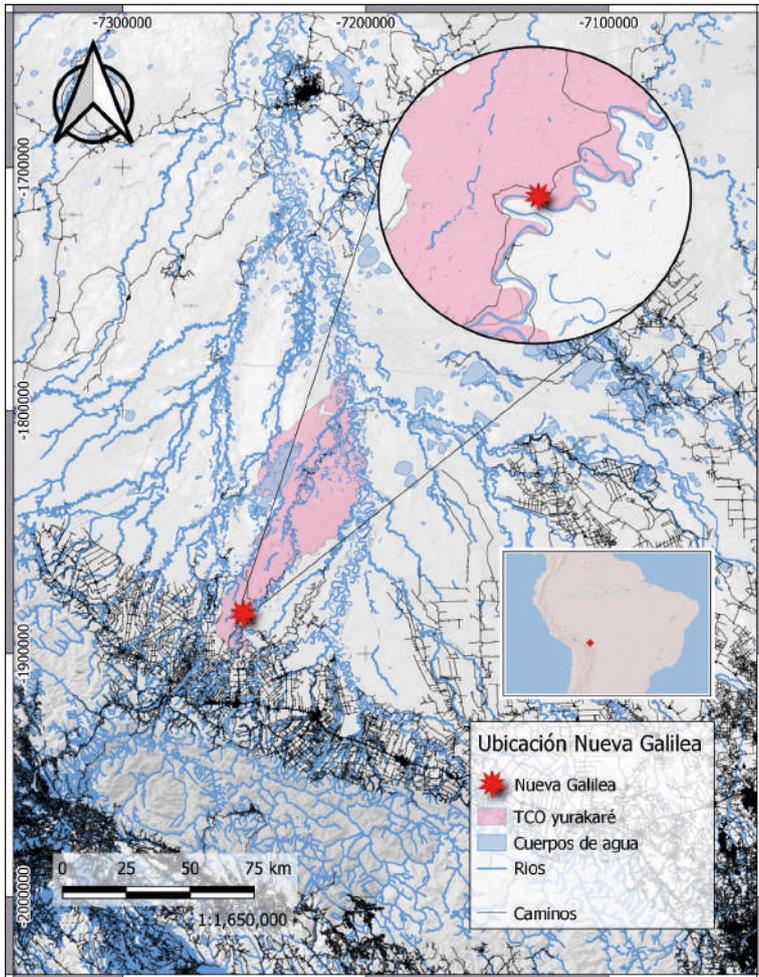
Nueva Galilea cuenta con una altitud aproximada de 300 m s. n. m., tiene un clima tropical lluvioso, con una temperatura media anual de 22,6 °C y una precipitación anual promedio de aproximadamente 3.328 mm. Enero es el mes con la mayor cantidad de precipitación, con un promedio de 516 mm, mientras que agosto registra la menor cantidad de lluvia, con un promedio de 91 mm<sup>45</sup>.

En Nueva Galilea no hay un censo poblacional confiable. Sin embargo, el profesor de la primaria de la comunidad, Edgar Chávez, calculó en el año 2023 que existen alrededor de 400 habitantes distribuidos en aproximadamente 60 familias, de los cuales, entre 100 y 125 están registrados ante la asamblea comunaria (EC - comunario, Nueva Galilea, noviembre de 2023). Los yurakarés que hoy habitan en Nueva Galilea eran, hasta décadas atrás, nómadas que se desplazaban en pequeños grupos de clanes familiares en un territorio selvático más o menos extenso. Vivían de la recolección, la caza y la pesca con insumos que ellos producían. Actualmente, Nueva Galilea es una comunidad que está en proceso de aprender a ser sedentaria. Sus significados, normas, símbolos, instituciones, identidad colectiva, imaginario social, cosmovisión, forma de organización social y espacial están en proceso de formación y constitución. En este artículo se presentan algunos elementos que ilustran estas transformaciones, sin pretender dar cuenta de su complejidad y profundidad.

---

<sup>45</sup> Ver: <https://es.climate-data.org/americadel-sur/bolivia/cochabamba/chimore-51278/>

Mapa 1: Ubicación de Nueva Galilea en el río Chapare



Fuente: Elaborado por Adrián Villalobos, con base en datos geospaciales (Inegi, 2024).

Primero, es importante situar las observaciones de este trabajo en un contexto histórico. El territorio histórico de los yurakarés se encuentra en las últimas estribaciones orientales de los Andes de la región de Cochabamba, desde las nacientes del río Sécore, hasta las nacientes del río Ichilo (Paz, 1991). Tradicionalmente, los yurakarés se han organizado entorno a núcleos familiares extendidos (o Familias Grandes) con formas de asentamientos dispersos y con una “normal y continua itinerancia de las familias [...] en busca de mejores lugares para caza y pesca” (Paz, 1991, p.49), por lo que han sido calificados como nómadas o seminómadas. Esto no significa que

los yurakarés no tenían asentamientos. Más bien, bajo la organización de la Familia Grande, se establecían asentamientos dispersos, que funcionaban como una base a partir de la cual los adultos se desplazaban en busca de productos de caza, pesca y recolección (Paz, 1991). El nomadismo es una forma de organización social de grupos humanos en tránsito que tiene sus propias normas, identidades (individual y colectiva) y cosmovisión; es un estilo de vida que genera habilidades, destrezas, rutinas, prácticas, saberes específicos indispensables para la supervivencia y la convivencia con otras especies y con el medio ambiente.

Durante la colonización española y los primeros años de la República, los intentos jesuitas y luego franciscanos de reducir a los yurakarés en misiones no tuvieron éxito: las misiones que lograron establecerse no duraron más que unos cuantos años antes de ser abandonadas (Paz, 1991). A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, olas sucesivas de colonización en los territorios yurakarés –vinculadas al comercio entre Moxos y Cochabamba y a la “cacería de indios” para la recolección de caucho en el norte– empujaron a los yurakarés a adentrarse en los bosques de sus territorios, al mismo tiempo que desarrollaron relaciones esporádicas y conflictivas con los colonos (Paz, 1991). Desde 1930 y con más intensidad después de la Reforma Agraria de 1953, nuevos asentamientos en los territorios yurakaré aumentaron las presiones sobre los recursos de cacería y pesca y tomaron sus espacios de ocupación territorial (Paz, 1991).

El grado de transformación de la cultura y formas de vida yurakaré a raíz del contacto con los colonos se dio de manera más significativa en las fronteras del territorio (Paz, 1991). Los yurakarés que vivían en la zona entre los ríos Isiboro y Sécore (hoy Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore - Tipnis), compartiendo el espacio con indígenas moxeños, mantuvieron sus formas de vida tradicional en mayor medida por la distancia con los colonos (Paz, 1991). Sin embargo, en los años 80, con la privatización de las minas en el Altiplano, la colonización se aceleró e intensificó, incluso en las áreas yurakarés del Tipnis, empujando a las familias a migrar aún más lejos, a zonas de pampa, donde se les dificulta la subsistencia a partir de la caza (Paz, 1991).

Con estos fenómenos, los yurakarés han visto “la usurpación de sus territorios”, “el deterioro de sus lugares de caza y pesca” y “la desestructuración de su cultura”, pues ya “no pueden reproducirse como cazadores” ni pueden migrar como antes (Paz, 1991, pp. 57-58). Como resume Paz (1991): “Hasta antes de la colonización colla del Chapare, los yurakarés habían sido un grupo cazador e itinerante. Con la llegada de los colonos, los yurakarés se vieron obligados a entrar en un proceso de sedentarización y usar otras estrategias de subsistencia que no eran la caza, la pesca y/o la recolección” (p. 61). Es en este contexto que este artículo busca aportar a la visibilización de los profundos cambios que han ocurrido y siguen ocurriendo en las comunidades yurakarés frente a las presiones de la colonización, a partir de las percepciones de

residentes actuales de la comunidad Nueva Galilea y observaciones de las dinámicas comunitarias.

## Metodología

En el marco de las Etnografías Colaborativas Comprometidas (ECC), en esta investigación se reconoce las heterogéneas voces, perspectivas y saberes de los socios políticos - epistémicos (personas de la comunidad que colaboraron en el desarrollo del trabajo) en el proceso de construcción del conocimiento en donde la colaboración y el compromiso son fundamentales.

Con la autorización de las autoridades y la asamblea de comunarios/os, se llevó a cabo el trabajo de campo durante los meses de julio y agosto de 2022. Un total de 18 conversaciones fueron transcritas y categorizadas temáticamente para su organización y análisis. Para ello, se dialogó con diversas socias/os políticos - epistémicos en distintos escenarios, como en la conmemoración del vigésimo sexto aniversario de la creación de Nueva Galilea, en los corredores de los hogares, en el lugar de la preparación de la comida, en el puerto y en la ribera del río, así como desempeñando quehaceres domésticos cotidianos. En este ir y venir se observó la relevancia de estas actividades como posicionamiento práctico<sup>46</sup>. Es decir, la materialización de las acciones conlleva un estar construyendo comunidad, compartiendo y vivenciando en el tiempo, lo corporal, territorial, identitario, afectivo, político, lingüístico, simbólico y autonómico, en un espacio donde la voluntad y la acción se unifican en el intercambio colaborativo y comprometido del trabajo de campo.

## Apropiación territorial y sedentarización en Nueva Galilea

Los yurakarés de Nueva Galilea son un pueblo que, hasta finales del siglo XX, era nómada (RC, comunario, Nueva Galilea, 13 de junio de 2022) y se desplazaba en un amplio territorio que abarcaba selva, bosques, ríos, lagunas y otros cuerpos de agua. Los nuevos asentamientos yurakarés continúan conformándose por familias relacionadas entre sí por vínculos de parentesco, amistad, afinidad o acuerdos. Pero, a diferencia de los desplazamientos que hacían como grupos seminómadas, los yurakarés de Nueva Galilea permanecen en la comunidad y sólo se trasladan con fines comerciales, educativos, de salud e incluso laborales a poblaciones vecinas como Chimoré, Cochabamba o Santa Cruz. Siendo Nueva Galilea actualmente una comunidad sedentaria, es necesario reflexionar en torno al camino de esta población hacia la sedentarización y cuáles han sido los cambios culturales que han permitido su proceso de apropiación territorial.

---

<sup>46</sup> "Posicionamiento práctico" es un concepto que deseamos introducir como reflexión y referencia para categorizar las acciones realizadas en el marco de las etnografías colaborativas comprometidas (Katzer *et al.*, 2022).

Nueva Galilea se encuentra en el territorio yurakaré, demarcado constitucionalmente como Territorio Indígena Originario Campesino, (TIOC)<sup>47</sup>. La comunidad probablemente lleva este nombre por el contacto que tuvieron los yurakaré con los misioneros de Nuevas Tribus y su enseñanza del evangelio a estos pobladores, pues Galilea es una región que desempeñó un papel fundamental en la vida de Jesús. Los comunarios al mudarse de Patujusal a –lo que ellos nombraron como– Nueva Galilea, posiblemente hicieron la analogía de los milagros acaecidos en Galilea con la ocupación de su territorio actual, ya que el sólo hecho de encontrarlo, podría haber representado para ellos un milagro. En este proceso de cambio del imaginario social como matriz de sentido, que permite a los integrantes de una colectividad conocer, interpretar, construir, deconstruir y reconstruir su mundo (Castoriadis, 1983), los yurakarés adoptaron e incorporaron en su imaginario creencias religiosas evangélicas, que les posibilitaron nombrar y categorizar su espacio geográfico.

Los comunarios yurakarés que habitan en Nueva Galilea llegaron de la comunidad Patujusal en 1996, aproximadamente a dos horas de distancia en canoa río abajo. “En Patujusal [...] vivían pequeñas familias. Por cuestiones climatológicas, la comunidad desaparece porque el río nos la comió, se llevó la comunidad” (SC - comunario, Nueva Galilea, 21 de julio de 2022); motivo por el cual se trasladaron a una zona más alta, donde anteriormente había un aserradero, cuyos dueños fueron unos italianos que extraían maderas preciosas. Esta tala excesiva causó un daño significativo y aceleró la pérdida de árboles valiosos como la mara o caoba. Al rehabilitar esta zona previamente explotada, cuenta la familia Chávez Noé, las mujeres –con machete en mano– comenzaron a rozar para hacer chaco. Así consiguieron la tierra que ahora les alberga en Nueva Galilea.

Este proceso de apropiación territorial no sólo les brindó un lugar físico para vivir, sino que también les otorgó la creación de un espacio, la oportunidad de mantener a su familia y de recrear una forma de organización sociopolítica territorial, distinta a la que tenían como población itinerante. La agricultura y los chacos están al centro de esta nueva ocupación y apropiación del espacio, marcando una clara diferencia con las formas tradicionales de ocupación del espacio y de subsistencia basadas en la caza, la pesca y la recolección. Mis observaciones en Nueva Galilea sugieren que el chaco no es visto por los yurakarés como una parcela de tierra cultivable; es un símbolo comunitario pues significa autonomía frente a las alternativas de venta de mano de obra. Sin los chacos, los yurakarés consideran que:

simplemente va[n] a ser empleado[s] de alguien o trabajador[es] de alguien. Va[n] a vivir ganando su jornal. Es lo mismo que nada. Mejor es vivir en la comunidad, hacer su chaco, eso le[s] va a ayudar a ganar sus pesitos (RC - comunario, Nueva Galilea, agosto de 2022).

Estas palabras reflejan la profunda conexión entre autonomía, identidad y subsistencia en lo que se refiere al chaco. La noción de autonomía aquí

---

<sup>47</sup> Anteriormente denominado Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

se presenta como un concepto clave, donde se destaca la importancia de mantenerse independiente y dueño de su propio destino. La autonomía, en este caso, se manifiesta a través del concepto de "chaco", que no sólo se refiere a la tierra cultivable, sino que simboliza la enseñanza de la autosuficiencia como forma de vida, por parte de la comunidad en sus integrantes más jóvenes. Si bien la recolección de frutos y semillas constituía una práctica arraigada en la cultura de los yurakarés anteriormente, el nuevo rol del chaco ha fortalecido y propiciado un estilo de vida sedentario para la subsistencia.

Además de la adopción de la agricultura como forma de autonomía y apropiación del espacio, los yurakarés de Nueva Galilea han avanzado como comunidad en el control espacial y social de su territorio, a través de cambios sociopolíticos y en infraestructura, que presentamos cronológicamente, señalando los más destacados por la Cacique Mayor en el aniversario veintiséis de su fundación:

En 1998, se obtiene la personería jurídica como Nueva Galilea; en 2002, Santa Elena se separa; en 2003, se construye la sede de la comunidad; en 2004, los comunarios participan en la defensa del territorio; en 2006, se crea la Unidad Educativa Nueva Galilea A; en 2012, se realiza la construcción de la Unidad Educativa; en 2021, se inauguró la electrificación y en este año [2022] hemos tenido la infraestructura vial de la comunidad indígena de Nueva Galilea (PCN - Cacique Mayor, Nueva Galilea, 21 de julio de 2022).

En ese sentido, el territorio está construido por relaciones humanas, económicas, sociales, culturales, políticas, históricas, simbólicas y espaciales que se expresan en prácticas cotidianas y formas organizativas, que territorializan y desterritorializan el hacer sobre el espacio en sus múltiples manifestaciones. Así, "el territorio está vinculado siempre con el poder y con el control de procesos sociales mediante el control del espacio" (Haesbaert, 2013, p. 13).

Estos cambios y procesos de apropiación se han dado al mismo tiempo que las fuentes de subsistencia tradicionales, la caza y la pesca, han sufrido mermas considerables en los últimos años. Antes de la sedentarización, los yurakarés trazaban rutas a lo largo del territorio para cazar. En estos tiempos, debido a la deforestación provocada por la actividad maderera, las nuevas fronteras territoriales, el predominio de los hábitos sedentarios y la contaminación ambiental; la extensión del área disponible para caza se ha reducido pues los animales han disminuido y se han alejado cada vez más. Por otra parte, ha habido cambios en las tecnologías de caza ya que ahora se utiliza principalmente el salón (rifle), en contraste con el método tradicional que empleaba arco y flecha.

También ha habido cambios significativos en la disponibilidad de peces. Los ríos aseguran el bienestar del pueblo yurakaré y los peces continúan siendo la base de su alimentación. Sin embargo, en la actualidad "la cantidad de peces ha mermado por la contaminación y por la pesca en gran escala que realizan los collas río arriba" (RC - comunario, Nueva Galilea, 13 de julio de

2022). Los colonos, a pesar de no poder pescar en la TIOC yurakaré, pescan intensivamente en otras partes del río, y en especial en las zonas de desove, afectando el recurso.

Nosotros no vendemos pescado, así es el pensamiento del yurakaré. Es verdad que el pescado arriba a la serranía para desovar, allá es donde bota su huevo. Sí, allá mueren la mayoría de los pescados. Allá los collas van a terminar los pescados, hoy en día se hace una malla con rombo chiquitingo cubren todo el río, con una raya de 100 metros cubren todo el río y sacas el pescado. Aquí nosotros hacíamos lo mismo, amarrábamos dos mallas de 100 metros, lo arrinconábamos a la playa y de ahí sacábamos lo que queríamos entonces nosotros mismos hemos terminado el pescado (RC - comunario, Nueva Galilea, 18 de julio de 2022).

Este relato nos permite comprender tres aspectos fundamentales: en primer lugar, que los recursos piscícolas son limitados; en segundo lugar, observamos los impactos generados por la pesca intensiva y el uso de nuevos accesorios en esta actividad; en tercer lugar, la presión producida por el crecimiento demográfico y los recientes asentamientos. Todo lo anterior está provocando cambios en el hidroterritorio<sup>48</sup> de las comunidades ribereñas y en la cultura yurakaré. Como respuesta a esta situación, los yurakarés han implementado prohibiciones tanto en la pesca como en la caza para evitar la explotación excesiva de sus recursos, demostrando capacidades de adaptación a los desafíos de la sedentarización y de la coexistencia con otros actores. En ese sentido, han desarrollado normas y sanciones, destinadas a regular la pesca intensiva. En caso que se descubra a personas con peces para su venta en los puntos de acceso a la comunidad, conocidos como "trancas", se imponen multas de 100 bolivianos (USD 14,49). Si alguien de la comunidad yurakaré decide ignorar estas reglas, podría enfrentar sanciones más severas. El pueblo yurakaré, plenamente consciente de los desafíos que enfrenta, hace todo lo posible por resolver la escasez de peces que actualmente atraviesa, tal como destaca un socio político - epistémico:

El pescado fue mermando porque el yurakaré aprendió a comprarse redes, a partir de la generación de nosotros, el yurakaré aprendió a comprarse red grande y llevar a la venta, eso fue lo que mermó el pescado y sacar como todo yurakaré. Como pueblo yurakaré decidimos que: ¡nadie saque más, sólo para comer y no se vende! Lo controlamos en la tranca porque el yurakaré que lleva su bolsada de pescado ahí es grave, multan, porque es algo que va en contra de nosotros, no es bueno, pero todo yurakaré aprendió eso ¡paremos de una vez! (RC - comunario, Nueva Galilea, 18 de julio de 2022).

Así, los yurakarés han desarrollado estrategias y procesos de apropiación del espacio basados en la adopción de nuevas actividades económicas, a la

---

<sup>48</sup> El concepto de hidroterritorio tiene una dimensión histórica y política que permite comprender las afectaciones socioambientales que han dado lugar a cambios en el paisaje, en la identidad individual y colectiva de sus habitantes, en la conformación de la cultura y en la emergencia de organizaciones y acciones defensivas (Rodríguez, 2019; Sanchiz & Boelens, 2018). Esta categoría se utiliza para analizar las relaciones de poder y los conflictos entre distintas fuerzas sociales por el control del agua, y para entender cómo el ecosistema determina el estilo de vida de la comunidad estudiada.

vez que han desarrollado nuevas normas e instituciones para gobernar los recursos naturales, de los que han dependido tradicionalmente en un nuevo contexto.

## **Cambios y adaptaciones en la cultura yurakaré en Nueva Galilea**

El contacto con los colonos y la sedentarización, al igual que la pérdida de territorio y recursos de caza y pesca han transformado distintos elementos de la cultura yurakaré. Por ejemplo, la apertura de nuevos caminos en la zona ha generado modificaciones significativas, así como la introducción de suministros que antes no se consideraban necesarios, pero que ahora forman parte esencial de las necesidades, como la gasolina, el gas y la electrificación, entre otros. Es evidente que los yurakarés han integrado elementos culturales ajenos a su identidad y forma de vida, como se refleja en las actuales construcciones de viviendas, que anteriormente se hacían con palma de motacú y madera de tembe; ahora las casas son de madera, con techo de calamina, y también han incorporado la cría de animales de corral. A pesar de estas transformaciones, los yurakaré de Nueva Galilea todavía mantienen fuertes vínculos entre parientes, como aquellos que existen entre las familias cuando se apoyan –muchas veces– con trabajo remunerado económicamente, si se llega a un acuerdo entre las partes.

El establecimiento de los yurakaré en Nueva Galilea ha dado lugar a una nueva estructura organizativa para la gestión del territorio y la construcción de su autonomía, al mismo tiempo que todavía conservan aspectos significativos de su anterior identidad nómada. La configuración política ha evolucionado para alinearse con las prácticas organizativas de la comunidad actual. Se ha desarrollado un modelo que no sólo resguarda el hidroterritorio frente a amenazas externas y estatales, sino que también refleja la estructura comunitaria vigente de los yurakarés.

En lugar de los clanes familiares tradicionales, se adoptó una organización social acorde con su reciente sedentarismo, reflejo del proceso de aculturación que ha vivido esta etnia a lo largo de su historia. Las comunidades yurakarés del río Chapare se organizan ahora de la siguiente forma: en Nueva Galilea hay una persona responsable de Procaminos, se encarga de administrar y supervisar las vías y senderos dentro de la comunidad, de revisar continuamente el estado del camino y de inspeccionar que los madereros cumplan con la entrega de las volquetas de ripio (grava), requeridas para la mejora del camino, que entregan a cambio de la extracción de madera.

Existe también la figura del subcalde, quien será un representante de la Gran Nación Yurakaré de la Misión. Los yurakarés cuentan con representación política a nivel nacional con una diputación plurinacional por el Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS - IPSP), que representa a los yukis y yurakarés del Trópico cochabambino, así

como al Consejo Indígena del Sur (Conisur), Consejo Indígena Yurakaré del río Chapare (Coniyura), al Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI) y al Consejo Yuki.

A decir de la cacique mayor, se elige a los representantes de acuerdo con sus capacidades y habilidades para resolver asuntos comunitarios concernientes a la población, experiencia política y formación profesional. Tal fue el caso particular de la anterior diputada nacional, Patricia Chávez Noé, primera mujer electa en asamblea comunal por votación, para el cargo de cacique mayor, como representante de las 22 comunidades yurakarés de la TIOC o TCO, mediante el Consejo Indígena Yurakaré del Río Chapare (Coniyura).

La TIOC o TCO del río Chapare se divide en tres zonas: alta, media y baja; Nueva Galilea pertenece a la zona alta donde se ubican Todos Santos, Ibaré, Puerto Cochabamba, Monte Sinaí, Puerto Victoria, Misión, Santa Elena A, Santa Elena B y el Rosario. Las asambleas comunales se realizan aproximadamente cada tres meses, dependiendo del presupuesto con el que se cuente para la movilización de los/as comunarios/as.

En Nueva Galilea, la asamblea comunal que se presenció comenzó a las diez de la mañana y concluyó a las nueve de la noche, estuvieron presentes las autoridades comunales: cacique mayor, corregidora, Procamino, Junta Escolar, así como los comunarios y comunarias. Previamente, se colocaron en una pizarra los temas a tratar durante el transcurso de la reunión. La asamblea inició con el pase de lista, la lectura del acta de la asamblea anterior, los informes de la cacique mayor y la corregidora, se plantearon cuestiones económicas como el ajuste a los aportes al Coniyura, asuntos concernientes al camino, deporte, salud y educación. Otros temas que se discutieron estuvieron relacionados con problemas de justicia comunitaria que afectan a la población, como pueden ser: los robos de animales, lo relacionado con la tranca, las faltas de respeto, el cuidado de la motocicleta comunal, la autorización y asignación de la parada a los turneros de 2 de junio con sede en Chimoré, quienes son los primeros en tener un sitio en Nueva Galilea con dos turnos de salida, a las siete de la mañana y a las dos de la tarde.

Estas modificaciones no solo han ocurrido en cuestiones organizativas políticas y de demarcación territorial, sino también en relación a cambios y adaptaciones en la cultura e imaginario social. Algunas creencias han experimentado sustituciones. Esta metamorfosis se debe, en gran medida, a la influencia de la evangelización llevada a cabo por los misioneros de Nuevas Tribus. Un ejemplo de esto es que Dios reemplazó a Tiri, quien previamente era considerado un ser supremo en la mitología yurakaré:

Es un cuento del yurakaré pero ya no sabemos. Nosotros ya no sabemos, era algo bonito. Es algo que a nosotros nos comentaron antes los abuelos, los antepasados. De repente pueda ser que hasta que llegó la iglesia evangélica a partir de ahí cambió todo. Antes sí se podía creer y pensar como dice la historia del Tiri. Es casi similar como la historia de la creación de la Biblia. Ya el yurakaré no piensa en el Tiri, simplemente en su mente tiene que el Tiri es alguien que existió, pero es un dios que está ahí, no se ve, simplemente está ahí. Nosotros, yo y Bertha, como leímos mucho la Biblia, nosotros fuimos

identificando algunas cosas, no sabemos quién le dijo al yurakaré muchas cosas (RC - comunario, Nueva Galilea, 10 de julio de 2022).

## Reflexiones

Los yurakarés de Nueva Galilea han tenido una influencia significativa en la percepción, representaciones, normas, forma de organización social y política, en sus prácticas culturales y territoriales como resultado de procesos históricos de aculturación y transculturación, debido a contactos más o menos prolongados con otros grupos étnicos (españoles, quechuas, moxeños, guaraníes, entre otros) y, en gran medida, por la presencia de misioneros evangélicos estadounidenses, como se evidencia incluso en el nombre de la comunidad y en su creencia en Dios. Para los yurakarés que viven actualmente en Nueva Galilea:

La vida del hombre no es fácil, cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer, hay altibajos, en una sociedad lo mismo, siempre hay problemas. Es la ruta sísmica que va cambiando, es como la ola del mar o del río, a veces sube, a veces baja, cuando está abajo está en la desgracia. Quién no tuvo problemas, quién no tuvo enfermedades, en veintiséis años hermanas, hermanos hemos avanzado en comunidad, Dios nos ayudó, nos acompañó (SC - comunario, Nueva Galilea, 21 de julio de 2022).

Dada su histórica organización social itinerante y su reciente transición hacia el sedentarismo, la movilidad espacial aún subsiste como parte de su identidad actual, ya que su forma de organización social comunitaria, su imaginario social, su territorio y su identidad como sedentarios están todavía en proceso de elaboración.

En cuanto a su hidroterritorio, intervenido por relaciones de poder, destacamos la gestión y uso de los ríos por parte de los yurakarés de Nueva Galilea –en su área– a través del control de la pesca.

Aunque las nuevas generaciones utilizan su lengua cada vez menos, los yurakaré han logrado mantener elementos importantes de su cultura, tales como: su identidad, una parte de su cosmovisión y un territorio, aunque este último no es tan extenso como lo era en el pasado.

## Referencias

- Castoriadis, C. (1983). *La institución imaginaria de la sociedad*, (Tusquets), Vol. I.
- Climate - Data.org. s.f., "Datos climáticos - Clima tropical." En Climate Data. <https://es.climate-data.org/america-del-sur/bolivia/cochabamba/chimore-51278/>
- Gómez Ramírez, Denisse R. (2024). *Territorios Hidrosociales en disputa: Identidad para la autonomía entre los zapotecos de Capulálpam de Méndez y yurakaré de la Amazonía Cochabambina*. Tesis doctoral, UNAM.
- Haesbaert, R. (2013). "Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad." *Cultura y Representaciones Sociales*. Ciudad de México, Vol. 8, N°15, septiembre-2013, pp. 9-42.

- Katzer, L.; Álvarez Veinguer, A.; Gunther, D. y Segovia, Y. (2022). "Puntos de Partida. Etnografías colaborativas y comprometidas". *Tabula Rasa* (Bogotá), N°43, julio - septiembre 2022, pp. 11-28.
- Paz, S. (1991). *Hombres de río, hombres de camino: relaciones interétnicas en las nacientes del río Mamoré*. Cochabamba: Universidad Mayor de San Simón UMSS.
- Sanchiz Ibor, C. y Boelens, R. (2018). "Gobernanza del agua y territorios hidrosociales: del análisis institucional a la ecología política". *Cuadernos de Geografía*, (Valencia), N°101, pp. 13-28.
- Silva Rodríguez de San Miguel, José A. (2019). *Territorios Hidrosociales: una revisión de la literatura*, (Área de Innovación y Desarrollo, S.L.).

# Tejiendo hamacas y redes: relatos y experiencias de mujeres guarayas de Urubichá en defensa de sus derechos

---

*Rosely A. Stefanés Pacheco*

## Resumen

Ciertamente, los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana viven momentos complejos, ya que sus territorios y comunidades se han convertido en espacios de intensa extracción de recursos naturales, enfrentándose a desplazamientos, degradación ambiental y otras formas de violencia. Sin embargo, es necesario considerar que aún en un entorno aparentemente desfavorable, surgen espacios de resistencia, especialmente contruidos por mujeres indígenas, que, a lo largo de la historia, han demostrado una importante capacidad para seguir (re)existiendo. Han transitado desde las luchas sociales por sus derechos, hasta los espacios de construcción participativa. Así, el objetivo principal de este trabajo es resaltar el papel de las mujeres indígenas guarayas del municipio de Urubichá, departamento de Santa Cruz. Para ello, analizaremos los espacios de resistencia posibilitados por la fuerza de mujeres, que, a través de acciones cotidianas, ya sea mediante asociaciones de mujeres, por su trabajo como tejedoras hamacas y carteras, o por la institucionalización de la justicia indígena, buscan construir espacios participativos para incorporar valores fundamentales para vivir bien. En cuanto a la metodología, recurrimos a diversas áreas del conocimiento como el derecho, la historia y la antropología, además del trabajo de escucha que realizamos con las mujeres guarayas de Urubichá.

## Palabras clave

Mujeres indígenas, guarayos, Urubichá, movilizaciones, resistencias.

“El reconocimiento de violencias múltiples emerge cuando nos juntamos a conversar mujeres que gestionamos la vida en la ciudad, las que gestionan la vida en los territorios indígenas y campesinos, y las que transitan por ambos”.

Palabras de una integrante de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib).

(Cuellar, 2019, p. 275).

## **Introducción: el protagonismo de las mujeres indígenas**

Los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana viven momentos complejos, ya que sus territorios y comunidades se han convertido en espacios de intensa extracción de recursos naturales, lo que los ha llevado a enfrentar desplazamientos forzados, degradación ambiental y otras formas de violencia. Sin embargo, se debe considerar que aún en un entorno a todas luces desfavorable, surgen espacios de resistencia, especialmente aquellos contruidos por mujeres indígenas que, a lo largo de la historia, han demostrado una importante capacidad para seguir (re)existiendo.

Como señala el historiador Bengoa (2007), la emergencia indígena en América Latina es probablemente uno de los fenómenos socioculturales más importantes de los últimos tiempos. Esta emergencia se puede observar desde diversos aspectos como la “afirmación de identidades colectivas y constitución de nuevos actores” o el cuestionamiento del “Estado republicano, centralizado y unitario que se intentó construir en América Latina” (Bengoa, 2007, p. 13). En las últimas décadas, los pueblos indígenas de América Latina han tomado protagonismo y se han esforzado por construir importantes alianzas que poco a poco van “desnudando” la historia y reconstruyendo un nuevo escenario. Además, como resultado de esta emergencia, están cuestionando el pensamiento occidental de la modernidad, señalando un cambio de significado, especialmente de ciertos conceptos como identidad, género, cultura, conocimiento, derechos y territorios. Las movilizaciones indígenas para la conquista de sus derechos marcan el camino en busca de alternativas para superar los diversos problemas que atraviesan su vida cotidiana, y conquistar el derecho a que su sociodiversidad y sus reivindicaciones sean respetadas por los estados nacionales, que no pueden concretar las aspiraciones de una sociedad plural sin la presencia y actuación de los pueblos indígenas (Stefanes Pacheco, 2019).

Daroqui y Rangugni (2008) afirman que, dentro de las demandas sociales realizadas por diversos pueblos indígenas en los últimos años, se debe considerar que la incorporación de la discusión de la igualdad de género como tema de debate de políticas públicas es el resultado de un largo proceso social y político, producto de un esfuerzo de los movimientos de mujeres que cuestionan los supuestos culturales vigentes y la forma en que la sociedad concibe lo femenino y lo masculino. En este proceso, es importante destacar los movimientos feministas que nacen desde perspectivas locales.

Federici (2019) considera que los movimientos feministas más poderosos del mundo actualmente están en América Latina (Federici en IHU, 2023). Son movimientos que han entendido que no es posible cambiar positivamente la condición de las mujeres si no se cambia la sociedad regida por el capitalismo, la colonialidad y el racismo (Federici en IHU, 2023). Conforme apuntan Hernández y Sierra (2005), “las demandas de las mujeres indígenas no pueden comprenderse fuera del marco de las luchas de sus pueblos por la autonomía, lo que significa luchar por conseguir una nueva relación con el Estado que les permita ejercer el control de sus gobiernos, territorios y recursos naturales” (p.115). Para Federici, cualquier proyecto feminista que no tenga en cuenta este escenario está condenado a la irrelevancia y a la cooptación. Por su parte, desde el planteamiento del feminismo comunitario, la investigadora Julieta Paredes señala que las conceptualizaciones y las alternativas no sólo nacen de las mujeres, “sino que nacen de la lucha y el diálogo” (Paredes en Spyer *et al.* 2019, p.30). Paredes (2010) describe el feminismo comunitario como una forma de reivindicar los derechos de las mujeres indígenas, basada en sus propios conceptos y estructuras, a menudo utilizados para entender la situación de “subyugación” de las mujeres.

Ante la grave situación de violación de derechos, las mujeres indígenas han organizado espacios de lucha y resistencia. Cada vez son más las mujeres que buscan participar en encuentros, foros, talleres y conferencias nacionales e internacionales promovidos por organizaciones indígenas, organismos estatales y no gubernamentales, contribuyendo así al fortalecimiento de sus organizaciones y al intercambio de experiencias, al mismo tiempo que adquieren cada vez más capacidades para actuar en la esfera pública. Además, las mujeres también encarnan estrategias de lucha en la vida cotidiana y la esfera privada. En ese sentido, el objetivo principal de este trabajo es reconocer y destacar las múltiples estrategias de resistencia cotidiana de las mujeres indígenas guarayas de Urubichá en el departamento de Santa Cruz. Para ello, desde una experiencia de observación participante y conversaciones informales con mujeres indígenas guarayas de Urubichá en el año 2016, describo los espacios de resistencia posibilitados por la fuerza de las mujeres que, a través de acciones cotidianas (como el tejido de hamacas y la participación en asociaciones de mujeres), buscan construir espacios participativos para defender sus derechos. Adoptando la mirada del feminismo comunitario, este artículo muestra las formas a través de las cuáles las mujeres guarayas de Urubichá tejen redes al mismo tiempo que tejen hamacas para ejercer formas de autonomía.

## **Observaciones y conversaciones de una breve visita a la comunidad guaraya de Urubichá**

En el año 2016, llegué a Urubichá en el marco de un curso sobre “Pueblos indígenas guaraníes: historia y etnografía contemporáneas”, como parte del programa de doctorado en historia de la Universidad Federal de Grande

Dourados en Brasil. Mis colegas y yo estábamos explorando los potenciales vínculos entre los guarayos, los guaraní y los kaiowá que hoy habitan parte de la región sur del estado de Mato Grosso del Sur en Brasil, pues, de acuerdo con algunas crónicas, se sabe que los guaraní llegaron a Bolivia desde Paraguay y Brasil (Ministerio de Educación de Bolivia, 2014). En ese contexto desarrollamos una metodología de observación participante y de conversaciones informales con diversos miembros de la comunidad. A través de esas conversaciones y de nuestra estadía en Urubichá es que llegué a interesarme específicamente en las estrategias de las mujeres guarayas para defender y afirmar sus derechos. Estas conversaciones y observaciones, detalladas a continuación, muestran cómo las mujeres guarayas están construyendo su autonomía desde la organización asociativa, el desarrollo de actividades económicas propias y la lucha contra la violencia.

En el verano de 2016, tras haber llegado a Urubichá después de un largo viaje desde la frontera entre Brasil y Paraguay, pasando por Santa Cruz de la Sierra, fuimos invitadas/os a una reunión de bienvenida por parte de la Asociación de Vecinos de Urubichá. La reunión tuvo lugar en las primeras horas del día siguiente a nuestra llegada, en la sede de la asociación. Al llegar, nos encontramos con varias/os dirigentes, quienes nos recibieron de una manera muy cordial. Estaban deseosas/os de compartir sus conocimientos, sus demandas y tratar de entender nuestro interés en el pueblo guarayo y en reunirnos y compartir con ellas/os en Urubichá. Durante la reunión, frente al acaparamiento de la palabra por parte de los dirigentes hombres, E. P., la presidenta regional de las Asociaciones de Mujeres tuvo que interrumpir a uno de los dirigentes –quien estaba exponiendo largamente sus experiencias– para pedir, en su idioma, que dejara de hablar pues las mujeres también querían hablar y él no les estaba dando la oportunidad. Después de la reunión tuvimos oportunidad de hablar con la dirigente y ella nos tradujo sus palabras y nos explicó que “ese no era un espacio sólo para hombres, sino también para que hablaran las mujeres”. Esta anécdota de nuestro primer día en Urubichá marcó el tono de nuestras conversaciones y despertó mi interés en entender mejor las circunstancias de las mujeres guarayas en Urubichá, su historia organizativa y sus estrategias de lucha.

Según Viruez (2015), la movilización de las mujeres guarayas ha tomado contornos notables en el contexto de los procesos de lucha por la defensa de los derechos de las mujeres en el oriente boliviano. Viruez (2015) destaca el rol de la Central de Mujeres Indígenas Guarayas (Cemig) desde su creación en 1986 en Urubichá, como una “organización [que] surge de las mismas mujeres, como un espacio de reivindicación y defensa tanto de los derechos como pueblo indígena guarayo, como de derechos específicos de mujeres” (p.10). Según el relato de una de las fundadoras del Cemig, en un principio su objetivo era la demanda de condiciones iguales de pago con relación a los hombres en el sector productivo (por ejemplo, en la venta ambulante de productos artesanales) (Viruez, 2015). Sin embargo, con el tiempo y a través de alianzas con instituciones privadas y ONG, la Cemig se fortaleció como

organización política y brindó el espacio para la formación de las mujeres en temas relacionados con la organización comunitaria, y, especialmente, en lo relacionado a los espacios y herramientas para exigir derechos ante la violencia de género (Viruez, 2015). En mi recorrido por Urubichá, estas dos líneas de acción de la Cemig, la promoción de derechos económicos desde las actividades productivas (*tejer hamacas*) y la reivindicación de derechos desde la organización política y comunitaria (*tejer redes*<sup>49</sup>), apareció claramente en las conversaciones con las mujeres guarayas de Urubichá.

### **Tejiendo hamacas**

La situación económica de las mujeres guarayas es compleja. E. P., la presidenta regional de las Asociaciones de Mujeres, nos contó que los indígenas guarayos tienen dificultades para encontrar trabajo en Urubichá. A menudo tienen que recorrer largas distancias para conseguir un empleo. Carecen de recursos para comprar productos básicos como azúcar, carne y jabón. Por ello, su trabajo en la agricultura es fundamental. Los chacos proveen a las familias de yuca, plátano, frijoles y otros alimentos básicos para la seguridad alimentaria. E. P. nos contó que ella y su familia cultivan arroz y plátanos para la subsistencia de su familia, que este tipo de alimentos “no pueden faltar”. Cuando va al chaco con su esposo, se quedan allí dos o tres días y aunque es un trabajo duro, a ella le gusta trabajar con la tierra y echa de menos los tiempos de sus abuelos, cuando tenían muchos árboles. Además de la agricultura, muchos hombres también se dedican al aprovechamiento de la madera y trabajan en las ciudades de los alrededores como albañiles. Según lo que escuchamos de varios pobladores en Urubichá, la venta de madera es una de las principales actividades económicas de los hombres, que salen con frecuencia a “los cerros” (bosques) donde permanecen por varios días. Estos bosques están cada vez más lejos del pueblo porque la madera escasea. La sobreexplotación de madera, impulsada por la necesidad económica de las familias, lamentablemente contribuye a la deforestación y la degradación de los bosques, considerados como unos de los mayores retos ambientales de Bolivia (Paredes Tamayo, 2023).

Por su parte, las mujeres tienen aún menos alternativas. Según E.P., las mujeres, y sobre todo las madres jóvenes, sufren porque no encuentran trabajo pues no suelen tener con quién dejar a sus hijas/os. Nuestra interlocutora nos explicó que, si estas madres no pueden contar con sus propias madres para el cuidado de las/os hijas/os, no pueden irse de casa y conseguir mejores condiciones de trabajo. En ese contexto, muchas de ellas recurren a las asociaciones y proyectos de fabricación de hamacas y carteras como forma de complementar sus ingresos. La confección de hamacas es una de las principales actividades a las que se dedican las mujeres guarayas de Urubichá. Estas son meticulosamente elaboradas a mano en telares y con un colorido único que nos llenó los ojos en nuestra visita a la región.

---

<sup>49</sup> Nótese que, en portugués, el idioma original en el que fue escrito este artículo, la palabra para hamacas y redes es la misma (*redes*).

Una de las mañanas de mucho calor, conocimos a una mujer guaraya que nos invitó a su casa apenas la saludamos. Su nombre era E. C. M. Tenía 63 años, seis hijas y dos hijos. Todas sus hijas aprendieron el arte de tejer desde muy pequeñas. En el patio de su casa encontramos a su hija menor, A. M., una joven de 17 años, que llevaba a su hijo de un año en el regazo mientras trabajaba en el telar (nos dijo que tenía otro hijo de tres años que se quedaba con su abuela paterna, que se había ofrecido a ayudarla para que pueda trabajar). A. M. empezó a aprender este oficio a los siete años y todos admiraban su habilidad. Entramos a la casa, que constaba de un único espacio que servía de dormitorio, salón y cocina, como en todas las casas que componían el paisaje de aquella pequeña calle. Todas las casas también tenían grandes puertas que daban a la calle principal para refrescar los hogares. La amabilidad de estas mujeres nos conmovió, ya que enseguida trajeron una silla, la colocaron junto a la pequeña cama de matrimonio, uno de los únicos muebles de la habitación, y empezaron a contarnos sus experiencias. Ambas mujeres, madre e hija, nos contaron entusiasmadas que participaban en una de las varias asociaciones de mujeres tejedoras de Urubichá. Nos contaron que tardan hasta tres semanas en hacer una hamaca. El tiempo de trabajo depende del tamaño de la hamaca. No tienen un plazo fijo para terminar el trabajo pues pueden surgir imprevistos en medio del tejido. E. M. C. citó como ejemplo el caso de su marido, que llevaba más de un mes enfermo, posiblemente con chikungunya. Entre ocuparse de las tareas diarias y de atender a su pareja, poco tiempo le quedaba para tejer. Más allá de la fabricación de las hamacas, la venta y procuración de mercados pueden ser muy desafiantes. Una vez que terminaban su trabajo, es muy difícil venderlo en el propio pueblo, donde algunos meses venden una hamaca (o ninguna). Generalmente necesitan salir a vender las hamacas fuera del pueblo, lo que significa gastos de transporte y alojamiento, además de tiempo. Nos contaron que esta era una de las razones por las que participaban en la asociación, porque creían que podía aportarles alguna contención, aunque no fuera monetaria, pero sí de apoyo y de compartir con otras mujeres.

El tejido de hamacas es por tanto una actividad económica para las mujeres de Urubichá, que, a pesar de las dificultades, les permite incrementar y diversificar sus ingresos como forma de emancipación y de acceso a derechos económicos en un contexto de limitadas oportunidades. Sin embargo, también es un espacio para la formación política, la solidaridad y la reivindicación de otros derechos desde la formación de espacios comunitarios y participativos (Viruez, 2015). Nuestras conversaciones con las mujeres de Urubichá también ilustraron estas relaciones, especialmente en la lucha contra la violencia de género, como veremos en la siguiente sección.

### **Tejiendo redes**

Además de la falta de alternativas económicas y productivas para las mujeres guarayas en Urubichá, E.P. también enfatizó que en la región aún hay mucha discriminación y violencia contra las mujeres, aunque muchas se nieguen a hablar de ello. Existen muchos casos de violación de derechos,

incluyendo casos de violencia intrafamiliar y de género. Además, existen tipos específicos de violencia hacia las mujeres por su participación en espacios organizativos y comunitarios. Nuestra interlocutora nos contó que muchos hombres no entienden el trabajo que hacen las mujeres en las asociaciones de tejedoras u organizaciones de mujeres como la Cemig. Dijo que, en algunos casos, cuando las mujeres vuelven a casa después de las reuniones, sus compañeros las “pillan” (es decir, las agreden físicamente) por participar en las reuniones y no realizar determinadas tareas domésticas.

En defensa de los derechos de las mujeres no solo de tener una vida libre de violencia, sino de poder participar en los espacios organizativos para ejercer sus derechos económicos, sociales y políticos, la Cemig ha jugado un papel fundamental. Según Viruez (2015), en los casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, la Cemig ha desempeñado un papel como agente de “interlegalidad”.<sup>50</sup> Esto se debe a que, en situaciones de violencia intrafamiliar o vulneraciones de otros derechos, las mujeres pueden hacer denuncias ante la Cemig y esta organización actúa como un ente mediador y de resolución de conflictos, navegando entre los sistemas de normas comunales y el sistema jurídico del Estado (Viruez, 2015). En ese sentido, durante nuestro tiempo en Urubichá, E. P. nos explicó que cuando se presenta un caso de violencia intrafamiliar ante la Cemig, el primer paso es ponerlo en conocimiento de las autoridades indígenas locales, quienes llaman al acusado e intentan aconsejarle. Este debe admitir su error y comprometerse a cambiar su comportamiento. Tras asumir este compromiso, el acusado es sometido a asesoramiento por parte de los ancianos de la comunidad. Según el grado de la ofensa, el acusado puede recibir varios tipos de sanciones, una de las cuales, la más extrema, consiste en castigo físico. Sin embargo, según E. P., esta práctica ha caído en desuso entre los guarayos, pero sigue siendo un recurso que puede utilizarse en el caso de algunos tipos de delitos, sobre todo si el agresor es reincidente o si la falta es extremadamente grave (como el abuso sexual de menores). Si los sistemas tradicionales de gestión de conflicto no dan resultados positivos, la Cemig apoya la presentación del caso ante las autoridades estatales locales. En estas prácticas se puede ver la existencia de un pluralismo jurídico utilizado por una parte de la población de Urubichá.<sup>51</sup> Es en ese sentido que Viruez (2015) considera que la Cemig:

Representa un agente de interlegalidad, puesto que a través de sus capacidades organizativas y de relacionamiento con instituciones, ONG, autoridades estatales, etc., ha logrado mejorar la condición económica-jurídica-política de las mujeres, proceso en el cual ha ido construyendo relaciones de interlegalidad y haciendo más fluidas las relaciones Estado-comunidad (Viruez, 2015, p.39).

Las actividades de la Cemig en apoyo a las mujeres para defender sus derechos son posibles gracias al compromiso y dedicación de sus lideresas, como E.

---

<sup>50</sup> La interlegalidad es un tema que no podemos abordar en su justa medida en este artículo pero que, según María Tereza Sierra, es una de las propuestas fundamentales para que los derechos indígenas puedan ser realizados (Hernández y Sierra, 2005).

<sup>51</sup> Entendido de forma muy simplificada como la coexistencia de sistemas diversos de normas, vigentes al mismo tiempo en una sociedad determinada (Hernandez y Sierra, 2005).

P. Sin embargo, estos cargos enfrentan muchos desafíos. E. P. nos habló de las dificultades que encuentra como dirigente de la asociación de mujeres para acceder a ciertos conocimientos y que, según ella, no hay suficiente formación para las mujeres. Según ella, muchas mujeres desconocen sus derechos y, por lo tanto, están a merced de diversos tipos de violencia. Nos dijo con pesar que le gustaría ayudar más a sus compañeras, pero que, dentro de sus limitaciones, hacía todo lo posible por apoyarlas. Por ejemplo, para comprar los pasajes de autobús que necesita para visitar las asociaciones de mujeres que dirige, situadas en otras ciudades vecinas, no tiene ayuda de ningún organismo gubernamental. Hace empanadas y las vende en Urubichá o en los pueblos de destino para poder financiar sus viajes. Nos contó en tono melancólico que tenía previsto ir unos días a un pueblo vecino para resolver un problema con unas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, pero que aún no había podido reunir suficiente dinero para pagar su viaje. Apareció claramente que una de las principales preocupaciones de E.P. es la falta de recursos para desarrollar sus proyectos con las mujeres guarayas y apoyarlas en la defensa de sus derechos.

A pesar de las dificultades, las mujeres guarayas están avanzando en la defensa de sus derechos y en la consolidación de su participación en espacios de diálogo. Por ejemplo, en julio de 2023, se realizó el Foro Regional de Mujeres Guarayas, organizado por la Cemig con apoyo del Instituto Boliviano de Investigación Forestal que tiene sede en Santa Cruz, con el objetivo de "revisar los alcances y líneas de acción de la Agenda Política, Económica y Social de las Mujeres Guarayas 2021-2025" (IBIF, 2023). Entre los temas del foro, se destacaron la lucha contra la violencia intrafamiliar y de género, la autonomía económica y el liderazgo político (IBIF, 2023). Se recuperaron estrategias y avances en cada uno de estos ámbitos. Respecto a la lucha en contra de la violencia, se destacó la conformación de un "comité de defensa de lucha contra la violencia" y la formación y designación de promotoras comunitarias en cada una de las comunidades representadas por la Cemig (IBIF, 2023). Respecto a la autonomía económica, se resaltaron los esfuerzos de las mujeres guarayas, junto con instituciones aliadas, de obtener fondos para apoyar iniciativas productivas (IBIF, 2023), como el tejido de hamacas. En lo que respecta a la participación política, las mujeres "siguen fortaleciendo sus liderazgos a través de capacitaciones, espacios de análisis y reflexión sobre sus roles y demandas que cumplen en el ámbito público y privado" (IBIF, 2023). Al respecto, Marcelina Arinonga, presidenta de la Cemig regional, subrayó:

Hay cosas que no nos dejan avanzar, por ser mujeres nos ven que no tenemos capacidad de tener cargos, pero gracias al apoyo de las 10 centrales de mujeres estamos de pie trabajando, conociendo, compartiendo, informando nuestros derechos (IBIF, 2023).

Es interesante notar que estos espacios de diálogo abordan las problemáticas de las mujeres de forma integral, y no separada. Los temas de violencia, derechos económicos, participación política o incluso de justicia ambiental

están interrelacionados y conforman distintas aristas de las agendas de trabajo y reivindicación de las mujeres. Por ejemplo, en la “4ta versión del Foro y Feria del cusi”, un espacio organizado por la Asociación de Recolectoras, Transformadoras, Comercializadoras de Cusi de la Provincia Guarayos (Asoretgup), el Gobierno Autónomo Municipal de El Puente (Gamep) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) en diciembre de 2023, se abordaron una serie de temas fundamentales de las agendas de las mujeres, a partir de la discusión del fomento del aprovechamiento del cusi<sup>52</sup> en las políticas públicas:

La experiencia productiva de las mujeres en Guarayos, se conecta con procesos emancipatorios referentes al acceso y al poder público de la mujer, empoderamiento económico y la lucha por la gestión territorial y gobernanza ambiental de los movimientos indígenas de la TIOC Guarayos (Mamani, 2023).

En ese sentido, desde mis observaciones en Urubichá y la revisión de los testimonios de la participación de las mujeres guarayas en espacios de diálogo, se puede observar cómo se difumina la línea que divide el tejido de hamacas del tejido de diversas formas de redes de organización política, social y económica.

## Consideraciones finales

En el proceso histórico de América Latina, los pueblos indígenas fueron menospreciados en la construcción del Estado nacional. Sus voces fueron acalladas ya que se los consideraba entes estancados, símbolos de un pasado lejano que no contaban para el futuro. En respuesta a estas estrategias de “borrado” utilizadas por los Estados a lo largo de los siglos, las movilizaciones indígenas han respondido, cada una a su manera, incluyendo desde la perspectiva y problemáticas específicas de las mujeres indígenas.

En este artículo hemos rescatado algunos elementos de las luchas recientes de las mujeres indígenas guarayas de Urubichá. Los testimonios que hemos presentado resaltan la persistencia de la discriminación y exclusión económica y política de las mujeres, así como la persistencia de la violencia intrafamiliar y violencia de género, en especial aquella derivada del rechazo a la participación de las mujeres en espacios políticos. Si consideramos que el feminismo comunitario se basa principalmente en la organización (Julieta Paredes en Spyer, 2019), la persistencia y consolidación de las organizaciones y asociaciones de mujeres guarayas en Urubichá constituyen formas de feminismo comunitario que responde a las diversas demandas y necesidades de las mujeres. De esta manera, las mujeres guarayas de Urubichá, organizadas a través de sus movimientos de resistencia, establecen luchas dentro de sus propias comunidades, tanto desde el espacio de sus formas tradicionales de gobernanza y justicia, como haciendo uso estratégico de los mecanismos del Estado para legitimar sus demandas. Entre estas estrategias

---

<sup>52</sup> Una palmera local a partir de la cual se pueden hacer muchos productos derivados como jabones y aceites.

están el tejido de hamacas de forma asociativa, la formación política, la lucha en contra de la violencia intrafamiliar y de género y – abordada de forma menos profunda en este artículo – la reivindicación de gobernanza y gestión territorial. Estas luchas se dan desde los espacios cotidianos públicos y privados, “con nuestros cerebros, con nuestros corazones y con la energía de nuestros ancestros” (Spyer et al, 2019, p. 41).

## Referencias

- Bengoa, J. (2007). *La emergencia indígena en América Latina*, Chile: FCE.
- Cuellar, C. (2019). ¡Con nosotras no!: La organización autónoma de mujeres indígenas de Tierras Bajas un prisma para entender el presente en Bolivia. En: *Revista Confluencias*. v. 21, n.2.
- Daroqui, A., y Rangugni, V. (2008). *Mujeres encarceladas en la Argentina, una investigación sociojurídica*. En Bergalli, R. et. al. (Org.): *Violencia y sistema penal*. Buenos Aires: Del Porto.
- Hernández, A. y Sierra, M. T. (2005). *Repensar los derechos colectivos desde el género: Aportes de las mujeres indígenas al debate de la autonomía* (pp. 105-120). En Sánchez Néstor, M. (Comp.): *La doble mirada: Voces e historias de mujeres indígenas latinoamericanas*. México, DF: Instituto Liderazgo Simone de Beauvoir.
- IBIF. (2023). *Foro de Mujeres Indígenas Guarayas*. Página web del Instituto Boliviano de Investigación Forestal. Disponible en: <https://ibifbolivia.org.bo/noticias/foro-de-mujeres-indigenas-guarayas/>
- IHU. (2023). Silvia Federici: “Os movimientos feministas mais poderosos do mundo hoje estão na América Latina”. Página web del Instituto Humanitas Unisinos (18 de diciembre de 2023). Disponible en: <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/635325-silvia-federici-os-movimentos-feministas-mais-poderosos-do-mundo-hoje-estao-na-america-latina>
- Mamani, I. (2023). *Mujeres indígenas Guarayas debaten propuestas y posicionan su liderazgo transformador en la IV versión del Foro y Feria del Cusi en la Provincia Guarayos*. CIPCA online, 12 de diciembre de 2023. Disponible en: <https://cipca.org.bo/noticias/mujeres-indigenas-guarayas-debaten-propuestas-y-posicionan-su-liderazgo-transformador-en-la-iv-version-del-foro-y-feria-del-cusi-en-la-provincia-guarayos>
- Nostas Ardaya, M. et al. (2007). *Gwarayu mba\*ekwasa Saberes del Pueblo Gwarayu*. Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, Primera Edición Santa Cruz, Bolivia.
- Ministerio de Educación de Bolivia. (2014). *Estado de situación de las lenguas y culturas de las naciones y pueblos indígena originario: Guaraní, Tapiete, Weenhayek, Yuracaré y Yuki del Estado Plurinacional de Bolivia*. Disponible en: <https://red.minedu.gob.bo/repositorio/fuente/16670978097226.pdf>.
- Paredes Tamayo, I. (2023). *Los desafíos ambientales de Bolivia en 2023: invasiones y deforestación, ríos contaminados, sequías y gestión de áreas protegidas*. Mongabay (11 de enero de 2023). Disponible en: <https://es.mongabay.com>

com/2023/01/desafios-ambientales-de-bolivia-en-2023-invasiones-y-deforestacion/

Paredes, J. (2010). Hilando fino: desde el feminismo comunitario. La Paz: Comunidad Mujeres Creando Comunidad.

Spyer, T., Malheiros, M., y Ortiz, M. (2019). Julieta Paredes, mulheres indígenas, descolonização do feminismo, e políticas do nomear. Entrevista em Revista Epistemologias do Sul. Vol 3, n.2.

Stefanes Pacheco, R. A. (2019). As demandas indígenas e o Direito à terra: a insolência dos pássaros que insistem em voar. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR.

Viruez, R. (2015). Mujeres guarayas trastocando imaginários, Buenos Aires, Argentina, CLACSO. Disponível em <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150804094014/ArticuloFinalClacso.pdf>. Acesso em 18 de dezembro de 2023.



# Imaginarios y prácticas espaciales de los movimientos indígenas en la Amazonía desde lo local hasta lo global

---

*Ernesto García Leiva*

## **Resumen**

En este artículo se aportan dimensiones teóricas, desde la sociología y la geografía política, para la comprensión de algunos elementos de los imaginarios de los movimientos indígenas en Bolivia y para reflexionar sobre sus prácticas políticas vinculadas a la construcción del espacio. Estas reflexiones se nutren de dos ejemplos: el caso de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) en el paradigmático conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (Tipnis), donde la demanda del territorio a escala local ocupó un lugar central en la pugna con el gobierno de Evo Morales; y el caso de la Coordinadora de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y sus estrategias geopolíticas para proteger el bioma amazónico desde una perspectiva regional y global.

## **Palabras clave**

Movimientos indígenas, Amazonía, imaginarios y prácticas espaciales, Cidob, Coica.

## Introducción

La aproximación al estudio de los movimientos indígenas en América Latina y el Caribe cobra fuerza a partir de los años 70, cuando la tradición epistemológica del marxismo toma en mayor consideración las especificidades del continente americano para el estudio de la acción social. Desde finales de los años 80, las reivindicaciones de los movimientos indígenas toman impulso a partir de su simbiosis virtuosa con las reivindicaciones ambientales y de conservación, en un contexto global de marcada crisis ecosocial. En este sentido, tanto las oportunidades como los cierres del movimiento indígena a la hora de plantear alternativas sistémicas, no se pueden entender sin apreciar las vigentes transformaciones del sistema internacional. A mayores de la crisis ecológica, consecuencia de los límites planetarios y de los modelos de producción y consumo capitalistas, el presente debe entenderse en el contexto de la competencia geopolítica entre China y Estados Unidos y otras potencias regionales. Actualmente, el mundo se encuentra ante un escenario multipolar con características potencialmente violentas, transnacionalizadas e inciertas, propias de un interregno histórico (Sanahuja, 2022).

El estudio de los movimientos indígenas debe, por lo tanto, situarse en este contexto internacional. Esto es cierto también en la Amazonía, una región de alta relevancia para la conservación de la biodiversidad y la estabilidad climática, donde además se ha evidenciado repetidamente el rol de los pueblos y territorios indígenas para la conservación y el manejo sostenible de recursos naturales. Este ensayo se centra en dos confederaciones de organizaciones indígenas de la Amazonía como estudios de caso. Por un lado, la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), en tanto que permite observar las tensiones entre algunas organizaciones indígenas y las políticas del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia. Por otro lado, la Coordinadora de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), puesto que se trata de una organización con presencia en varios países amazónicos y que articula diferentes escalas espaciales para alcanzar sus metas. Este ensayo se enfoca en el periodo 2011 - 2023, considerando el auge del conflicto entorno a la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) como punto de partida. Los enfoques teóricos utilizados se basan en la geografía política crítica -que analiza las transformaciones del espacio y del poder-, y en la sociología de los movimientos sociales indígenas -que interpreta la acción política y la construcción de las identidades-. En esta línea se van a tratar los dos casos de estudio atendiendo principalmente a sus demandas, sus propuestas geopolíticas y sus dinámicas de lucha.

## **Dimensiones teóricas: imaginarios y prácticas espaciales de los movimientos indígenas**

### ***Imaginarios del movimiento indígena***

Los movimientos indígenas pueden situarse en el marco teórico-conceptual de los movimientos sociales, si bien mantienen elementos propios y específicos cuyo análisis ayuda a una comprensión más afinada y compleja de la realidad sociológica latinoamericana. Para autores clásicos como Sidney Tarrow (2004), la transformación de la acción colectiva en un movimiento social requiere de las siguientes claves: el reclamo de un cambio hacia quien detenta el poder; la combinación de formas muy variadas de acción; la existencia de redes sociales permanentes; y la creación de una identidad colectiva que implica una forma común de interpretar y vivir la realidad. Además, juega un papel fundamental la relación de los movimientos sociales con las instituciones o las oportunidades políticas (Tarrow, 2004).

En el ámbito de la epistemología latinoamericana, otros autores han reflexionado sobre las organizaciones indígenas en movimiento. Álvaro García Linera (2009) añade una dimensión territorial a los movimientos, en tanto que entiende que las condiciones de posibilidad material y simbólicas del espacio animan a la acción colectiva. Según este autor, la “forma comunidad” desarrolla una reproducción social distintiva que representa valores antagónicos a las lógicas del capitalismo. Establece unos componentes básicos para las condiciones de posibilidad de la formación del movimiento indígena. Estos serían las características socioculturales (una estructura civilizatoria común en un área de conflicto); la intensificación de la expropiación/explotación de la civilización capitalista en áreas de comunidad; la politización acumulada y la construcción identitaria en torno a una historia y una cultura común que genera mitos unificadores; y el fracaso de las políticas estatales que no pueden satisfacer las demandas construidas por el movimiento indígena.

Por su parte el antropólogo Xabier Albó (2008) teoriza sobre el desarrollo y las dinámicas complejas al interior de las organizaciones. Se refiere a la evolución y los potenciales sentidos cambiantes de las identidades de acuerdo con intereses pragmáticos en una determinada coyuntura política como un mecanismo de defensa, de lucha y de sobrevivencia. Por ello, resalta que la autoidentificación étnica siempre tiene una dosis de subjetividad y de táctica, en función de los intereses y de las diferentes estrategias en una historicidad concreta. Esto puede incluso llevar a procesos de competición interna entre organizaciones indígenas por aumentar su poder. Por otro lado, Albó defiende que puede existir una articulación virtuosa entre las dimensiones de clase social -en el sentido marxista- y de emancipación en el sentido de la autonomía territorial indígena. En este punto afirma que la lucha por la defensa de los recursos naturales o del territorio ancestral se pueden mimetizar en tanto que tienen un opresor común: el despojo capitalista, que además canalizará la memoria de la rebeldía de la época colonial y de las luchas contemporáneas.

No obstante, más adelante observaremos cómo del gobierno del MAS no logró hacer confluir plenamente las referidas matrices marxistas e indianistas en su relación con algunos movimientos indígenas, principalmente en las tierras bajas y la Amazonía. A propósito de este devenir político, la historiadora Silvia Rivera Cusicanqui (2010) defiende la perspectiva del “buen vivir” como un elemento genuino de los movimientos indígenas que trasciende el pensamiento moderno occidental. En consecuencia, se trataría de un modelo civilizatorio intrínseco, que promueve la armonía del ser humano y de la naturaleza por encima de la lógica de acumulación y consumo. A su vez, Rivera Cusicanqui denuncia la cooptación y vaciamiento de este concepto profundo por las burocracias estatales y la intensificación del extractivismo durante el gobierno del MAS, a pesar de su inclusión –simbólica- en la Constitución de 2009 (entrevista a Rivera Cusicanqui en Carvajal, 2015).

Los teóricos sociales también han desarrollado diferentes enfoques acerca de la vinculación de los movimientos sociales con las estructuras del estado. Boaventura de Sousa Santos (2018) reflexiona sobre la idea de la refundación del estado, a través de la cual un estado de matriz anticapitalista y plurinacional podría descolonizar sus estructuras históricas, creando así nuevas institucionalidades interculturales que sean capaces de canalizar espacios compatibles con otras formaciones etno-culturales de reproducciones alternativas. Por el contrario, autores como Raúl Zibechi (2017) asumen que toda estructura de estado en sí misma es opresora de las dinámicas emancipatorias, de manera que la aspiración del movimiento social ha de ser la de formar espacios autónomos e igualitarios por encima del orden del estado y del capitalismo extractivista. Esta aproximación promueve el enfoque de “otros mundos en movimiento” que de alguna manera capturan el espíritu del movimiento zapatista a 30 años de su fundación. Estas tensiones se han reflejado en Bolivia durante la Asamblea Constituyente y el debate respecto a las autonomías indígenas. La autonomía indígena en Bolivia, reconocida por la Constitución de 2009, se ha considerado como la cristalización de las demandas de los movimientos indígenas por la autodeterminación y el elemento fundamental del Estado Plurinacional (Nuñez del Prado, 2015). Sin embargo, en su forma actual –altamente dependiente de la burocracia estatal y limitadas en sus formas de gobierno- también demuestran las tensiones que emergen de la imposibilidad de extraerse del carácter relacional de la autonomía con relación al estado (Ulloa, 2010).

### ***Prácticas espaciales***

De cara a reflexionar sobre las prácticas espaciales de los movimientos indígenas, hay que poner la atención en las transformaciones de la espacialidad capitalista en el tiempo presente. Los autores Nogué y Ruffi (2008) analizan las complejas dinámicas del proceso de globalización en el que se enmarcan las luchas actuales por el espacio. Afirman que la geografía política crítica asume la aparición de una nueva dialéctica socio-espacial en la que el estado-nación ya no es el único garante de la administración del territorio y del poder. Por ello ponen sobre la mesa la emergencia de

nuevas organizaciones sociales que despliegan sus estrategias espaciales de manera más fluida, transversal y multiescalar, moviéndose por tanto en ámbitos locales, regionales, nacionales o transnacionales.

En este sentido Jhon Agnew (2015), más allá de la imaginación geopolítica moderna, plantea la existencia de plurales modelos de espacialidad del poder, los cuales pueden aparecer a partir de diferentes dinámicas políticas, sociales o culturales. Este fenómeno podría dar lugar a un conjunto de mundos que potencialmente se pueden integrar formando redes transnacionales alternativas. La imaginación geopolítica sobre la que teoriza este autor conlleva al menos tres elementos nodales: la voluntad de establecer un orden, la creación de identidades de pertenencia y la territorialización del espacio.

A menudo las espacialidades dominantes del sistema mundial, caracterizadas por las prácticas de los agentes de la globalización neoliberal, son cuestionadas por los movimientos sociales indígenas. Entonces renace la centralidad del territorio como un espacio fundamental para la acción socio-política. La territorialidad ocupa un lugar referente en las demandas de los movimientos indígenas, históricamente, y con un carácter específico desde la década de 1980 (ver por ejemplo: Lehm, 1999). Heriberto Cairo (2001) interpreta la noción de territorio a través de varios elementos clave: la identidad espacial (sentido de pertenencia), el sentido de exclusividad (derechos específicos) y la interacción humana (experimentación del mundo y reproducción social). A su vez los movimientos indígenas desarrollan estrategias geopolíticas de resistencia vinculadas a imaginarios descolonizadores: por un lado, utilizarían una estrategia etno-nacionalista, que afirma la cultura primigenia y que reivindica el territorio ancestral, y, por otro lado, una estrategia pan-indianista que afirma la comunidad y que tiene como estrategia la desterritorialización de los estados.

Por su parte, el historiador Viales Hurtado (2010) reconoce la importancia de las regiones como categoría de construcción socioespacial. Este enfoque trata de recuperar las diferentes relaciones sociales, geográficas e históricas -más o menos invisibilizadas- que se dan al interior de espacios dominantes como el del estado. Se busca por tanto fortalecer aquellas dimensiones transfronterizas que recrean los actores sociales en su manera de reproducir el espacio. Desde una perspectiva más transnacional, Breno Bringel, Alberto Acosta y Maristella Svampa (2022) sostienen que la escala global debe ser un espacio de primer nivel para el desenvolvimiento de los movimientos sociales, en tanto que las dinámicas del poder capitalista del siglo XXI tienen un marcado carácter transnacionalizado. Esto conlleva configurar nuevos espacios socio-territoriales basados en la solidaridad, en las nuevas formas de organización y en la construcción de resistencias y de propuestas ecosociales comunes más allá del marco local y nacional, como el recientemente creado Pacto Ecosocial del Sur (Bringel et al., 2022).

En suma, los movimientos indígenas pueden desplegar sus estrategias geopolíticas de manera fluida y trans-escalar dependiendo del contexto, de

la coyuntura política y de las metas que se quieran alcanzar. Sus repertorios de acción se pueden desarrollar en el ámbito local, regional, nacional, internacional o transnacional.

Más allá de todas estas dinámicas espaciales hasta ahora mencionadas, los movimientos indígenas se fortalecen con la construcción de un discurso que politiza el elemento étnico-cultural alrededor de los siguientes marcos simbólicos: el "buen vivir", los valores comunitarios, la relación integradora con la naturaleza, las cosmovisiones espirituales originarias. No menos importante para la formación de sus identidades es la articulación de las demandas. Históricamente una de las principales demandas de los movimientos indígenas ha sido y sigue siendo la autonomía territorial y el resguardo material y espiritual de la Madre Tierra.

En cambio, las organizaciones indígenas, como toda formación humana, se caracterizan por su pluralidad y por su heterogeneidad incluyendo en sus relaciones, por ejemplo, con la modernidad urbana, la tecnológica y las tradiciones ancestrales. Asimismo, las demandas de las organizaciones indígenas también son diversas y heterogéneas y pueden tener puntos de tensión entre sí, llegando incluso a ser contrapuestas. En este sentido, las demandas de las organizaciones indígenas se sitúan en un espectro, desde el desarrollismo hasta el resguardo de formas de vida arraigadas en la convivencia con el entorno, reflejando distintas visiones respecto a los significados de bienestar. Como veremos más adelante, las tensiones entre estas diversas demandas están muy presentes en las contradicciones del proceso de cambio político en Bolivia durante el gobierno del MAS.

## **La Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el conflicto del Tipnis por la defensa del territorio**

### ***La Cidob y el proceso constituyente en Bolivia***

La Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano es una confederación constituida por varias organizaciones indígenas que aglutinan a decenas de pueblos amazónicos de las tierras bajas de Bolivia. Su estructura organizativa está compuesta por un coordinador general y responsables de distintas áreas estratégicas como: recursos naturales, tierra y territorio, autonomía y medio ambiente.

La relación de la Cidob con el proceso de cambio instaurado en Bolivia por el MAS desde 2006 ha sido compleja y cambiante. La Cidob participó en las propuestas para la Asamblea Constituyente en el marco del Pacto de Unidad desde sus demandas fundamentales vinculadas a la autonomía territorial indígena, es decir, la autodeterminación expresada en el "derecho al autogobierno de las Entidades Territoriales Indígenas, Municipios y Regiones Indígenas Originarias y Campesinas; la posibilidad de definir políticas comunitarias, sistemas sociales, económicos, políticos y jurídicos y el reconocimiento de sus estructuras de gobierno, elección de autoridades y

administración de justicia, con respeto a las formas de vida diferenciadas en el uso del espacio y el territorio” (Cidob, 2001 en Fernández y Puente, 2011 p. 13-14), la participación directa en los espacios del estado (descolonización del estado), el control de los recursos naturales y el respeto a la reproducción de la vida comunitaria. Estas demandas se ven reflejadas -de alguna manera- en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 en los siguientes artículos:

Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales (...)

Artículo 30. (15) A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado (...)

Artículo 30. (17) A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

Artículo 290. La autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígena originarios, y las comunidades campesinas, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.

A pesar del relativo entendimiento de la Cidob con el MAS en los primeros años de gobierno, pronto vendrían las desavenencias a causa de la conducción del proceso de cambio, bajo el ejecutivo de Evo Morales y de García Linera. Tras la aprobación constitucional, la Cidob presiona para que se implementen los derechos establecidos en la nueva Constitución, incluyendo la autonomía territorial indígena –que requiere como condición necesaria (aunque no suficiente), la consolidación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en el nuevo Estado Plurinacional. De cara a afianzar estas demandas, el movimiento indígena empleó distintas estrategias espaciales; desde el nivel local trataba de organizar a las diferentes comunidades y pueblos del territorio o la región, desde el ámbito nacional presionaba al ejecutivo, y desde la escala global buscaba alianzas con instituciones internacionales de carácter público o privado (Organización de las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, Coica, diversas Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones, entre otras).

### ***El conflicto por la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos en el Tipnis y la defensa del territorio***

En 2011 se produjo una ruptura drástica entre la Cidob y la dirigencia del MAS, a consecuencia del conflicto entorno a la construcción de la carretera

Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (Tipnis). Este conflicto se considera un hito en la comprensión de las contradicciones entre las políticas del gobierno –que tienden a alinearse con presiones neodesarrollistas y extractivistas– y las aspiraciones para la descolonización del estado y la consolidación de la territorialidad indígena.

El conflicto del Tipnis es causado por la iniciativa del gobierno de construir una carretera a través del territorio para, por un lado, conectar los *commodities* latinoamericanos con el mercado global asiático a partir de la iniciativa IIRSA (Integración de Infraestructura Regional Suramericana), impulsada fuertemente por Brasil desde el año 2000, y, por otro lado, abrir nuevas tierras dentro del Tipnis a los productores de coca, representados por Evo Morales. El Estudio de Impacto Ambiental realizado en 2010 por la Consultora Connal SR (sobre parte del trazado de la carretera) señala las potenciales amenazas del proyecto sobre la biodiversidad, los recursos hídricos, la calidad del aire y el uso de suelo por la ampliación de la actividad agropecuaria. Además de los impactos ambientales, los impactos en la reproducción social y cultural de las comunidades indígenas de la zona son potencialmente altos, aunque existen posiciones heterogéneas entre las comunidades indígenas respecto a los efectos que la carretera podría tener sobre sus vidas (Reyes García *et al.*, 2020).

En respuesta al anuncio del proyecto y a la firma de contratos con una empresa brasileña de construcción, la VIII Marcha Indígena promovida por la Cidob y la Subcentral Tipnis (entre otras organizaciones) entre agosto y octubre de 2011, logró que el gobierno aprobara la Ley 180 que declaraba la intangibilidad de esta área natural. Sin embargo, retrocediendo sobre sus compromisos, el gobierno del MAS realizó una consulta “previa” a las comunidades indígenas Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés a propósito de la intangibilidad del Tipnis en 2012. En este caso, según fuentes oficiales, se obtuvo como resultado un voto mayoritario afirmativo para la derogación de la intangibilidad. Con estos resultados, el gobierno derogó la Ley 180 y aprobó la Ley 969 que dejaba el campo abierto para la construcción de la carretera. Sin embargo, el proceso de consulta ha sido denunciado por diferentes organizaciones y comunidades indígenas, así como observadores internacionales de derechos humanos, por la evidencia de que la consulta del gobierno fue manipulada o se hizo bajo presiones, que la consulta se alinea con una estrategia gubernamental para dividir y enfrentar a las comunidades indígenas, y que la información de la Evaluación Estratégica Ambiental no se había difundido entre las comunidades (entre muchas otras irregularidades) (FIDH, 2013; Somos Sur, 2016).

Por la diversidad de posturas entre comunidades indígenas, pero también a partir de la debacle de la consulta, entre 2012 hasta 2023 se han vivido fuertes divisiones en las comunidades y dentro de las organizaciones indígenas del Tipnis (ver, por ejemplo: Albuquerque Moraes, 2018). Mientras algunas comunidades han apoyado la construcción de la carretera, otras

han forjado alianzas internacionales para denunciar al estado y defender el territorio frente a las amenazas de la carretera y la expansión de la frontera de la coca dentro del Tipnis (ver, por ejemplo: TIDN, 2019). A pesar de los niveles de conflicto y la falta de consenso, distintos tramos de la carretera y puentes han sido construidos (Cauthin, 2023). En 2023, un encuentro de corregidores rechazó unánimemente la carretera abriendo preguntas sobre la evolución del caso a futuro.

### **La división de los movimientos indígenas en Bolivia**

En el conflicto por la carretera a través del Tipnis se puede ver el principal nodo de tensión del proceso político de cambio del MAS en Bolivia. El MAS logró aglutinar a los movimientos indígenas y campesinos de tierras altas y bajas alrededor de una agenda política a inicios del siglo XXI. Sin embargo, esta agenda llevaba en sí una diversidad de intereses y cosmovisiones, reflejo de la diversidad de las organizaciones que formaron parte del Pacto de Unidad (desde las demandas por la repartición de la tierra en forma de propiedad individual por parte de organizaciones como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa, el movimiento cocalero o la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia; hasta las demandas de autonomía territorial indígena reivindicadas por la Cidob).

Durante la conducción del proceso político, se priorizaron las visiones desarrollistas sobre las reivindicaciones de autonomía indígena y el paradigma del “vivir bien”. La herencia del pensamiento socialista y nacionalista boliviano tuvo un mayor peso en la agenda política de Evo Morales. Esta se define principalmente por la búsqueda de una mayor soberanía económica a través de la explotación de recursos naturales por parte del Estado para su posterior redistribución, aspirando a alcanzar de este modo un bienestar material capaz de erradicar la pobreza y la marginación de diferentes sectores de la sociedad (esta corriente también se ha denominado neoextractivismo; ver por ejemplo: Svampa, 2019). Por razones obvias estos principios pueden chocar con las demandas que se enmarcan en las dimensiones del “vivir bien” de los pueblos indígenas, como se puede ver con el caso del conflicto por la carretera a través del Tipnis.

La historia reciente muestra cómo el movimiento indígena en Bolivia se ha caracterizado por mantener una tendencia más indianista, al albur de las tesis del filósofo Fausto Reinaga, o en otro lugar, ha abrazado las ideas del indigenismo nacional-popular de carácter socialista, defendidas por el teórico García Linera. Precisamente el conflicto del Tipnis marca un hito que rompe la “tensión creativa” entre estos dos polos y hace que se quiebre el Pacto de Unidad, que en su día logró articular el MAS.

Tras el primer mandato de Evo Morales, los movimientos indígenas se fueron distanciando entre sí dependiendo de la cercanía o de la subordinación al gobierno, o por otro lado, en función del distanciamiento con respecto a las políticas neodesarrollistas / extractivistas aplicadas por el ejecutivo. Para

la propia Cidob, el conflicto por el Tipnis generó una ruptura interna que perdura hasta hoy, similar a la que se ha observado a muchos niveles y en otras organizaciones. En 2012, la Cidob se fracturó en dos organizaciones paralelas: una más afín al MAS, y otras más crítica respecto a las políticas y modo de proceder del gobierno (denominada Cidob orgánica). A pesar de estas divisiones y conflictos internos que sin duda han debilitado al movimiento indígena en Bolivia, las organizaciones indígenas de tierras bajas son las que mayormente están contrarrestando las políticas extractivistas gubernamentales e impulsando a su vez buena parte de las luchas socioambientales y territoriales del país, incluso en el nuevo contexto post-Morales, que está ilustrando cada vez más divergencias dentro de lo que alguna vez fue el bloque del MAS.

## **La Coordinadora de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica): Estrategias geopolíticas para proteger el bioma amazónico y a los pueblos indígenas**

La Coica es una red de movimientos nacida en 1984 que tiene un carácter regional e internacional. Se organiza en torno a la confluencia de nueve organizaciones indígenas matrices que se ubican en diferentes países de la cuenca amazónica<sup>53</sup>. En total representan a 511 pueblos indígenas, algunos de los cuales permanecen en aislamiento voluntario. El Consejo de Coordinación se compone de los nueve representantes de las organizaciones que componen la Coica, lo que puede llevar a tensiones, pues estas organizaciones –como hemos visto con el caso de la Cidob– a veces tienen fracturas propias que llevan al nivel de la representación regional. La agenda política de la Coica se nutre de los siguientes ámbitos sectoriales: mujer y familia, territorios y recursos naturales, cambio climático y biodiversidad, educación ciencia y tecnología, comunicación y salud, relaciones internacionales y cooperación, políticas y derechos humanos. Por primera vez, el año 2023, la coordinadora general es una mujer indígena, Fany Kuiru Castro, quien asumió la coordinación general de la Coica apaciguando una crisis de representatividad en la organización (Servindi, 2023).

Nos interesa destacar los siguientes elementos de esta red de movimientos: la utilización de diferentes escalas espaciales de manera fluida para alcanzar sus objetivos políticos, la protección medioambiental y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, así como la politización y la universalización de las demandas.

Con respecto a la primera cuestión, la Coica establece sus prioridades en la construcción de políticas, propuestas y acciones a nivel local, nacional y transnacional, todo ello a partir del diálogo y de las alianzas estratégicas con actores públicos, privados y de cooperación internacional. Estas tres escalas

---

<sup>53</sup> Aidesep en Perú, Coiab en Brasil, Orpia en Venezuela, Cidob - orgánica en Bolivia, Confeniae en Ecuador, APA en Guyana, Opiac en Colombia, OIS en Surinam y FOAG en Guyana Francesa.

espaciales se trabajan de la siguiente manera: desde un nivel regional se articulan las diferentes organizaciones amazónicas alrededor del liderazgo de la Coica y en función de las demandas comunes. Desde un plano local, se pone énfasis en las prácticas organizativas en el territorio -relacionadas a su vez con la reproducción social de las comunidades- y, desde un plano transnacional, se utilizan diferentes tácticas de incidencia en espacios de influencia global. A través de este último mecanismo se puede presionar a los respectivos estados-nación (territorialidades en las que también se circunscriben las organizaciones indígenas) para el cumplimiento de los convenios internacionales, sobre todo a partir de la apelación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A propósito de la protección del bioma amazónico y de la universalización de las demandas, en los últimos años la Coica ha participado activamente en distintas campañas internacionales para contribuir a la sustentabilidad de la vida en el planeta. En lo que sigue se muestran dos casos:

1. La estrategia REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) de la ONU, que es un mecanismo por el cual se pretende contribuir a frenar la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, a partir de la protección y de la reforestación de diferentes ecosistemas mundiales. La participación de la Coica en este proceso (en los proyectos de 2015 – 2016) es importante, ya que es un actor capaz de articular estos objetivos a nivel regional y, a su vez, contribuir a aplicarlos en los territorios locales. Adicionalmente, la Coica conecta en su discurso la demanda global de lucha contra el cambio climático con la problemática indígena, al sostener que la consolidación de las prácticas territoriales indígenas y la defensa de sus saberes ancestrales contribuyen a los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático.
2. En el año 2022, la Coica participa en la elaboración del informe: *La Amazonía a contrarreloj: un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80 % al 2025*, resaltando las problemáticas y las propuestas de los pueblos indígenas en aras de conseguir un futuro sustentable para la región amazónica (Quintanilla *et al.*, 2022). El ex-coordinador general, Gregorio Mirabal, hace un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad civil para impedir el punto de no retorno de la Amazonía, es decir, el punto en el que la deforestación y la degradación ambiental lleven a la conversión del bioma amazónico –compuesto principalmente de bosques– en un sistema de sabanas. A su vez, esto contribuiría significativamente al cambio climático con la emisión y pérdida de capacidades de captura de carbono. Este enfoque sitúa a las problemáticas de la Amazonía en el contexto de supervivencia de la humanidad frente a la crisis climática. El informe sostiene que los pueblos indígenas son portadores de una cosmovisión que se relaciona con la naturaleza de manera armoniosa y no depredadora, y que, por tanto, la protección y la ampliación de las

territorialidades indígenas son una garantía de sustentabilidad ecológica a escala regional amazónica y con impactos a nivel global (Quintanilla *et al.*, 2022).

Todas estas dinámicas de antropización depredadora de los ecosistemas naturales tienen consecuencias globales como las mencionadas, pero también efectos regionales. Los efectos regionales tienen que ver con la contaminación o la erradicación de ecosistemas en la selva tropical, con la desaparición de sus especies animales y vegetales, y con la extinción de los pueblos indígenas y de su patrimonio cultural.

La Coica desarrolla una serie de propuestas políticas para afrontar los retos ambientales y socioculturales en la Amazonía. Primeramente, el informe demarca una serie de mapas con áreas prioritarias clave de intervención. Estas áreas se dividen en zonas intactas, de baja degradación, de alta degradación y áreas transformadas. Cada una de estas zonas requiere de unos mecanismos de planificación y de intervención atendiendo a distintas variables. Según recoge el informe, la mayoría de la deforestación de los bosques primarios ocurre en áreas sin designación, donde las empresas multinacionales campan a sus anchas en la ilegalidad, de modo que la principal demanda del movimiento indígena es que estas áreas entren en un régimen de gestión territorial que sea paralelo a la defensa y a la ampliación de las territorialidades indígenas. Además de esto, existen otras demandas importantes como la moratoria inmediata a la deforestación, la condonación de la deuda internacional a cambio de la protección ambiental, o el avance hacia un modelo de representación política originaria en la región amazónica (Quintanilla *et al.*, 2022).

Con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, gracias al Programa de defensores y defensoras indígenas de la Coica, en 2022 se crea un equipo de trabajo para monitorear la criminalización y los asesinatos llevados a cabo contra los activistas socioambientales por parte de agentes multinacionales. Este programa ofrece recursos legales y medidas de protección a los activistas indígenas mientras que paralelamente promueve campañas internacionales de denuncia de la persecución a los guardianes de la naturaleza y defensores de los derechos indígenas.

## Conclusiones

América Latina y el Caribe se constituyen en un espacio mundial donde los conflictos socioambientales y territoriales tienen una notable presencia por su condición de periferia en el sistema capitalista. La pugna por la construcción del espacio y por la reproducción social -desde diferentes cosmovisiones- entre los movimientos indígenas, las instituciones estatales o los poderes empresariales transnacionalizados son un elemento de alta conflictividad. Estas dinámicas generan situaciones de violencia contra la naturaleza y contra los activistas indígenas y medioambientales, pero también pueden

recrear escenarios que abran oportunidades para desarrollar alternativas sistémicas. A lo largo de este artículo hemos observado las contradicciones del proceso de cambio en Bolivia y las luchas de la Cidob –en clave local y nacional– para consolidar los territorios indígenas. Por otro lado, hemos señalado las estrategias geopolíticas de la Coica para defender la Amazonía en un ámbito más bien regional y transnacional. Esta organización busca una mayor incidencia en la arena global, al conectar las demandas ecológicas y la lucha de los pueblos indígenas. En suma, los movimientos indígenas pueden desarrollar imaginarios y prácticas espaciales plurales utilizando las escalas local, nacional y global para sus fines políticos. No obstante, a pesar de la transnacionalización del poder que promueve la globalización neoliberal (y post-neoliberal), sigue siendo importante desarrollar alianzas con gobiernos nacionales aliados de la causa indígena y ambiental. En este sentido es prioritario aprender de los aciertos y de los errores de la primera oleada progresista. También es pertinente unir fuerzas y colaborar con aquellos gobiernos que ahora impulsan iniciativas ambiciosas para combatir el cambio climático, como pareciera estar desarrollando el ejecutivo de Gustavo Petro en Colombia.

## Referencias

- Agnew, J. (2015). *Imaginación geopolítica: una revisión de la política mundial*. Madrid: Trama.
- Albó, X. (2009). *Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú*. La Paz: Cipa.
- Albuquerque Moraes, R. (2018). Políticas indígenas: aportes desde el Tipnis. In Fundación Tierra, *Cuestión Agraria. Volúmen 4* (pp. 203-220). La Paz: Fundación Tierra.
- Bringel, B., Acosta, A. y Svampa, M. (2022). *Transiciones justas para América Latina y el mundo*. Open Democracy: free thinking of the world (14/10/2022). Disponible en <https://www.opendemocracy.net/es/transiciones-justas-america-latina-mundo/> [consulta: 07/02/2024].
- Cairo, H. (2001). Territorialidad y fronteras del estado-nación: las condiciones de la política en un mundo fragmentado. *Política y Sociedad*, 36, 20-38.
- Carvajal, R. (2015). *Silvia Rivera: "El vivir bien se transformó en palabra hueca"*. Rebelión, periódico online (06/10/2015). Disponible en: <https://rebelion.org/silvia-rivera-el-vivir-bien-se-transformo-en-palabra-hueca/>
- Cauthin, M. (2023). *Carretera por el Tipnis y el TIM avanza sin consulta ni estudios de impacto ambiental*. Fundación Solón (10/03/2023). Disponible en <https://fundacionsolon.org/2023/03/10/carretera-por-el-TIPNIS-y-el-tim-sin-consulta-en-el-tramo-3-y-sin-estudio-ambiental-ni-autorizaciones-en-el-tramo-2/> [consulta: 10/02/2024].
- De Sousa Santos, B. (2018), *Epistemologías del Sur*, (Buenos Aires, Clacso).
- Fernández, B. S. y Puente, F. (2011). *La disputa por el territorio en la Amazonía boliviana y ecuatoriana: propuestas territoriales de las organizaciones indígenas hacia la*

- Asamblea Constituyente*. IX Jornadas de Sociología. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- FIDH. (2013). *Bolivia: Informe de verificación de la consulta realizada en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure*. París y La Paz: FIDH/APDHB.
- García Linera, Á. (2009). *La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Lehm, Z. (1999). *Milenarismo y movimientos sociales en la Amazonía boliviana. La búsqueda de la Loma Santa y la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad*. Santa Cruz de la Sierra: Apcob - Ciddebeni - Oxfam América.
- Leiva, E. (2015). La dificultad de aplicar el paradigma del Buen Vivir en el gobierno de Evo Morales de Bolivia (pp. 112-137). *Coord.: Ábalos, H., García, J., Jiménez, A. y Montañez, D. (Colectivo Guindilla Bunda)*. Granada: *Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: la vida*.
- Nogué i Font, J. y Rufí Vicente, J. (2008) *Geopolítica, identidad y globalización*. Barcelona: Ariel Geografía.
- Núñez del Prado, J. (2015). *Utopía indígena truncada. Proyectos y praxis de poder indígena en Bolivia Plurinacional*. La Paz: Cides - UMSA.
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). *Constitución Política del Estado*. Disponible en [https://www.oas.org/dil/esp/constitucion\\_bolivia.pdf](https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf)
- Somos Sur. (2016). *Tipnis: Infamia de una "Consulta" manipulada*. Cochabamba: Somos Sur. Recuperado de: [https://somosur.net/documentos/20170725\\_tipnis\\_consulta.pdf](https://somosur.net/documentos/20170725_tipnis_consulta.pdf)
- Quintanilla, M., Josse, C. y Guzmán León, A. (2022). *La Amazonía a contrarreloj: un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80% al 2025, 2022*. Disponible en <https://www.fan-bo.org/wp-content/uploads/2022/09/diagramacion-espan%CC%83ol-3.pdf>
- Reyes-García, V., Fernández-Llamazares, Á., Bauchet, J. y Godoy, R. (2020). Variety of indigenous peoples' opinions of large infrastructure projects: The TIPNIS road in the Bolivian Amazon. *World Development*, 127, 104751.
- Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. España: Tinta Limón.
- Sanahuja, J. A. (2022). Interregno. La actualidad de un orden mundial en crisis. *Nueva Sociedad*, 302, 86-94. Disponible en <https://nuso.org/articulo/302-interregno/> fecha de consulta 4/12/2023.
- Servindi. (2023). *El capítulo de división interna que busca superar la COICA*. Publicado el 30/01/2023. Disponible en: <https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/01/2023/el-capitulo-de-division-interna-que-busca-superar-la-org-indigena>
- Svampa, M. (2019). *Neo-Extractivism in Latin America: Socio-environmental Conflicts, the Territorial Turn, and New Political Narratives*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Tarrow, S. (2009). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, (Madrid, Alianza).

- TIDN. (2019). *Sentencia final. Caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)*. Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Disponible en: <https://www.rightsofnaturetribunal.org/wp-content/uploads/2018/04/sentence-tipnis.pdf>
- Ulloa, A. (2010). Reconfiguraciones conceptuales, políticas y territoriales en las demandas de autonomía de los pueblos indígenas en Colombia. *Tabula Rasa*, 13, 73-92.
- Viales Hurtado, R. (2010). La región como construcción social, espacial, política, histórica y subjetiva: hacia un modelo conceptual/relacional de historia regional en América Latina. *Geopolítica(s): revista de estudio sobre espacio y poder*, 1(1), 157-172.
- Zibechi, Raúl (2017). *Movimientos sociales en América Latina: el mundo otro en movimiento*. La Paz: Virus.



# **SOBRE QUIÉNES ESCRIBIMOS ESTE LIBRO**

(en orden alfabético)





**Alcons Salluco, Fernando**

Geógrafo especializado en explorar las complejidades territoriales, en particular en la Amazonía. Estudia las dinámicas rurales-urbanas desde una perspectiva de geografía social, donde analiza cómo el componente espacial interactúa con los actores sociales que lo producen. Ha completado sus estudios de maestría en Desarrollo Social en el Posgrado en Ciencias del Desarrollo (Cides) y en Geopolítica de los Recursos Naturales en la Unidad de Posgrado de la carrera de Ingeniería Geográfica, ambas en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, Bolivia.

Correo electrónico: fernando2002alcons@gmail.com  
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4757-3135>

**Angarita, Héctor**

Es científico principal del Natural Capital Project de la Universidad de Stanford. Su investigación se centra en los vínculos entre las funciones y servicios de los ecosistemas de agua dulce, la variabilidad climática y la producción y demanda de recursos dependientes del agua, como la energía y la biomasa. Héctor recibió su doctorado en Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, en 2018 y tiene una maestría en Hidrosistemas por la misma universidad. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia.

Correo electrónico: haac@stanford.edu  
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7089-2014>

**Baudoin Farah, Andrea**

Es docente investigadora en la Universidad Estatal de Colorado. Su investigación se centra en explorar los efectos de los cambios de uso de suelo y el cambio climático sobre los medios de vida y los servicios ecosistémicos, en paisajes cada vez más afectados por el extractivismo y la globalización. Trabaja en el Beni desde 2015. Tiene un doctorado en Ecología Interdisciplinaria por la Universidad de Florida, una Maestría en Desarrollo Agrícola y Agricultura Comparada por AgroParisTech (Francia) y una doble licenciatura en Agronomía por AgroParisTech y la Universidad de Sao Paulo.

Correo electrónico: Andrea.Baudoin\_Farah@colostate.edu  
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3317-6494>

**Cauthin Ayala, Marielle**

Activista e investigadora socioambiental especializada en la Amazonía, pueblos indígenas y extractivismos. Forma parte del proyecto Codicis (Programa Erasmus UE/UMSA/UCB) por el *Archivo Documental Isiboro Sécuré: preservación, memoria y democratización de la información en y para la Amazonía boliviana*. Maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) en México y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca en España, con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana (UCB).

Correo electrónico: marielle.cauthin@gmail.com  
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-9829-4379>

**Cuba Pinto, Camilo**

Abogado, servidor público e investigador independiente, con estudios de posgrado en financiamiento del desarrollo, justicia global y derechos humanos. Interesado en contribuir en la conservación de la Amazonía a través del enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo.

Correo electrónico: [c.cubapinto@outlook.com](mailto:c.cubapinto@outlook.com)

**Ferraz da Silveira, Amanda**

En pasantía postdoctoral en la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR) con beca de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Educación Superior (Capes). Doctorado y maestría en Derecho. Este trabajo fue realizado con el apoyo de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Educación Superior (Capes) en Brasil - Código de Financiamiento 001, Naviraí, Mato Grosso do Sul, Brasil.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8474-2623>

**García Leiva, Ernesto**

Profesor de historia en la enseñanza secundaria (España). Licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca. Máster Internacional en Estudios Contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de la República de Uruguay. Publicaciones en el ámbito de los movimientos sociales y en el ámbito de la didáctica crítica.

Correo electrónico: [ernesto.garcia.leiva@gmail.com](mailto:ernesto.garcia.leiva@gmail.com)

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6502-974X>

**Gómez Ramírez, Denisse Rebeca**

Zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. Antropóloga lingüista, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Ha llevado a cabo colaboraciones significativas con el pueblo yurakaré de la Amazonía cochabambina, ubicada en la provincia Chapare, así como con diversas comunidades en México. Estas incluyen Veracruz, donde ha trabajado con los olutecos, sayultecos y texistepequeños; en Oaxaca con zapotecos de Capulálpam de Méndez; y en Tabasco con los ayapanecos. Sus áreas de investigación abarcan la identidad, autonomía, territorio, recursos hídricos y los procesos de revitalización lingüística de lenguas en peligro de extinción.

Correo electrónico: [deregora@gmail.com](mailto:deregora@gmail.com)

Orcid: 0000-0002-1641-9434

**Goudsmit Lambertin, Ara**

Es escritora, investigadora y periodista independiente. Obtuvo el grado *magna cum laude* en Ciencia Política de Universidad de Los Andes, Bogotá (Colombia), y tiene una maestría en Estudios del Antropoceno/Geografía de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Correo electrónico: [aragoudsmit@yahoo.com](mailto:aragoudsmit@yahoo.com)

**Kruyt, Suzanne**

Tiene una maestría en Social Cultural Studies por la Vrije Universiteit Amsterdam. Se dedica al estudio antropológico de los movimientos sociales, procesos territoriales y derechos colectivos en América Latina. Es investigadora feminista y forma parte del Centro de Estudios Populares (CEESP), donde impulsa nuevas agendas de investigación en torno a la región amazónica boliviana.

suzanne.kruyt@ceesp.org.bo

**Perez Tarqui, Andrea Katrinne**

Licenciada en Planificación del Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Máster en Estudios Urbanos con mención en Políticas Públicas y Planificación Territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede en Ecuador. Actualmente es coordinadora del Observatorio para la Urbanización Amazónica (OUA) en Flacso, Ecuador.

**Salazar Lohman, Huáscar**

Economista boliviano con estudios de posgrado en México, investiga la relación entre el estado plurinacional y las luchas indígenas. Su trabajo reciente se enfoca en la configuración y sostenimiento de economías no capitalistas. Actualmente se desempeña como investigador y coordinador del Centro de Estudios Populares (CEESP).

huascar.salazar@ceesp.org.bo

**Sivini Ferreira, Heline**

Es profesora de grado y postgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR). Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y una maestría en Derecho por la UFSC. Investigadora del Grupo de Investigación en Derecho Ambiental y Ecología Política en Sociedades de Riesgo (UFSC) y del Grupo de Investigación en Medio Ambiente: Sociedades Tradicionales y Sociedad Hegemónica (PUCPR) en Curitiba, Paraná, Brasil.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8736-8147>

**Stefanes Pacheco, Rosely A.**

Profesora e investigadora de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile y de la Universidad Estatal de Mato Grosso del Sur en Brasil (UEMS). Es doctora en derecho socioambiental y sustentabilidad por la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUC-PR). Tiene una maestría en Historia Indígena por la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur. Es miembro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y de diversos centros de investigación en Brasil (CEPEGRE/UEMS/CNPq, CEPEDIS/PUC PR/CNPq). Es abogada.

Correo electrónico: [roselystefanes@gmail.com](mailto:roselystefanes@gmail.com)

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5148-3565>

**Ten, Silvia**

Es bióloga por la Universidad Autónoma de Madrid (España) y tiene maestrías por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Instituto de Investigaciones Ecológicas (IIE) de Málaga (España). En la actualidad es jefe de departamento del Centro Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente (Cibioma) de la Universidad Autónoma del Beni (UABJB). Fue coordinadora técnica del proyecto: Construyendo una visión de desarrollo sostenible para los Llanos de Moxos en Bolivia. Tiene más de 20 años de experiencia desarrollando programas de investigación en los Llanos de Moxos.

Correo electrónico: [sten@cibioma.edu.bo](mailto:sten@cibioma.edu.bo)  
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2593-8129>

**Villalobos Moreira, Guillermo**

Licenciado en Ciencias Políticas (Universidad Católica de Bolivia) con maestría en Ciencias Ambientales (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México) y maestría en Gestión de Recursos Naturales (Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania). Actualmente es investigador independiente en temas socioambientales.

Correo electrónico: [g.villalobos.m87@gmail.com](mailto:g.villalobos.m87@gmail.com)  
Orcid: <https://orcid.org/0009-008-2368-4456>

**Vogl, Adrian**

Es científica principal del Natural Capital Project en la Universidad de Stanford. Tiene amplia experiencia en servicios ecosistémicos y soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica en América Latina, Asia, África y los Estados Unidos. Ha desarrollado herramientas de apoyo para la planificación de uso de suelo que consideran urbanización, agua, captura de carbono, conservación y seguridad energética y alimentaria. Tiene un doctorado en Recursos Acuáticos de la Universidad Estatal de Texas - San Marcos y una licenciatura en Antropología Cultural de la Universidad de Arizona. Fue coordinadora del proyecto: Construyendo una visión de desarrollo sostenible para los Llanos de Moxos.

Correo electrónico: [avogl@stanford.edu](mailto:avogl@stanford.edu)  
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9369-1071>

**Wolny, Stacie**

Desarrolla y aplica el conjunto de herramientas de hidrología terrestre para Natural Capital Project y apoya al Centro de Biología de la Conservación de Stanford. Tras doce años trabajando como administradora de sistemas e ingeniería de software en Silicon Valley, comenzó a estudiar SIG como una forma de combinar su formación informática con su amor por la historia natural y la ecología. Stacie se licenció en informática en la Universidad de Penn State y estudió SIG en Foothill College y en la Universidad Estatal de San José, California.

Correo electrónico: [swolny@stanford.edu](mailto:swolny@stanford.edu)  
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9664-1958>



La presente edición se terminó de editar  
el mes de junio de 2024